

# contexto

LATINOAMERICANO

REVISTA DE ANÁLISIS POLÍTICO  
no. 4 / julio - septiembre de 2007



contexto  
LATINOAMERICANO

.....  
REVISTA DE ANÁLISIS POLÍTICO  
no.4/julio - septiembre de 2007



una editorial latinoamericana

**Contexto Latinoamericano** es una revista de análisis político publicada por la editorial Ocean Sur. Su propósito es fomentar y divulgar el intercambio de ideas entre los líderes y activistas de los partidos, organizaciones y movimientos políticos y sociales de la izquierda, con la participación de especialistas de las ciencias sociales, comunicadores y artistas comprometidos con la emancipación de los pueblos de América Latina y el Caribe.

## contexto LATINOAMERICANO

Director: **David Deutschmann**  
Editor: **Roberto Regalado**  
Editora Adjunta: **Ivón Muñiz**  
Edición/Corrección: **Esther Acosta**  
Diseño Gráfico: **Víctor MCM**  
Composición: **Miriam Hernández**  
Producción: **Lourdes García Larqué**

Consejo Editorial: **Jesús Arbolea** (Ocean Sur), **María del Carmen Ariet** (Cuba),  
**José Reinaldo Carvalho** (Brasil), **Jaime Caycedo** (Colombia),  
**Vidal Cisneros** (Venezuela), **Gustavo Codas** (Brasil),  
**Héctor de la Cueva** (México), **Javier Diez Canseco** (Perú),  
**Patricio Echegaray** (Argentina), **Saúl Escobar** (México),  
**Eliana García** (México), **Fermín González** (Colombia),  
**Medardo González** (El Salvador), **Pablo González Casanova** (México),  
**Sergio Guerra Vilaboy** (Cuba), **Néstor Kohan** (Argentina),  
**Claudia Korol** (Argentina), **Gilberto López y Rivas** (México),  
**Fernando Martín** (Puerto Rico), **Vivian Martínez Tabares** (Cuba),  
**Hugo Moldiz** (Bolivia), **Julio A. Muriente** (Puerto Rico),  
**Valter Pomar** (Brasil), **Renán Raffo** (Perú),  
**José Vicente Rangel** (Venezuela), **Mayra Reyes** (Nicaragua),  
**Germán Rodas** (Ecuador), **María Guadalupe Rodríguez** (México),  
**Javier Salado** (Ocean Sur), **Niko Schvarz** (Uruguay),  
**John Saxe Fernández** (México), **Guillermo Teillier** (Chile)

Derechos © 2007 Ocean Sur  
Derechos © 2007 Contexto Latinoamericano

Cada trabajo expresa la opinión de su autor. La opinión de *Contexto Latinoamericano* se expresa en *Palabras del editor* y en aquellas notas que así lo indiquen.

ISSN: 1834-0679 • ISBN: 978-1-921235-46-7

**Redacción:** Juan de la Barrera n.9, Colonia Condesa,  
Delegación Cuauhtémoc, CP. 06140, México DF  
tel. (52) 5553 5512 • contextolatino@enet.cu • www.oceansur.com  
Informes y suscripciones: info@oceansur.com

Impreso en Colombia por Quebecor World Bogotá S.A.

**Cubierta:** Frontera Estados Unidos-México, Tijuana, 29 de julio de 2006.

Foto: Peter Turnley

# sumario

<b>PALABRAS DEL EDITOR</b>	5
<b>CONTEXTO ACTUAL</b>	
Migrar o morir: el dilema de los jornaleros agrícolas de la Montaña de Guerrero <b>Isabel M. Nemecio Nemesio</b>	9
Nacionalismos y pueblos indígenas: refundar la nación mexicana <b>Alicia Castellanos Guerrero</b>	31
Democracia directa y poder dual. Caminos para reconstruir el metabolismo entre naturaleza y sociedad <b>Fermín González</b>	51
Alan García: del cambio responsable a la responsabilidad de que no haya cambios <b>Eduardo Ballón</b>	71
Un nuevo período y sus tareas <b>Joaquim Soriano y Raúl Pont</b>	90
La defensa de la soberanía y del desarrollo en la política exterior de Lula <b>José Reinaldo Carvalho</b>	100
El Partido Socialista Unido de Venezuela <b>Amílcar Figueroa</b>	114
<b>CONTEXTO HISTÓRICO</b>	
Che, sin enigmas: las biografías <b>Germán Sánchez Otero</b>	123
<b>CONTEXTO ANALÍTICO</b>	
Colonialidad tecnológica y desindustrialización en América Latina <b>Gian Carlo Delgado Ramos</b>	143

# sumario

---

## CONTEXTO CULTURAL

La injusta distribución del bien simbólico en Brasil <b>Reinaldo Maia</b>	169
--	-----

## ENLACES

VI Encuentro Hemisférico en La Habana. Retos y debates en la nueva etapa del movimiento social continental <b>Héctor de la Cueva</b>	187
Las voces de los inmigrantes deben ser escuchadas <b>David Bacon</b>	195
Reunión del Consejo Internacional del Foro Social Mundial <b>Rodrigo Nobile</b>	198
Otros Estados Unidos son necesarios: ya vienen en marcha <b>Michael León Guerrero</b>	207



# palabrasdeeditor



Como todo organismo que rebasa la plenitud de su desarrollo y entra en la fase involutiva de su vida, el capitalismo enfrenta una creciente dificultad para cumplir su función fundamental: la acumulación de ganancias. Ello provoca una aguda concentración de la propiedad, la producción y el poder político, con su correlato de exclusión social, y una vertiginosa depredación del medio ambiente.

Son muy diversas las manifestaciones de ese proceso y, por ende, los ámbitos en los que es preciso encontrar alternativas. En la presente edición de *Contexto Latinoamericano*, Alicia Castellanos nos habla de los procesos de autonomía que impulsan un nacionalismo multiétnico y diverso; Fermín González expone la necesidad de reconstruir el metabolismo entre naturaleza y sociedad, y los obstáculos que será necesario vencer para lograrlo; y Gian Carlo Delgado denuncia la colonialidad tecnológica a la que está sometida América Latina, y esboza elementos para un programa de desarrollo regional.

Una de las consecuencias de la concentración de la riqueza en un puñado de naciones del Norte y del agravamiento de la exclusión social en el inmenso Sur, es la intensificación sin precedentes de los flujos migratorios.

El ser humano nació migrando. Como resultado de los cambios climáticos, la búsqueda de nuevas fuentes de alimentación y otros imperativos elementales, durante un estadio evolutivo de lo que llegaría a ser la especie humana, nuestros antepasados enfrentaron la disyuntiva de migrar o morir.

La migración –podría decirse– es una de las parteras de la humanidad y ha desempeñado funciones vitales en todas las formaciones económico-sociales. El capitalismo, por ejemplo, comienza a formarse en el siglo XVI mediante la dislocación de las grandes masas de campesinos y artesanos que la incipiente manufactura no podía asimilar como obreros asalariados. Esa migración forzada, dramática, desgarradora, sin rumbo, devenida vagabundaje masivo, fue criminalizada y reprimida de forma brutal por las mismas fuerzas políticas y económicas que la provocaban.



## 6 • Contexto Latinoamericano

La colonización del Nuevo Mundo constituyó una válvula de escape para una parte de la fuerza de trabajo europea que excedía la demanda del capital. No todos los europeos que emigraron al Nuevo Mundo eran funcionarios de la corona, sacerdotes o comerciantes; muchos eran hombres y mujeres en busca de las oportunidades de empleo que les estaban negadas en el Viejo Continente; y esa tendencia se mantuvo hasta las primeras décadas del siglo *xx*.

Cuando el Norte lo necesitó, el Sur absorbió a sus emigrantes, pero hoy el Norte usa, manipula y rechaza a los inmigrantes del Sur.

A las naciones de Asia, África y América Latina se les obliga, por una parte, a garantizar la irrestricta libertad de movimiento de los capitales y mercancías, con el propósito de que, con mayor facilidad, los monopolios transnacionales depreden sus recursos naturales, controlen sus mercados y se apropien de su agricultura y su escasa red industrial; y, por otra, a que cierren sus fronteras como primer muro de contención de los flujos migratorios de quienes tratan de seguir la ruta de los empleos succionados de sus lugares de origen.

Si hace millones de años migrar o morir fue la disyuntiva que impulsó a nuestros antecesores a emprender la senda del desarrollo humano, hoy es un reflejo de la barbarie y la descomposición a las que ha llegado el capitalismo.


«Migrar o morir» es el título del ensayo de Isabel Margarita Nemecio Nemesio que *Contexto Latinoamericano* incluye en esta edición, sin dudas, una conmovedora denuncia de la tragedia de más de trescientos mil mexicanas y mexicanos, la mayor parte de ellos indígenas, anualmente obligados a protagonizar una fuga que potencia la marginalidad, la dispersión y la fragmentación de las familias, y la forzada transnacionalización de sus hogares, en muchos casos, para escapar de la muerte, la cual no por ello dejará de acecharlos. Este revelador estudio aborda no solo la más conocida migración de México hacia los Estados Unidos (Sur-Norte), sino también la interna, de las zonas más subdesarrolladas hacia las menos subdesarrolladas dentro del propio México (Sur-Sur). Es una trama de cuerpos tatuados por historias comunes –con identidades sin borde exterior, diversas, multiétnicas y pluriculturales– que se repiten, día a día, una y otra vez, en toda Nuestra América.

*Contexto Latinoamericano* publica este ensayo como una modesta contribución a la defensa de los derechos políticos, económicos y sociales de los sectores populares marginados de América Latina y el Caribe a los que el capitalismo coloca ante la disyuntiva de migrar o morir, y también como un estímulo y un homenaje a los activistas sociales y políticos que luchan por erradicar las causas y los efectos de esa aberrada realidad.



# ocean sur

una nueva editorial latinoamericana



Ocean Sur, casa editorial hermana de Ocean Press, es una nueva, extraordinaria e independiente aventura editorial latinoamericana. Ocean Sur ofrece a sus lectores las voces del pensamiento revolucionario del pasado, presente y futuro de América Latina: desde Bolívar y Martí, a Haydée Santamaría, Che Guevara, Fidel Castro, Roque Dalton, Hugo Chávez y muchos otros más. Inspirada en la diversidad, la fuerza revolucionaria y las luchas sociales en América Latina, Ocean Sur desarrolla múltiples e importantes líneas editoriales que reflejan las voces de los protagonistas del renacer de Nuestra América.

Editamos los antecedentes y el debate político actual, lo mejor del pensamiento de la izquierda y de los movimientos sociales, las voces indígenas y de las mujeres del continente, teoría política y filosófica de la vanguardia de la intelectualidad latinoamericana, así como los aportes fundamentales de artistas, poetas y activistas revolucionarios. Nuestras colecciones Fidel Castro, Biblioteca Marxista, Proyecto Editorial Che Guevara, Vidas Rebeldes, Roque Dalton, entre otras, promueven la discusión, el debate y la difusión de ideas. Ocean Sur es un lugar de encuentro.

[www.oceansur.com](http://www.oceansur.com) ■ [info@oceansur.com](mailto:info@oceansur.com)



# América Latina en Contexto

## AMÉRICA LATINA ENTRE SIGLOS

### Dominación, crisis, lucha social y alternativas políticas de la izquierda

*Roberto Regalado*

*América Latina entre siglos* analiza el contexto político y social Latinoamericano, con particular énfasis en su conflictiva relación con los Estados Unidos. El autor hace un análisis teórico e histórico de la polémica respecto a la reforma o la revolución en el continente. También analiza diferentes experiencias políticas durante los últimos cincuenta años de historia, con atención particular a las alternativas que la izquierda ha construido.

278 páginas, ISBN 978-1-921235-00-9



## ¿GUERRA O PAZ EN COLOMBIA?

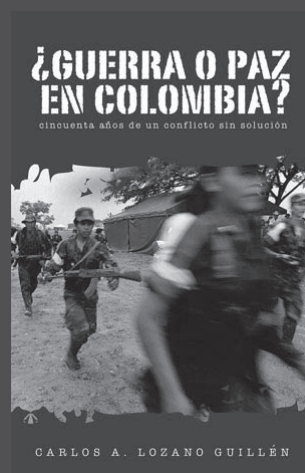
### Cincuenta años de un conflicto sin solución

*Carlos A. Lozano Guillén*

Un significativo aporte a la discusión del largo conflicto interno, político y armado, que ha azotado Colombia durante los últimos cincuenta años, y la constante búsqueda del pueblo colombiano y la insurgencia por conseguir una solución política al conflicto que lleve a la paz con justicia social.

Ofrece una perspectiva histórica y coyuntural, así como un análisis teórico desde una perspectiva de izquierda, y analiza el papel del militarismo, impulsado y respaldado por Estados Unidos.

184 páginas, ISBN 978-1-921235-14-6



## UN SIGLO DE TERROR EN AMÉRICA LATINA

### Crónica de crímenes de Estados Unidos contra la humanidad

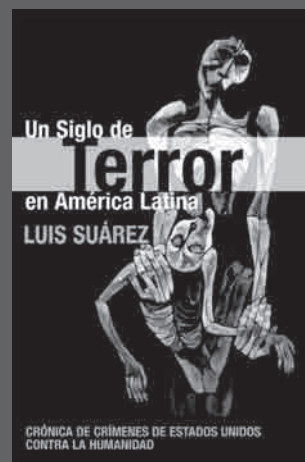
*Luis Suárez*

Una visión panorámica de la historia de las intervenciones y crímenes de guerra de los Estados Unidos en América Latina.

Este volumen documenta la confrontación de América Latina ante el modelo de dominación imperialista de Estados Unidos, a través de sus guerras sucias e intervenciones directas durante los últimos 100 años, junto a las raíces de los procesos y caminos que caracterizan la historia del continente.

Este libro contribuye a rescatar la memoria histórica y como un acicate para la elaboración de alternativas al sistema actual.

590 páginas, ISBN 978-1-920888-49-7



## Migrar o morir: el dilema de los jornaleros agrícolas de la Montaña de Guerrero

ISABEL M. NEMECIO NEMESIO

### I. Las razones profundas para salir de la casa

En México, la migración es un proceso social de suma importancia, pues con la introducción del modelo económico neoliberal, desde principios de la década del ochenta, se ha intensificado el éxodo rural-urbano o rural-rural de un gran número de familias, muchas de ellas indígenas, a lo largo y ancho de nuestro país.

Estas familias provenientes del campo hallan en la migración un medio de obtener los ingresos para sufragar los gastos del hogar. En ello influyen el incremento poblacional, los elevados niveles de desempleo crónico y la amplia demanda de trabajo barato y flexible en las regiones receptoras.

Si para muchas familias indígenas, la migración representa una *estrategia de sobrevivencia* que complementa sus ingresos, para otras, es el único medio con el que cuentan para sobrevivir, en otras palabras, se ha convertido en su *modus vivendi*.

En nuestro país, el fenómeno de la migración rural debe verse en el contexto de la reestructuración de la agricultura, situación que se agravó con las modificaciones realizadas al artículo 27 constitucional.

Uno de los mecanismos utilizado por la población campesina e indígena para enfrentar esta crisis es la migración temporal, estacional o permanente hacia diferentes puntos de la república, especialmente al centro, norte y noroeste del país.

Los migrantes se emplean como jornaleros agrícolas, específicamente en los campos de cultivos, y de esta manera se convierten en la principal fuente de ingresos de la economía familiar y el apoyo indispensable de la reproducción material

y social de las familias, y también de la reproducción económica, política y cultural de poblados enteros.

Las unidades domésticas del medio rural no solo recurren a este tipo de migración interna, sino que acrecientan las estadísticas de los migrantes que día a día cruzan la frontera con los Estados Unidos.

## II. Las rutas de los migrantes

Respecto a la migración interna en México, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en un estudio realizado entre 1990 y 1995, identificó al Estado de México y al Distrito Federal como los sitios que generaban o recibían los flujos migratorios de mayor magnitud, pero también identificó siete zonas estratégicas para el tránsito migratorio: Sinaloa-Baja California, Yucatán-Quintana Roo, Durango-Chihuahua, Veracruz-Tamaulipas, Veracruz-Puebla, Oaxaca-Veracruz y Jalisco-Baja California.<sup>1</sup>

Sin embargo, hoy un número importante de migrantes se emplean como jornaleros agrícolas en las empresas agroexportadoras de hortalizas en los estados de Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Zacatecas y Morelos, y en la cosecha de tabaco, caña de azúcar, café, plátano, naranja y frutas en los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Nayarit, Oaxaca, Chiapas e Hidalgo. En la ciudad de México y otras ciudades se emplean en la construcción, la jardinería, el comercio informal, los servicios domésticos y también recurren a la mendicidad.

De esta forma, los estados de la Federación pueden ser agrupados en tres categorías de acuerdo con el papel que desempeñan en el mercado de trabajo rural: de *atracción*, de *expulsión* e *intermedios* (ver Cuadro no. 1, Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, SEDESOL).

Así, los movimientos en el país también han permitido establecer cuatro rutas migratorias (ver Cuadro no. 2).

---

<sup>1</sup> Véase Isabel Margarita Nemesio y María de Lourdes Domínguez Lozano: *Vulnerabilidad e impactos de la migración en familias indígenas de la Montaña de Guerrero: el caso de San Pedro Acatlan*, Tesis de Maestría, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, División en Ciencias Sociales y Humanidades, México, 2004.

**Cuadro no. 1**  
**Estados de la República Mexicana con presencia migratoria**

<b>Estados de atracción</b>	Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Nuevo León, Morelos y la Comarca Lagunera que abarca partes de Durango y Coahuila.	Se caracterizan por una importante producción agrícola comercial. Las condiciones climáticas, la infraestructura de riego, la concentración de la propiedad del suelo, las fuertes inversiones y el acceso a importantes mercados nacionales o extranjeros convierten los campos agrícolas y sus cultivos en empresas capitalistas altamente rentables. Su alto desarrollo se basa, en buena medida, en el empleo masivo de fuerza de trabajo migrante.
<b>Estados de expulsión</b>	Oaxaca y Guerrero.	Se caracterizan por el minifundismo, la erosión de los suelos y una producción agrícola de subsistencia o de infrasubsistencia, donde los campesinos encuentran en el trabajo asalariado un medio para sobrevivir. Se trata de regiones de muy alto grado de marginación, por lo que sus pobladores se ven obligados a migrar.
<b>Estados intermedios</b>	Combinan en su interior zonas de expulsión y atracción, y son principalmente las regiones del Centro, del Golfo y del Pacífico.	Se caracterizan por su producción agrícola debido a las condiciones climáticas que la favorecen; allí los campesinos encuentran en el trabajo asalariado un medio para sobrevivir.

**Cuadro no. 2**  
**Rutas migratorias**

<b>Rutas</b>	<b>Lugar de origen de los jornaleros agrícolas</b>	<b>Estados receptores de mano de obra migrante</b>
Pacífico	Oaxaca, Guerrero y Michoacán.	Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur.
Golfo	Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y Puebla.	Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.
Centro	Oaxaca, Guerrero e Hidalgo.  Se abastece también de mano de obra local y migrante.	San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua, Puebla y Morelos.
Sureste	Se abastece de mano de obra local y migrante, principalmente centroamericanos.  Se incorporan inmigrantes agrícolas provenientes de Guatemala.	Chiapas, Yucatán y Tabasco.

Fuente: Elaborado sobre la base de los datos obtenidos por Ma. Teresa Guerra Ochoa: «Los trabajadores migrantes en México», *Los derechos humanos de los jornaleros agrícolas migrantes en México*, Memoria, Comisión de Derechos Humanos, Quincuagésima Sexta Legislatura, Culiacán, Sinaloa, 2000.

En la ruta del Pacífico, que es la más importante por el volumen de trabajadores contratados, incluyendo mujeres, niñas y niños, sobresale el estado de Sinaloa como el principal receptor de fuerza de trabajo migrante.

En el país, Sinaloa es el estado con mayor extensión de tierras de riego de buena calidad que se destinan, fundamentalmente, a la producción de hortalizas y granos.<sup>2</sup>

En los campos mexicanos todos los años trabajan más de tres millones de jornaleros, gran parte de los cuales abandonan sus tierras por temporadas para retornar en épocas de cosecha; otros, recorren la república en busca de un trabajo que, por lo general, resulta inseguro y mal pagado.

El flujo de jornaleros para estos cultivos proviene de estados como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Durango, Guanajuato y Puebla, pero hay que tomar en cuenta que los mercados de exportación son un sector dinámico y los flujos migratorios pueden cambiar muy rápido.

Los estados expulsores ocupan los primeros lugares nacionales en marginalidad, principalmente Guerrero y Oaxaca; en ambas entidades la presencia de la población indígena es importante. Los indígenas, como mano de obra, son rentables para los productores agrícolas, ya que se les considera dóciles, disciplinados y cumplidores, poseen gran habilidad manual y aceptan cualquier ofrecimiento de trabajo, debido a la ancestral miseria presente en sus lugares de origen y a la ilusión de elevar su nivel de vida.

### III. La geografía de la pobreza

Las localidades y los municipios del estado de Guerrero son de los más accidentados de México. Son regiones poco propicias para la agricultura y el comercio. Su geografía ha sido copartícipe en la atomización demográfica y la marginación de su población, sobre todo la indígena. La división política del estado, comprende setenta y nueve municipios, incluidos tres de reciente formación: Cochoapa el Grande, Iliatenco y Hueycantenango. A su vez todos estos municipios se agrupan en siete regiones geográficas con características ambientales, culturales, sociales y políticas diferentes entre sí. Estas regiones son: Norte, Montaña, Costa Chica, Costa Grande, Acapulco, Centro y Tierra Caliente. De las siete regiones que comprende el estado, nos centraremos en la región de la Montaña. Esta región se localiza al noreste de Guerrero; geográficamente forma parte de la Sierra Madre del Sur y la depresión del río Balsas; sus límites se encuentran al norte con Puebla, al sur con la

---

<sup>2</sup> Por ser las hortalizas una producción que requiere abundante fuerza de trabajo, se contratan en Sinaloa, entre los meses de septiembre a abril, de 200 000 a 300 000 jornaleros agrícolas, los cuales preparan la siembra, plantan, recolectan, deshieran, riegan, fumigan y empacan el cultivo de tomate, chile, pepino, berenjena y calabaza, principalmente, en una superficie aproximada de 70 000 hectáreas. En el Valle de Culiacán se concentran entre 100 000 y 180 000 jornaleros que laboran en las hortalizas. El resto de los jornaleros del estado se ubican en el Valle del Fuerte, Guasave y Elota. Isabel Margarita Nemecio Nemesio y María de Lourdes Domínguez: ob. cit.



región de la Costa Chica de Guerrero, al este con Oaxaca y al oeste con la región Centro del estado.

Los pueblos indígenas que se asientan en la Montaña son los Nahuas, Na savi (mixtecos) y Me' phaa (tlapanecos). En la Costa Chica habita el pueblo Ñomdaa (amuzgos). Los pueblos indígenas conservan una identidad propia que viene a ser el escudo que les ha permitido resistir y mantenerse como sujetos colectivos. Existe en ellos un sentido de pertenencia histórica hacia el lugar donde nacieron. Su riqueza cultural contrasta con la pobreza económica y las políticas excluyentes y racistas que los han debilitado y dividido.

La Montaña es una de las zonas indígenas a nivel estatal y nacional que presentan altos índices de marginación, rezago educativo, insalubridad y desempleo. La falta de oportunidades para que la población económicamente activa desarrolle sus capacidades e implemente nuevas formas de organización comunitaria que favorezca el desarrollo autogestivo y la autosuficiencia alimentaria, ha obligado a gran parte de esta población a poner sus ojos fuera del estado o del país.

Lo grave y complejo de la problemática migratoria es que no solo afecta a los adultos o padres de familia, sino que involucra a los niños, jóvenes, madres de familia y abuelos que tienen que desplazarse a los campos agrícolas para poder comer frijoles y tortillas. Este fenómeno trastoca la vida comunitaria, transforma los roles familiares, desestructura los sistemas de organización social y pone en riesgo la vida de cada familia y la de los pueblos indígenas.

Por ello, *migrar o morir* es el único camino accesible a los pueblos indígenas de Guerrero, ante el abandono del campo por parte del Estado y la negativa de las autoridades para asumir el compromiso de promover y defender los derechos de los pueblos indígenas como un principio constitucional.

#### IV. El rostro indígena de la migración en la Montaña

La Montaña de Guerrero es considerada como la región de mayor rezago económico-social de la entidad y comprende los municipios más marginados del país como Metlatónoc,<sup>3</sup> Cochoapa el Grande y Acatepec principalmente. Alrededor del 80% de sus habitantes son indígenas, pertenecientes a los grupos tlapaneco, mixteco y nahua; el porcentaje de analfabetismo de esta población a nivel estatal es de 50,5%, y se eleva al 71% en algunos municipios, en los cuales un alto porcentaje de la

<sup>3</sup> En el informe sobre Desarrollo Humano 2004, elaborado por la ONU, México ocupó el lugar número 53 entre 177 países evaluados. De acuerdo con la clasificación de Naciones Unidas, México está considerado dentro de las naciones con un índice de desarrollo alto. Sin embargo, en el país hay municipios que tienen niveles de desarrollo humano similar a Malawi, país africano azotado por una epidemia de SIDA y hambruna, como es el caso del municipio de Metlatónoc en el estado de Guerrero.

población es monolingüe. Con relación al ingreso por producto del trabajo asalariado de la población indígena estatal de 15 años en adelante, hay registrados 53 041 trabajadores que no tienen ingreso alguno, quienes conforman el 45,7% de esa franja. Asimismo, 27 964 forman parte de la población indígena que percibe menos de un salario mínimo mensual, lo que representa el 24,1%. Estamos ante una tasa muy alta de desempleo, que nulifica las aspiraciones de los pueblos indígenas que luchan sin reposo para cubrir lo básico de sus necesidades más elementales.

La actividad predominante es la agricultura temporal, sobre todo la dedicada al maíz y frijol, con suelos pobres y de bajo rendimiento. Los jornaleros carecen de condiciones para acceder a los servicios de salud. A pesar de que hay municipios que cuentan con la infraestructura médica adecuada, su equipo y el personal es casi nulo.

También inciden factores relacionados con las condiciones geográficas y la represión política y militar que justifica su presencia en la región por el combate al narcotráfico y siembra de enervantes, además de las cuestiones religiosas y/o el acceso ilimitado de la tierra y sus recursos naturales, lo que deriva en ancestrales conflictos agrarios (considerados por el Estado mexicano como focos rojos o amarillos).

Es una problemática que se vive a diario en la Montaña, una realidad que es parte de la vida cotidiana de sus habitantes, quienes llevan décadas enfrentándola palmo a palmo, lo que agudiza aun más la vulnerabilidad de los pueblos indígenas. Estos factores o situaciones muy específicos tienen relación directa o indirecta con la decisión de migrar.

En las últimas décadas, los diversos flujos migratorios desde la Montaña han aumentado, y ha adquirido gran importancia la migración familiar. Gran cantidad de familias indígenas se dirigen hacia estados como Sinaloa, Baja California, Sonora y Jalisco, sin dejar su tradicional desplazamiento hacia regiones más cercanas como Morelos y la ciudad de México. La migración hacia el noroeste tiene, por lo común, carácter estacional, aunque también se ha ido modificando, porque los jornaleros agrícolas constantemente se están desplazando de un estado a otro, siguiendo los ciclos de cultivo.

De acuerdo con los Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indios de México, en el estado de Guerrero, de los municipios con 30% y más de población indígena, nueve tienen categoría migratoria de fuerte expulsión y ocho de expulsión, cinco de equilibrio y solo uno de fuerte atracción; es decir, el 73,9% de los municipios con habitantes indígenas no tienen la capacidad de brindar alternativas de empleo a su población. En los municipios en los cuales se expulsa un número más elevado de indígenas, predominan los hablantes de las lenguas náhuatl y mixteco.

Las más de 600 comunidades de los diecinueve municipios de la Montaña están insertas dentro de la empresa migratoria que distingue a esa región. Los municipios: Tlapa de Comonfort, Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Atlamajalcingo

del Monte, Copanatoyac, Tlalixtaquilla, Atlixnac, Malinaltepec, Iliatenco, Alcozauca, Acatepec, Tlacoapa, Xalpatláhuac, solo por mencionar algunos, tienen, por lo menos, un migrante fuera, en los Estados Unidos, pero también hay familias completas que han establecido su residencia temporal o definitiva en aquel país fronterizo, además de que cada día se registran salidas masivas de «montañeros» en busca del *sueño americano*.

De acuerdo con los datos de la Coordinación Estatal de Guerrero del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), en su Censo de Población de la temporada iniciado en 2006 se contabilizaron un total de 40 207 jornaleros agrícolas; de ellos, 25 448 se desplazaron hacia el estado de Sinaloa, y específicamente de la región de la Montaña se registró un total de 14 021, de los cuales 11 293 están considerados como jornaleros en edad laboral, es decir, incluidos niños jornaleros de los 6 años en adelante.

De esta forma, el estado de Guerrero aparece en la lista de las diez principales entidades federativas que aportaron mano de obra foránea o jornalera a los campos agrícolas, junto con Oaxaca, Veracruz, Guanajuato, Michoacán, Durango, Chihuahua, Puebla, Nayarit y Morelos.

La Montaña es una región de fuerte expulsión de jornaleros agrícolas, donde el sexo y la edad es indistinto, y la migración se comporta en sus dos vertientes: intranacional e internacional. Lo esencial para ellos es la ruta migratoria que los conduce a aquellos destinos donde existe una posibilidad de mejorar, inciertamente, su calidad de vida.

### **De Metlatónoc a Manhattan**

Desde hace más de cinco décadas se tiene conocimiento de los desplazamientos que se llevan a cabo hacia diferentes puntos de los Estados Unidos. Estos desplazamientos no se contabilizan ni se lleva un registro exacto del total de migrantes. Los que migran, por lo general, son los varones (en un rango de edad variable), aunque ya se están incorporando mujeres, sobre todo jóvenes. Cabe aclarar que, con anterioridad, era común la participación en estos flujos migratorios de jóvenes que acababan de terminar sus estudios básicos o de nivel medio superior, pero ahora emigran aun sin concluirlos. Hay quienes llevan años radicando de forma permanente en los Estados Unidos; otros, solo van por temporadas.

Los connacionales de la Montaña realizan visitas esporádicas a sus lugares de origen en el transcurso del año con la finalidad de ver a sus familiares y acudir a las fiestas tradicionales. Además, envían contribuciones para cubrir gastos familiares básicos, el aporte comunitario o las celebraciones patronales, las cuales tienen un fuerte compromiso no solo de carácter social-comunitario, sino identitario, económico, de prestigio, respeto y arraigo.

Migran principalmente a estados como Nueva York, Illinois, Nebraska, Virginia, Arizona, Nevada, Washington, Texas, Georgia y Florida.

Para pasar o «cruzar la frontera» les cobran un promedio de \$1 500 a \$2 500 dólares, o bien, entre \$15 000 y \$25 000 pesos, pero esta cantidad varía dependiendo de la ruta migratoria y de los llamados «coyotes» que los conducirán hasta el paso fronterizo. Se contratan, principalmente, en el municipio, ya que los «coyotes» o «polleros» por lo general son oriundos del lugar; sin embargo, también tienen sus propias redes y rutas establecidas para el tráfico de migrantes.

Las redes parten del municipio con contactos en el Distrito Federal, Morelos, Puebla u otras localidades, que facilitan de cierta forma el desplazamiento de los migrantes de su lugar de origen hasta la frontera. La idea de estos contactos es, en esencia, no involucrar de modo directo al «coyote» de la región y así, no hacerlo responsable de cualquier incidente que sufran sus paisanos al cruzar hacia los Estados Unidos. Automáticamente se «lavan las manos» y no asumen responsabilidad alguna, ni mucho menos les interesa saber en qué condiciones perdieron la vida muchos de los migrantes a los que, en alguna ocasión, ellos mismos enrolaron para su salida hacia aquel país.

Con respecto a sus rutas, la principal de ellas se ubica en el estado de Sonora y su frontera con Arizona, aunque también utilizan otras establecidas en estados como Baja California, Chihuahua y Monterrey. El cruce por Sonora-Arizona se hace básicamente por el desierto que une ambas fronteras. Como ya se sabe, las condiciones climáticas en esta zona son inhóspitas, las temperaturas superan hasta los 40°C durante el día y llegan por debajo de los 0°C en la noche.

Hay lugares en la frontera considerados de alto riesgo por su ubicación geográfica; es decir, son zonas donde es común el tráfico de personas y la trata de blancas o prostitución de mujeres jóvenes, muchas de ellas migrantes que tenían como finalidad cruzar la frontera. Así, también es común que a nuestros connacionales se les utilice para pasar droga al otro lado, que pierdan la vida por defender lo poco que llevan para sobrevivir en aquel país, al ser víctimas de un asalto; y que las mujeres sean violadas por los mismos «coyotes». Por otra parte, en Arizona existen grupos antiinmigrantes que han implementado prácticas asociadas a la cacería de nuestros paisanos con el pretexto de controlar el tránsito migratorio.

La historia de los migrantes que van en busca del *sueño americano* no termina cuando llegan al otro lado de la frontera y ni siquiera cuando pierden la vida en el intento. Cada muerte trae serias repercusiones. En territorio estadounidense es preciso realizar las gestiones burocráticas para el traslado de los cuerpos, mientras que en México están los familiares deseosos de poder sepultarlos en su tierra. Pero, ¿qué pasa con los que se quedan?, ¿qué es de los hijos, esposas, hermanos, padres y demás familiares, amigos y conocidos de los migrantes que perdieron la vida? Ahora, ¿cuál será su presente y su futuro?

Si bien muchos emigran por la aspiración de obtener el codiciado billete verde que les permita mejorar sus condiciones de vida, también es cierto que en la Montaña de Guerrero, como en cualquier parte, el mar de historias de los migrantes es muy diverso. El ir al otro lado siempre implica obtener remesas que se puedan emplear para la construcción, mejora o acondicionamiento de la vivienda, o la adquisición de ciertos bienes para la familia y el hogar, aunado a los gastos para la atención de un enfermo, o de diversa índole.

Lo paradójico es el futuro incierto al que se enfrentan los que se quedan, ante la pérdida de su familiar, escenario que se inicia cuando les informan que ha muerto, y continúa en un arduo vía crucis con el trámite burocrático para el traslado del cuerpo. Son días de incertidumbre durante los cuales lo único que quieren los familiares es tener entre ellos a su padre, esposo o hijo, mientras otros encuentran en la muerte de los migrantes un negocio redondo y lucrativo, principalmente para las funerarias que cobran cuantiosas cantidades de dinero o para los mismos consulados por el solo traslado del cuerpo.

Cómo es posible que la muerte de unos signifique la ganancia de otros, que las estadísticas de estos decesos se traduzcan en beneficios económicos, y que al final, a nadie le interese la situación de los que van a llorar y a extrañar a sus muertos.

Las cifras de los traslados proporcionan valiosa información sobre la migración mexicana hacia los Estados Unidos, pero el consulado mexicano todavía no tiene un protocolo para concentrarlas. Se envían los números globales para ser revisados en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Sin embargo, estas cifras corresponden al número de cuerpos repatriados por la red consular de la SRE, y no incluyen a quienes son trasladados por cuenta de sus familiares o cuyos restos quedan sin localizar en el desierto, ni a los que mueren por causas naturales en territorio estadounidense, o después de la travesía pierden la vida por los efectos o secuelas del cansancio; tampoco contemplan a las víctimas de homicidio, suicidios, accidentes de vehículos, los que fallecieron por enfermedades, ni aquellos cuya muerte continúa en investigación.

Según datos oficiales, hasta la primera quincena del mes de agosto de 2005 se registraron 384 muertes de connacionales en el intento de cruzar la frontera. En esos ocho meses se superó el número de migrantes muertos en el año anterior. No obstante, según una nota publicada en el diario *La Jornada*, el lunes 22 de agosto de 2005: «diversas organizaciones no gubernamentales de protección y defensa de los migrantes informaron que dos tercios de los 384 decesos registrados en lo que va del año ha sido por deshidratación, debido al estricto control fronterizo que obliga a los connacionales a intentar el cruce por lugares más inhóspitos y lejanos de las poblaciones fronterizas, incluido el desierto».

Al analizar las cifras queda claro que la migración indocumentada ha ido adquiriendo nuevos patrones, ya que las muertes en la frontera reflejan, por un lado,

la poca efectividad de las bardas, censores y vigilancia militarizada que se han implementado en ambos lados fronterizos; y por el otro, son evidencia de una nueva ruta para el cruce de indocumentados.

Sin duda, la migración es un fenómeno que se presenta en casi la totalidad geográfica del territorio nacional y que ha ido modificando el mapa étnico del país como ahora modifica el de Guerrero.

## V. El viaje de la ignominia

En las comunidades indígenas de la Montaña que se distinguen por ser eminentemente expulsoras de jornaleros, por lo general hay una persona de confianza que está relacionada con los empresarios agrícolas o con los enganchadores, que organiza a la gente y a menudo sale con ella.

En el caso específico de la Montaña, el traslado se hace hasta el municipio de Tlapa de Comonfort (que es considerado el sitio de embarque de los jornaleros), en camiones de redilas o camionetas contratadas por los enganchadores, quienes reciben entre \$800 y \$3 000 pesos por grupos de cuarenta o cuarenta y cinco que conforman dos *cuadrillas*. Las cuadrillas están integradas por aproximadamente veinte o más personas entre mujeres, niñas(os), y varones, que en su mayoría son familiares o a los que unen diversos lazos de parentesco; dos cuadrillas pueden llenar un autobús completo: cuarenta o cuarenta y cinco personas como promedio.

Al llegar a Tlapa los jornaleros se organizan en pequeños grupos, ya sea por familia o comunidad de origen, a orillas del río Jale (lugar de embarque y donde se ubican los autobuses que los trasladarán a su lugar de trabajo). Allí esperan la salida, que puede ser en cuestión de horas, un día o más. Los camiones salen cuando se completa el cupo de cuarenta y cinco lugares de los cuales disponen.

En teoría, existe un cierto control sobre la migración por parte del PAJA que cuenta con una Unidad de Servicios Integrales (USI) en la región, ya que los contratistas o enganchadores deben registrar a los jornaleros, así como proporcionar el número de placas y seguro del autobús, nombre del operador y su acompañante.

Algunos contratistas les hacen firmar supuestos contratos o formatos de registro, donde ambas partes (jornaleros-contratista) se comprometen a cumplir los acuerdos establecidos, pero no tienen la firma del patrón por lo cual carecen de valor legal.

Los formatos contienen ocho renglones para registrar supuestamente a los niños mayores de catorce años o que puedan trabajar; los más pequeños no son registrados, de tal forma que no se tiene un control real de estos grupos. En realidad, no hay nadie que vigile este proceso ni que proteja los intereses de los jornaleros agrícolas.

En Tlapa, además del PAJA, se supone que ciertas dependencias estatales se ocupan de los problemas y situación de los jornaleros, por ejemplo la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos



Indígenas (CDI), en coordinación con otras dependencias como el Servicio Nacional de Empleo (SNE), la Jurisdicción Sanitaria 04 de la Montaña, entre otros, para asistirlos durante la temporada de fuerte migración.

### **Modalidades de la migración en la Montaña**

La migración interna que protagonizaban comúnmente miles de familias indígenas de la Montaña de Guerrero correspondía a un *ciclo migratorio* establecido en la región sobre la base del *ciclo agrícola* de las comunidades rurales, que comenzaba con la siembra de la parcela y el inicio de las celebraciones y ritos de petición de lluvia por un lado, y de la cosecha, por el otro.

Este ciclo, paralelamente, estaba en relación con el ciclo productivo de los campos agroindustriales. En estos campos de cultivo, en los meses de septiembre-octubre, se comienza con el acondicionamiento del terreno y la siembra posterior, para que durante los meses siguientes (noviembre-abril) se cosechen los productos y se exporten en el tiempo establecido por la demanda que determina el mercado exterior.

Sin embargo, esta modalidad se ha ido modificando, pues la migración presente en la Montaña no es solo de carácter estacional, sino también permanente o pendular, ya que ha dependido, en gran parte, de las posibilidades que presentan los mercados de trabajo en los sitios de atracción.

Es decir, que las modalidades en la zona han variado mucho; si antes se adecuaban al ciclo agrícola y productivo, actualmente esta migración se ha vuelto más dinámica y selectiva (en relación con el estado de atracción por parte de los jornaleros agrícolas), lo que permite que varias familias jornaleras se desplacen de manera pendular hacia diferentes puntos de la república.

Hay familias que en un período aproximado de tres a cinco años se han desplazado de los campos de cultivo de Morelos a los de Jalisco, Nayarit, Chihuahua, Sonora, Baja California y finalmente Sinaloa, para reiniciar el recorrido por donde comenzaron. Ese es el caso de los migrantes denominados «golondrinos», quienes se caracterizan por seguir la ruta que establecen los ciclos agrícolas de un lugar a otro, buscando continuidad en el empleo.

Un ejemplo de lo anterior es el Valle de Culiacán, donde los productores agrícolas utilizan mano de obra durante los meses de septiembre a abril, o en casos favorables, hasta mayo o junio. Al terminar la temporada, los jornaleros vuelven a sus lugares de origen o bien buscan empleo en Sonora, Chihuahua o Baja California. Estas familias se desplazan en función de la oferta laboral de los ciclos productivos en los campos hortofrutícolas de estos estados, lo que medianamente les garantiza un empleo y a su vez, un salario.

Son familias jornaleras que, debido a estos amplios períodos de trabajo fuera de su lugar de residencia, sufren una situación de desarraigo, porque dejan a otros familiares, vecinos, amistades, actividades comunitarias, relaciones político-sociales,

convivencia y el vínculo con su entorno comunitario. Entran, así, en una dinámica de adaptación no solo de las condiciones relacionadas con el trabajo, sino con la vida cotidiana y su entorno social. Se relacionan con jornaleros provenientes de otros estados que son portadores de prácticas distintas. Están frente a una relación de interacción social, cultural, religiosa y hasta política en los mismos campos de trabajo. No obstante, también hay migrantes que se asientan en las áreas receptoras, ya sea por falta de recursos para regresar a sus lugares de origen o porque han decidido instalarse de forma definitiva en lugares donde hay facilidad de empleo.<sup>4</sup>

La migración no solo se convierte en una estrategia de sobrevivencia para un amplio sector de indígenas empobrecidos de la región de la Montaña, sino que tiene un peso considerable en la dinámica económica regional y ha ido adquiriendo una importancia creciente para compensar la insuficiencia de ingresos en la economía familiar.

El trabajo migratorio rural compensa con altos costos sociales los bajos ingresos obtenidos en la economía local; el impacto regional que generan los ingresos de los jornaleros supera en cierta medida el gasto productivo del conjunto de instituciones que actúan en las regiones de expulsión.

El destino de los recursos que obtienen las familias jornaleras en su mayoría se designa al pago de deudas (algunas de ellas se adquieren al pagar el traslado de algún miembro de la familia para cruzar la frontera, pago que se le da al «coyote»), compra de maíz o de otras semillas, adquisición de fertilizante y de herramientas para el trabajo agrícola o de la casa; así como de todo aquello relacionado con los gastos del hogar, ropa, alimento, calzado, educación, medicamentos, entre otros. A esto se añaden los gastos en que incurren al asumir algún compromiso comunitario como las mayordomías, trabajos de la comunidad, la fiesta del pueblo o celebraciones

<sup>4</sup> En municipios como Metlatónoc y Cochoapa el Grande, con predominio mixteco ambos, y Tlapa, con población tlapaneca, se ha registrado categoría migratoria de fuerte expulsión. En el municipio de Alcozauca existen comunidades con un porcentaje considerable de familias indígenas jornaleras. El rango de edad de los jornaleros presente en este tipo de migración es variable, ya que, como se mencionó anteriormente, migran familias completas, dejando su terruño, hogar, bienes personales y animales. En el municipio de Cualác existe un porcentaje (60%) considerable de familias indígenas jornaleras que laboran en los campos agrícolas de Sinaloa y Tierra Caliente en el estado de Guerrero.

Diversas son las localidades de municipios como Acatepec, Tlacoapa, Zapotitlán Tablas, Atlixnac, Copanatoyac y Atlamajalcingo del Monte que presentan una migración básicamente de jornaleros agrícolas hacia el estado de Sinaloa. En el municipio de Xalpatláhuac los jornaleros agrícolas que migran provienen principalmente de las comunidades de *Isla Victoria*, *Tlaxco*, *Xilotepec* y *Cahuatache*; son contratados para laborar en los estados de Sinaloa, Acapulco, Cuautla, Cuernavaca y la Ciudad de México.

de diferente índole, ya que son eventos que consumen una buena parte de los ingresos de las familias jornaleras cuando estas retornan a su lugar de origen.

Los ingresos familiares provienen, mayoritariamente, del trabajo que llevan a cabo cada temporada, como jornaleros agrícolas, casi todos los miembros en edad de trabajar o con características óptimas para este tipo de labor, como suele ser la destreza, habilidad y, sobre todo, fortaleza; por ello, es común encontrar en los surcos de los campos agrícolas de los estados del noroeste del país a varones jóvenes y adultos, a mujeres, niñas y niños de diferentes edades.

De esta forma, la migración de jornaleros agrícolas no involucra aspectos relacionados con sus condiciones laborales o sus derechos humanos, sino que se encuentra conformada desde la estructura misma por una condición de género y de desigualdad social, jurídica y política, además de la propia condición migratoria y étnica.

## VI. Sobreviviendo en los campos agrícolas

### **Condiciones laborales de las familias jornaleras indígenas: salud, seguridad social, vivienda y alimentación**

Las condiciones de trabajo y de vida de las familias indígenas jornaleras son muy desiguales porque varían según la región y la ocupación que desempeñe el trabajador; estas a su vez dependen de su condición social. El jornalero migrante, por razones culturales y por la falta de educación formal, recibe un trato de indiferencia de la población y de las autoridades de las localidades donde trabaja y se encuentra impedido para defender sus derechos, lo que se acrecienta en el caso de los migrantes que llegan por su cuenta al lugar del trabajo y en el de los indígenas que son monolingües y, en su mayoría, no cuentan con documentos.

Las mujeres casadas, esposas de los jornaleros, generalmente analfabetas o con bajos niveles de escolaridad, realizan las labores más pesadas. Su salario es siempre considerado complementario al del marido. El trabajo de la mujer casada se divide entre el quehacer doméstico y las labores en el campo. No cuenta con incapacidad por gravidez ni con los servicios médicos adecuados. En términos generales, la asistencia social es muy reducida y no se le otorgan prestaciones.

Todo lo anterior es violatorio de uno de los principios fundamentales que da sustento a las garantías sociales de la clase trabajadora, contemplado en el artículo 123 de la Constitución, que contempla la protección de la vida, la salud y el bienestar del trabajador y su familia. Las leyes del trabajo rigen las relaciones laborales de quienes están contemplados en su apartado A, entre ellos los jornaleros agrícolas. Establece que estas leyes deben aplicarse a todos los trabajadores, incluso cuando la relación laboral se entabla de manera verbal, y ampara el derecho a la sindicalización.

La Ley Federal del Trabajo, en el capítulo VIII del título sexto, establece también la obligación del patrón de proporcionar a sus trabajadores alojamiento y asistencia médica y, en el caso de contratar a más de cien personas, mantener una enfermería atendida por personal competente bajo las órdenes de un cirujano, obligación que se inscribe dentro de los ordenamientos básicos de la seguridad social, artículo 283 del capítulo señalado.

Sin embargo, si la clase obrera tiene dificultades para que se respeten sus derechos laborales, la situación es peor aún para los jornaleros agrícolas, quienes son los más explotados y marginados de la población rural. A pesar de su importancia numérica en relación con los demás grupos sociales de este sector, los jornaleros agrícolas han sido y son los grandes ausentes de los programas y planes gubernamentales.

Los jornaleros migrantes no tienen prestaciones de ley, ni aguinaldo, ni pago del séptimo día, ni prima vacacional; solo cuentan, en algunos lugares, con servicio médico, pero no en todos, y tienen que recurrir, en ocasiones, a médicos particulares. Se les otorga cierto monto económico al término de su trabajo en los campos agrícolas, que la empresa denomina «retiro» o pago de utilidades; en algunos campos les otorgan despensas económicas u otro tipo de apoyo en especie.

Los derechos derivados de las leyes nacionales en materia laboral no se cumplen en relación con los trabajadores agrícolas; por ejemplo, respecto al pago de los salarios en los grandes campos de cultivo, este es por jornada o por tarea, es decir, un sistema a destajo cuyas tarifas están sujetas a las leyes de la oferta y la demanda. En ocasiones, los jornaleros trabajan doce o catorce horas diarias para obtener un pago apenas superior a los salarios mínimos, y en otras, a causa de un mal temporal o de una sobreoferta de mano de obra y productos agrícolas, los jornaleros dejan de trabajar y de percibir un ingreso. La legislación carece de un sistema federal que norme y regule las contrataciones y condiciones de trabajo de los jornaleros agrícolas temporales o eventuales.

Otro de los aspectos fundamentales es el de la vivienda. A los migrantes que son enganchados en su lugar de residencia se les proporciona siempre un lugar donde vivir. Generalmente, la vivienda consiste de galerones construidos con láminas de cartón o galvanizadas, con divisiones muy estrechas que forman habitaciones, con el piso de tierra, carentes de agua potable y de servicios sanitarios. En ellas se hacinan cientos de jornaleros con elevados riesgos de contagio y suciedad.

La vivienda es más que una imagen física; es en sí uno de los derechos inalienables de todos los trabajadores, ya que es la condición esencial para que pueda crecer y consolidarse una familia. En su vivienda, con su familia, el jornalero vive y realiza su propia vida y sus relaciones con los demás; esto da fortaleza a su estructura familiar. Es su espacio, del cual él y su familia dispondrán como quieran. Por eso, no basta con solo entregar unos cuartos con diseños tan estrechos y, en ocasiones, poco apropiados, ya que en estas galeras permanecerán por cuatro o cinco

meses, y ese pequeño espacio se transformará en su vivienda, en su lugar de descanso después de finalizar las labores en el campo.

La alimentación es otro factor que acrecienta la vulnerabilidad de los migrantes, ya que, debido a la pobreza en la que viven en sus lugares de origen, tienen elevados índices de desnutrición, principalmente los niños, niñas y recién nacidos. Esta situación se agrava cuando arriban a los campos de trabajo, porque al llegar aquí, son objeto de extorsión por parte de los tenderos, protegidos de los patrones, quienes enganchan a los jornaleros al venderles a crédito las mercancías que necesitan. Cuando cobran, el salario no alcanza para cubrir la deuda y seguir comprando, así que los tenderos los mantienen constantemente endeudados.

Las condiciones insalubres de las viviendas y del medio en que vive la familia jornalera, aunadas a una mala alimentación y a las desgastantes condiciones laborales, así como a la falta de hábitos de higiene, son elementos que contribuyen al deterioro de su salud.

En México, el instrumento básico del sistema de seguridad social es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), organismo público y descentralizado que tiene como finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios individuales y colectivos. El Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores del Campo comprende la protección de los trabajadores agrícolas estacionales, que son los que laboran únicamente determinadas épocas del año.

De acuerdo con su artículo 18, el IMSS otorga a estos trabajadores y a sus familias: atención médica, farmacéutica y hospitalaria solo durante el tiempo en que prestan sus servicios, y una cantidad de dinero, en los casos de accidentes de trabajo, equivalente a la mitad del ingreso durante el tiempo que esté incapacitado. Sin embargo, hasta ahora, los trabajadores o sus familiares deben presentar en las unidades médicas el aviso o famoso «pase» que les da la empresa agrícola para que el IMSS los atienda y, de hecho, solo lo reciben en casos extremos o cuando ya están casi al borde de la muerte.

Este sistema no contempla el pago de incapacidad de ningún tipo ni la atención médica para el seguimiento de enfermedades crónicas o degenerativas que, en el caso de los jornaleros, son frecuentes por el desgaste físico y la exposición prolongada a los agroquímicos. Así, la seguridad social margina y excluye hasta de su más esencial beneficio, la atención médica, al grupo más grande de trabajadores: a los jornaleros agrícolas.

Recientemente, en el mes de enero de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los trabajadores eventuales del campo, como cualquier otro asalariado, tienen derecho a que sus patrones les paguen servicios de seguridad social durante el tiempo que trabajen para ellos. La resolución avala las reformas a la Ley del Seguro Social que contemplan la incorporación al régimen ordinario del IMSS de los trabajadores eventuales y permanentes del campo, que

son contratados en labores relacionadas con los sectores agrícola, ganadero, forestal o mixto.

Por lo tanto, los patrones están obligados a otorgar a los jornaleros agrícolas y a sus familias las prestaciones en especie correspondientes al seguro de enfermedades y maternidad. En caso de incumplir, los patrones serán sancionados, toda vez que la Ley del Seguro Social faculta a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que suspendan la entrega a los productores rurales, de toda clase de subsidios, apoyos o beneficios derivados del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Otro punto que es importante retomar, es el de las deficiencias que presenta el sistema de transporte que se emplea tanto para el traslado de los trabajadores de su lugar de origen al de destino, como el que los desplaza al interior de los campos agrícolas. En Culiacán, todavía presenta enormes y graves deficiencias que han provocado la pérdida de vidas humanas, con el agravante de que en algunos de estos accidentes, ha habido, lamentablemente, resistencia patronal a la cobertura de las indemnizaciones. De ahí que sea necesario generar e impulsar reformas legislativas específicas en el área de tránsito y transportes, a fin de garantizar una transportación adecuada.

### Trabajo infantil

Las leyes que establecen la edad reglamentaria del trabajo infantil también se pasan por alto. Desde su creación, en 1919, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dedicó una buena parte de sus esfuerzos a la eliminación del trabajo de los niños y a la promoción de su bienestar dentro de los ámbitos de su competencia.<sup>5</sup> Así, formuló en una de sus declaratorias el Convenio No. 138 que contempla la edad mínima de admisión al empleo.

En México, la contratación de menores de edad está contemplada por la Ley Federal del Trabajo, que en la práctica no se cumple. Hasta la fecha, nuestra Constitución política prohíbe a los empleadores la utilización del trabajo de menores de catorce años, mientras los mayores de catorce y menores de dieciséis deben tener como jornada máxima seis horas. La legislación laboral mexicana, al referirse a menores trabajadores, comprende a los jóvenes entre catorce y dieciséis años, y por supuesto no se reglamenta el trabajo de los menores de catorce al estar prohibida su contratación.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Véase OIT: «Edad mínima de admisión al empleo», Informe IV a la 57ma. reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra, T. Parsons, *Estructura y procesos en las sociedades modernas*, spi, Madrid, 1972.

<sup>6</sup> Consúltese Ma. Teresa Guerra Ochoa: *Los trabajadores de la horticultura sinaloense*, Universidad Autónoma de Sinaloa y CNDH, México, 1998.



No obstante, hay datos oficiales que dan muestra del índice elevado que alcanza en nuestro país el trabajo de menores de catorce años en diversas actividades.

En México existen 3,1 millones de jornaleros agrícolas. Casi el 20% de su fuerza laboral está constituida por menores de seis a catorce años de edad. Este grupo registra el más alto grado de rezago educativo del país.

Según el Programa de Educación Primaria para Niños y Niñas Migrantes (PRONIM) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 50% de los niños que asisten a la escuela se encuentra en el primero o segundo grado de primaria.

Estas cifras solo dan cuenta del grave rezago educativo que prevalece en los hijos de los jornaleros en edad escolar. No es cuestión de datos estadísticos, porque el problema radica, fundamentalmente, en los planes de estudio que elabora la SEP y el mismo CONAFE en relación con los niños migrantes. Dichos planes deben de considerar la eventualidad de los menores por ser migrantes de carácter temporal, y las deficiencias que presenta el niño al acudir por determinado período a la escuela, ya que el nivel de enseñanza varía mucho de acuerdo con el lugar de origen y de recepción. A esto se añade que un porcentaje considerable de esos niños trabajan en las actividades de corte y recolección de diversas hortalizas, lo que dificulta su permanencia en la escuela.

Si bien, recientemente, se ha firmado un convenio para implementar el Proyecto Monarca, que comprende becas económicas y en especie, que se otorgarán a niños jornaleros que asistan a la escuela mientras sus padres laboran en los campos agrícolas, es importante aclarar que dicho proyecto tendrá viabilidad cuando se evalúe a profundidad la situación de las causas y efectos de la migración. No es cuestión solo de desincorporar la mano de obra infantil y pretender erradicarla con la implementación de estos incentivos. Esas becas tendrían que ser un tanto equiparables al monto económico que puede ganar un menor en el corte de hortalizas.

Con esto, no queremos decir que es mejor que se contraten como jornaleros, porque ganan más; por el contrario, es una cuestión de medir los parámetros entre lo que representa la actividad que realiza un niño jornalero y la obtención de un ingreso para el sustento familiar, que solo permitirá, de cierta forma, considerar un ahorro y garantizar, así, la solvencia de la familia por lo menos para la siguiente temporada de cosecha, cuando ellos regresen nuevamente.

Esto sería equiparable si el ingreso que perciben los padres es el justo, es decir, que el pago por balde se ajuste a un costo más elevado, y evite así, el pago a destajo que prevalece actualmente en dichas actividades, con lo que se garantizaría, la sobrevivencia de la familia cuando aquellos regresen a sus lugares de origen.

Muchas veces se dice que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño es solo otro papel mojado, otra lista de buenas intenciones, otro ejemplo de un discurso con que la comunidad internacional intenta hacer frente a los grandes problemas del momento, pues la importancia de estas declaraciones o convenios no radica exclusivamente en la firma, sino en su ratificación y su cumplimiento *de ipso*

*facto*. Sus cláusulas deberían constituir una norma de conducta, ya que la Convención ofrece un patrón de medida, un marco de referencia permanente. Desde luego, nada cambiará de la noche a la mañana. Nunca se ha conseguido establecer un régimen jurídico nacional e internacional de irrevocable cumplimiento para los países. Sin embargo, una firme e incesante presión puede conseguir, con el tiempo, un cambio de políticas en *pro* de la población infantil.

## VII. A modo de propuestas

Estamos ante un problema social muchas veces abordado por las autoridades, por organismos sociales, por partidos políticos y por organismos no gubernamentales de defensa de los derechos humanos. Es un problema grave puesto que se trata de velar por los derechos elementales de una población de alrededor de 300 000 personas que cada temporada se emplean como jornaleros agrícolas en diversos campos del norte y noroeste del país, pero también está la situación de nuestros migrantes que deciden cruzar la frontera.

Ha habido ligeros avances con respecto a las condiciones de vivienda y seguridad social para los jornaleros agrícolas, pero desafortunadamente estos apoyos son insuficientes. Los trabajadores del campo no pueden aspirar ni siquiera a recibir un trato de *ciudadanos*.

Estamos frente a un círculo vicioso, ya que durante su estadía en los campos agrícolas de Sinaloa impera una serie de anomalías que denigran la dignidad humana de estas familias indígenas migrantes. De ahí que sean mínimos o casi nulos los «avances» en materia de derecho laboral en beneficio directo de los jornaleros, si así se les puede denominar a los consensos que se han llevado a cabo para impulsar la defensa de sus derechos laborales.

La ausencia de una legislación estatal propia para el sector agrícola y todo lo que esta actividad implica, ha sido, sin duda, una de las mayores debilidades presentes, por ejemplo, en los estados de Guerrero y Sinaloa, sobre todo en el último, ya que esta actividad es su principal generadora económica, a la cual contribuyen miles de familias jornaleras provenientes de diferentes estados del país.

México, como país firmante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948, se comprometió a establecer un régimen de derecho en donde se respeten los principios de libertad, igualdad, justicia y se reconozcan la dignidad intrínseca y los derechos inalienables de los mexicanos. Al igual que todos los países firmantes de la Declaración de los Derechos Humanos, México se ha declarado resuelto a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida de sus habitantes dentro de un concepto amplio de libertad e igualdad.

Es contrastante la realidad social que viven los jornaleros agrícolas; los tratados firmados y ratificados, sexenio tras sexenio, por nuestros mandatarios, son como cheques sin fondos. Por ello, es prioritario que se legisle para mejorar las

condiciones de vida y de trabajo de aquellos, pero lo más importante es que se respeten y se apliquen las leyes que ya están contempladas en los ordenamientos antes descritos.

No es solo una cuestión de modificar o no las leyes, sino que también debería ser un asunto prioritario. Al referirnos a la necesidad de diseñar políticas públicas en materia de migración, no pretendemos, ingenuamente, sugerir que el Estado mexicano las adopte como suyas, pues sabemos que sigue una agenda neoliberal que abona el proceso de integración vigente. Más bien nuestro planteamiento se dirige a un proceso social en ciernes que se nutre y reclama, a la vez, de la participación de múltiples actores en esta problemática.

Es posible sostener que en la actualidad México no dispone de una política en materia de migración (tanto interna como transnacional). Si bien se han implementado programas o proyectos, estos apuntan en dirección opuesta al desarrollo y no atacan las causas de la migración; en ocasiones, son una amalgama de programas asistenciales focalizados en la extrema pobreza o se reducen, generalmente, a una proclama de buenas intenciones, y se desdeña el tema y los problemas del desarrollo que afrontan las zonas de alta migración.

Más aún, lejos de atender una estrategia de desarrollo para las regiones de fuerte expulsión, las políticas migratorias en México siguen una lógica adaptativa, mediante programas inconexos y abocados a cubrir aspectos parciales relacionados con los efectos de la migración. La pretensión básica del Estado ha sido garantizar que esta cumpla, pasivamente, su funcionalidad en relación con el equilibrio macroeconómico y la estabilidad social, en una tentativa por «estirar la cuerda hasta que revienta».

Por encima de las limitaciones que acusan las políticas públicas en materia migratoria, es menester reconocer que la comunidad migrante, sobre todo aquella que se encuentra en los Estados Unidos, está pugnando, todavía en términos incipientes, por convertirse en un sujeto del desarrollo. En este sentido, la evolución histórica y maduración de sus redes sociales demuestra que los migrantes cada vez van adquiriendo un nivel de organización que les permite ocupar aquellos espacios negados por décadas.

Ante este panorama se requiere:

1. que el Estado y la sociedad reconozcan a México como un país de migrantes que no solo traspasan nuestras fronteras en busca del tan anhelado «sueño americano», sino también que traspasan sus fronteras locales y regionales para ir en busca de un sueño que es reflejo y continuidad de la vida del jornalero agrícola, sin muchas perspectivas para los niños y niñas, cuyo presente y futuro se encuentra en aquellos campos agrícolas;

2. que se conciba el desarrollo del país con el concurso de la comunidad migrante, pues resulta indispensable repensar esto si se es consecuente con lo anterior; la experiencia internacional indica que es posible avanzar en esta dirección;
3. que se diseñe e implemente una política integral y con un horizonte de largo plazo (una política de Estado) en materia de migración, que contemple al menos los siguientes aspectos:
  - a) garantizar los derechos ciudadanos de los migrantes;
  - b) promover el desarrollo de las zonas de alta migración creando canales para la inversión productiva, abrir mercados locales y regionales, y ofrecer opciones para la reinserción productiva del migrante interno o transnacional;
  - c) impulsar programas de desarrollo social integral comunitario;
  - d) garantizar los derechos humanos y laborales de los migrantes.

Pero también es prioritario:

1. diseminar información de derechos humanos y migrantes;
2. considerar la ratificación de los tratados internacionales existentes de derechos humanos sobre migrantes;
3. asegurar que sean asumidas la legislación apropiada y las medidas administrativas para trasladar los compromisos internacionales a leyes nacionales, asegurar el cumplimiento de los instrumentos internacionales y rectificar vacíos existentes en la ley de protección;
4. luchar contra el racismo, exclusión, marginación, xenofobia e intolerancia contra los jornaleros agrícolas y los migrantes internacionales;
5. establecer o aumentar programas de entrenamiento para funcionarios del gobierno sobre los derechos y medidas en el trato de migrantes;
6. cooperar en forma bilateral y regional cuando sea posible para asegurar el trato adecuado de los migrantes;
7. informar a los migrantes de sus derechos y obligaciones;
8. desarrollar mecanismos de monitoreo, constatación y atención en la búsqueda de las violaciones de los derechos humanos contra jornaleros agrícolas y migrantes internacionales;
9. vigilar, por parte del gobierno federal, que los procesos de repatriación en ambas fronteras se realicen con apego a la ley y en pleno respeto a los derechos humanos, con la correspondiente información a los migrantes acerca de dicho proceso administrativo, así como de sus derechos;

10. evaluar la efectividad de los diversos programas que protegen a los migrantes, los cuales deberán contar con los recursos humanos y económicos necesarios para su operación; los derechos a la salud, integridad física, seguridad jurídica y a la vida deben ser los principios rectores de las actividades de esos programas.

El gobierno federal y los gobiernos estatales deben de intervenir de manera responsable para que se eviten abusos, engaños y excesos de grupos de enganchadores que no asumen la responsabilidad de apoyar las necesidades apremiantes de los jornaleros agrícolas.

Por todo lo anterior, se recomienda reformar la Ley Federal del Trabajo (artículos 280, 280 B, 282 A y 283) para incluir el concepto de jornalero agrícola, con el objetivo de regularizar su contratación, garantizar su acceso a prestaciones sociales y fortalecer las instituciones encargadas de vigilar el respeto a sus derechos.

ISABEL M. NEMECIO NEMESIO es maestra en Desarrollo Rural del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C. y responsable del Programa de Jornaleros Agrícolas y Migrantes Internacionales.

## Nacionalismos y pueblos indígenas: refundar la nación mexicana\*

ALICIA CASTELLANOS GUERRERO

### Procesos nacionalitarios contemporáneos

Nacionalismo y democracia no han sido siempre procesos concomitantes en la sociedad contemporánea. Nacionalismos de fines del siglo pasado y del nuevo milenio, por ejemplo, han impuesto políticas antiinmigrantes, de limpieza étnica y exterminio. En cambio, una mirada más comprensiva del fenómeno en otras latitudes trastoca el escenario; así, tenemos los procesos históricos y actuales en defensa de la soberanía nacional en la región latinoamericana y la evolución reciente del movimiento indígena en México que expresa un *nacionalismo*<sup>1</sup> fundado en la idea de una nación que represente los intereses de todos a partir de su multiétnicidad y diversidad cultural y de una hegemonía de carácter popular.

---

\* Versión revisada de la ponencia presentada en el World Congress of Sociology XVI International Sociological Association realizado del 23 al 29 de julio de 2006 en Durban, Sudáfrica.

<sup>1</sup> Este tipo de nacionalismo encuentra sus raíces en el pensamiento de José Carlos Mariátegui, quien proponía «arrancar de las manos de la burguesía la dirección de la nación», porque «la revolución habría de ser democrática y nacional, pero no burguesa; democrática y nacional, pero también, y al mismo tiempo, socialista e internacionalista». Citado en Leopoldo Mármora: *El concepto socialista de nación*, Ediciones Pasado y Presente, Siglo XXI, México, 1986, p. 246. En el Perú de los años veinte, se opuso a una concepción esencialista de nación, reivindicando «la heterogeneidad histórica, social, cultural y étnica» como el «fundamento mismo de la identidad peruana, una estrategia que recogiera afirmativamente todas las tradiciones y componentes de la historia peruana (la indo-americana, la hispano-colonial y la criollo-liberal), uniéndolas, en una articulación renovadora, con el espíritu de nuestro tiempo contemporáneo socialista y revolucionario». *Ibíd.*, p. 250. A casi un siglo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Perú está por fundar el Movimiento Plurinacional Pachacuti y, en perspectiva, un gran Frente Político Indígena «para defender nuestros territorios, recursos naturales y culturas» ante la crisis de la república criolla y los partidos antinacionales y pasar a la «refundación del país hacia una república



Precisamente, los procesos de autonomía que practican las comunidades y los pueblos –entre múltiples contradicciones internas y con el Estado–, son la base de la organización política que interviene en la defensa del territorio, los recursos naturales estratégicos y el fortalecimiento de identidades étnicas regionales y nacionales, condición para la integración y la soberanía de una nación multiétnica y pluricultural democrática.<sup>2</sup>

En este trabajo se sustenta que en el movimiento indígena mexicano y, en particular, entre los mayas zapatistas y el Congreso Nacional Indígena (CNI), se expresa un tipo de nacionalismo que se contrapone al viejo nacionalismo revolucionario (desde hace tiempo en crisis) y a un multiculturalismo de Estado que reduce los derechos de los pueblos en reformas constitucionales que contravienen los Acuerdos de San Andrés firmados entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1996.

Visto desde otro ángulo, este nacionalismo de vertiente democrática es impulsado por diversas fuerzas nacionales, entre las cuales los indígenas son actores estratégicos por su condición de pueblos en la defensa de la nación y de su independencia. La lucha por el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos, por una ciudadanía plena y sus autonomías tiene un contenido de afirmación nacional incluyente de la diversidad étnica y nacional de la sociedad mexicana.

Refundar la nación a partir de su multiétnicidad y pluralidad cultural, y de una hegemonía popular, implica recuperar la concepción de que la nación no es exclusiva de las burguesías y élites políticas. En América Latina, el movimiento indígena tiene –por las comunidades y pueblos que representa– un papel estratégico en la construcción de la nueva nación.

Metodológicamente, observamos las características y reivindicaciones de las organizaciones indígenas y, en especial, las *Declaraciones de la Selva Lacandona* emitidas por el EZLN; los resolutivos del CNI y las iniciativas del zapatismo contenidas en la *Sexta Declaración de la Selva Lacandona* y en la denominada *Otra Campaña*. Estas iniciativas políticas del zapatismo reafirman una *ciudadanía étnica* y la voluntad de refundar –junto con las fuerzas democráticas– la nación mexicana convocando un debate nacional con la ciudadanía para conformar una fuerza política alternativa anticapitalista. Esta *Otra Campaña*, pensada desde la especificidad del movimiento maya zapatista, la trasciende sin negarla para abrir las perspectivas propias y de todos los mexicanos hacia esa nación *donde quepamos todos*. Los efectos

---

plurinacional peruana». Convocatoria ¡¡Por la unidad de nuestros Ayllus y Comunidades para la defensa de nuestros territorios, del medio ambiente, del agua y por la participación de nuestros pueblos en un proceso constituyente que instaure un Perú verdaderamente democrático!! Confederación de Nacionalidades Indígenas del Perú, 2006.

<sup>2</sup> Alicia Castellanos Guerrero: *Informe Nacional México, 2005* (www.latautonomy.org).

del proceso de globalización neoliberal<sup>3</sup> y la consecuente exclusión social, étnica, económica y política de las mayorías nacionales en los países capitalistas subdesarrollados, así como la pérdida creciente de soberanía de los Estados nacionales, las estrategias hegemónicas basadas en la guerra preventiva puestas en práctica por las grandes potencias mundiales, sus políticas económicas monopolizadoras, han sido condiciones favorables a la difusión de los nuevos nacionalismos, de diversos procesos nacionalitarios y de reconstrucción nacional.

El surgimiento de los nacionalismos de cualquier signo pone en evidencia que no son un fenómeno *anacrónico*, ni presenciamos «el fin de la era del nacionalismo». <sup>4</sup> Sus diversas manifestaciones marcan más bien la violencia y la exclusión con la que se produce la integración de los Estados nacionales en proceso de transnacionalización, y la intolerancia de fuerzas políticas racistas y de carácter imperialista.

Por estos motivos, es un imperativo superar el etnocentrismo en estudios sobre la nación y los nacionalismos, borrar su estigma fundamentalista asignado en forma indiscriminada y, en consecuencia, distinguir los nacionalismos democráticos y liberadores que luchan por derechos legítimos y reivindicaciones sentidas de los pueblos, de los nacionalismos de carácter racista que legitiman sus derechos de constituir un Estado contraponiéndose a los derechos de otros pueblos, su identidad cultural a la identidad de los migrantes de las excolonias y de naciones vecinas. El nacionalismo reproducido por la administración de George W. Bush, —que, en *defensa de la seguridad nacional* de los Estados Unidos, hace la guerra, destruye

<sup>3</sup> «Globalización significa que el Estado ya no tiene peso ni ganas para mantener su matrimonio sólido e inexpugnable con la nación. Se permiten y fomentan los coqueteos extraconyugales [...]. Una vez cedida la mayoría de las tareas que exigen capital y mano de obra intensivos a los mercados globales, los estados tienen mucha menos necesidad de suministro de fervor patriótico. Incluso se han concedido los sentimientos patrióticos, el bien más celosamente guardado de los modernos Estados nación, a las fuerzas del mercado para que los redistribuyan, engrosando así los beneficios de los promotores deportivos, del mundo del espectáculo, de los festejos de aniversarios y de los bienes industriales de interés. En el otro extremo, los poderes estatales (que ya solo poseen exiguos restos de una soberanía territorial que una vez fue [...] indivisible) ofrecen pocas expectativas de confianza, y mucho menos de garantía infalible, a los buscadores de identidad. Recordando la famosa tríada de derechos de Thomas Marshall: los derechos económicos ya no están en manos del Estado, los derechos políticos que los Estados pueden ofrecer se limitan estrictamente y están circunscritos a lo que Pierre Bourdieu bautizó como la *pensée unique* del meticulosamente desregulado estilo neoliberal de mercado libre, mientras que se han sustituido uno por uno los derechos sociales por la obligación individual del cuidado de uno mismo y el arte de aventajar a los demás». Zygmunt Bauman: *Identidad*, Losada, Madrid, 2005, pp. 65-67.

<sup>4</sup> E.J. Hobsbawm: *Nations and Nationalism since 1780*, Cambridge University Press, Nueva York, 1991, cap. 6.

entidades nacionales y culturas milenarias, interviene en los asuntos internos de otros Estados, vulnera sus soberanías y quebranta los derechos humanos de pueblos y naciones— tiene un carácter fundamentalista y racista.

Los movimientos *nacionalistas históricos* y *los contemporáneos* difieren en la composición social de las clases y los grupos que los protagonizan; también son distintas las condiciones históricas y estructurales en las que surgen, así como sus contenidos políticos, económicos y culturales. El nacionalismo democrático contemporáneo en México se origina en el marco de la crisis del modelo de Estado nación que se impusiera en el siglo XIX:

En el Tercer Mundo, el nacionalismo se convirtió en un arma poderosa en la lucha por la independencia, de manera que la mayoría de estos países ha adoptado el modelo occidental del Estado-nación. Por esta razón, solo si tomamos en cuenta las circunstancias históricas en que se desarrolló dicho modelo en el mundo occidental y las condiciones (muy diferentes) en que han surgido los estados modernos en los países colonizados, podremos comprender las tensiones a que se ha enfrentado el modelo de Estado-nación en Asia, África y algunas zonas de Latinoamérica. Esencialmente, la crisis del modelo Estado-nación encarna la contradicción entre el llamado «principio de nacionalidad», que constituye su base, y la multiplicidad de etnias y pueblos que en el territorio de su jurisdicción luchan por conseguir una posición, recursos, dignidad y poder.<sup>5</sup>

A partir de los múltiples contenidos que adopta el fenómeno nacional es fundamental continuar estudiando la crisis del modelo Estado nación, los nacionalismos que acontecen en la geografía mundial, y analizar los movimientos nacionalitarios y de «liberación nacional» que no aspiran, necesariamente, a la creación de un Estado. El *nacionalismo de refundación democrática* en el movimiento indígena mexicano es distinto al caso del nacionalismo en *Estados sin nación* reconocidos por Guibernau<sup>6</sup> en África, que aún no logran crear nación para legitimar el Estado, el cual descansa todavía en los territorialismos poliétnicos.

El proceso de formación nacional en México se inicia desde finales del siglo XVIII y puede sostenerse que, pese a que la nación no precede al Estado —en tanto como lo señala Von Mentz «la era del nacionalismo decimonónico en Francia o Alemania no fue la del nacionalismo en nuestro país»—,<sup>7</sup> hoy se expresan movimientos sociopolíticos con una conciencia nacional capaz de refundar la nación. Ciertamente,

<sup>5</sup> Rodolfo Stavengahen: *La cuestión étnica*, El Colegio de México, México, 2001, p. 58.

<sup>6</sup> Montserrat Guibernau: *Los nacionalismos*, Ariel, Barcelona, 1996.

<sup>7</sup> Brígida von Mentz: «Reflexiones sobre las bases sociales del Estado Nacional en el México del siglo XIX», *Identidades, estado nacional y globalidad*, México, siglos XIX y XX, CIESAS, México, 2000, p. 82.

hay un «gran desfase temporal» en el desarrollo y la conformación de la identidad y la conciencia nacional que suceden a «ritmos sumamente diversos», señala Horch;<sup>8</sup> además, los Estados nacionales se constituyen en condiciones históricas distintas: en América en contra de la dominación colonial y en Europa en contra de las monarquías, mientras que hoy en múltiples casos se desarrollan en contra de los Estados neoliberales transnacionalizados.

Este *nacionalismo democrático*<sup>9</sup> en la región latinoamericana no tiene semejanza con los nacionalismos de la Europa balcánica que precipitaron el desmembramiento de la Federación de Yugoslavia,<sup>10</sup> apoyados por las metrópolis que privilegian sus industrias de guerra; ni con los nacionalismos que se producen en la antigua Unión Soviética<sup>11</sup> y conducen a su desintegración; ni tampoco con los que actualmente tienen lugar en la Federación Rusa como el movimiento nacionalista de Chechenia<sup>12</sup> en la región del Cáucaso.

En todos estos casos, la aspiración ha sido la separación del Estado multinacional y la constitución de un Estado propio. El resurgimiento de nacionalismos en tiempos de globalización<sup>13</sup> se extiende en otros países de Europa del Este, y parece culminar con la separación de Checoslovaquia y la formación de los Estados independientes de Eslovaquia y la República Checa. Los movimientos sociopolíticos surgidos frente a la inmigración extranjera, articulados en los Frentes Nacionales en casi toda Europa Occidental,<sup>14</sup> integran fuerzas políticas de derecha organizadas en torno a la defensa de una nación homogénea con un discurso racista que reivindica el derecho a la diferencia desde una perspectiva esencialista, valorando las otras culturas incompatibles e inasimilables. Estos movimientos en algunos casos

<sup>8</sup> Citado en Brígida von Mentz: ob. cit.

<sup>9</sup> John Schwarzmantel: «Nacionalismo y democracia», *Revista Internacional de Filosofía y Política*, no. 3, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 1993.

<sup>10</sup> Denich Bogdan: *Nacionalismo y etnicidad. La trágica muerte de Yugoslavia*, Siglo XXI, México, 1995.

<sup>11</sup> James Hughes y Guendolyn Sasse: *Ethnicity and Territory in the Former Soviet Union. Regions in Conflict*, Frank Cass Publishers, Londres, 2002.

<sup>12</sup> Leo Gabriel y Gilberto López y Rivas (coords.): *Autonomías indígenas en América Latina. Nuevas formas de convivencia política*, Plaza y Valdés, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México, 2006.

<sup>13</sup> Véase los trabajos sobre «El nacionalismo en tiempos de globalización», *New Left Review*, no. 1, Ediciones Akal, Madrid, 2000.

<sup>14</sup> El National Front en Inglaterra, el Front National de Francia, Vlaams Block en Flandes y AGIR y el Front National en Walona, Bélgica, el Partido Republicano en Alemania y la Unión del Pueblo Alemán, y La Liga Lombarda en Italia. Véase Michel Wieviorka: *Racisme et Xénophobie en Europe*, la Découverte, París, 1994.

parecen debilitarse y son sustituidos por expresiones nacionalistas de las *nuevas derechas* en Europa, como es el caso del actual gobierno en Francia.

Los viejos nacionalismos de las llamadas *naciones sin Estado*: el País Vasco, la Irlanda del Norte y el Québec han buscado la separación de sus Estados nacionales y la independencia nacional. Luego de una histórica confrontación, el pueblo vasco y el irlandés del norte<sup>15</sup> no han podido salir de su condición de *naciones prohibidas*, como las denominara hace tiempo Sergio Salvi,<sup>16</sup> que sin renunciar a sus reivindicaciones y a su identidad prosiguen procesos complejos de negociación. Estas *naciones sin Estado* se distinguen de los pueblos indígenas en varios sentidos por sus reivindicaciones y por las características de las propias comunidades de origen, pertenencia y autoadscripción.

Desde una perspectiva latinoamericana, Barrientos Pardo<sup>17</sup> distingue y reconoce que las demandas nacionalistas y las indígenas tienen en común su relación conflictiva con el Estado. Pensamos que más allá de sus semejanzas y diferencias y de la posibilidad de usar una misma teoría de análisis, los movimientos indígenas se han *nacionalizado* de distintas maneras por medio de sus autonomías y de proyectos de refundación nacional y, excepcionalmente, de supuestas aspiraciones separatistas, como pudiera ser el caso del pueblo mapuche de Chile.

En el movimiento indígena mexicano no se transita de la identidad étnica a la identidad nacional; en este razonamiento subyace todavía una perspectiva evolucionista que significa abandonar la identidad étnica por la nacional, como si, inexorablemente, hubiese que pasar de la identificación local a la nacional y fuesen identidades incompatibles; también esta puede connotar a la identidad nacional como una suerte de *estadio superior* de las identidades. Tampoco se trata de un movimiento etno-nacionalista<sup>18</sup> ni de una identidad nacional indígena. El carácter multidimensional de la identidad es una condición de pertenencias y adscripciones a diversos agrupamientos que se articulan y no son por definición excluyentes. Es un proceso que no implica foraneidad del Otro en relación con el mestizo, ladino

<sup>15</sup> El caso de Irlanda del Norte podría ser considerado como una región irredenta de la república de Irlanda.

<sup>16</sup> Sergio Salvi: *Le nazioni proibite: guida a dieci colonie interne deli Europa Occidentale*, Firenze, Vallecchi editore, 1973.

<sup>17</sup> Ignacio David Barrientos Pardo: «¿Nacionalismo indígena? El tránsito de una identidad étnica a una identidad nacional», Encuentro de Latinoamericanistas Españoles, diciembre de 2006, Santander, España ([www.halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00104731/es/](http://www.halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00104731/es/)).

<sup>18</sup> Anthony D. Smith: *La identidad nacional*, Trama Editorial, Madrid, 1997; y Martijn A. Roessingh: *Ethnonationalism and Political Systems in Europe, A State of Tension*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1996.

y criollo en el caso de estudio,<sup>19</sup> más bien marca una tendencia a superar la distancia impuesta por el modelo de nación decimonónico y una sociedad racista; un reconocimiento pleno de que se forma parte de esa *comunidad imaginada*, con derechos como ciudadanos y derechos colectivos como pueblos que pertenecen, a su vez, a una gran diversidad de culturas. El movimiento indígena en el contexto latinoamericano y sus expresiones nacionalistas se estructuran a partir de una lógica de pertenencia, del reclamo de un lugar en la nación que les ha sido negado históricamente por los Estados.

En el caso mexicano, este tipo de nacionalismo de carácter popular y democrático se distingue por que busca la transformación del Estado nación en otro distinto que garantice *un lugar digno para todos en la sociedad mexicana*. Paradójicamente en las mentalidades de las élites, los pueblos indígenas que desde su constitución fueron objeto de políticas de asimilación y diferenciación promovidas por el Estado —los supuestamente *atrasados biológica y culturalmente, los obstáculos del progreso y desarrollo, los incivilizados, los marginados, los fuera de la nación*—, territorializados, desterritorializados<sup>20</sup> y en proceso de ser fuertemente desterritorializados se convierten en este milenio en actores estratégicos del proceso de reconstrucción nacional; por su relación material y simbólica con el territorio son los más involucrados en la defensa de los recursos naturales, la soberanía y el patrimonio nacional frente a un Estado transnacionalizado y neoliberal que sí «atenta contra la nación».

Las tipologías de los nacionalismos más estudiados y difundidos han ignorado en parte estos *procesos nacionalitarios* latinoamericanos. La clásica tipología de Kohn distingue el nacionalismo occidental racional y de asociación y el nacionalismo oriental de la Europa del Este, orgánico, místico y autoritario, un claro ejemplo del etnocentrismo científico. Anthony Smith admite que esta distinción tiene validez en tanto se reconoce que ambos tipos de nación y nacionalismo atraviesan tiempo y espacio.

Por otro lado, el cuestionamiento a pensar el nacionalismo occidental solo como una ideología de la burguesía (sin tomar en cuenta los componentes monárquicos y de la aristocracia, y de otros grupos socio-étnicos y de clase) permite recuperar de otros estudiosos la constatación histórica de la diversidad de clases y grupos nacionales que producen el nacionalismo y la nación. Para Smith la distinción entre el *nacionalismo territorial* y el *nacionalismo étnico* es un instrumento de análisis útil para encontrar lo general en la diversidad de los nacionalismos y el entendimiento de que este fenómeno no es estático y esencialista y, por tanto, se transforma.

<sup>19</sup> Alicia Castellanos Guerrero y Mariano Báez Landa: «Encuentro de miradas... encuentro de tareas», en Margarita Suzán (comp.), *El documental del siglo XXI, Voces contra el silencio*, Video Independiente, A.C. Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México, 2006.

<sup>20</sup> Gilberto Giménez: «Identidades étnicas: estado de la cuestión», en Leticia Reina (coord.), *Los retos de la etnicidad en los Estados nación del siglo XXI*, CIESAS, México, 2000.



El nacionalismo territorial en su primera fase tendrá un carácter anticolonial y una vez consolidado se convertirá en un nacionalismo de integración; mientras el nacionalismo étnico de secesión y diáspora se transformaría en un nacionalismo irredentista y en un pan-nacionalismo.<sup>21</sup>

Kaldor distingue formas del *nacionalismo contemporáneo*, el *nacionalismo espectáculo*, ideología oficial que «sirve para legitimar los Estados existentes» y requiere una participación pasiva del ciudadano, de los *nuevos nacionalismos* como el serbio en la ex Yugoslavia y el *nacionalismo* difundido por Bin Laden, que utilizan «los medios electrónicos y nuevas formas de violencia» como «importantes instrumentos en su construcción»,<sup>22</sup> también distintos de los denominados «*pequeños nacionalismos* de las minorías étnicas» «que sobreviven en Estados en donde la homogeneidad nacional fue incompleta», que son «no violentos, abiertos e inclusivos», como en los casos de Escocia y Cataluña. Según la autora, estos nacionalismos grandes y pequeños reivindican la homogeneidad cultural, pero la diferencia es que los pequeños «pueden también tratar de aumentar la democracia en los niveles locales». Sin duda, la distinción entre estos nacionalismos no es tanto su tamaño, como el objetivo de sus aspiraciones de establecer estados propios y el reconocimiento de mayores competencias de sus autonomías.

El origen de los nacionalismos es histórico. Siguiendo la línea de análisis de Gellner, el nacionalismo que surge en la Europa de los siglos XVIII y XIX es un fenómeno de la modernidad, estrechamente vinculado con el proceso de industrialización capitalista y sus requerimientos de homogeneizar culturalmente a la nueva *comunidad nacional*, y se distingue por su indisoluble relación con el capitalismo, lo que no significa una determinación mecánica y unilineal. Luego señala Gellner<sup>23</sup> que son el capitalismo industrial, las desigualdades originadas y la creciente división social del trabajo lo que dará origen al nacionalismo. Esto no niega que el nacionalismo como ideología pueda tener sus antecedentes en la Edad Media, como señalan Llobera<sup>24</sup> y Smith, en el siglo XVIII para el caso del nacionalismo criollo en la todavía Nueva España.

<sup>21</sup> Anthony D. Smith: *La identidad nacional*, ed. cit. (en nota 18).

<sup>22</sup> Mary Kaldor: «Nationalism and globalization», en Montserrat Guibernau y John Hutchinson, *History and National Destiny: Ethnosymbolism and its Critics*, Blackwell, United Kingdom, 2004, pp. 168-172.

<sup>23</sup> Citado en Natividad Gutiérrez Chong: *Mitos nacionalistas e identidades étnicas: los intelectuales indígenas y el Estado mexicano*, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, Plaza y Valdés, México, 2001.

<sup>24</sup> Joseph R. Llobera: *El dios de la modernidad. El desarrollo del nacionalismo en Europa occidental*, Anagrama, Barcelona, 1996. Véase también Sara Makowski: «Nacionalismo», en Laura Baca Olamendi y otros, *Léxico de la política*, Fondo de Cultura Económica, México, 2000.

Los nacionalismos contemporáneos y el capitalismo neoliberal guardan una estrecha relación, trátase de su modalidad *fundamentalista*, relacionada a un racismo diferencialista y de eliminación del Otro mediante la política de *limpieza étnica*, y/o de organizaciones políticas como los Frentes nacionales en Europa Occidental que producen discursos racistas y xenofóbicos. En parte se trata de reacciones a la crisis económica y de los Estados nacionales que ponen en evidencia la contemporaneidad del fenómeno del nacionalismo, pues parece extenderse en diversos confines del mundo, con muy distintos proyectos de nación fuera y dentro de los Estados constituidos. Asimismo, son respuestas de índole diversa frente a la desaparición del Estado *benefactor*, su creciente transnacionalización por las corporaciones capitalistas y su transformación en Estados fortalecidos en sus tareas policíacas y represivas.

Desde la perspectiva antropológica, Eriksen encuentra hallazgos similares entre los historiadores y antropólogos que se han ocupado del estudio de lo nacional, por ejemplo, la concepción de que los nacionalismos son construcciones que buscan un vínculo entre un grupo cultural y el Estado, creando una comunidad abstracta,<sup>25</sup> lectura por demás acrítica de muchas realidades. También señala que la distinción entre nación y etnia es importante por su relación con el Estado moderno, y encuentra congruencia entre las teorías del nacionalismo de Gellner y Anderson y la teoría antropológica de la etnicidad, en cuanto a considerar que las identidades étnicas y nacionales, y la cultura son construcciones, contribución fundamental para entender la dinámica de las identidades, cuando el análisis delimita el contexto histórico.

## Nacionalismo y pueblos indígenas

La especificidad del nacionalismo subyacente en el discurso y en las acciones del EZLN y la *Otra Campaña* reside en la búsqueda por reconstituir la nación mexicana a partir de una perspectiva democrática y anticapitalista, lo que hace incompatible la visión unívoca expresada por Eriksen acerca de que el nacionalismo es concebido como una variante de la etnicidad, «que estrecha solidaridad entre pobres y ricos, entre los desposeídos y los capitalistas».<sup>26</sup> El nacionalismo nunca fue solo un instrumento de dominación, como se concibió por una corriente dentro de la tradición marxista; en innumerables situaciones en la historia este orientó movimientos de liberación nacional y de carácter revolucionario, como es el caso del nacionalismo en el movimiento indígena.

<sup>25</sup> Thomas Hylland Eriksen: *Ethnicity and Nationalism, Anthropological Perspectives*, Pluto Press, Londres, 1993.

<sup>26</sup> *Ibíd.*, pp. 101-102.

En la década del ochenta del siglo pasado, los signos del proceso nacionalitario procedieron de las fuerzas de izquierda, de partidos y organizaciones políticas de la izquierda socialista con base en un discurso que precisa la necesidad de un nuevo proyecto de nación, recuperando la idea de *nación pueblo* que implicaba *el rescate de la nación* propugnado por Mariátegui. En este período se producirá una lucha interna entre una izquierda tradicional –heredera de actitudes etnocentristas y excluyentes que subestima el componente indígena de la nación mexicana– y una corriente que logró la creación de una Secretaría de Pueblos Indios en el Comité Ejecutivo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y que apoyaba la lucha de las organizaciones indígenas por el reconocimiento constitucional de sus derechos colectivos y de su autonomía. Hay una cierta línea de continuidad y de convergencias en estos debates teóricos y políticos y en las vertientes nacionalistas del movimiento indígena contemporáneo.

El EZLN y el movimiento indígena no declaran un nacionalismo étnico, sino étnico nacional en tanto trasciende su propia especificidad y se desplaza a la identificación de clase expresada en la *Otra Campaña*; no transita de la identidad étnica a la nacional sino las articula y refrenda su doble pertenencia, implica una nueva forma de integración a la nación; no encuentra una inherente exclusión entre sus identidades étnicas y las nacionales. Tampoco abandona la lucha de los pueblos indios, como se ha afirmado, sino que le da una dimensión nacional al proponer alianzas y crear espacios para construir con otras fuerzas políticas y sociales un proyecto para una nueva nación, esa nación multiétnica y pluricultural que se reconoció por primera vez en el artículo 4to. de la Constitución mexicana en 1990. Así, en el discurso zapatista se afirma su condición de «ciudadanos mexicanos indígenas», haciendo explícito el componente étnico nacional de sus identidades.

Mientras tanto, el movimiento indígena se va configurando a nivel nacional, latinoamericano y continental. Las organizaciones indígenas, los encuentros y sus resoluciones y declaraciones indican una clara tendencia a la conformación de identidades colectivas que aspiran a la unidad étnica, regional y nacional, como lo manifiesta su diversidad<sup>27</sup> y sus reivindicaciones: el fortalecimiento de la identidad, la lucha contra el racismo, la medicina alternativa, la defensa de los recursos

<sup>27</sup> Asamblea de Autoridades Mixes, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Organización de Pueblos Mixes, Unión de Pueblos de Morelos, Consejo Morelense 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular, Comunidades indígenas de Michoacán, Decreto de la Nación Purépecha, Consejo Guerreeses 500 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular, Comunidades y pueblos de la región otomí, II Encuentro de Pueblos Indios del Noroeste, Encuentro de los Pueblos Indios del Sur de Veracruz, Confederación Nacional de los Pueblos Indios (CNPI), El Frente Nacional de Pueblos Indios (FIPI), Consejo Mexicano 500 Años de Resistencia India y Popular, Primer Foro Internacional sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indios, Primer Encuentro Continental de la Pluralidad, Primer

naturales y el medio ambiente, el territorio, la organización política de pueblos y comunidades, la tierra, los derechos humanos, el desarrollo económico y social.

Sin embargo, algunos estudiosos piensan que el movimiento indígena mexicano no tiene una conciencia nacional por lo que no existe un *nacionalismo indígena*, y sus demandas no son nacionalistas. La autonomía se busca dentro del Estado, su sentimiento nacional es parte de una nacionalidad estatal a la que sienten pertenecen todos los «mexicanos». Por ello, la demanda es de reconstrucción y nueva definición del Estado nación.<sup>28</sup> El zapatismo y el CNI no carecen de una *conciencia nacional y demandas nacionalistas*. La distinción entre nación y etnia es importante por su relación con el Estado moderno.<sup>29</sup> Como ha sido señalado por diversos autores, la principal diferencia es el control del Estado<sup>30</sup> y la cohesión mediante el monopolio de los mecanismos de comunicación y de homogeneización para unificar códigos y prácticas. En consecuencia, las etnias fragmentadas por distintos procesos históricos no disponen, como señala Gutiérrez Chong, siguiendo a Gellner, de estos medios de cohesión, excepto por el «acceso a la *modernidad* propiciada por el propio Estado nación».<sup>31</sup> También sostengo que por su participación en las gestas fundacionales de la nación mexicana (la lucha por la independencia, contra las invasiones extranjeras y las dictaduras internas) los pueblos indígenas van contribuyendo a la construcción de «una comunidad histórico-nacional», una *nación pueblo*, como la ha denominado López y Rivas,<sup>32</sup> concepción que pasa por

---

Encuentro Internacional de Prensa India, Jornada Nacional por los Derechos Indígenas y Populares, Campaña Continental 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular, Consejo Indio Permanente de México (Declaración Universal de las Primeras Naciones), Encuentro Continental de Pueblos Indios, Declaración de Amerindia, Consejo de Organizaciones Indias de México, Centroamérica y Panamá (COI), Frente Indígena Binacional (FIOP) (Iniciativa para formar un Consejo Nacional de Médicos Tradicionales Indígenas), Declaración de las organizaciones indígenas y campesinas sobre los recursos naturales de México, Consejo Restaurador de los Pueblos Indios. Sergio Sarmiento Silva (coord.): *Voces indias y V centenario*, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 1998.

<sup>28</sup> Vicente Marc Navarro: *¿Es el movimiento indígena mexicano un nacionalismo? Desarrollo humano e institucional en América Latina*, Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya, Barcelona (s.f.).

<sup>29</sup> Thomas Hylland Eriksen: ob. cit. (en nota 25).

<sup>30</sup> José Luis Najenson: «Etnia, clase y nación en América Latina», *Antropología Americana, La cuestión étnico-nacional*, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, México, 1984.

<sup>31</sup> Natividad Gutiérrez Chong: «El resurgimiento de la etnicidad y la condición multicultural en el Estado-nación de la era global», en Leticia Reina (coord.), *Los retos de la etnicidad en los estados-nación del siglo XXI*, Centro de Investigaciones Superiores de Antropología Social, México, 2000.

<sup>32</sup> Gilberto López y Rivas: «La cuestión nacional y el concepto de nación», en Alicia Castellanos Guerrero y Gilberto López y Rivas, *El debate de la nación*, Claves Latinoamericanas, México, 1992.

distinguir entre el nacionalismo de Estado y el *nacionalismo popular*. El *acceso* de las etnias a la modernidad no es solo una política del Estado nación, está igualmente vinculado a la histórica resistencia política y cultural y a su resignificación. Tampoco las etnias y el movimiento indígena nacional en México son homogéneos y desde ciertas teorías de la nación y del nacionalismo no cumplen todas las condiciones objetivas y subjetivas para convertirse en una nación.

La evolución del movimiento indígena en México indica que, además de una mayor «visibilidad de la etnicidad» y «conciencia civil», ha desarrollado una conciencia nacional y creciente capacidad para crear mayor cohesión entre las organizaciones y comunidades indígenas y con la sociedad civil. La perspectiva de que los pueblos indígenas como *recurso estratégico* pueden «imitar» los nacionalismos minoritarios y sus atribuciones autonómicas, pierde de vista la especificidad y el contexto en el que surgen las demandas autonómicas de los pueblos indígenas en América Latina.<sup>33</sup>

## Refundación de la nación mexicana y símbolos de identidad

Desde la *Primera Declaración de la Selva Lacandona*, los mayas zapatistas de Chiapas exhiben el carácter étnico y nacional de su lucha en la simbología que los identifica, anunciando en discursos y prácticas *nuevas relaciones, nueva cultura y nueva forma de hacer política, un mexicano nuevo, un nuevo México y una Convención Nacional*. Luego se asienta que la «solución a la cuestión indígena solo será posible si hay transformación radical del Pacto nacional» a partir de un movimiento de «liberación nacional». En la Declaración que precede al Diálogo de San Andrés se hace más explícita la lucha por la autonomía de los pueblos indígenas y por la reconstrucción de la nación mexicana. La *Quinta Declaración* reivindica una «ley nacional para todos los indígenas», «la unidad de los pueblos» reconoce a los «indígenas actores nacionales» y considera «que es la hora» de los pueblos indios, del Congreso de la Unión y de la Comisión de Concordia y Pacificación. La *Sexta Declaración de la Selva Lacandona* marca un punto de inflexión al plantear bajo esquemas anticapitalistas la conformación de un nuevo tipo de nación. Lo mismo ocurre con el CNI<sup>34</sup> en su Declaración del IV Congreso de mayo del 2006. También la Sexta Declaración constituye una ruptura con la izquierda institucionalizada que convalidó la contrarreforma constitucional en materia de derechos indígenas.

¿Qué representatividad tienen estos documentos en el amplio espectro de organizaciones y etnias? ¿Quiénes son los intelectuales de este pensamiento? Entre

<sup>33</sup> Ignacio David Barrientos Pardo: «¿Nacionalismo indígena?», ed. cit. (en nota 7).

<sup>34</sup> La palabra de la resistencia indígena. Pronunciamiento y Declaraciones del Congreso Nacional Indígena (2001-2005), *Cuadernos de la resistencia 2*, Jalisco, México, abril de 2006. *La Declaración del Cuarto Congreso Nacional Indígena*, Estado de México, mayo de 2006.

los especialistas de los nacionalismos, Anthony Smith destaca su función «en la creación del nacionalismo cultural como en la elaboración de la ideología, cuando no el liderazgo en los primeros tiempos del nacionalismo político».<sup>35</sup> Los intelectuales indígenas y no indígenas que participan en la construcción de este discurso nacionalitario tienen muchos nombres. El intelectual, según la concepción de Bobbio, es un *hombre de ideas, transmisor y difusor de estas, independiente pero no indiferente, crítico y comprometido, «que utiliza la persuasión a través de ideas, más que un defensor de las verdades constituidas, imparcial pero no neutral, promotor del disenso y del consenso»*.<sup>36</sup> Los intelectuales indígenas son un grupo heterogéneo social y políticamente, cultural e identitario, en consecuencia, los zapatistas y participantes en el Congreso Nacional Indígena tienen un compromiso político distinto a algunos de los académicos que con fines individuales instrumentan su identidad como recurso ideológico.<sup>37</sup>

La representatividad del pensamiento y voz de líderes y comunidades indígenas en las *Declaraciones de la Selva* y en el CNI es reconocida y deriva de la ética política que refrendan en la práctica. Desde su posición, el zapatismo se afirma como multiétnico y plurilingüe al recrear, traducir e interpretar las culturas indígenas. El discurso zapatista surge de la propia lucha y experiencia de los sujetos que viven la exclusión, quienes mejor conocen las consecuencias de la asimilación forzada y del neoliberalismo y pueden proponer, por consiguiente, un modelo de nación que lo trascienda y resuelva sus principales contradicciones. Considerar que es el subcomandante insurgente Marcos, vocero del movimiento, quien escribe y habla por los indígenas sin participación de los pueblos y las comunidades, significa colocarse en la vieja posición racista que subestima e ignora el histórico y cíclico protagonismo indígena, sus formas y sujetos de interlocución. La diversidad de intelectuales que intervienen en la producción de este discurso nacionalitario es una evidencia de esa perspectiva pluricultural que arraiga en el movimiento indígena y en la sociedad civil.

Refundar la nación mexicana bajo el principio de la igualdad en la diferencia es uno de los rasgos fundamentales de este pensamiento. Las teorías del nacionalismo coinciden en que esta ideología establece un vínculo entre un grupo cultural y el Estado, creando una comunidad abstracta,<sup>38</sup> en este caso se trata de la relación de una comunidad diversa de grupos étnicos y culturales, sociales y políti-

<sup>35</sup> Anthony D. Smith: *La identidad nacional*, ed. cit. (en nota 18), p. 85.

<sup>36</sup> Laura Baca Olamendi y otros (coord.): *Léxico de la política*, Fondo de Cultura Económica, México, 2000, pp. 360-363.

<sup>37</sup> Natividad Gutiérrez Chong: *Mitos nacionalistas e identidades étnicas: los intelectuales indígenas y el Estado mexicano*, ed. cit. (en nota 23).

<sup>38</sup> Thomas Hylland Eriksen: ob. cit. (en nota 25).



cos. Parafraseando a Alfonso Pérez Agote<sup>39</sup> el «nacionalismo periférico» del Estado nacional mexicano es un movimiento que politiza identidades étnicas y de clase en función del fracaso del modelo de nación cívica y del económico. Este discurso recupera la nación mexicana en su diversidad étnica y cultural y hace una lectura distinta de la historia nacional, una historia nacional con indígenas y afrodescendientes, figuras emblemáticas que demuestran el carácter popular de las luchas de independencia nacional y de la Revolución Mexicana de 1910, y reitera su naturaleza inclusiva y democrática a condición de que los pueblos indígenas sean reconocidos en sus especificidades culturales: la «esencia» de la lucha del EZLN es étnica y nacional. «La nación donde quepamos todos». «La nación, lugar para todos». «Lugar digno para todos en la nación». «Sociedad incluyente». «Respeto a la diferencia». «Que ponga fin al racismo». «Que se reconozca como sociedad plural». Que articule «la unidad y las diferencias», la «identidad indígena y no indígena, o sea la diversidad». La figura de la Patria se indianiza, cuando en el discurso se reconoce que una «Patria sin corazón indio» no es una Patria, esta ha de ser una «Patria con corazón indio». Sin pueblos indios no hay futuro como nación. México, la gran nación, nuestra nación, nuestra patria mexicana. Raíz de la nación mexicana. No habrá transición a la democracia sin los pueblos indios.<sup>40</sup>

Esta *esencia* no tiene relación con una naturalización de la identidad, reconoce sus pertenencias y su autoadscripción a comunidades de las que fueron despojados desde que el discurso y las políticas de la igualdad se vuelven hegemónicos. La nación ha de ser un lugar que respete derechos sin exclusión, y una *patria* o *matria* no lo será si los *indios* no están incluidos como colectividades y ciudadanos. La metáfora de la «patria sin corazón indio» no es patria, designa el «componente patrio patriótico [que] implica un componente fraternal [entre hijos de la misma patria] y un sentimiento muy intenso de la patria hogar [...]»,<sup>41</sup> la constatación de que estos hermanos indios constituyen el centro vital<sup>42</sup> de la Patria, actúa como símbolo que se encadena con la idea de que la nación sin indios no tiene futuro.

El zapatismo es el exponente de un proceso nacionalitario que se constituye desde los más excluidos. La identidad zapatista es, a su vez, indígena y nacional, su autodenominación como *Ejército Zapatista de Liberación Nacional* anunciaba su «esencia» nacional y el símbolo de la lucha por los derechos de los pueblos campesinos

<sup>39</sup> Alfonso Pérez Agote: «16 tesis sobre la arbitrariedad del colectivo nacional», *Revista de Occidente*, no. 161, Madrid, 1994, p. 32.

<sup>40</sup> *Declaraciones de la Selva Lacandona*: I, II, III, IV, V y VI, 1993-2006, en Cartas y Comunicados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ([www.palabra.fzln.org.mx](http://www.palabra.fzln.org.mx)).

<sup>41</sup> Citado en Gilberto Giménez: «Apuntes para una teoría de la identidad nacional», *Revista Sociológica, Identidad Nacional y Nacionalismos*, Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, no. 21, México, 1993.

<sup>42</sup> Jean Chevalier y otros: *Dictionnaire des symboles*, Robert Laffont/Júpiter, París, 1982, pp. 263-266.

indígenas y no indígenas. El *nacionalismo contra el Estado* que identifica Eriksen requiere ser caracterizado a partir de diversas realidades. Las minorías étnicas y nacionales no siempre «inventan su propia nación», los mayas zapatistas y las organizaciones en el CNI piensan en la refundación de la nación, lo que significa vindicar y seleccionar símbolos que perciben han sido «ultrajados» por las clases dominantes y el Estado.

Desde finales del siglo pasado, en el contexto de una nueva correlación de fuerzas étnicas y nacionales, la lucha por las clasificaciones y entre las identidades étnicas y dominantes es particularmente intensa. Imágenes y representaciones etnocentristas y racistas resurgen y las comunidades y los pueblos indígenas y sus organizaciones en resistencia y lucha disputan la hegemonía reivindicando sus nombres propios, valorizando su color, lenguas y culturas. Las comunidades de pertenencia (en las que la interacción suele ser cotidiana) y de referencia (regionales y nacionales en las cuales sus miembros no establecen interacciones por tratarse de grandes colectivos) que son imaginadas como «única forma de identificación con grandes colectividades»,<sup>43</sup> alcanzan dimensiones distintas mediante nuevas formas de relaciones entre *pueblos, nación y Estado*. El zapatismo maya y el CNI exhiben la dinámica de los procesos identitarios, profundizan su autoadscripción étnica, multiétnica y nacional por medio del uso de sus nombres originarios y de los otros y de la identidad regional y nacional en los espacios en los que convergen representantes de diversos grupos étnico-lingüísticos y no indígenas. El zapatismo surgido del EZLN es una identidad política adoptada por indígenas y no indígenas con un proyecto de refundación de la nación.

Este proceso identitario implica un nivel de articulación de identidades colectivas de diversa naturaleza que lejos de contraponerse –según todavía reza en el discurso dominante–, se teje en un complejo sistema de adscripciones y de identificaciones que parece fortalecerse mutuamente. Este carácter multidimensional de la identidad está atravesado por conflictos entre comunidades indígenas, actitudes etnocentristas y excluyentes de intelectuales, rupturas de organizaciones, incluso autonomías con diversos objetivos políticos, así como por los propios procesos migratorios que transnacionalizan personas y colectividades. No obstante, la etnicidad como poderoso principio de integración y su engranaje con la pertenencia a colectividades más universalistas, dimensionan las perspectivas de cambio y transformaciones de relaciones interétnicas, de estrategias políticas y de organizaciones de carácter multiétnico, pluricultural y de clase que pueden originar mayores grados de unidad étnica y nacional.

---

<sup>43</sup> Gilberto Giménez: «Apuntes para una teoría de la identidad nacional», *Revista Sociológica* no. 21, UAM-Azcapotzalco, México, 1993.

Según los modos de adhesión a la nación, identificados en la literatura,<sup>44</sup> estos pueden tener un carácter *instrumental y sentimental*, pero sobre todo *político y de integración*. Los pueblos indígenas forjan con su participación la nación en la que quieren gozar de plenos derechos. No prevalece en estas aspiraciones la «ilusión de la homogeneidad», como señala Eriksen, ni la del mestizaje –ideología del viejo nacionalismo revolucionario mexicano, disolvente de la diferencia étnica–, sino la «ilusión» del reconocimiento de la heterogeneidad de la nación, con derechos específicos para el conjunto de identidades culturales. La *matriz cultural* de estas representaciones nacionalistas es la diversidad con énfasis en las culturas indígenas, y la semejanza que otorgan las categorías política y socioeconómica: la de mexicanos pobres y excluidos.

Las identidades nacionales pueden encontrar raíces y tradiciones en tiempos pasados, inventar y/o reinventar su origen y tradición para dar sentido y legitimar sus aspiraciones nacionalistas, crear un parentesco cívico o genealógico, símbolos, héroes y mitos de fundación que identifiquen la comunidad nacional.<sup>45</sup> Las banderas y los himnos son tanto nacionales como étnico-populares, recuperación maya zapatista de un símbolo nacional es el general Emiliano Zapata. El recorrido por el territorio nacional de *La Marcha del Color de la Tierra* refrenda su adhesión a esa *comunidad imaginada* de la que son originarios, junto con sus tierras y sus territorios. Este proceso de rescate de lo nacional comprende desde los símbolos hasta la defensa de la soberanía de la nación. El nombramiento de comunidades en lucha como *Aguascalientes*,<sup>46</sup> –que remite a la convención de las fuerzas populares de la Revolución Mexicana– que batallan por que se reconozcan las tierras comunales y ejidales, la mención a los *Sentimientos de la nación* de José María Morelos y Pavón,<sup>47</sup> héroe de la independencia nacional, son restauraciones de lo nacional popular. En sentido inverso, se produce una etnicización de la sociedad en la cual amplios sectores de la población asumen su proximidad social y cultural con los pueblos indígenas y se solidarizan con ellos, que *somos todos*.

En este proceso nacionalitario, el parentesco, componente de la identificación nacional, es multiétnico y pluricultural, la hermandad de una nación que reconoce la diversidad de sus miembros. El uso frecuente del término «hermanos» marca el vínculo de una comunidad étnica, regional y nacional. «Los otros mexicanos» son «campesinos», «colonos», «obreros», y son también los «indígenas mexicanos», los «otros hermanos indígenas».

---

<sup>44</sup> *Ibíd.*

<sup>45</sup> *Ibíd.* Véase también Anthony D. Smith: *Myths and Memories of the Nation*, Oxford University Press, Gran Bretaña, 1999.

<sup>46</sup> El nombramiento de comunidades en lucha como *Aguascalientes*, en referencia a la Convención Revolucionaria que se reunió en esa ciudad en 1916.

<sup>47</sup> Este documento expresa las ideas del humanismo igualitario de Morelos.

Es un lenguaje que afirma el parentesco en un sentido étnico y nacional. El discurso de los zapatistas instituye mitos de fundación y héroes nacionales, hace una lectura de la historia nacional que emancipa el carácter popular de las luchas por la forja de la nación. Siguiendo a Gellner y Anderson, la nación y el nacionalismo son un fenómeno moderno que glorifica y recodifica la tradición de los ancestros, de los miembros de la nación, proceso que realizan los mayas zapatistas de Chiapas cuando hacen remembranza de sus ancestros originarios de estas tierras que en su voz tiene profundidad y legitimidad.

Los intelectuales y líderes indígenas están redimiendo los héroes míticos que lucharon en contra de los conquistadores españoles e investigan la historia local y regional en los proyectos de educación intercultural, alternativa que han puesto en práctica sus organizaciones. En el zapatismo maya es significativo que su identidad sea simbolizada por uno de los héroes nacionales de incuestionable legitimidad entre los mexicanos, que es el general Emiliano Zapata, quien dirige la lucha campesina por la tierra de indígenas y no indígenas durante la Revolución Mexicana de 1910-1917; la referencia al general Francisco Villa igualmente establece vínculos con los héroes nacionales que imprimen el carácter popular de las luchas nacionales. No se nombra como héroe nacional al único presidente indígena zapoteco de México, Benito Juárez, uno de los símbolos de fundación de la nación mexicana, homogénea y de iguales políticamente, autor de la desamortización de los bienes comunales y eclesiásticos y del principio del respeto al derecho ajeno es la paz.

La postura de Von Mentz<sup>48</sup> de abordar el nacionalismo desde la mirada no de las élites sino de los testimonios de los grupos sociales subalternos, resulta valiosa para el análisis de la identidad nacional. En este caso, no se trata del nacionalismo de la burguesía y las élites y/o de Estado que, «estrecha solidaridad entre los pobres y los ricos, entre los desposeídos o sin propiedad y los capitalistas». El discurso de los zapatistas y de la *Otra Campaña* es popular y anticapitalista, no cabe en esa caracterización del nacionalismo, profundiza la solidaridad entre los pobres y excluidos indígenas y no indígenas.

El grado en que se percibe la pertenencia a la nación a partir de estos discursos de los zapatistas es el de una lealtad que trasciende lo ritual, la forma más generalizada en que muchos mexicanos exaltan su pertenencia y adscripción a esta comunidad nacional, sentimiento patriótico fuertemente reavivado en los eventos deportivos; se trata de un compromiso militante representado en su propia lucha por desarrollar sus autonomías y un programa nacional en la *Otra Campaña* que lleve a una *nueva Constitución*, esto es, a un nuevo pacto social y nacional.

---

<sup>48</sup> Brígida von Mentz: ob. cit. (en nota 7), p. 35.

No hay mitos de fundación diferentes, porque no se pretende constituir un Estado propio; sí se hace una distinción de héroes, mitos y símbolos con sentido de clase y étnico. Este tipo de discurso no es secesionista ni fundamentalista, resignifica ideales de los nacionalismos cívicos clásicos (igualdad, ciudadanía para todos) y de los nacionalismos étnicos (diferencia cultural) para incluir las diversidades étnicas y culturales y las clases desposeídas y excluidas. Este *nacionalismo multiétnico y popular* se caracteriza por que no inventa nación, rechaza la exclusión y la marginalidad, es clasista, reclama una nación también para los sin voz, los pobres, crear una comunidad nacional bajo los principios de la equidad y la diversidad.

Las identidades y símbolos que el zapatismo maya y el Consejo Nacional Indígena han venido ostentando en discursos, documentos, formas de lucha, encuentros regionales y nacionales de los procesos identitarios, expresan su carácter multidimensional. Es posible que este sea una tendencia predominante del movimiento indígena nacional, lo cual abre perspectivas de cambio y transformaciones de relaciones interétnicas, así como de estrategias políticas y de organizaciones amplias de carácter multiétnico y pluricultural que pueden originar mayores grados de unidad.

El discurso zapatista propone ir construyendo el proyecto de nación desde abajo. Los no nación, los antes fuera de la nación, son hoy una fuerza moral y política que convocan a la edificación de una nueva nación. La lectura de la iniciativa más reciente del EZLN, la *Otra Campaña*, es reveladora de este proceso de reafirmación y reconstrucción nacional, en tanto está sosteniendo un debate con la ciudadanía que puede fortalecer la constitución de una fuerza política alternativa o bloque histórico. Esta *Otra Campaña*, desde la especificidad del movimiento indígena, busca una convergencia con organizaciones sociales, sindicales y políticas, se pronuncia por la defensa de los bienes de la nación. Este proyecto de nación no es una construcción esta vez de las élites, tiene un carácter popular, procede de los pueblos indígenas y de los de abajo, de los sectores democráticos de la sociedad mexicana y de sus múltiples vínculos con el territorio y la comunidad nacional.

El carácter multidimensional de la identidad se reconoce por medio de las identidades local, regional, nacional, latinoamericana y mundial, fincadas en relaciones de respeto y equidad en los ámbitos nacionales e internacionales. En esta proyección del futuro, los procesos nacionalitarios de hegemonía popular ponen de manifiesto principios y experiencias que seguramente serán importantes: la solidaridad de todas las luchas, pese a la diversidad de situaciones nacionales; los encuentros intercontinentales y mundiales de la sociedad civil y los movimientos sociales, ante los límites y la crisis de los sistemas de representación tradicionales; un nuevo concepto de democracia participativa fundada en el principio de servicio a la comunidad, la revocación del mandato, la rotación y aprendizaje de los cargos, el gobierno como servicio; una nueva representación de lo nacional, diversa,

no folklorizada, que no oculta sus contradicciones ni mediatiza los conflictos; una historia nacional a partir del papel de los sectores populares, lo regional y los héroes étnicos. Como señala Horch, «La nación moderna no llegó a formarse mediante el *constructo* de la identidad nacional, sino a través de la interacción de diversas circunstancias y compromisos en la esfera social y cultural: solo estos últimos hicieron posible el cambio de identidad; o también la decisión a favor o en contra de la identidad nacional».<sup>49</sup> Esta identidad se funda en la elección de un amplio repertorio de héroes, símbolos y mitos de los procesos nacionalitarios decimonónicos y del siglo XX. Es una experiencia del proceso de nacionalización de las minorías étnicas y su potencial para la reconstrucción nacional y la defensa de la nación de una sociedad multiétnica, pluricultural y democrático-participativa.

ALICIA CASTELLANOS GUERRERO es doctora en Antropología y profesora investigadora del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, de México.

---

<sup>49</sup> Miroslav Hroch: «La construcción de la identidad nacional: del grupo étnico a la nación moderna», *Revista de Occidente*, no. 161, Madrid, 1994, p. 60.



# lecturas para la reflexión



Una colección que presenta en folletos algunos textos claves del pensamiento de Ernesto Che Guevara. Los escritos y discursos escogidos para esta colección, organizados cronológicamente, reflejan el conjunto de sus principales presupuestos y abarcan temas de un valor inestimable para adentrarse en el sistema general de su legado.

## ESCRITOS:

Notas para el estudio de la ideología de la Revolución cubana

El partido de la clase obrera

Sobre el sistema presupuestario de financiamiento

La planificación socialista, su significado

El socialismo y el hombre en Cuba

Crear dos, tres, muchos Viet Nam (Mensaje a la Tricontinental)

## DISCURSOS:

Soberanía política e independencia económica

Discurso a los estudiantes de medicina y trabajadores de la salud

Una nueva cultura de trabajo

La filosofía del saqueo debe cesar

En las Naciones Unidas

En la conferencia Afroasiática en Argelia





## Democracia directa y poder dual. Caminos para reconstruir el metabolismo entre naturaleza y sociedad

FERMÍN GONZÁLEZ

Las posibilidades de gobernar municipios, departamentos (provincias o estados) y países en el marco del sistema capitalista, ha generado un fuerte movimiento teórico y práctico en la perspectiva de recuperar los espacios de la democracia participativa directa. La búsqueda de alternativas ha recorrido caminos que van desde la complementación de la democracia representativa, hasta los intentos de profundizar y superar la democracia liberal burguesa, incluida la construcción de ciudadanía colectiva con una mirada de derechos humanos.

Este ejercicio, en el cual hemos participado junto a comunidades ávidas de influir en las políticas públicas que determinan su grado de acceso a los derechos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales, ha encontrado los límites impuestos por un estado capitalista cada vez más flexible a la hora de cooptar discursos e ideas que no lo afecten en lo estructural. En las más profundas experiencias de democracia participativa directa, el paso a la acción consciente, organizada y revolucionaria, ha quedado condicionado por los necesarios, pero insuficientes, momentos de formación política, que en dependencia de sus contenidos, logran construir en algunos de sus líderes, miradas ideológicas alternativas al sistema. Para los sectores populares que se integran a estos procesos, la democracia directa es una oportunidad para resolver algunas de sus necesidades inmediatas, para organizarse y generar un poder capaz de presionar al Estado, pero difícilmente dan el salto hacia una propuesta anticapitalista que proponga cambios estructurales. La formación que se les brinda es, por lo general, técnica, procedimental, y sus contenidos políticos no logran pasar de la defensa de los derechos humanos. Y en tanto esa formación política se realiza en el marco de la democracia que puede permitir la sociedad capitalista, los resultados en construcción de conciencia de clase son muy reducidos, ya que enfrentan una dura competencia de entidades como el Banco Mundial, la Comunidad Europea y el propio



Plan Colombia, que incluyen experiencias de participación y control social como ejes de sus luchas antiinsurgentes, contra la corrupción y por el «fortalecimiento del Estado»... capitalista.

No dudamos que es mejor para los sectores populares vivir en regímenes democráticos con altos grados de posibilidades participativas, que hacerlo en medio de dictaduras y democracias representativas que hacen de la delegación el camino ideal para mantener el poder. La duda es hasta qué punto, con las experiencias de democracia participativa, estamos democratizando la sociedad en una perspectiva antisistémica, o hasta dónde estamos relegitimando, reciclando el Estado capitalista, para que mantenga su dominación por otros mecanismos.

En el debate todavía insuficiente alrededor del tema –un caso muy estudiado y pionero ha sido el de Porto Alegre, Brasil– agrupa dos grandes vertientes: los que definen la propuesta como una búsqueda de formación de ciudadanos conscientes de sus derechos, y los que la critican por ser funcional al sistema capitalista; los que apuestan a potenciar la intersubjetividad y la acción dialógica, y los que se atrincheran en la conciencia y lucha de clases. A su lado, flotan como especímenes raros los ambientalistas y ecologistas radicales, que alertan sobre la mortalidad del planeta y llaman a organizarse y luchar para impedir las consecuencias que sobre la naturaleza tiene esta sociedad dominada por el mercado. Con la conciencia de cierta necesaria herejía frente a los paradigmas mencionados, y con la preocupación de no confundir dialéctica materialista con simple eclecticismo voluntarista, presentamos los ejes de una reflexión que no se casa con ninguna de las dos anteriores, pero que toma de cada una de ellas sus verdades, y que se sintetiza en el ambicioso título de este ensayo.

## La centralidad sistémica

El trabajo, como analizó Marx y recupera John Bellamy Foster,<sup>1</sup> es el metabolismo que en la sociedad capitalista actúa como relación articuladora entre naturaleza y sociedad. En manos del capitalismo neoliberal, la explotación de la fuerza de trabajo lleva a extremos de desalarización y marginalidad social desconocidos, así como a saqueos que degradan sin límites la naturaleza. Vivimos los más altos niveles de dominación y enajenación por parte del capital. Esta lógica inhumana e irracional, consecuente con la esencia del capitalismo, se agudiza con la concentración de la propiedad del capital, de sus empresas, del suelo y el agua, y con la hegemonía, posiblemente transitoria, del capital financiero sobre el capital productivo. Se genera, así, un aumento de las contradicciones intercapitalistas y con el mundo del trabajo,

---

<sup>1</sup> En *La ecología de Marx. Materialismo y naturaleza*, Ediciones Gistas-Viento Sur-Viejo Topo, España, 2004.

junto a la degradación de la naturaleza, todo ello acompañado por la pérdida de legitimidad del sistema político de dominación basado en la democracia representativa liberal.

El desarrollo sin límites del sistema capitalista, con su capacidad de extender el mercado a todos los rincones del planeta, ha llevado a convertir en valores de cambio, mercancías, a los originarios valores de uso –materiales, culturales y humanos– generados en la relación sociedad-naturaleza. La contradicción entre estas dos categorías del valor llega a extremos de desigualdades sociales y rupturas con la naturaleza, que ponen en peligro la continuidad del género humano. Al arsenal atómico intacto y actualizado, se suma el arsenal del efecto invernadero y otras armas surgidas del modelo productivo que contaminan y destruyen la naturaleza y ponen en peligro a toda la especie humana.

El análisis desde la perspectiva marxista de esta realidad que enajena a la sociedad de la naturaleza, es bastante escaso. Poco se responsabiliza al modo de producción capitalista por el calentamiento global del planeta y sus desastrosas consecuencias ecológicas. La tarea de encontrar las causas de esa crisis ambiental parece quedarle al ecologismo radical, cuando no al ambientalismo ajeno a lecturas materialistas e históricas, o peor aún, a campañas de reencauche político como la que realiza Al Gore, claramente al servicio de la privatización de la gestión de la naturaleza.

Frente al creciente agotamiento y transformación perversa de las riquezas naturales y el consecuente desequilibrio termodinámico y societal del mundo, América Latina pasa a desempeñar un papel central en la sostenibilidad de la economía capitalista, y, en particular, de la economía de los Estados Unidos. Es su fuente cercana y relativamente controlada, de energía, minerales, alimentos, biodiversidad y agua. Que el discurso oficial en boca de Bush haya centrado su estrategia futura en el desarrollo de los biocombustibles, no es, como lo presentan, una simple búsqueda de superar su dependencia del gas y el petróleo extraído en regiones poco controlables. Si bien ese interés existe, ya que pretenden reducir el consumo de gasolina en un 20% para 2017, lo que realmente está indicando este giro energético, es que las grandes transnacionales petroleras, que buscaban mantener su poder dominante mediante el monopolio del mercado del agua, han decidido concentrarse en el control y desarrollo del mercado de biocombustibles, directamente dependiente de la propiedad de la tierra y del control del agua. Esta estrategia tiene la ventaja de presentarse como productora de «energías limpias y renovables», vinculadas a la suplantación de los no renovables hidrocarburos; y es acompañada de engañosas argumentaciones sobre sus supuestas condiciones alternativas para impedir el grave impacto ambiental producido por la combustión de petróleo, gas, carbón y sus derivados.

En realidad lo que anuncian es que la disputa por los recursos energéticos que marcan la relación actual con Europa, Japón y China, va a crecer y a trasladarse hacia

el control de las fuentes de agua, de las tierras, de los corredores biológicos y de transporte, que permitirá una posición dominante en un nuevo mercado de grandes márgenes de rentabilidad, con la aureola de la supuesta legitimidad ambiental, y, sobre todo, con muchas posibilidades de mantenerlo bajo el control monopólico por medio del control territorial. No se habla de cuán renovable será el manejo de las tierras y del agua de estos monocultivos. Se oculta la contaminación ambiental que generan estos procesos productivos agroindustriales, que puede equilibrar y hasta superar los beneficios ambientales de quemar biocombustibles.

Lo más preocupante es que los gobiernos de Brasil, Colombia y el propio Ecuador, con las dudas de Venezuela, salen a apoyar la iniciativa. Aparecen dispuestos a aumentar la degradación de sus suelos con palma aceitera y soya para producir biodiesel, al mismo tiempo que se aumenta la producción de etanol a partir de caña de azúcar, yuca y remolacha. A esto se suma el etanol extraído del maíz, de menor eficiencia que el de azúcar, que ya produce masivamente los Estados Unidos, y que tiene disparados los precios de un grano esencial en la dietas de los países de América Latina: caso de las tortillas mexicanas y las arepas en toda el área andina.

Desde su larga convalecencia, se alza la voz, hasta ahora casi solitaria, de Fidel, denunciando que todo esto implica cambiar alimentos por combustibles, en un continente donde más del 40% de sus habitantes toman una comida diaria y otro tanto se le suma con una alimentación desbalanceada.

El resultado será un mayor deterioro del equilibrio ecológico de la naturaleza, acompañado por la concentración de la propiedad de la tierra y del control sobre las fuentes de agua, lo cual lleva a un nuevo salto de la migración rural hacia las ciudades y del crecimiento de la consecuente exclusión económica y social. Es decir, aumentan las distancias entre campo y ciudad, comenzando por el intercambio productivo desigual, con grandes propiedades rurales dedicadas a la agroindustria y crecientes ciudades dedicadas a los servicios, con su población desempleada o en el comercio informal, pero también con el aumento de las distancias que implica mantener megaciudades infrahumanas, no pensadas desde la sustentabilidad ecológica con su entorno rural. Es decir, crece la brecha entre ricos y pobres y entre sociedad y naturaleza, tanto en la ciudad como en el campo y entre sí. A esto se suma una caída global de la producción de alimentos de los pequeños productores y los productores asociados, agravada por los impactos negativos en los costos de esa producción a causa de los cambios climáticos y una renta de la tierra diferencial disparada por la inversión tecnológica. Si esa es la «solución» que como cabeza del sistema propone el Grupo de los Ocho (G-8), con su incierta y no vinculante declaración frente al efecto invernadero, peor escenario sería imposible de concebir para el futuro del género humano.

Estas relaciones de producción y de propiedad han generado una deshumanización en virtud de la cual el debate de la enajenación frente a la naturaleza, que fue olvidado por el marxismo soviético, pero también por el llamado marxismo occidental, pasa a ocupar un lugar fundamental en la concepción integral de alienación analizada por Marx. Es una alienación surgida del mundo del trabajo, entre el trabajador, el proceso productivo y su ajeno producto final, agravada por la desalarización de las relaciones laborales que lleva a desconocer y confundir la relación de centralidad con el mundo del trabajo, y por lo tanto, a perder el sentido del trabajo y de la vida, lo cual analiza muy bien Ricardo Antunes;<sup>2</sup> a esto se suma un agravamiento de la enajenación de la naturaleza, donde la acelerada carrera productivista del capital está llevando al límite la ecología planetaria.

### La democracia: dique o ruptura

Este cuadro de la alienación en la sociedad capitalista se completa con la enajenación político-cultural generada por el marco institucional del Estado burgués y su democracia representativa. El sentido de la democracia se vuelve ajeno, los votantes sumisos escasean, y la mediación de la política con sus partidos, entra en profunda crisis de credibilidad. Es decir, las relaciones de producción y con la naturaleza, gobernadas por la sociedad occidental desde el paradigma de la democracia representativa y su Estado liberal, aumentan la condición autoritaria y profundizan sus intenciones de aplastar, invisibilizar, cooptar e institucionalizar las crecientes resistencias al sistema. El fetiche sigue siendo una democracia representativa cada día más vacía de contenido y más lejana de esa ciudadanía idealizada por la revolución democrático-burguesa. Este es, al decir de Perry Anderson, el gran «cerrojo ideológico del capitalismo occidental, cuya existencia misma despoja a la clase obrera de la idea de socialismo, de un tipo diferente de Estado, y al que con posterioridad, los medios de comunicación y otros mecanismos de control cultural afianzan su efecto ideológico».<sup>3</sup> Este juicio adquiere más vigencia después del derrumbe del llamado campo socialista que aparecía como una alternativa de progreso frente al sistema capitalista.

La desigualdad económica y social y la absurda explotación de la naturaleza, se enmascaran con la supuesta igualdad frente al Estado, última esencia de la democracia representativa. El parlamento, como expresión que supuestamente

<sup>2</sup> Véase Ricardo Antunes: *Los sentidos del trabajo. Ensayo sobre la afirmación y la negación del trabajo*, Ediciones Taller de Estudios Laborales y Herramienta Ediciones, Argentina, 2005.

<sup>3</sup> Perry Anderson: *Las antinomias de Antonio Gramsci*, Editorial Fontamara, Barcelona, 1978, p. 49.



representa el autogobierno de la sociedad civil, refleja una unidad democrática falsa entre explotados y explotadores, entre los marginados y las élites, donde la delegación de funciones en representantes, aleja y vuelve extraño, ante quienes viven de su trabajo, ese espacio e instrumento de la política, lo cual hace de la participación política de estos desiguales ciudadanos una directa manipulación, que luego de pasar por los filtros de los medios de comunicación, se convierte en fuente de legitimidad y de consenso sumiso.

Con la implementación del modelo neoliberal en América Latina, las desigualdades sociales y las contradicciones entre sociedad y naturaleza, expresadas en pobreza y degradación ambiental, se extienden globalmente; los derechos de los ciudadanos, pilar de la democracia liberal, llevados a la categoría de derechos humanos como parte de conquistas del propio movimiento obrero y popular, dejan de considerarse como garantías inalienables e imprescriptibles, y su cumplimiento progresivo, gradualizado, depende de la cantidad de recursos que le quiera o pueda destinar el mercado mediante los gobiernos de turno. Esto se agrava cuando la apuesta del neoliberalismo es a reducir la función del presupuesto del Estado como herramienta destinada al cumplimiento de los derechos fundamentales. El presupuesto se reduce por la vía de las privatizaciones de las empresas públicas generadoras de ingresos, y por la liberación del comercio y el fin de los aranceles. El resultado es una pérdida acelerada de la función pública llamada a garantizar los derechos económicos, sociales, laborales, culturales y ambientales, lo cual acaba con la bonita frase de que la democracia liberal es el gobierno del pueblo, por y para el pueblo.

Ni siquiera en los casos donde gobiernan sectores de izquierda o centro izquierda, las instituciones parlamentarias han podido ser puestas al servicio del cambio social. A lo sumo, como en el caso de Venezuela, donde la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional pertenece al chavismo, los parlamentarios han delegado sus poderes en el Presidente para que realice las transformaciones de fondo. En casos como el de Uruguay donde el Frente Amplio conquista la mayoría del Congreso, ha sido muy complicado aprobar leyes que propicien cambios estructurales. Por el contrario, la norma confirmada en Brasil y Ecuador, es que la disputa política en esos escenarios parlamentarios y de la división de poderes, tiende permanentemente a enredar, a confundir los debates, y a dilatar las decisiones por las que el pueblo ha votado. De allí que el desprestigio de estas instituciones legislativas ha crecido, de la mano con el descrédito de la política y de sus partidos tradicionales. Fraudes electorales evidentes como el sucedido en las presidenciales de México, muestran los límites democráticos que el sistema está dispuesto a aceptar.

Frente a la superación de las propuestas de insurgencias de vanguardias armadas, crecen las insurgencias populares que derrumban presidentes como en Ecuador y Bolivia, o gobiernan ciudades por meses como la Comuna de Oaxaca, pero esta estrategia de mantener al pueblo como juez y parte de los gobiernos, pasa

a segundo plano cuando llegan a gobernar los elegidos por presentarse como alternativos. Su discurso progresista apunta a la profundización institucionalizada de la democracia participativa, como la instancia adecuada para abordar y hasta resolver los conflictos de la sociedad, pero sin tocar sus contradicciones estructurales. Las teorías de la resolución de conflictos enmascaran las contradicciones antagónicas, y generan el imaginario ilusorio de que todo se puede resolver por la vía del diálogo entre iguales.

Sin embargo, la realidad nos demuestra que estos intentos participativos son insuficientes para resolver problemas económicos, sociales, culturales o ambientales, que tengan relación con los intereses económicos dominantes, y que pasada su euforia inicial, pueden terminar afirmando el sistema y generando nuevas formas de dominación. Las participaciones que promueve el Banco Mundial destinadas exclusivamente a controlar la corrupción que mina el sistema de capitales; las participaciones que relegitiman a los políticos autoritarios serviles del sistema y que impiden el apoderamiento colectivo y organizado de los ciudadanos; las participaciones que buscan cooptar el capital social y aumentar el control sobre la subjetividad, tienden, desde distintos ángulos, a favorecer la desorganización y fragmentación social. El resultado de estas políticas promovidas desde el sistema, es un fugaz rejuvenecimiento de la democracia representativa, que estimula las adaptaciones posibilistas de los líderes alternativos, alimenta las ilusiones de renegociar el pacto social con el Estado sin tener que acudir a la movilización de fuerzas, y que, por lo general, terminan en la pérdida de confianza hacia los esfuerzos colectivos por el cambio social, en la resignación individualizada y en el repliegue temeroso al individuo vacío de derechos humanos, tanto políticos, sociales, económicos, ambientales y culturales.

Con los triunfos de gobiernos locales y nacionales que se presentan como de oposición a las políticas neoliberales, y con la supuesta intención de cambiar en algo esas relaciones de poder, es de esperar algunas luces que muestren caminos distintos al de la democracia representativa. Toda la esperanza se vuelca hacia una democracia participativa de la cual hay muchas experiencias históricas valiosas, pero pocos ejercicios contemporáneos exitosos desde gobiernos nacionales. Paradójica o más bien inteligentemente, los pueblos tratan de utilizar la democracia representativa para elegir gobiernos que centran sus discursos electorales en la intención de romper con esa desigualdad social sostenida por una restringida democracia representativa, triunfos electorales que los poderes dominantes muestran como un resultado y una gracia de la democracia representativa sistémica, como gobiernos que así como hoy llegan mañana se acaban, donde lo que prevalecerá será el eterno retorno del poder político a los dueños del poder económico y financiero.

Lo que se observa es que el sistema, en tanto no puede o no quiere derrocar estas nuevas experiencias de gobiernos, todos los días aprende a asimilarlos y a utilizarlos como ejemplo de la fortaleza de la sociedad capitalista, única sociedad

y única democracia que es posible concebir, lo cual genera también reacciones que se expresan en discursos más radicales de los nuevos gobiernos, y, sobre todo, en ricos debates aún contenidos dentro de sus estructuras militantes, por la preocupación de no instalar nuevas formas de gobernabilidad que mantengan el poder de las clases dominantes, y alrededor de la importancia potencial, posibilidades y límites siempre móviles, para generar procesos antisistémicos por las vías del acceso al gobierno.

En todos estos gobiernos nacionales que se proponen como alternativos al modelo, y en particular en los gobiernos locales que los preceden o acompañan, se presenta la democracia participativa como la solución a los problemas de inclusión del sector popular de la sociedad civil en las decisiones del Estado. Desde distintas visiones ideológicas se habla del ciudadano pleno, de volver público lo público, de áreas públicas no estatales, pero tampoco privadas, y se llega en algunos casos, como en Venezuela y Bolivia, a plantear la democracia directa o comunitaria como el eje del nuevo Estado en gestación.

Sin embargo, la tendencia mayoritaria entre los promotores de la democracia participativa, es a concebir la participación de los sectores populares exclusivamente en la definición de las políticas públicas locales, pero ajena, separada, o al menos lejana por lo «inaplicable», de las grandes decisiones en el marco de la economía, las finanzas, la ecología, y los grandes temas políticos nacionales e internacionales. Para estas grandes decisiones siguen acudiendo a las instancias presidenciales, constituyentes o parlamentarias tradicionales, que tanto fueron criticadas por ser sustento de la democracia representativa liberal. Y esta suplantación de la democracia directa constructora de poder dual, se expresa tanto en los que deciden reestatizar empresas transnacionales, como en los que toman medidas que retocan o buscan democratizar las relaciones de dominación sobre el mundo del trabajo y la naturaleza.

Es claro que la superación de los espacios de la democracia burguesa depende de las correlaciones de fuerzas, por lo que acudir a espacios como las constituyentes, son caminos de tránsito legal necesarios, mientras se fortalece y madura el poder popular que permitirá y planteará nuevos saltos. Las constituyentes no construyen más poder popular que el ya construido; son cambios legislativos que al mismo tiempo que erigen un nuevo marco legal, también reglamentan, institucionalizan y orientan ese creciente poder popular en el marco del Estado constituido, el que, sin dejar de ser capitalista, contiene en su seno un potencial revolucionario que tiende a negar su raíz de clase; pero creer que una constituyente encerrada en cuatro paredes y orientada por los mejores pensadores de izquierda construye el poder popular, es nuevamente invertir la ecuación que lo determina.

Alrededor de esos procesos que anuncian un nuevo país, una nueva región, siempre deberá generarse un debate con poder propositivo en cada sector social

y productivo, que lleve a convertirlos en los verdaderos sujetos de esa construcción colectiva. Se trata de impulsar el nuevo proceso retomando las mejores tradiciones, programas y experiencias de lucha acumulados por los pueblos, para que resurja todo su potencial creativo y de resistencia, lo cual les permitirá enfrentar los amenazantes poderes globales y nacionales. Estas dinámicas participativas plenas de movilización, llevan a que la contradicción entre el potencial transformador y revolucionario de pueblos movilizados hacia el cambio estructural, con los poderes externos e internos del sistema capitalista, no pueda considerarse como un conflicto posible de resolver en el marco de un viejo Estado que no termina de morir y uno nuevo que no alcanza a nacer. Es en la visibilización de esta contradicción, que la camisa de fuerza de la democracia burguesa tiende a estallar; pero impedir su alternativa dictatorial y sus golpes de Estado requiere de una perspectiva transformadora, revolucionaria, de una mirada antisistémica surgida de sus acciones cotidianas, que más allá de los discursos voluntaristas de los nuevos liderazgos, permita concluir en que es inevitable, impostergable, la necesidad de avanzar en la transición hacia una nueva sociedad.

Inicialmente, las contradicciones que deben abordar estos gobiernos se transforman en un problema de mayor equidad en la distribución del presupuesto público, de recuperar la soberanía sobre las empresas estatales y los recursos naturales, sin poder impedir que toda la economía del país (sea fuerza de trabajo, hidrocarburos, minería, alimentos, biocombustibles, servicios) siga inmersa, mediante el mercado, en el sistema global de producción capitalista.

Romper ese cerco parece imposible y proponerlo como simple consigna revolucionaria se interpreta por parte de quienes asumen esas funciones de gobierno, y con una relativa base de razón, como ultrismo, radicalismo y populismo, propio de quienes «no logran comprender las dificultades del actuar dentro de una realidad globalizada». Se encargan de recordarnos que no se ha hecho una revolución social, sino un simple acceso al gobierno de un Estado capitalista; que las condiciones aún no son propicias y que debemos esperar, ganar tiempo. Y si nos quedáramos en el marco o más bien trampa de lo que es posible realizar desde la alienante democracia representativa y participativa rediseñada desde la socialdemocracia, sin duda tendríamos que darles toda la razón, pero si se logra profundizar las apuestas de construcción de poder popular por medio de experiencias de democracia directa con poder de decisión, se podrían mostrar nuevos caminos exitosos. La gran dificultad es que esa dinámica dialógica, colectiva y democrática, no deviene por sí sola en acciones anticapitalistas y por lo tanto no deviene en un poder popular que sea el sostén y el creador del nuevo Estado y sociedad que se debe construir.

Se nos dirá con relativa razón que esa tarea le corresponde al partido revolucionario, pero poco lograría ese partido en el mediano y largo plazo, como sucedió

en la URSS, limitándose a proclamar la necesidad del socialismo, sin un discurso y un programa político que sea un solo cuerpo con la realidad concreta y con el sujeto político de clase que lo lleve adelante. El gran problema es que en nuestra periferia subdesarrollada, ese sujeto surgido del mundo del trabajo y de su necesidad de transformar la naturaleza, se ha reducido, ha perdido organicidad sindical, no vive en su mayoría de relaciones salariales directas y colectivas, y en apariencia ha perdido la centralidad con la contradicción capital-trabajo.

Se nos dirá también, con relativa razón, que eso ya sucedió en el pasado, y que revoluciones como la cubana y la vietnamita lograron triunfar y afirmarse sin tener una sólida clase obrera, pero una cosa era con la existencia de un campo socialista que con todas sus contradicciones mostraba la posibilidad de una nueva sociedad, a tener que hacerlo en el marco del capitalismo globalizado agresivo y sin referentes de pueblos que hayan logrado liberarse en su contexto concreto, lo cual nos lleva en apariencia a cerrar el círculo que nos regresa al dilema entre el posibilismo democrático adaptacionista, confrontado con el voluntarismo participativo ideologizado.

### **Las alternativas desde los gobiernos de izquierda**

La realidad mencionada forma parte de los debates de la izquierda latinoamericana, caribeña y mundial, pero pasa a un tercer nivel de importancia cuando de gobernar se trata, y lo que vale es echar para adelante y aprender sobre la marcha. Desde los gobiernos más radicales, como Venezuela, Bolivia y Ecuador, se apuesta a importantes procesos constituyentes que van definiendo el ideario y el programa para una transición a sociedades más justas; pero en tanto son proyectos y esfuerzos políticos que requieren acumulación de fuerzas sociales y políticas para ser llevados a la realidad, terminan relegando las estrategias que atacan el corazón de la reproducción económica y societal del poder capitalista, las cuales van quedando a la espera de mejores correlaciones de fuerza. El espacio de reflexión crítica y autocrítica es ocupado por las obligantes disputas coyunturales que a diario se construyen desde los sectores más reaccionarios no dispuestos a abandonar su poder político dominante. El imperialismo norteamericano ha construido toda una nueva escuela de cómo construir conflictos en forma permanente que impidan gobernar a la izquierda, y, sobre todo, que no les permitan pensar en perspectiva de construcción de poder popular revolucionario.

La ofensiva contrarrevolucionaria responde a la importancia de algunos cambios estructurales, como las decisiones de reestatizar empresas productoras de energéticos y de servicios públicos, de avanzar en integraciones alternativas y desde los pueblos –el ALBA–, de renegociar la deuda pública y crear el Banco del Sur, o de sacar las bases militares norteamericanas, todas acciones que golpean a las grandes transnacionales, al sector financiero y al poder militar norteamericano.

Son medidas y nuevas constituciones que abren muy importantes transiciones con potencialidad revolucionaria, pero que no logran salir del marco de un Estado de bienestar avanzado, soberano en el manejo de sus riquezas, y con creciente autonomía para negociar sus recursos en condiciones de cierta equidad con los países del centro capitalista.

A estas medidas, sin dudas necesarias, se les agrega en estos tres países la democracia participativa y directa como elemento esencial para construir un poder popular capaz de definir desde lo local los planes de desarrollo y la priorización de las políticas públicas en los presupuestos territoriales. Los presupuestos participativos de Porto Alegre marcaron un camino que, en su momento, fue pionero y que hoy busca continuarse contando con el gobierno central. No se aplica como experiencia a los gobiernos nacionales, sino que se restringe a lo local, con el riesgo de repetir la experiencia mecánicamente, como una simple metodología. Y si bien la intención declarada es considerarlo caminos para la construcción de un poder popular desde lo local, no queda claro desde dónde surgirá la conciencia de clase. A esta interrogante buscan en Bolivia responderle con la creación de una Asamblea Popular que agrupe a todos los pueblos, sectores sociales y políticos de izquierda, y que actúe como un parlamento democrático alternativo.

Tanto esta como otras experiencias que están surgiendo con la intención de construir sujetos sociales y políticos que agrupen a la mayoría de la población tras una perspectiva revolucionaria, tendrán que pensar y actuar desde su particularidad histórica, pero no podrán eludir la necesidad de construir un discurso teórico-político que permita la comprensión de la realidad cotidiana como parte de la totalidad sistémica. La conciencia de esa injusta e insoportable realidad construye inevitablemente propuestas alternativas, momento y función en donde son imprescindibles los espacios de partidos revolucionarios que actúan como puente entre el pensamiento teórico y académico transformador, y el pensamiento concreto surgido de la lucha contra esa realidad, que se procrea en los movimientos de trabajadores, campesinos, indígenas y sociales en general.

Los pilares para la comprensión de las contradicciones estructurales y clasistas que se requieren develar para recuperar las ideologías de clase, pasan, a nuestro entender, por:

- la recuperación de la conciencia de que la centralidad de la relación capital-trabajo sigue ordenando la sociedad;
- los problemas de la alienación de la sociedad, que responden no solo a las relaciones de explotación, sino también a las relaciones con la naturaleza;
- la superación, por la vía de la democracia participativa directa y la construcción de espacios de doble poder, de las limitaciones de la democracia representativa liberal, que puede ser el espacio y el momento que articule los dos ejes anteriores.



No obstante, como la realidad siempre es más complicada que lo previsto en las reflexiones teóricas, se puede observar que las distintas prácticas de gobiernos alternativos, iniciadas desde la vía electoral, pero enfrentando a diario grandes intereses reaccionarios, no logran articular las tres concepciones en una totalidad antisistémica, estructural, pero, sobre todo, de comprensión y acción cotidiana, que garantice hacia un mediano plazo la continuidad revolucionaria de los procesos.

Así, se toman importantes medidas económicas desde el gobierno central, por lo general desarticuladas de los procesos democráticos locales o de los movimientos sociales, que no convocan ni alimentan la conciencia de clase, la cual va más allá del discurso antimperialista; y no siempre enmarcadas en la necesaria superación de las relaciones de explotación irracional, no sustentable, de la naturaleza. Si se lograra integrar esos tres componentes como parte de una concepción de un proyecto de desarrollo que llamamos socialista, la legitimidad de las políticas y la constante construcción de conciencia transformadora, serían sólidos y crecientes cimientos del proceso de tránsito hacia esa nueva sociedad. La tarea no es sencilla, pues así como no existen socialismos en un solo país, no existen modelos históricos revolucionarios asimilables a esta nueva realidad. A lo anterior se agrega que la clase obrera, los trabajadores, como sujetos históricos surgidos de la contradicción trabajo-capital, tienen direcciones que enredan, confunden, la construcción de su conciencia de clase y revolucionaria; mientras que los viejos y nuevos movimientos sociales que demuestran una gran capacidad de movilización, no logran superar sus orígenes y miradas parciales, fragmentadas, y pasar a construir un discurso antisistémico global e integrador.

Si la lucha contra la ruptura del necesario metabolismo entre la sociedad y la naturaleza, se realiza desde el mundo del trabajo, y si para llegar a este tenemos que acudir al campo de la acción y expresión social y política, es decir, al espacio de la democracia, deberíamos preguntarnos cuáles han sido y son las dinámicas, las nuevas experiencias, que muestran caminos que permiten ese metabolismo entre sí y con los sujetos revolucionarios.

### **El territorio como matriz antisistémica**

La experiencia de la lucha de clases está mostrando que los movimientos sociales cuando logran movilizarse con peso colectivo importante, hacen de su participación democrática directa, una forma de influir sobre las políticas públicas territoriales que los afectan, donde fortalecen su organización, su formación y su ubicación ideológica. Esto se expresa claramente en las luchas rurales donde la afinidad entre el mundo del trabajo, la sociedad y la naturaleza surge como necesidad expresa que genera su propia ideología anticapitalista. Es el caso de los campesinos Sin Tierra de Brasil, que reclaman su derecho a la tierra, a la asociación productiva,



a su educación propia, y denuncian el ALCA y los procesos productivos agro-industriales que golpean la sustentabilidad ecológica.

Un caso muy importante es el de los indígenas en Colombia, que no alcanzan al 3,4% de su población, pero tienen control sobre el 22% del territorio del país, y donde los territorios colectivos llegan al 30% de su superficie si incluimos los asignados, aunque no titulados, a los pueblos afro-descendientes. Su resistencia por más de 500 años les permitió imponer un grado de soberanía sobre parte de sus tierras ancestrales, por medio de la figura del resguardo, ente territorial reconocido constitucionalmente. Esta relación colectiva de trabajo con la «madre tierra», les permite naturalmente considerar su territorio como algo más allá de meros límites geográficos, e incluir en esa visión de territorialidad a la biodiversidad, el agua, las riquezas naturales, la historia económica, social, política, cultural y laboral que se desarrolla en él. Esto se destaca en los indígenas del Cauca, quienes desde su visión colectiva de la relación con la tierra, el agua y la naturaleza, han avanzado en construir un discurso antisistémico frente a la explotación capitalista de la naturaleza, el cual nutre las luchas campesinas que se libran en sus territorios. Y si bien la lucha ideológica existe en el seno de las comunidades indígenas, los conciliadores como los radicales parten de la matriz común de un discurso que reivindica el territorio.

Existen líderes que piensan en aprovechar los Tratados de Libre Comercio (TLC) para hacer negocios como comunidad, pero son mayoría los que realizan una consulta contra el TLC, que ni siquiera el movimiento sindical se decidió a realizar, con resultados de un 95% de población indígena y campesina que rechaza el libre comercio, la privatización del agua, las patentes sobre seres vivos y la amenaza transnacional sobre sus tierras. Son comunidades indígenas y campesinas que gobiernan los municipios en los que se encuentran sus resguardos y que han realizado experiencias participativas, de democracia directa, de construcción de planes de vida a largo plazo, planes de desarrollo y presupuestos municipales, con resultados exitosos que pocas experiencias participativas pueden mostrar.

Sin embargo, su condición territorial, etnocultural, no puede trasladarse mecánicamente a los pueblos no indígenas ni a las comunidades urbanas, salvo casos como el de Oaxaca donde gran parte de la población urbana que organizó un gobierno y un doble poder no explícito pero efectivo, es indígena. Si su fortaleza es lo territorial, su diferencia y también su dificultad para incidir sobre la sociedad capitalista que los rodea, está en que no incluyen como determinantes las relaciones capital-trabajo en su modo de producción. Es decir, que a esa lucha indígena y campesina que desarrolla el perfil antisistémico en la relación con la naturaleza, le falta la articulación con la lucha por cambiar las relaciones de producción capitalista, algo que por simple lógica no es su tarea directa, ya que ellos viven otras relaciones de propiedad y producción; no logran entender esto quienes salieron

a cuestionar el carácter de Comuna de la experiencia de Oaxaca, porque no existían trabajadores fabriles en la organización que los conducía, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Son, por lo tanto, un ejemplo de que una relación superior entre la sociedad y la naturaleza es posible desde una propuesta colectiva, y un referente concreto en la lucha por la defensa de las riquezas naturales que hacen parte del primer y fundamental paso de la producción a escala de las transnacionales de alimentos y biocombustibles, así como del necesario equilibrio ecológico. No se podrán controlar y producir los biocombustibles sin controlar las tierras y el agua y a los trabajadores que los producen, por lo que toda resistencia dirigida a impedir el mapeo de los nacimientos de las ricas y aun no privatizadas cuencas de las aguas andinas, impiden el desarrollo del nuevo patrón energético y productivo imperialista. De la misma manera, las luchas de los movimientos sociales y ecologistas en México por impedir la privatización del agua, comenzando por los pozos que la surten, generan una conciencia surgida de la realidad y no de un discurso ideológico general que no encuentra asideros concretos con el mundo del trabajo y la vida cotidiana. Esa relación directa con la naturaleza y con las materias primas de los procesos productivos transnacionales, en la cual media el trabajo colectivo o individual para extraerlos o producirlos, es lo que determina el carácter radicalmente anticapitalista de sus luchas, y explica por qué los pueblos indígenas y los campesinos organizados, y algunos movimientos cívico-ambientales como los de Argentina que cierran el puente internacional en Gualeguaychú contra la construcción de una mega planta de celulosa en Uruguay, son hoy un referente ético-político y un centro para el reagrupamiento de la resistencia del resto de los movimientos sociales y partidos políticos de izquierda, y de los propios trabajadores de los centros urbanos y fabriles. Son desde sus miradas diversas, un factor de construcción de la conciencia de clase que lucha por recuperar el metabolismo entre naturaleza y sociedad.

### **Participación con identidad de clase desde lo urbano**

En países como Bolivia, Ecuador, y en menor medida en México y Perú, ese referente indígena desempeña un papel muy parecido, dependiendo de las características peculiares de sus procesos históricos. Pero otra cosa sucede en las grandes y medianas ciudades de estos países, o en los países con gran peso de lo urbano y con una estructura rural determinada por la gran producción capitalista, como es el caso de Argentina, Chile y Brasil. En ellos el concepto de territorio desde lo urbano, o desde los espacios rurales no surge con tanta claridad, y lograrlo requiere vincular sus espacios de enfrentamiento y de gobiernos democráticos participativos, a luchas contra el capital y por la preservación social y científica del medio ambiente.

Los sindicatos sostienen con dificultades sus luchas gremiales y políticas, desde una estrategia donde prima lo defensivo, la preservación de sus conquistas. Muy pocas veces son incluidos en los procesos de cogestión participativa de las políticas públicas, y si lo hacen es como simples ciudadanos individualizados, o en el mejor de los casos, incorporados a las organizaciones comunales o vecinales de sus barrios.

Si los trabajadores de la salud, de la educación, de las finanzas, de los sectores productivos se organizaran por barrios para aportar al debate de las políticas públicas en los temas que ellos conocen y sobre los que además tienen una lectura de clase, su visión antisistémica determinada por sus relaciones con el Estado y el capital, otorgaría a los procesos de la democracia participativa directa una lectura estructural de los problemas de la sociedad, que supera la simple priorización y asignación de recursos que realizan los procesos participativos. Esta propuesta comenzó a implementarse en los años 1995-1996 en el proceso de presupuesto participativo de Barranquilla (Colombia) con la decidida voluntad de los dirigentes de los sindicatos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); y de no ser por la crisis política que se presentó en el movimiento que conducía el gobierno municipal, la experiencia pudo haber marcado un referente y enseñanzas concretas. Seguramente esto se ha intentado en otros municipios, sin que se tenga en cuenta en los análisis realizados su gran trascendencia.

En los procesos que continúan la experiencia de Porto Alegre, observamos que se prioriza la participación desde la condición de ciudadanos individuales y no solo se desconoce las estructuras vecinales, comunitarias y de los movimientos sociales preexistentes, sino que no se cuenta con los sindicatos como parte de la comunidad organizada desde una concepción de clase. Sus lecturas son políticas en tanto la búsqueda de equidad, pero muchas veces lejanas de un discurso que vaya más allá de acercar la sociedad al Estado. Sus espacios de articulación, se realizan desde las autoridades electas y no incluyen, como una red de dos cabezas, los movimientos sociales y de consejeros que realizan la participación y garantizan su continuidad. No es casual que la Red URBAL 9 de presupuestos participativos financiada por la Comunidad Europea y que hermana alcaldías de Europa y Latinoamérica, sea solo de alcaldes, sin participación alguna de la comunidad organizada. Cuando el Partido de los Trabajadores (PT) perdió la Alcaldía de Porto Alegre, nodo de la Red, su manejo quedó en manos de un alcalde que hizo de la participación un discurso oportunista. Esta asepsia anticapitalista de la participación es la que permitió cierta audiencia inicial a las Mancomunidades que promueve el Estado español en Ecuador entre los municipios indígenas que comparten cuencas de agua; propuesta que incluía el nombramiento de gerentes autónomos de esas mancomunidades con potestad para el manejo y gestión de las cuencas.

Mas si esta estrategia tiene como limitante la incomprensión de los administradores públicos de la izquierda y las visiones exclusivamente corporativas de los sindicatos, encuentra su mayor dificultad en la creciente reducción de los trabajadores sindicalizados y de los dependientes de relaciones salariales estables. Ante la dificultad para que los trabajadores organizados asuman la gestión de lo público, como camino hacia un nuevo estado de trabajadores y productores asociados –como lo hicieron en la URSS, en sus primeros años, con la más valiosa experiencia histórica de poder obrero y popular mediante los soviets– es necesario repensar la estrategia. Y nuevamente la noción de territorio se presenta como una alternativa. Pero, ¿cuál es el territorio en lo urbano que determina el espacio de identidad que pueda permitir construir una conciencia de clase, sin que exista un sólido movimiento obrero?

Inicialmente, podemos pensarlo como la acción y movilización que los sectores populares realizan desde espacios barriales, cuencas, laderas, centro, periferia, mediante pequeñas o grandes redes locales, visibles o invisibles, determinadas por alguna afinidad con el territorio, como las Juntas Comunales, comités de usuarios de servicios, de vivendistas, destechados, juntas de padres, de estudiantes, ambientalistas, grupos de mujeres, de jóvenes, culturales, musicales, asociativos productivos, o simplemente de solidaridades y afectos construidos por años de vida en común. Todos ellos, cuando se encuentran con reales procesos participativos, buscan incidir desde sus necesidades por medio de propuestas y proyectos que deben incluirse en las políticas públicas locales, sin que su preocupación central pase primero por la construcción de espacios permanentes que permitan la participación democrática en la decisión del conjunto de las políticas públicas. Los mismos procesos de Porto Alegre, de Belém do Pará o de São Paulo, mostraron que su importante avance en la comprensión de la comunidad de sus derechos humanos, en particular de los económicos, sociales, culturales y ambientales, no es suficiente para romper con la alienación generada desde el Estado neoliberal. Requieren, por lo tanto, de una visión territorial mucho más amplia que la que al principio los agrupa.

Como J.B. Foster lo recupera, Marx marcó con claridad el absurdo que generaba la producción capitalista, al ampliar la brecha entre el campo y la ciudad. Denunciaba el absurdo del consumo urbano de alimentos y mercancías surgidas de la transformación de las materias primas producidas desde lo rural, que luego eran botados al río Támesis como excrementos y basuras orgánicas. Consideraba que la ampliación de la brecha entre campo y ciudad no era solo tecnológica y de niveles de vida, sino que tenía una clara relación de aumento de la enajenación frente a la naturaleza. Reclamaba el uso de los excrementos como base del abono de las tierras y sin decirlo con claridad, pues aún no se lo concebía tecnológicamente, proponía el reciclaje. Consideraba que la brecha ciudad-campo era, en forma

directa, dependiente de la existente entre procesos productivos y naturaleza, pero también polemizaba con la explotación indiscriminada de las tierras que llevaba a su aridez y desertización, y como resultado expulsaba campesinos a la ciudad; también condenaba que se dedicaran grandes extensiones de tierras a monocultivos agroindustriales degradantes de las relaciones de producción y con la naturaleza.

Si las experiencias urbanas de gestión o cogestión popular del Estado fueran capaces de acortar la distancia entre campo y ciudad desde un modelo que priorice la autogestión de pequeños y medianos productores asociados, algo cercano a como Marx imaginaba el socialismo, estarían realizando la histórica tarea de comenzar a resanar el metabolismo entre sociedad y naturaleza. Para ello se requiere que la visión territorial se extienda más allá de la localidad, de lo urbano, e incluya los territorios rurales vecinos que la surten de agua, energía, alimentos, materiales de construcción y otros, pero que reciben como contrapartida la condición de ciudades dormitorio, aguas contaminadas para sus cultivos, servicios públicos costosos y basureros antiecológicos de alta peligrosidad.

La planeación de las grandes ciudades determina que la prioridad sea sostener las altas condiciones de vida de los que pueden pagarla. Las consideran centros de negocios, de servicios, financieros, inmobiliarios y de renta de la tierra. Sus habitantes empobrecidos son objeto de expulsión hacia pueblos y ciudades intermedias vecinas, que sufren a su vez la degradación urbanística y ambiental de sus territorios.

Únicamente adquiriendo una mirada crítica del ordenamiento territorial de los suelos, asumiendo una visión del desarrollo afín a su identidad popular y a una ética de futuro preocupada por la preservación de la naturaleza para las próximas generaciones, y con una decisión de realizar experiencias de democracia directa que supere el clientelismo y dirija las políticas públicas en función de los más necesitados, se podrá comenzar a superar la aparente independencia de la relación capital-trabajo con la naturaleza. Las políticas de generación de empleo no solo tendrán así un debate sobre las nuevas tecnologías y altas productividades generadoras de desempleo, sino que pensarán el desarrollo como un solo cuerpo entre campo y ciudad.

Es el caso del programa Bogotá Sin Hambre que reparte 80 000 comidas diarias y nace abastecido por una gran cadena de supermercados. Fue la presión de los campesinos tomándose la plaza central del poder político y exigiendo se les asocie y se les compre sin intermediarios su producción de alimentos, junto con la acción de la población de los barrios, muchos de ellos miembros de las asociaciones que gestionan esos comedores comunitarios, que recibía con piedras a los camiones de la cadena, lo que condujo a que se revocara el contrato y se comenzara, después de tres años de gobierno, a estimular la producción asociativa de los campesinos de las regiones vecinas. Toda una movilización social que de ser organizada, apoyada

desde el gobierno del Polo Democrático Alternativo y proseguida, contiene un alto potencial antisistémico en tanto afecta el comercio monopólico de las cadenas de supermercados transnacionales, y fortalece los nexos y las visiones comunes de las organizaciones sociales del campo y la ciudad.

En ese escenario, el campo le brinda a las organizaciones de la ciudad su relación con la naturaleza, y la ciudad le entrega a las luchas rurales su visión más global sobre las relaciones capital-trabajo.

También es la lucha como comunidades del campo y la ciudad contra las ciudades pensadas en función de la competitividad que exige el libre comercio, su consideración de puertos secos, corredores multimodales, centros financieros y de servicios, de acopio e intermediación de los alimentos, zonas francas, o zonas de negocios inmobiliarios y con la renta diferencial de la tierra. La conciencia de clase que construyeron durante casi cien años de lucha los trabajadores urbanos, se traslada a los millones de desempleados, vendedores ambulantes, a los cuentapropistas, a los transportadores, a los maestros, a los desplazados y migrantes, y se acumula en la memoria colectiva de sus organizaciones y en la propia familia, pero requiere de detonantes que conscientemente la saquen a flote, la recuperen y articulen con los problemas de las luchas cotidianas. Y esa es una función política de los partidos y gobiernos que se autodenominan como alternativos.

### **Iniciando una conclusión**

Un punto particular para concluir, es reseñar el proceso más auténticamente de clase que promueve la democracia directa en la cogestión o dirección de lo público. Como ave Fénix regresa desde las cenizas el control obrero de la producción, la forma de democracia participativa directa que permite incidir y decidir sobre las políticas públicas productivas. El caso más auténtico es el de los trabajadores del aluminio en Venezuela, que por iniciativa del sindicato y la administración de la empresa, se lanzan a un proceso de gestión compartida de la empresa estatal. En estos casos, la democracia directa es un componente determinante del metabolismo entre sociedad y naturaleza, y su nivel de desarrollo de clase marca los avances más estructurales en el tránsito hacia el socialismo. Por eso es de esperar que su profundo sentido anticapitalista haya asustado a más de uno de los funcionarios del gobierno y a los sectores productivos privados que viven del gran complejo productivo estatal. Algo similar, pero no institucionalizado, sucedió en PDVSA durante el paro de los técnicos y profesionales de la empresa petrolera, donde simples trabajadores con el apoyo de las comunidades vecinas a los centros laborales, pusieron en marcha procesos productivos muy complejos y determinantes para la economía nacional. Darle toda la trascendencia, oportunidad y espacio político a estas experiencias de control obrero, integrarlas con los demás



procesos de participación desde lo local territorial, y vincularla con el mundo de la naturaleza que la alimenta y le da su sustentabilidad ambiental, permitirá reconstruir el polo «proletario» que hegemonice procesos revolucionarios como el venezolano, que es algo más que tratar de construir una central obrera autónoma e independiente frente a la burguesía y el imperialismo. Estas son las experiencias que el movimiento obrero tendrá que poner en el debate popular, comenzando por hacer de ellas un factor de su funcionamiento unitario.

Reestatizar empresas acompañadas de experiencias de control, cogestión y dirección obrera, algo que avanzó mucho en el Chile de Allende, y que en Bolivia tiene una tradición de muchas décadas de lucha, será el componente que permitirá que la democracia directa se articule con el mundo del trabajo, y que desde este se construya una nueva relación sistémica, armoniosa e integral, entre sociedad y naturaleza.

Serán las luchas sociales y políticas territoriales, y como parte de ellas, las experiencias de resistencia e imposición de gobiernos y poderes locales alternativos, con todas sus experiencias democráticas de doble poder surgidas y afirmadas desde el territorio, las que deben direccionar sus objetivos políticos para reconstruir la conciencia de que seguimos viviendo en una sociedad determinada por la centralidad del mundo del trabajo, y por la relación interdependiente con el mundo de la naturaleza. El territorio redefinido y cambiante, sumado al componente de la democracia directa que busca la cogestión, gestión y transformación del Estado, puede permitir superar la creciente deslocalización, tecnificación, flexibilización y precarización del mundo del trabajo, y asumir en muchos sentidos la función que realizaba la gran fábrica en países hoy desindustrializados. Su contradictor de clase es quien intenta apropiarse de los recursos que en ese territorio existen, incluida la fuerza de trabajo; su acción colectiva es determinada por los distintos sujetos que forman parte de la cadena productiva, sin tener una relación salarial estable, y se amplía a todos los trabajadores de empresas de tecnologías de punta que integran la fase final de esa producción y comercialización a escala internacional. Quien aporta su fuerza de trabajo en la extracción, mantenimiento o producción de un galón de hidrocarburos o de biocombustibles, un galón de agua, una tonelada de mineral o de madera, un kilogramo de alimentos, una hectárea de tierra, un componente de la biodiversidad genética, un vendedor formal o informal del producto final, son vistos desde la territorialidad como la parte de un todo que es la cadena productiva, donde lo determinante «en última instancia», son los intereses de clase encontrados entre capital y trabajo. Y para dilucidar esta madeja que construye el capital con el propósito de invisibilizar sus negocios, acciones e intenciones, los espacios de la democracia directa aparecen como los más favorables e indicados.



El metabolismo entre sociedad y naturaleza necesita de las experiencias de democracia directa y poder popular para articularse desde el mundo del trabajo; y las experiencias de construcción de poder popular autogestionario por la vía de la democracia participativa directa, requieren del metabolismo entre sociedad y naturaleza para asumirse y construirse como un movimiento social y político anti-sistémico determinado por la relación capital-trabajo. Los plazos, ritmos y formas concretas para lograrlo estarán siempre abiertos a la creatividad social y política de los sujetos revolucionarios de cada proceso local y nacional.

FERMÍN GONZÁLEZ, consultor y profesor universitario en Participación Social, es dirigente de Presentes por el Socialismo y miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales del Polo Democrático Alternativo de Colombia.

## Alan García: del cambio responsable a la responsabilidad de que no haya cambios

EDUARDO BALLÓN

Cuando Alan García instaló su gobierno el 28 de julio de 2006, lo hizo en un escenario complejo. Recibió un país con buenas cifras macroeconómicas, con un ambiente internacional relativamente favorable, y con una opinión pública que mostraba esperanzas altas en la nueva gestión<sup>1</sup> y confiaba que se superaría rápidamente la polarización política que facilitó su elección. Ello, a pesar de su apretada victoria electoral (52,5% de la votación en la segunda vuelta)<sup>2</sup> que se apoyó en una alianza tácita de distintos sectores políticos y sociales, esencialmente el fujimorismo y la derecha política y económica, para cerrar el paso al «humalismo» (nacionalismo) que canalizó –en ese momento– el malestar de distintos sectores del país, sus expectativas de cambio político y la búsqueda de inclusión de vastos grupos de la población marginada. Encontró, también, una sociedad con una alta conflictividad y un fuerte embalse de expectativas y demandas; una ciudadanía que votó por transformaciones radicales y una oposición desordenada e incierta que podría pugnar por distintos cambios.



Entonces, en el escenario se observaban tres grandes tendencias de mediano plazo, como destacáramos oportunamente:<sup>3</sup> 1) en la economía, un crecimiento

---

<sup>1</sup> El Reporte 7 del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), registraba a finales de junio de 2006, que 60% de los encuestados pensaban que el gobierno iba a ser mejor que el que concluía y solo 3% temían que fuera peor.

<sup>2</sup> En la primera vuelta, el partido de gobierno obtuvo el 24% de la votación, porcentaje inferior al 26% que lograra en 2001.

<sup>3</sup> Eduardo Ballón: «Las tendencias que encuentra el nuevo gobierno: crecimiento económico sin calidad, límites de la democracia y alta conflictividad social», en Grupo Propuesta Ciudadana (editor), *Tendencias y desafíos de la democracia peruana en el nuevo período político*, Grupo Propuesta Ciudadana, Lima, 2006.



sin calidad, con desigualdad, desempleo o empleo precario; 2) en la política, una democracia débil, con una institucionalidad precaria y una profunda crisis de representación; 3) en lo social, una alta conflictividad, escasa articulación y severas limitaciones de integración.

Su discurso presidencial inaugural intentó convencer a los ciudadanos más alejados del Estado y críticos de la política y del manejo económico, de que el nuevo gobierno tomaría decisiones que los incluirían. La parte más efectista de su intervención ante el Congreso, hace ya un año, se concentró en el tema de la austeridad, especialmente en reducir los sueldos del Ejecutivo y del Congreso, asunto particularmente sensible en los últimos años en la relación entre el Estado y la ciudadanía. El tema de la reforma del Estado se limitó, en su intervención del 28 de julio de 2006, a la simplificación administrativa; el compromiso general con la descentralización, aunque simbólicamente importante, tuvo un contenido limitado, más allá de los anuncios de transferencia de todas las competencias y funciones que puedan asumir los gobiernos subnacionales, a la eliminación de prefectos y subprefectos y a la descentralización del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Más importante aún, fue su silencio sobre temas espinosos –el Tratado de Libre Comercio (TLC), por el que ya había votado su bancada parlamentaria después de la segunda vuelta, el Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la Reforma Tributaria y la redistribución de la riqueza, la lucha contra la corrupción, las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial–, pues insinuaba ya el contenido y los límites del denominado «cambio responsable» enarbolado en su campaña. Tras un año de gobierno, es posible un primer balance de la gestión de Alan García.

## **1. En la economía: administrar la abundancia, protegiendo la ganancia...**

El gobierno aprista recibió los principales indicadores de la economía en azul. La nueva fase expansiva, que se inició en el segundo semestre de 2001, así como la gestión macroeconómica del toledismo, estimulada por un contexto mundial favorable, permitieron que el país se sostuviera en el incremento de la demanda externa y se beneficiara de los altos precios internacionales. El crecimiento del producto interno bruto (PIB), que alcanzó el 8% en 2006, fue su resultado más visible, y se elevó hasta los 160 383 millones de soles de 1994. Conviene anotar que ese año, las remesas de utilidades de las empresas extranjeras a sus casas matrices, crecieron 45%: 14 166 millones de soles, lo que provocó que el aumento del producto nacional bruto (PNB) llegara solo al 5,4%.<sup>4</sup> En otras palabras, un crecimiento con claros ganadores y beneficiarios.

<sup>4</sup> Al respecto véase Humberto Campodónico: «Crecimiento y pobreza», en OXFAM, *Pobreza, desigualdad y desarrollo*, OXFAM GB, Lima, 2007.

Este segundo gobierno de García ha abandonado buena parte de su discurso electoral y ha optado por continuar, en términos generales, con las orientaciones que vienen desde el toledismo. La economía sigue mostrando altas tasas de crecimiento del producto (casi 8% en el primer semestre de 2007), así como indicadores de actividad consistentes con las magnitudes anteriores. Hay un aumento de la demanda interna (10,2% en el primer trimestre de este año), que se explica, fundamentalmente, por el incremento del consumo y de la inversión privada, alentados por las expectativas de consumidores y empresarios. En este contexto, el Banco Central de Reserva ha proyectado el crecimiento del año al 7,2% y estima que los términos de intercambio, aprovechando el contexto mundial, se incrementarían en 2%, por lo cual prevé un superávit fiscal equivalente al 1,2% del PIB.<sup>5</sup>

Los cambios más significativos que se han producido en el manejo de la economía están relacionados con el regreso a una política fiscal pro cíclica y el anuncio de una mayor flexibilidad cambiaria. La propuesta de nueva Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal apunta a incrementar la inversión pública y el gasto de mantenimiento, pues aplica el límite actual de 3% de crecimiento del gasto no financiero únicamente al gasto corriente del Gobierno Central. Los cambios en la política monetaria buscan introducir modificaciones en el uso del instrumento compra-venta de dólares, y alientan una apreciación de la moneda nacional.<sup>6</sup>

Resulta ya evidente que el gobierno aprista dejó de lado sus principales ofertas electorales en esta y en otras materias. La eliminación de la renta básica que se cobra a los usuarios de telefonía, no se produjo. El impuesto a las sobreganancias mineras (que hubiese generado entre 5 000 y 7 000 millones de soles en 2007) no llegó a efectuarse y devino un «óbolo» de eventuales 500 millones de soles anuales, vergonzantemente negociado con las empresas y administrado por ellas. Y la comprometida reforma tributaria se redujo a la paulatina eliminación de algunas exoneraciones, sin cambiar la orientación tributaria. En el caso del «óbolo», mediante un «aporte económico voluntario, extraordinario y temporal», las mineras acordaron contribuir con el 3,75% de sus utilidades netas de 2006: unos 500 millones de soles, incluyendo a la mediana minería. El monto resulta ridículo si asumimos que las utilidades netas de las grandes empresas mineras superaron ese año los 20 000 millones de soles (fueron 10 000 en 2005), desperdiciándose así una oportunidad incomparable para que el país participe en otros términos de su riqueza.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Banco Central de Reserva del Perú: *Reporte de inflación mayo 2007. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas*, Banco Central de Reserva del Perú, Lima, mayo de 2007.

<sup>6</sup> Félix Jiménez: «Los retrocesos en la política monetaria», *Actualidad Económica*, año I, no. 1, segunda etapa, Lima, junio-julio de 2007.

<sup>7</sup> Para mayor información al respecto véase Área de Vigilancia del Grupo Propuesta Ciudadana: *Reporte Nacional 5 de Vigilancia de las Industrias Extractivas. Balance 2004-2006*, Grupo Propuesta Ciudadana, Lima, 2007.

Peor aún, serán las empresas las que tendrán la administración, organización y distribución de dichos fondos mediante fideicomisos y asociaciones, que, seguramente, apuntarán a generarles nuevas externalidades positivas a las propias empresas. Debe destacarse que el dólar está a 3.16 soles.

En materia de reforma tributaria, a pesar de que el Ejecutivo pidió las facultades legislativas para realizarla, las medidas dispuestas demostraron claramente su falta de voluntad política para hacer cambios de fondo. El gobierno mantuvo las exoneraciones al sector financiero: se postergó hasta 2009 la exoneración del impuesto a la renta de las ganancias de capital en la Bolsa de Valores, se mantienen indefinidamente aquellas vinculadas a los intereses que generan los bonos en el mercado nacional, así como la referida al pago del impuesto general a las ventas en la compra de pólizas de seguros de vida. Se redujo la tasa del impuesto transitorio a los activos netos que pagaban las empresas más grandes de Perú, además de bajarse el impuesto a las transacciones financieras. Las únicas exoneraciones eliminadas fueron las que «beneficiaban» a las regiones de la Amazonía: la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) que se pagaba por la compra de bienes fuera de la región, ya eliminada, y la reducción gradual, a partir de 2008, de las exoneraciones del IGV y del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de combustibles.

Resulta evidente que, con tales disposiciones, se buscaba afectar lo menos posible a quienes más ganan con el ciclo de crecimiento económico que estamos viviendo. En contraste dramático con esta situación, tenemos lo que viene ocurriendo con el gasto social. El presupuesto para Salud disminuyó, del 7,4% que tuvo el año 2006 a apenas el 6,6% (lo que aleja al partido de gobierno de su compromiso de llegar a un aumento para el sector del 3% del PIB en los próximos cinco años). La participación de la Educación en el gasto público cayó 1,8% en relación con 2006. Pero, el Sistema Privado de Pensiones (AFP, las administradoras de fondos de pensiones) fue autorizado a sacar una mayor proporción de los aportes de los trabajadores al extranjero, aunque dicha decisión no implique necesariamente una mayor rentabilidad para el afiliado ni genere empleo nacional. Por si fuera poco, con el famoso «TLC interno» para el que fuera convocado Hernando de Soto (que luego se apartó), no pasó absolutamente nada. En resumen, en materia económica, la opción gubernamental es administrar la abundancia y proteger la ganancia.

Dicha opción es más comprensible si observamos cómo el gobierno que se instaló en julio de 2006, articuló, finalmente, un bloque político (expresado en el gabinete, el Congreso y el Banco Central) que vincula el aprismo con el fujimorismo, la derecha política en Unidad Nacional (UN), los principales núcleos de poder económico empresarial y de las transnacionales más importantes que operan en el país. Aunque, en su campaña, el aprismo anunció su compromiso con el «cambio responsable», desde un primer momento ratificó la continuidad de la política económica de Toledo. El gabinete que preside Jorge del Castillo lo integran representantes

visibles de Unidad Nacional y de la tecnocracia vinculada al gran capital, desde la gestión fujimorista.<sup>8</sup>

El equipo ministerial confirmó, desde el inicio, una tendencia que se observó en la segunda vuelta electoral. La derecha, claramente derrotada en los comicios, devino parte del gobierno para asegurar las condiciones que garantizan la continuidad del modelo, y el APRA, presente en los Ministerios de la Mujer y el Desarrollo Social, Agricultura, Vivienda, Educación y Trabajo, apuntó al control de los sectores estatales que le permitieran aplicar su estrategia frente a la población en situación de pobreza y exclusión.

En su primer año de gestión, Alan García se convirtió en el pivote de una «superconvivencia». No fue un pacto formal, pero operó en la práctica –evidentemente en 2007– y ha logrado cooptar a sectores de Unión por el Perú (UPP) –organización que llevó la candidatura presidencial de Humala– en el Congreso de la República. García ha buscado atender la crisis política y social con medidas efectistas y limitadas, que no han tocado para nada ni la concentración y redistribución del ingreso, ni los problemas centrales del país.

## **2. En la política: un gobierno sin plan ni ideas, y un partido con problemas**

### **Un gobierno sin oposición política**

La polarización política y electoral que viviera el país el primer semestre de 2006 se desinfló rápidamente, y se generó un escenario paradójico. Un partido que fuera la segunda minoría en la primera vuelta –lo cual ratificó que el APRA dejó de representar al tercio del electorado nacional hace bastante tiempo y se redujo a poco más del quinto– y que es la segunda minoría en el Congreso Nacional, no tuvo problemas mayores, desde un primer momento, para ocupar buena parte del espacio de la política y definir la agenda pública por ausencia de oposición.

Por un lado, el nacionalismo entró en rápida crisis: traumática renuncia de su vicepresidente y de dos parlamentarios, ruptura de la alianza entre la Unión por el Perú y el Partido Nacionalista Peruano (UPP-PNP), escasa capacidad y falta de experiencia para actuar coordinadamente en el sistema político, falta de un proyecto claro y limitaciones ostensibles de su liderazgo. Por otro lado, la participación activa de figuras vinculadas a Unidad Nacional (UN) en el manejo de la economía, la política monetaria y la producción, así como la posterior desintegración de UN como alianza y, luego, los escándalos de corrupción en los que resultaron

<sup>8</sup> Los ministros de Economía y Finanzas, Producción, Comercio Exterior, Transportes y Comunicaciones, así como el directorio del Banco Central de Reserva aseguran la continuidad de la política económica.

comprometidos por lo menos tres de sus congresistas, determinaron, al final, la virtual ausencia de oposición.

García y el APRA estaban conscientes de que iniciaban su gobierno sin la seguridad de mayor acuerdo político en el Congreso de la República. Convencidos de la necesidad de ir construyendo «mayorías móviles», aprovecharon su experiencia,<sup>9</sup> de acuerdo con los temas a tratar, para garantizarse la mayor capacidad de negociación posible en un parlamento en el que son minoría, a diferencia de su experiencia de gobierno de 1985. Su posición mejoró notoriamente con la temprana descomposición del bloque UPP-PNP, que se inició a las pocas horas de emitidos los resultados de la segunda vuelta electoral<sup>10</sup> y siguió con el fraccionamiento de su bloque parlamentario, al escindirse la UPP bajo los liderazgos de Aldo Estrada y de José Vega. Este sector, especialmente el que lidera Estrada, terminó en un creciente acercamiento al APRA, con lo cual le garantizó el control de la mesa directiva 2007-2008. Ello dejó una bancada parlamentaria nacionalista sin proyecto ni iniciativa y con limitaciones políticas, muy distante de ser el instrumento necesario en la escena oficial para la construcción de la oposición.

En ese contexto, el reparto de las comisiones ordinarias en la primera legislatura del Congreso Nacional, que mostramos a continuación, grafica la lógica de las relaciones que alentó el partido de gobierno para asegurar su manejo del parlamento. Conviene subrayar la importancia de las comisiones que presiden tanto el fujimorismo como los representantes de Unidad Nacional, que se encuentran entre las más significativas del Congreso de la República (ver Cuadro no. 1).

La crisis de los partidos políticos, que parece no tener fin, y la ausencia de oposición, no fueron suficientes, para esconder las cada vez más visibles limitaciones del partido de gobierno. En el último año demostró que ha perdido la presencia nacional que tuvo en el pasado. Los resultados de las elecciones regionales y municipales lo muestran, bajó de doce a dos gobiernos regionales. No cuenta con los técnicos y operadores políticos que se requieren para gestionar el país, pero tampoco para atender la conflictividad social que está lejos de disminuir. Finalmente, está atravesado por conflictos de diversas fracciones que luchan entre sí por ocupar distintos espacios del gobierno.

<sup>9</sup> A pesar de ser minoría en el Congreso y de no tener representantes en cinco departamentos (Madre de Dios, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Huánuco), el partido de Alfonso Ugarte reeligió al 47% de sus parlamentarios de la gestión anterior, asegurando la presencia de cuadros «fogueados» en un escenario que tenía 76% de debutantes, lo que le otorgó una ventaja considerable.

<sup>10</sup> Nos referimos a la renuncia de su vicepresidente Carlos Torres Caro y de otros dos parlamentarios que lo acompañaron: Rocío de María González Zúñiga, de Arequipa y Francisco Alberto Escudero Casquito, de La Libertad.



**Cuadro no. 1**  
**Presidencia de las Comisiones Ordinarias del Congreso**

<b>Agrupación Política</b>	<b>Número de Comisiones</b>	<b>Relación de Comisiones</b>
APRA	7	Agraria; Constitución y Reglamento; Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas; Inteligencia; Presupuesto y Cuenta General de la República; Salud, Población, Familia y Personas con Discapacidad; Vivienda y Construcción.
UPP	4	Fiscalización y Contraloría; Trabajo; Transportes y Comunicaciones; Seguridad Social.
PNP	4	Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte; Mujer y Desarrollo Social; Producción y Micro y Pequeña Empresa; Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.
Unidad Nacional	3	Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado; Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera; Justicia y Derechos Humanos.
Fujimorismo	2	Energía y Minas; Relaciones Exteriores.
Alianza Parlamentaria	2	Comercio Exterior y Turismo; Defensa del Consumidor.
<b>Total</b>	<b>22</b>	

## La incapacidad para reformar el Estado o el incumplimiento sistemático de las ofertas electorales

Una de las mayores frustraciones generadas por la gestión de Toledo tuvo que ver con la reforma del Estado. La imperiosa necesidad de su modernización, descentralización y democratización fue postergada. Así lo entendió García pues, como candidato, ofreció un conjunto de cambios institucionales para hacerlo más efectivo y mucho más próximo a la gente: restituir la Constitución de 1979, actualizándola a las necesidades de un Estado promotor, regulador, descentralizado y democrático; institucionalizar el Acuerdo Nacional en un Consejo Nacional de Concertación; reformar el régimen presidencialista fortaleciendo la figura del Primer Ministro; aprobar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo e implementar el Centro de Planeamiento Estratégico como cabeza del Sistema Nacional de Planificación; reformar el Poder Judicial, contemplando las recomendaciones de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS) con vistas a garantizar un sistema de administración de justicia que respete la independencia del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal Constitucional; entre otros.

Se comprometió también a restablecer la bicameralidad y regular la inmunidad parlamentaria; a modernizar la administración pública; y, finalmente, ofreció consolidar la descentralización mediante la transferencia de competencias, una Reforma Tributaria integral, el desarrollo de un programa de capacitación y asistencia técnica a los gobiernos subnacionales, la incorporación del Sistema Nacional de Inversión Pública al Sistema de Planeamiento Estratégico y la integración transversal del país mediante una estrategia de regionalización a largo plazo, etcétera.

Próximos a un año de gestión, la lista de pendientes del gobierno resulta casi tan extensa y variada como las ofertas del entonces candidato. La restitución de la Constitución de 1979 no se planteó en ningún momento. Fueron sectores vinculados al nacionalismo, con más entusiasmo que ideas, quienes intentaron fugazmente este camino. Igual suerte ha corrido el Acuerdo Nacional cuya trascendencia no es ni mayor ni menor que la que tuviera en la gestión anterior, y al que en julio de 2007 le agregó la idea de un «pacto social». El Centro de Planeamiento Estratégico, a pesar de contar incluso con partida presupuestaria, duerme el sueño de los justos, acompañado por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo cuya aprobación parece distante y enfrenta la «competencia» de una Comisión encargada de la reforma del Estado, entendida esta desde un enfoque puramente administrativo,<sup>11</sup> definido por el objetivo de reducir el Estado al gobierno central, con lo cual se evidencia

<sup>11</sup> En apariencia, el encargo de dicha Comisión que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se reduce a fusionar los ochenta y nueve programas sociales y los sesenta y nueve organismos públicos descentralizados.

que se carece de una visión de conjunto y de voluntad política para hacer efectivo una real transformación de aquel.

La descentralización, por su lado, continúa bloqueada. La derrota aprista en las elecciones de noviembre pasado, ciertamente preocupó al gobierno. La desactivación del Consejo Nacional de Descentralización, apuntó, en última instancia, a mantener en el Ejecutivo, sin ningún tipo de consulta, toda la decisión sobre dicha reforma, con lo cual se impide la participación de las autoridades regionales y municipales. La posterior conformación, por iniciativa de estos, de la Asamblea de Presidentes Regionales constituye un importante intento de respuesta desde las autoridades subnacionales por articular una agenda propia, defender sus intereses y lograr una interlocución más institucional con el gobierno. Los resultados de este esfuerzo, hoy liderado por el Presidente de Junín, están aún por verse.

La anunciada transferencia de funciones y competencias no parece tener un norte claro y camina al rumbo de los distintos sectores. A estas alturas, es improbable que se concluya en 2007, máxime cuando la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo tiene vacíos muy significativos. Otro tanto puede decirse de la municipalización de la educación básica. La norma, aprobada sin ninguna consulta a los involucrados y con poca claridad sobre sus mecanismos y procedimientos, si bien alentó el entusiasmo inicial de las autoridades locales comprometidas, no resuelve claramente el tema de los recursos y, por tanto, ha provocado el desaliento en muchos de los alcaldes que dieron los primeros pasos en esa dirección.

La reforma del Poder Judicial no se ha iniciado. El respeto a su autonomía y a la de las distintas instituciones del sector, ha sido materia de más de un altercado; se ha llegado a un espectáculo lamentable –en el intento de manipular grosera y políticamente la elección de los nuevos integrantes del Tribunal de Garantías Constitucionales–, que el país ha presenciado, lo que compromete al gobierno y al conjunto de las fuerzas políticas presentes en el Congreso de la República.

La eventual regulación de la inmunidad parlamentaria viene siendo discutida en el Congreso, en medio del escándalo y las acusaciones de nepotismo, contratos irregulares de pseudo asesores y de falsos trabajadores, que alcanzan a quince Padres de la Patria (número mayor de casos que los registrados en la gestión de Toledo) de casi todo el espectro político presente en el legislativo, el partido de gobierno incluido. Ello, mientras el proyecto de modernización de la gestión del Congreso (recursos del Banco Interamericano de Desarrollo), avanza a duras penas.

En lo que respecta al anunciado proceso de reestructuración de la Defensa, desde inicios de este año están en el tapete dos temas claros: las políticas estatales de seguridad nacional, y la transparencia y el control para hacer frente a la corrupción en el sector. La remoción y el pase a retiro de la cúpula militar en diciembre de 2006, que incluyó al Comandante General del Ejército, involucrado en los malos manejos de la asignación y distribución de combustibles en su institución,

afirmó el liderazgo del Ministro del sector, supuso un rechazo explícito a la corrupción y abrió la oportunidad de un recambio generacional, lo que sin duda es positivo y crea mejores condiciones para su reestructuración. No obstante, la respuesta gubernamental a la protesta social de 2007, con la militarización del orden público y normas que garantizan impunidad en el uso de las armas de fuego cuando operen represivamente, muestra que –al apoyarse políticamente en ellas– tenderán a ignorar corruptelas o hacerse de la vista gorda.

A su vez, simultáneamente, el sector aparece liderando la planificación de la respuesta del Estado a las amenazas a la seguridad nacional que se dan en el Valle del Río Apurímac-Ene (VRAE), Putumayo, Huallaga y la Costa Norte, en una decisión que, por lo menos, es polémica.<sup>12</sup> El Plan del VRAE aprobado a inicios del año, se anuncia como un esquema multisectorial para promover el desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida de la población, asegurar la paz social, la seguridad ciudadana y propiciar la participación de la sociedad; discurso este en extremo complejo cuando el gobierno ha decidido apostar por la erradicación del cultivo de coca en dicho valle, donde un número significativo de campesinos se dedican a él y, simultáneamente, se reclaman parte de los comités de autodefensa de la zona. Cabe preguntarse, en consecuencia, por la función que se les está asignando a las Fuerzas Armadas (FF.AA.), máxime cuando se ve que el Plan Costa Norte está orientado a combatir distintos delitos (contrabando, narcotráfico, trata de personas, pesca ilegal, etcétera) que no son ni deben ser objeto de intervención militar, lo que se suma a la ya mencionada respuesta militarizada a las demandas sociales.

Preguntarse esto es tanto más pertinente en un contexto en el cual el Ejecutivo elaboró un proyecto de ley que propone un régimen transitorio hasta que el Congreso elabore un nuevo modelo de jurisdicción militar y un nuevo Código de Justicia Militar, a la vez que ofreció financiar la defensa legal de los militares acusados de violación de derechos humanos en las décadas anteriores. En este contexto, el elogio que hiciera el Comandante General del Ejército a la trayectoria del vicepresidente Giampietri (vinculado a la matanza de los penales en el primer gobierno de García), debe ser motivo de preocupación para la democracia en un escenario en el cual se está revisando la pertinencia de la ley que reestablecería la obligatoriedad del servicio militar.

La suerte de la lucha contra la corrupción no ha sido mejor que con Toledo. Más allá de múltiples frases efectistas y de la creación de una Procuraduría para investigar al gobierno anterior, encargada a un abogado de discutible trayectoria y señalado por vínculos con el APRA, el debilitamiento de la Procuraduría General en sus atribuciones y procedimientos, viene desde atrás. La eventual extradición

<sup>12</sup> Al respecto consúltese Área de Defensa y Reforma Militar, Instituto de Defensa Legal: *En la Mira. Boletín de Seguridad y Defensa*, no. 38, IDL, Lima, enero-marzo de 2007.

de Fujimori podría ser su mejor resultado, aunque poco probable no solo por un ignominioso fallo del juez Álvarez y la composición pinochetista del Poder Judicial chileno, sino por la actitud cómplice de este gobierno –aliado al Fujimorismo– en nombre de la necesidad de no «politizar» el caso y mantener la «necesaria neutralidad» para evitar la extradición del prófugo hoy retenido en Chile; renuncia vergonzosa a la soberanía nacional a quien ha delinquido en Perú.

Por último, está el asunto de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) que focalizaban su atención en la judicialización de casos representativos de violaciones de derechos humanos, la creación de un programa de reparaciones y una reforma del Estado, para vincularlo mejor con la sociedad y promover políticas inclusivas. En sentido estricto, los cuarenta y siete expedientes presentados contra miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales siguen siendo tramitados con enorme lentitud por el Ministerio Público, aunque ya se han expedido sentencias condenatorias en los casos de la desaparición de los campesinos de Chuschi y de Ernesto Castillo Páez. Las FF.AA. y el Ministerio de Defensa no colaboran en identificar a los acusados y en ponerlos a disposición de los juzgados, y los problemas con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sido agudos.

En octubre de 2006, en cumplimiento de la Ley 28592, el gobierno designó a los integrantes e instaló el Consejo de Reparaciones, encargado de elaborar el registro único de víctimas del terrorismo. Designó como su presidenta a Sofía Macher, ex integrante de la CVR y completó su composición con tres militares y policías en retiro, un empresario y dos figuras vinculadas a la defensa de los derechos humanos y los pueblos indígenas. Desde entonces, dicho organismo está dedicado a su única tarea que es la de calificar y acreditar la relación de víctimas y beneficiarios individuales y colectivos de las reparaciones. Además, en estos meses, distintos sectores gubernamentales han difundido sus listas de víctimas, insistiendo en desautorizar las cifras que aparecen en el informe de la CVR e incluso se han anunciado reparaciones a los familiares de víctimas integrantes de las fuerzas policiales y militares; se ha insinuado la disposición y el talante oficial en esta materia, y con ello se ha afectado la imagen de dicho Consejo.

En esa misma línea, y más preocupante aún, el representante del Estado peruano designado por el nuevo gobierno, se presentó en noviembre de 2006 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con un discurso que pretendía negar validez al Plan Nacional de Derechos Humanos aprobado por el gobierno de Toledo, pretextando que no tenía nivel de ley y carecía de la legitimidad adecuada, e insinuando la necesidad de la aprobación de una norma que desconocía el proceso de consulta ciudadana que le dio origen, lo cual, de hecho, obligaría a aprobarla al actual Congreso de la República.

## El talante autoritario que el gobierno no puede esconder

El manejo del tema de los derechos humanos no sorprende: el primer gobierno de García fue el de mayor número de desaparecidos de la época de la violencia y se dieron matanzas como la de los penales (casi doscientos cincuenta ejecutados), Accamarca, Cayara y Saul Cantoral, el dirigente minero. Recordemos, además, que desde el inicio de su gestión el propio Presidente intentó en repetidas oportunidades poner en agenda la pena de muerte. El rechazo mayoritario de distintos sectores políticos y medios de comunicación, así como la distancia que tomaron, frente a la medida, algunos de los miembros de su propio gabinete no parecieron suficientes. Finalmente, luego de tres proyectos distintos y de un debate estéril, el Congreso rechazó la propuesta presidencial para casos de terrorismo.

El ataque a las organizaciones no gubernamentales corrió mejor suerte. Alentado por la intolerancia del gobierno frente a las críticas de algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) a sus políticas y a distintas instituciones, acicateado por el malestar que generan varias de ellas entre las empresas mineras que se ven cuestionadas por el impacto negativo de varias de sus inversiones en el medio ambiente y por su desinterés en su entorno social y en el país, animado por los enemigos del respeto a los derechos humanos, el Congreso, luego de distintas marchas y contramarchas, aprobó la Ley 28925, que obliga a que toda ONG se inscriba en un registro especial y entregue información regular sobre sus actividades, además de otorgarle a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, la potestad de definir las prioridades de la cooperación internacional no reembolsable.

Por su parte, la judicialización de distintos conflictos sociales que viene desde atrás, ha seguido su curso, mientras las amenazas y la descalificación de diversas luchas sociales y la denuncia de conspiraciones y complotos que las expliquen, proliferan en los últimos meses, como se multiplica interesada y fácilmente el cargar la responsabilidad de varios de los problemas del país a figuras y sectores que se oponen al gobierno o podrían hacerlo. Así, presidentes regionales y alcaldes fueron responsabilizados del fracaso del denominado «shock de inversiones» y los maestros aparecen como los culpables de la crisis de la educación, a pesar de que fueron certificados como competentes por el mismo Estado que hoy los denigra y los abandona a su suerte, alentando discursos radicales como el que enarbola el sector Huaynalaya del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP). La ya mencionada pretensión de dar impunidad al uso de armas de fuego por las fuerzas del orden y la pretensión de inhabilitar a alcaldes y presidentes regionales que apoyen a sus pueblos en lucha, muestra hacia dónde van las cosas. Para colmo, uno de los secretarios colegiados del partido de Alfonso Ugarte, ha anunciado su disposición a terminar con el Tribunal de Garantías Constitucionales.

En medio de un ambiente que se va enrareciendo por momentos –recordemos el acoso al padre Marco Arana (vinculado a la defensa de las comunidades contra

la contaminación minera) en Cajamarca, vemos el poder de empresas de seguridad privadas y armadas vinculadas a transnacionales mineras. También reaparecen personajes que pasean su impunidad por el país exhibiendo su proximidad al poder, como Agustín Mantilla, inevitable recuerdo del fujimorismo, que nos conduce a preguntar por los eventuales vínculos del gobierno, o por lo menos de sectores de este, con aquel.

Peor aún, recientemente, la censura a una exhibición de caricaturas en una sala del Instituto Nacional de Cultura (INC), que terminó con la renuncia digna del funcionario encargado, fue justificada por el propio Presidente de la República quien, con ese talante autoritario que empieza a mostrar el gobierno, nos recuerda que es el jefe máximo y despide a funcionarios públicos a través de los medios de comunicación, como ocurriera con el presidente de Preinversión.

Por lo demás, es claro que este autoritarismo y la intolerancia que lo precede, se acentúa en la medida en que las críticas a la gestión gubernamental aumentan o en los momentos de mayor crisis social.

### **3. La difícil conflictividad social: ¿a Dios rogando y con el mazo dando?**

La ausencia de oposición política a inicios del régimen ha contrastado con la importante conflictividad social que se ha incrementado en el país. Entre abril y julio de 2007, se dieron cerca de doce huelgas regionales y numerosos conflictos sectoriales. Las distintas protestas sociales que se vienen sucediendo desde tiempo atrás, suponen una multiplicación de demandas de distintos grupos y sectores con una mínima articulación entre sus integrantes, que levantan exigencias sectoriales, reivindicativas y de corto plazo, y expresa un estado de ánimo y de protesta en medio del ciclo de crecimiento económico.

Hasta julio de 2007 no se dieron los primeros esfuerzos de articulación de fuerzas y los intentos de darle un sentido más amplio a las demandas. Sus primeras manifestaciones han sido la Jornada Nacional de Lucha del 11 de julio, el Paro Nacional Agrario del 11 y 12, y las huelgas de la macro región sur ese mismo mes. Recién entonces se dieron convocatorias firmadas por las principales centrales de trabajadores, de campesinos y otros sectores sociales, así como por fuerzas políticas de izquierda (PS, MNI, PCP, FA, y otros) y nacionalistas (PNP), aunque se trate todavía de esfuerzos incipientes.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo,<sup>13</sup> en mayo de este año, existían setenta y siete conflictos activos y latentes, de los cuales veintinueve (39%) se iniciaron

<sup>13</sup> Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo: *Reporte no. 39. Conflictos sociales reconocidos por la Defensoría del Pueblo*, véase en Internet ([www.defensoria.gob.pe](http://www.defensoria.gob.pe)).



este año, quince (19%) lo hicieron en 2006, quince (19%) en 2005, quince (19%) en 2004 y los tres restantes (4%), en 2003; y se observó un crecimiento sostenido de ellos, pues pasaron de apenas cuatro activos en mayo de 2006 a treinta y dos el mismo mes del presente año (ver Cuadro no. 2).

**Cuadro no. 2**  
**Conflictos sociales activos por mes**

**2006**

May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
4	6	8	10	13	13	12	13

**2007**

Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.
14	26	23	29	32

Fuente: Defensoría del Pueblo.

El 39% (treinta) de los conflictos reportados se refiere a asuntos medioambientales, fundamentalmente entre empresas mineras y comunidades campesinas; el 29% (veintidós) está ligado al cuestionamiento del desempeño de alcaldes y autoridades locales; el 10% (ocho) son conflictos entre comunidades por delimitación, propiedad o acceso a recursos; el 9% (siete) están ligados a reivindicaciones laborales; el 6% (seis) son disputas entre departamentos por demarcación territorial; y el 5% (cuatro) responden al cuestionamiento de agricultores de hoja de coca a la política gubernamental de erradicación de cultivos. Con otras palabras, en la base de los conflictos, encontramos las mismas causas que en años anteriores, y se han incrementado aquellos referidos a la inversión minera.

Las movilizaciones más significativas, por su cobertura territorial, fueron la huelga cocalera, larga y virulenta; la huelga de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (mayo de 2007), que protestó por la lógica y las condiciones de las contratas mineras; y la movilización nacional del SUTEP, paro y huelga nacional incluidos, en julio de 2007, que demandó aumentos salariales y protestó contra la Ley de la Carrera Pública Magisterial y la municipalización de la educación. La minera muestra la reactivación gremial de un sector que estaba fuertemente debilitado, que le exige al gobierno el cumplimiento de su promesa de acabar o por lo menos ordenar el tema de los *services* en un sector neurálgico para la economía del país; a un gobierno que se muestra incapaz de resolver un conflicto como el de Casapalca, que ya ha costado cuatro

muerdos, y en el cual a todas luces la arbitrariedad y el abuso de la empresa en esta materia, son tan notorios que han merecido la condena de la Ministra de Trabajo y de la propia Sociedad de Minería y Petróleo.

En el caso magisterial, se trata de la resistencia de un gremio duramente golpeado por la política de su sector. Al debilitamiento de su imagen como consecuencia de su resistencia a las pruebas de evaluación docente en 2006, cuestionadas por su intencionalidad política encubierta y por su limitada utilidad para los fines que supuestamente perseguía,<sup>14</sup> el SUTEP sufrió la decisión de la anulación de los descuentos que el Ministerio hacía para la derrama magisterial, la reducción del número de licencias sindicales, la declaración de la educación como servicio público esencial, con la consiguiente prohibición de huelgas, lo que disminuyó la capacidad de acción del sindicato. A ello se sumó la acción del gobierno de entregar préstamos para docentes desde la banca estatal, con el objetivo de atraerlos. Así, a los errores de conducción política, el principal gremio de los maestros, sumó la ofensiva gubernamental a la cual ha debido resistir en una situación muy difícil, sin que ello anulara su capacidad de movilización.

Otros conflictos más recientes, como el de los trabajadores de Topy Top (sector textil) y de Camposol y Virú (sector agroexportador, del cual se afirma que el mismo Presidente tendría intereses), abundan en la protesta sobre las condiciones laborales que los empresarios se niegan a discutir, así como los *services* y el «trabajo negro» que se generalizaron en el país en el transcurso de los últimos años.

Las protestas y movilizaciones de distintas regiones también se han multiplicado en los últimos meses. En algunos casos, promovidas por las autoridades regionales (Ancash), demandan la restitución de derechos o recursos arbitrariamente afectados por el gobierno nacional (el control del proyecto Chinecas); en otros, apoyan demandas de las organizaciones sociales de su departamento (Ucayali y las exoneraciones tributarias); lo nuevo es, precisamente, ese involucramiento que plantea el conflicto en términos distintos a los que se observaban en el pasado reciente.

Los conflictos alrededor de la coca estuvieron entre los más difíciles y complejos por las grandes limitaciones que existen para su solución y porque siguen involucrando a miles de campesinos comprometidos con la producción de la hoja, pero muy alejados de su comercio ilegal. Los paros de La Convención y los distintos valles del Huallaga, demostraron las dificultades de articulación y las diferencias que impiden hablar de un movimiento cocalero, pero expresaron también las indefiniciones y la falta de claridad de un gobierno que carece, en esta como en otras materias, de iniciativa propia, y solo sigue la política norteamericana de erradicación forzosa y tratamiento puramente policial del tema, lo que le costó incluso la renuncia de su Ministro de Agricultura.

<sup>14</sup> Sobre el particular, véase Patricia Arregui: «Educación: avanzando de sobresalto en sobresalto y sin norte claro», en OXFAM, *Pobreza, desigualdad y desarrollo*, ed. cit. (en nota 4).

En general, los conflictos se han originado con predominio en zonas rurales (69%) y en lugares en los que la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza (83%), alrededor de demandas sobre las cuales el gobierno carece de proposiciones y respuestas claras. Programas como Sierra Exportadora que priorizan la producción de palta, papa procesada, trucha, canola y biocombustible, pastos y ganadería, no pueden esconder la falta de una política agraria, ni cuentan con el presupuesto para atender la pobreza serrana que exige de espacios económicos integrados y de abundante inversión en infraestructura y servicios.

Como en el pasado reciente, los conflictos muestran tanto la incapacidad del Estado y del gobierno para prevenirlos y negociarlos adecuadamente, aprovechando la bonanza de recursos de los que dispone, cuanto la gran complejidad de la situación social del país que habla de la crisis de integración social que vivimos, porque el incremento de la protesta y su radicalización, se basan en conflictos fragmentados, sin capacidad ni pretensión de articulación y carentes de propuesta. A esta dinámica, se agregan, adicionalmente, la tendencia a militarizar y judicializar las demandas sociales y su tratamiento, mientras se ratifica la pobre interacción de los distintos actores sociales con el sistema político nacional.

#### **4. ¿Me quiere, no me quiere? La pérdida de aprobación de la gestión gubernamental y los problemas del partido de gobierno**

Como no podía ser de otra manera, las debilidades de la gestión gubernamental y el incumplimiento recurrente de algunas de sus promesas electorales, le empiezan a pasar factura. Los índices de aprobación presidencial han sufrido una caída continua y ya en junio de este año, la desaprobación era mayor que la aceptación (ver Cuadro no. 3).

En la caída de la imagen presidencial resultan particularmente notorios los casos del sur y el oriente del país que no votaron mayoritariamente por el entonces candidato de la estrella en la primera vuelta electoral de 2006. Como es obvio, el descenso de la aceptación del gobierno es mayor –de 47% a 34%– y la caída del Congreso de la República resulta indetenible, pues pasa del 39% en su mejor momento (octubre de 2006) al 18% que registra en junio de 2007.

Encuestas más recientes realizadas en julio en Lima, que devino en el principal reducto alanista, muestran la profundidad del rechazo que empieza a generar la gestión presidencial, pues obtuvo en este mes el 61% de desaprobación, con 72% de los entrevistados cuestionando el estilo autoritario del mandatario.<sup>15</sup> Una encuestadora daba apenas 24% de aprobación a García y la más optimista el 32%.

<sup>15</sup> «Conecta Asociados», 12-14 de julio de 2007, difundida por *La República*, Lima, 19 de julio de 2007, p. 8.

**Cuadro no. 3**  
**Aprobación de la gestión presidencial**

Región	Ago. 2006	Sept. 2006	Oct. 2006	Dic. 2006	Feb. 2007	Mar. 2007	Abr. 2007	May. 2007	Jun. 2007
Lima	67	62	62	56	55	63	54	52	55
Norte	69	65	58	55	53	46	55	54	49
Centro	51	45	54	46	41	49	42	44	41
Sur	53	45	47	46	42	34	37	34	24
Oriente	65	52	48	45	45	43	36	29	14
Nacional	63	56	56	52	50	50	49	46	42

Fuente: Apoyo Opinión y Mercado S.A. Elaboración propia.

En este proceso en el cual el presidente García y su gestión pierden paulatinamente en su primer año el favor de la opinión pública, influyen, ciertamente, la conflictividad social y algunas de sus decisiones, pero inciden también las limitaciones y características propias del APRA.

Como hemos señalado líneas atrás, el carácter nacional del APRA está en cuestionamiento desde la segunda mitad de la década del noventa, y se ha reducido a poco más del quinto electoral. Si bien en los comicios de noviembre fue el único partido nacional con presencia en todos los departamentos y en un número masivo de provincias y distritos, en contraste claro con Unidad Nacional que solo logró la inscripción para los comicios regionales en nueve departamentos, pasó de gobernar doce regiones a hacerlo en dos, y perdió algunas como La Libertad, Ica, Ancash y Cajamarca, históricamente vinculadas a dicha agrupación. Otro tanto se puede señalar en el nivel provincial, donde perdió diecinueve de las treinta y cuatro provincias que tenía, incluyendo Trujillo, de enorme simbolismo en su trayectoria.

La falta de operadores políticos y técnicos del partido de gobierno también resulta notoria. Fuera de Jorge del Castillo y de Mercedes Cabanillas, el partido del presidente García no ha demostrado mayor capacidad propia en su gestión. Los errores cometidos por varios Ministros –el caso de Salazar, de Agricultura, el más notorio– así lo demuestran; las posiciones polémicas y encontradas de otros como Valle Riestra y Aurelio Pastor en el caso del Tribunal de Garantías Constitucionales, abonan en el mismo sentido. Adicionalmente, las disputas y los encontronazos por el poder entre sus escasos operadores, contribuyeron a debilitarlos y a desgastar su manejo, como se pudo confirmar en el caso antes referido.

Las presiones por acceder a puestos públicos, promovidas por distintos sectores del partido, algunos con poder dentro de este (el secretario general Mulder) y otros con historia y trayectoria oscuras (Mantilla), mellaron la imagen de un gobierno que sin tener una oposición política clara, parece dispuesto a «crearla».

## 5. ¿Un futuro diferente?

Con tales elementos es difícil imaginarse el futuro. Es claro que el gobierno no tendrá problemas macroeconómicos en el corto plazo y que la articulación de una oposición social y política significativa es aún incipiente y carece de redes regionales consistentes. Tomará tiempo y mucho esfuerzo ir consolidándola en los próximos meses. La conflictividad social, sin embargo, puede incrementarse en los tiempos venideros y con ella la tentación autoritaria de una gestión que ya ha dado muestras importantes de su intolerancia. Las presiones de la derecha, rápidamente recuperada del «susto» de junio de 2006 y la impermeabilidad de las grandes empresas frente al país, sus problemas y desafíos, buscarán seguramente mayores ventajas alentando ese camino.

Los partidos regionales, que podrían parecer estar en un camino de consolidación y fortalecimiento a la luz de algunos de los resultados de noviembre pasado (Junín, San Martín, Cajamarca, etcétera), no están todavía en condiciones de lograr una articulación nacional, como no lo están ni lo pretenden los distintos sectores sociales que realizan demandas desde sus intereses particulares. Más aún, sus propias gestiones pueden colocarlos en alguna dificultad si no se articulan bien con los movimientos sociales.

### El discurso presidencial del 28 de julio de 2007: el segundo año

Julio de 2007 fue un mes importante que evidenció algunas de las tendencias antes reseñadas. La conflictividad social llegó a su momento más alto con la Jornada Nacional de Lucha del 11 de julio y el Paro Nacional Agrario del 11 y 12, junto a las huelgas regionales en el sur del país. Distintas protestas regionales y de sectores puntuales –los pequeños agricultores de Apurímac, por ejemplo– coincidieron con la paralización del SUTEP y alimentaron un proceso de movilización social que mostró, una vez más, la enorme distancia entre la política y la fragmentada agenda de la sociedad; el gobierno respondió torpe y provocadoramente aprobando una legislación que castiga a las autoridades regionales y locales que se comprometan con las protestas populares, y fortaleció el papel represivo de las Fuerzas Armadas y Policiales, en medio de las demandas de orden social de distintos sectores empresariales.

La elección de la nueva mesa directiva del Congreso ratificó la vinculación del partido de Alfonso Ugarte con el fujimorismo, pero también la endeblez de buena

parte de la oposición (sectores de UPP) que fue cooptada, con facilidad, por el gobierno.

En este contexto, el discurso presidencial del 28 de julio, resultó bastante expresivo. En medio de un mar de cifras que presentaban las metas que se traza para 2011 y de nuevos compromisos para el futuro inmediato –el funcionamiento del CEPLAN, por ejemplo–, Alan García se disculpó con el magisterio por los calificativos que le endilgó durante su huelga, a la vez que «encausaba» las futuras demandas hacia los niveles subnacionales de gobierno dado que estos «cuentan hoy con los recursos para atenderlas».

En otras palabras, el mandatario ratificó su desconexión con una parte de la realidad y con la mayoría del país, como lo hiciera el parlamento, días antes. Los problemas de fondo permanecieron intocados y la fe en el modelo económico fue implícitamente ratificada. En este escenario, es evidente que el malestar y los conflictos sociales seguirán expresándose, pues antes que por un talante negociador, el gobierno apuesta por un autoritarismo mayor y por la «descentralización» de las responsabilidades frente a la protesta. En resumidas cuentas, se avecinan tiempos difíciles en el país y una eventual radicalización de las protestas, ya que todavía no se han abierto los cauces institucionales y la conducción política necesarios, pero también parece que comienzan a encenderse algunas luces en el horizonte.

EDUARDO BALLÓN es antropólogo e investigador principal del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO). Especialista en movimientos sociales y reforma del Estado, tiene diversas publicaciones en esas y otras materias. Ha sido presidente de la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP).



## Un nuevo período y sus tareas

JOAQUIM SORIANO Y RAÚL PONT

### **Contexto internacional y regional de la coyuntura brasileña**

La coyuntura brasileña de 2007 se inserta en un contexto general y regional muy especial. En Venezuela, después de ocho años del gobierno de Chávez, la Revolución Bolivariana comienza a discutir e implantar reformas socio-económicas estructurales (estatización de sectores económicos estratégicos, control de los trabajadores sobre las empresas, democratización de los medios de comunicación no renovando concesiones para los grandes monopolios de la televisión, etcétera) intentando ir más allá de las políticas sociales desarrolladas en los últimos cuatro años (las misiones), y abre la discusión sobre lo que sería el «socialismo del siglo XXI». En Bolivia, el gobierno de Evo Morales avanza en un programa de estatización de sus recursos energéticos, desarrolla políticas sociales que benefician las poblaciones marginadas y despliega una dura lucha en la Asamblea Constituyente para «refundar el Estado» de forma que incluya a las comunidades indígenas y campesinas que son la mayoría de la población. Esos son los dos procesos de punta en América Latina, pero no serían posibles sin que parte importante de la región, Brasil incluido, principalmente, no se estuviera moviendo en un sentido progresista.

La derrota del ALCA y el hecho de no implantarlo en 2005 –como estaba previsto en el cronograma de los Estados Unidos–, los avances del MERCOSUR (con el proceso de integración de Venezuela y ahora de Bolivia y posiblemente de Ecuador, y con la aplicación de las primeras medidas dirigidas a revertir las asimetrías entre los países) y la definición de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) como proyecto de bloque político que supere las limitaciones que tenía la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN), conforman la base para nuevos tipos de acuerdos que posibiliten un mayor avance, como es el caso del ALBA (Alternativa Bolivariana para la América), los referidos a la comercialización de energía entre países de la región y el Banco del Sur que concreta la superación de la lógica neoliberal en las relaciones económicas, comerciales y financieras entre nuestros países.





Jamás, en los doscientos años de historia independiente, nuestra región estuvo tan fuera del orden imperial. Y eso ocurre ahora, cuando el imperialismo norteamericano concentra poderes de intervención unilateral sobre todo el planeta como nunca otro imperio consiguió antes.

Por eso, está en América Latina una de las principales claves para derrotar al imperialismo norteamericano.

Mas no se trata de un proceso político regional homogéneo, ni podría serlo. Estamos hablando de países muy diferentes, sea por sus formaciones económico-sociales, por sus dimensiones geográficas, por su composición de clases sociales, por las distintas estructuras étnicas, por las historias nacionales disímiles, en lo que respecta a las organizaciones partidarias y sociales de la izquierda, etcétera.

De esas diferencias han emergido diversas «velocidades» en los procesos nacionales. El más radical de todos parece ser el de Bolivia, pero ese país viene de una profunda crisis política (con dos estrepitosas caídas de presidentes desde 2000 provocadas por movilizaciones populares) y tiene una especificidad étnica: los pueblos indígenas-campesinos son mayoría en la población y hasta ahora han estado económica, social y políticamente marginados. La elección de Evo Morales, la Constituyente en curso, las políticas de gobierno, son pasos para «refundar» el Estado y el país con el propósito de incluir a las mayorías hasta hoy marginadas por el sistema.

El proceso venezolano ha abierto también nuevas iniciativas: lanzó los acuerdos ALBA, reabrió la discusión sobre el «socialismo del siglo XXI», entre otros temas clave. También es el más antiguo de esta coyuntura, ya que el primer mandato de Chávez se remonta a 1999. Las «misiones» solo comenzaron como respuesta a los intentos de la derecha y de los Estados Unidos de derribar el gobierno en 2002-2003. Los cambios estructurales están siendo discutidos ocho años después de iniciada la Revolución Bolivariana. Y se trata también de un caso «único» o «singular», porque en ese país toda la economía gira en torno de la producción de hidrocarburos (petróleo y gas) que está en las manos del Estado.

La burguesía y la clase media venezolanas siempre fueron parasitarias de esa actividad estatal (tal grado de dependencia de una burguesía nacional en relación con una empresa estatal no se da en ningún otro país de la región). Lo inédito del presidente Chávez es que en un momento de subida del precio del petróleo, su gobierno destinó la creciente renta petrolera a las políticas sociales en beneficio de las mayorías.

Incluso un proceso que parece el más moderado y titubeante: el gobierno del presidente Tabaré Vázquez en Uruguay, tiene sus avances. Comparado con los otros países de la región con gobiernos progresistas, Uruguay es el que ha registrado mayores progresos en el mundo del trabajo y en el sector sindical, que ha tenido un mayor refuerzo en su organización, y esto no es poco si consideramos que la destrucción de derechos y organizaciones de los trabajadores era la directriz principal de la fase neoliberal.

En resumen, estamos diciendo que diversos países de América Latina sitúan la región en una nueva etapa histórica que cuestiona la dominación del imperio, aunque al mismo tiempo ese proceso no es ni lineal ni homogéneo cuando se analizan los diversos casos nacionales. En todos ellos se trata, entonces, para las izquierdas sociales y partidarias, de descifrar la táctica que permita defender lo que ya fue conquistado y presionar y movilizar para que los procesos continúen avanzando.

Ese es el desafío en la región, ese es el desafío en Brasil. A continuación analizaremos cómo ese escenario se presenta en 2007 y qué balance hacemos de la coyuntura reciente en el país (con el foco puesto en lo realizado durante el primer gobierno de Lula y en aquello que está en curso en su segundo mandato).

### Para avanzar, otra correlación de fuerzas

Las crisis que han vivido el Partido de los Trabajadores (PT) y el gobierno de Lula en 2005 tuvieron dos resultados positivos inesperados. El «caso del casero»<sup>1</sup> derribó al ministro Palocci, líder del núcleo duro conservador interno de presión sobre el gobierno del presidente Lula. Y con la caída de José Dirceu, se desarticuló el esquema de control interno sobre el partido que él y su grupo habían construido desde 1995.

En esa crisis, los principales movimientos sociales del país –el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), la Central Única de Trabajadores (CUT), la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), la Marcha Mundial de Mujeres y otros– mostraron una gran madurez y coraje político al salir en defensa del proyecto popular contra la intención de la derecha de aprovecharse de la crisis para «acabar con esa raza», como dijo un senador de la derecha, a la vez que exigían medidas duras contra aquellos que habían cometido desvíos éticos.

Su eje principal fue: la mejor forma de defender el proyecto popular es avanzar en la coyuntura, y por tanto el gobierno debería dar señales claras de cambio en su política económica. Esa iniciativa de los movimientos sociales acumuló fuerzas para la lucha que se aproximaba. A comienzos de 2007, el «núcleo duro» del gobierno poco o nada tiene que ver con el que se había instalado en Brasilia al inicio del primer mandato (2003), pero la lucha con Alckmin<sup>2</sup> en la segunda vuelta obligó a enarbolar nuevamente banderas (como las críticas a las privatizaciones) que

<sup>1</sup> El «caso del casero» hace referencia a la denuncia y escándalo que llevó a la dimisión del hasta entonces poderoso ministro de Hacienda, Antonio Palocci. Se le acusó de haber utilizado su cargo para investigar ilegalmente la vida de una persona que había declarado haberlo visto en una casa (que Palocci negaba haber frecuentado) donde se reunían *lobbistas* para fiestas con prostitutas, arreglar negocios y otros actos ilícitos. (*Nota del revisor*).

<sup>2</sup> Geraldo Alckmin, candidato presidencial por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), principal partido neoliberal de Brasil. (*Nota del revisor*).

habían sido dejadas de lado por el documento Carta a los Brasileños que Palocci y su grupo escribieron –para tranquilizar a banqueros, al Fondo Monetario Internacional (FMI), etcétera– y que Lula asumió en la campaña de 2002.<sup>3</sup> El Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) lanzado por el gobierno de Lula en 2007 no habría sido posible con Palocci en el Ministerio de Hacienda. No es casualidad que por primera vez en catorce años no esté entre los altos cargos del gobierno federal ningún economista de la Pontificia Universidad Católica (PUC) de Río de Janeiro (principal centro del pensamiento económico conservador del país).

No obstante, el PAC es tanto expresión de una nueva configuración más *progresista* del segundo gobierno de Lula –ya que en él, el Estado, y no el mercado dominado por las grandes corporaciones, retoma la función de liderar, orientar y definir prioridades para el desarrollo nacional– como de sus *limitaciones* –no contiene un enfoque prioritario de cambiar la estructura productiva brasileña para priorizar la pequeña y mediana producción de cooperativas, las empresas autogestionadas, una visión de crecimiento sustentable y volcado a la expansión del mercado interno y regional con la promoción de trabajo de buena calidad y bien remunerado, etcétera– y *contradicciones* –como las medidas contra el funcionariado público que buscan contener sus demandas por la recuperación de sueldos, implantación de planos de carrera, contratación de funcionarios, etcétera.

Las potencialidades de ese nuevo escenario, corregidas las limitaciones y contradicciones, son mayores todavía si consideramos que el punto de partida no está ya dominado por los obstáculos dejados por la herencia maldita del gobierno de Fernando Henrique Cardoso en 2002. De hecho, las medidas que en el mandato anterior escaparon de las recetas conservadoras –como la ampliación del acceso popular a créditos más baratos en el campo y en la ciudad, la universalización de los programas de complementación de renta, la recuperación continua del salario mínimo– ya fueron consideradas satisfactoriamente por la economía y por la población, y han ayudado tanto como un escenario externo favorable a algunos resultados positivos, por ejemplo en materia de mejora de la distribución de renta. Es de esperar que en el próximo período eso pueda ser incrementado.

El gobierno brasileño aliado a los del MERCOSUR y a Venezuela contribuyó a hacer inviable el proyecto norteamericano del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), al mismo tiempo que hubo avances en sus formulaciones en relación con el MERCOSUR y la UNASUR, aunque todavía muy insuficientes.

---

<sup>3</sup> La Carta a los Brasileños es el documento que a mediados del año 2002 fue asumido por la campaña de Lula como forma de «tranquilizar a los mercados» y así enfrentar la crisis con la que la derecha pretendía impedir la victoria electoral de la izquierda. Presentada a debate en el partido inicialmente como una fase de «transición», Palocci intentó convertirla en directriz definitiva. (*Nota del revisor*).

Entre los déficits de la política exterior destacan dos:

- Brasil continúa liderando las fuerzas militares de la MINUSTAH enviadas por la ONU a Haití, contra la cual hay diversas denuncias por violación de los derechos humanos, y que no tiene liderazgo en materias de interés para el desarrollo de esa nación. Cuenta a su favor, sin embargo, que su presencia garantizó la asunción del candidato René Préval, contrario a los intereses de los Estados Unidos en el país y aliado al bloque progresista de la región.
- La reciente negociación del gobierno de Lula con el de Bush, referida a acuerdos para la producción de agrocombustibles –que los inversionistas del sector del alcohol en Brasil vislumbran como un gran negocio en expansión para los próximos años– no consideró las críticas a los niveles de consumo de energía del «modo de vida norteamericano» que constituye una amenaza al equilibrio ambiental mundial.

En el campo, ha avanzado mucho el apoyo financiero y técnico a la pequeña producción, las políticas de reconocimiento de derechos de las mujeres agricultoras, y los asentamientos de *sin tierra* en el norte y nordeste. Continúa pendiente la actualización del índice de la productividad agropecuaria, medida sin la cual las desappropriaciones en las regiones del sur y sudeste son inviables.<sup>4</sup>

En la sanidad pública, la quiebra de la patente de uno de los remedios contra el SIDA fue una buena noticia, así como la defensa del ministro de Salud (y del presidente Lula) de que los abortos tienen que ser tratados como un problema de salud pública: son medidas que evidencian una vocación progresista.

En el área laboral, el gobierno llegó a un acuerdo con las centrales sindicales para que obtengan su personería jurídica, un avance estratégico si consideramos que desde la década del treinta del siglo pasado no se reconocía el derecho a la organización de centrales sindicales (solo estaba reconocido apenas hasta la confederación por rama).

Al mismo tiempo que defendemos la estratégica iniciativa del gobierno –el veto a la Enmienda 3 (que precariza las relaciones de trabajo<sup>5</sup>)–, criticamos la propuesta de un órgano gubernamental de regulación del derecho de huelga del funcionariado público, y que no le reconoce el derecho a la negociación colectiva.

<sup>4</sup> Ese «índice de productividad» define si una tierra es «improductiva» y puede ser expropiada o no. El actual índice fue definido en los años 1970. (*Nota del revisor*).

<sup>5</sup> La Enmienda 3 es una ley aprobada por la mayoría conservadora del Congreso Nacional que pretende impedir que los fiscales apliquen multas a las empresas que contratan fraudulentamente trabajadores como si fueran «empresas unipersonales» (lo que significa que no tienen ningún derecho laboral reconocido). El presidente vetó esa ley y por otro lado los sectores patronales presionan para que el Congreso derribe el veto. (*Nota del revisor*).

En la comunicación, el proyecto de red de TV pública tiene un sentido estratégico para iniciar la democratización de la información y del debate, en una sociedad donde el sistema de comunicación es casi un monopolio privado en manos de la derecha.

La aplicación continuada, reforzada y renovada de los programas en áreas como educación e inclusión social, reforma agraria, agricultura familiar, justicia, medio ambiente, política exterior, compone el conjunto de elementos de avance coherentes con la nueva situación creada por la lucha político-electoral en 2006.

Una nueva agenda para el país está en formación. Hay que hacer todos los esfuerzos para configurar una agenda posneoliberal. Ese proceso pasa necesariamente por un debate público, por relaciones democráticas y constructivas con los movimientos sociales y por un amplio diálogo con los sectores interesados en la superación del neoliberalismo. Y afronta también conflictos, en el ámbito nacional e internacional, frente a los grandes intereses que se beneficiaron con las políticas neoliberales.

### **Correlación de fuerzas, hechos e hipótesis**

La lucha entre Lula y Alckmin en la segunda vuelta fue probablemente uno de los enfrentamientos electorales más politizados desde 1989, y deshizo varios mitos que dominaban la política en los últimos años. Quedó demostrado que luchas históricas de la izquierda (como las realizadas contra las privatizaciones, contra el ALCA y contra la alineación a los Estados Unidos, y a favor de la integración regional y de las relaciones Sur-Sur como prioridad de política exterior) tienen audiencia electoral. Una lucha electoral se puede ganar con debate político de contenido y no simplemente con maquillaje de *marketing*. Las elecciones pueden ser también un momento alto en la política y no solamente manipulación de imagen de candidatos por parte de especialistas de *marketing* político. La polarización ideológica desempeñó un papel clave en esa disputa electoral. Ese nuevo contexto permitió el reencuentro de la campaña electoral con la movilización de la militancia de base de los movimientos sociales que venían reivindicando esa corrección de rumbo desde la crisis de 2005. Ese «ajuste» en la campaña de Lula dio resultados, hasta el punto de que el candidato de la derecha, Alckmin, perdió más de un millón de votos entre la primera y la segunda vueltas, ¡un hecho histórico!

Hay una discusión, poco desarrollada hasta el momento, referida a la participación popular y la democracia participativa en la esfera federal. Va más allá de la legitimidad popular de Lula, de la apertura de canales sectoriales de participación y del reconocimiento del movimiento social. Esas conquistas no son pequeñas, pero no sustituyen la construcción de un espacio público de participación en las decisiones políticas de ámbito nacional ni explican su ausencia. El tema continúa siendo relegado a un segundo plano. Y no se trata solo de remitirlo a la «reforma

política»: esta también depende de que se avance en la democratización de la sociedad.

La participación popular continúa siendo decisiva para afrontar los grandes temas nacionales. La ausencia de un plan estratégico en esa dirección puede desperdiciar o neutralizar el inmenso potencial popular revelado en las últimas elecciones.

En un proceso gubernamental con avances, pero también con contradicciones, la presencia del partido en el gobierno y en la lucha social será mucho más necesaria, pero es preciso tener un partido con una plataforma para el período actual. Ese es el esfuerzo contenido en el proyecto de revolución democrática presentado por nuestra tesis al III Congreso del PT.<sup>6</sup>

El punto de partida de una revolución democrática es, justamente, el despertar para la política de amplios sectores que se beneficiaban con las medidas sociales que estancó el neoliberalismo, los cuales se han situado junto al gobierno del presidente Lula en busca de nuevas conquistas. Y más conquistas significan nuevos conflictos y capacidad para resolverlos de manera favorable. Dirigir esos conflictos a la arena parlamentaria –donde están mayoritariamente los intereses de la clase dominante– o a una negociación con las élites implica una fuerte contención de todo el potencial de cambios.

Una coyuntura más favorable no produce necesariamente una política de cambios de las relaciones de poder. Para que eso acontezca es preciso construir esa política.

Esa constatación nos devuelve al punto de partida de todo análisis de coyuntura basado en los criterios de la lucha de clases: las elecciones por sí solas no resolverán los problemas que no fueron resueltos por la acumulación política de las movilizaciones, organización y lucha de las clases dominadas y explotadas. Sin esa acumulación, la izquierda que accede al gobierno queda rehén de las presiones del gran capital, de los medios de comunicación masiva burgueses y del conservadurismo. Es necesario que la actividad política autónoma de los sectores explotados y oprimidos presione por la aplicación de una agenda basada en los objetivos de la clase trabajadora y del pueblo en general.

La ilusión gubernamental llegó a colocar en segundo plano, en el período anterior, esa perspectiva y generó aquella tendencia a «esperar que el gobierno resuelva», pero debemos también pedir a los sectores de izquierda del gobierno que

---

<sup>6</sup> Tesis presentada al III Congreso del PT por la corriente Democracia Socialista, por intelectuales de prestigio del partido como la filósofa Marilena Chauí y los sociólogos Ricardo Azevedo, Gabriel y Amelia Cohn, y por sectores que rompieron con el antiguo «campo mayoritario» (ver nota 7) liderados por los ministros de Justicia, Tarso Genro y de Derechos Humanos, Paulo Vannucchi, y por el gobernador de Sergipe, Marcelo Deda. Puede consultarse el texto íntegro en Internet (<http://www.mensagemaopartido.org.br>). (Nota del revisor).



señalen clara y públicamente su voluntad de unir esfuerzos con las reivindicaciones que vienen desde la sociedad organizada y en movimiento.

Esa táctica de presión sobre el gobierno por la izquierda y desde la movilización directa, sin embargo, no debe confundirse con la oposición al gobierno. Nos oponemos a políticas conservadoras que emanen del Congreso (por ejemplo, la Enmienda 3) o de sectores del gobierno (como la prohibición de las huelgas en el servicio público), aunque reconocemos que es en el escenario de este gobierno donde es posible presionar por avances en la superación de la etapa neoliberal en el país y en la región. Reconocemos que hubo progresos, todavía tímidos, en la fase anterior –que sectores importantes de la población valoran y defienden–, pero entendemos que en la etapa actual es necesario una mayor determinación política para caminar rumbo a los cambios estructurales que el país necesita.

### El III Congreso del Partido de los Trabajadores

El III Congreso es profundamente democrático no solo porque comienza con doce posiciones inscritas, que revelan un amplio abanico de puntos de vista y realidades regionales del PT, sino porque el marco interno del partido está bastante distante de posiciones cristalizadas, con una mayoría a priori definiendo los rumbos. Ninguna de las doce tiene mayoría. Además, hay un importante movimiento de líderes asumiendo nuevas posiciones, efectuando encuentros diferentes y realizando un enorme esfuerzo para construir una novedosa síntesis de ideas.

El III Congreso debe ser el tiempo de nuevos encuentros entre los petistas. En ese sentido, es el palco privilegiado para construir los fundamentos que le permitan al PT ser el partido líder de la revolución democrática. Esa es una condición fundamental para los históricos cambios que Brasil puede vivir en el segundo mandato del gobierno de Lula.

La idea y perspectiva de una revolución democrática deben reorientar la actuación del PT a partir de su III Congreso, por cinco razones fundamentales.

En primer lugar, esa idea permite que el PT tome posición y reflexione más allá del segundo mandato del gobierno del presidente Lula, pues proyecta en su imaginario y en el de la sociedad la necesidad de continuidad. Aunque se relacione constructivamente con la agenda del segundo gobierno de Lula, sería un gran error llevar al III Congreso los avances y los límites del programa de gobierno (como hace en gran medida la tesis *Construyendo un nuevo Brasil*<sup>7</sup>): la renovación

<sup>7</sup> Tesis presentada por lo que fuera el antiguo «campo mayoritario» (liderado por José Dirceu) que, sin embargo, ya en la última elección interna obtuvo solo poco más del 40% de los votos. Las doce tesis se encuentran en el sitio web del partido ([www.pt.org.br](http://www.pt.org.br)). (Nota del revisor).



del programa histórico del PT para Brasil no debe autolimitarse a lo que parece ser hoy lo posible en el segundo mandato.

Si para gobernar es preciso tener en cuenta la correlación de fuerzas, cabe al PT hacerla avanzar a favor de la izquierda. Y, si el programa histórico del PT se ajusta al programa de gobierno, rebaja su función histórica a un mero instrumento de apoyo institucional, con lo que pierde su necesaria autonomía crítica y voluntad de movilización social.

En segundo lugar, la perspectiva de revolución democrática crea un campo propicio para la solución de los obstáculos que llevaron a la crisis más grave de la historia del PT y abrieron el flanco para que las fuerzas neoliberales y conservadoras actuaran de manera fuerte y ofensiva para desestabilizar el gobierno de Lula. Sitúa el desafío democrático en el centro de las tareas del PT en el próximo período, como la recuperación de una ética pública, la prioridad de la reforma política, la lucha contra la corrupción en la construcción de los instrumentos de una opinión pública plural y democrática, la participación popular y el control social en el gobierno federal.

Esa lucha abierta y central por los fundamentos de una legitimidad democrática para un nuevo tiempo de cambios se centraliza en la idea de la construcción de una nueva esfera pública, integrada por el Estado profundamente democratizado, la regulación pública, democrática y universal de los intereses privados y la generalización de las formas participativas y asociativas de autogobierno.

En tercer lugar, la noción de que estamos dentro de una revolución democrática en el actual período histórico supera, desde la base, una visión etapista que limita los horizontes del PT a lo inmediatamente posible y posterga para un futuro indeterminado las dimensiones socialistas de la experiencia de gobernar Brasil. En la actualidad, sin un principio democrático de transición al socialismo, pensado en un tiempo histórico mayor, el PT quedará prisionero entre su identidad socialista democrática y su experiencia real, guiada por los pragmatismos del momento.

Es preciso ir creando desde ahora la legitimidad para las transformaciones estructurales, democráticas y populares en el campo de la propiedad, de la renta y del poder. La reforma agraria y la reforma urbana demandan la discusión pública de la función social de la propiedad; una reforma tributaria progresiva es vital en un país con una escandalosa concentración de la propiedad, de la riqueza y de la renta. La superación del desempleo estructural, la distribución de la renta, la radicalización de las políticas de inclusión social, la conquista de derechos iguales para las mujeres y los negros, y un nuevo contrato ecológico con la naturaleza no ocurrirán sin una democratización radical de poder en la sociedad y, simultáneamente, democratización del Estado.

En cuarto lugar, la idea central de revolución democrática permite establecer un nexo común de sentido, una coherencia, una afinidad, una aptitud complementaria

y solidaria entre la discusión del programa para Brasil, el debate sobre el socialismo y los cambios organizativos en la vida del partido. El PT necesita cambiar para asumir plenamente el liderazgo de la histórica revolución democrática; la recuperación de una cultura socialista democrática es necesaria para viabilizar, en este período histórico, la fusión entre las identidades del socialismo democrático y las formas populares de la conciencia y de la cultura brasileña.

Finalmente, en quinto lugar, la conciencia de que estamos insertos en una revolución democrática es la más alta forma de establecer una conjunción de destinos entre las fuerzas de izquierda y progresistas, los avances de la conciencia popular y de los trabajadores en Brasil. Después de tantos años sombríos, nos atrevemos a poner en el centro de la vida del país el principio de la esperanza contra el miedo a los cambios. En el momento más alto de nuestras energías utópicas, cantamos en las calles «sin miedo a ser feliz».<sup>8</sup> Esa fraternidad petista es la que necesitamos ahora para superar las fuerzas adversas y las inercias que puedan trabar los avances del Partido de los Trabajadores en su III Congreso.

*Texto traducido del portugués por Claro Diego López y revisado por Gustavo Codas.*

JOAQUIM SORIANO es secretario general del Partido de los Trabajadores brasileño y miembro de la Coordinación Nacional de la tendencia petista Democracia Socialista.

RAÚL PONT es diputado por el Partido de los Trabajadores del estado de Rio Grande do Sul, miembro de la Dirección Nacional de ese partido y también de la Coordinación Nacional de la tendencia petista Democracia Socialista.

---

<sup>8</sup> Slogan y estribillo de la música que marcaron la campaña electoral del PT en 1989. La frase ha sido muy usada incluso en las disputas posteriores. (*Nota del revisor*).



## La defensa de la soberanía y del desarrollo en la política exterior de Lula

JOSÉ REINALDO CARVALHO

La política exterior del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en el ejercicio de su segundo mandato desde el 1ro. de enero de 2007, es muy bien valorada por las fuerzas que lo apoyan. En el mundo académico, en los medios diplomáticos y, en general, en los sectores de actividad que interactúan más fuertemente con el exterior –salvo uno claramente identificado con la orientación conservadora y neoliberal–, la política exterior actual encuentra respaldo. A diferencia de la política económica y financiera, ortodoxa y conservadora, que suscita oposición de las fuerzas de izquierda, inclusive de las que están en el gobierno, y del movimiento sindical y popular, e incluso de la política general, donde el gobierno se revela como una fuerza centrista, moderada y conciliadora con la clase dominante, lo que también hace que surjan muchas contradicciones con las fuerzas progresistas, la política exterior tiene un gran consenso. Y, aunque distante aparentemente de lo cotidiano de las personas sencillas, se va convirtiendo en popular, porque la población constata que Brasil está cambiando la forma de introducirse en el mundo, que el país es más respetado en el exterior y que desempeña un papel más activo y de mayor importancia en la vida internacional.

Se generaliza la opinión de que la política exterior es positiva, exitosa, al servicio de la lucha por el desarrollo nacional y la defensa de la soberanía, en un mundo lleno de amenazas de expoliación económica e imposiciones políticas por la globalización financiera y la política de las grandes potencias, principalmente del imperialismo norteamericano.

En esta materia, es nítido el antagonismo con las fuerzas conservadoras, neoliberales y pro imperialistas de la sociedad brasileña, que no dejan de criticar el «antiamericanismo» de la política exterior de Lula, la alianza del brasileño con los presidentes Chávez y Morales, su amistad con Fidel, el «tercermundismo» de la acción internacional, supuestamente presente en el aumento de contactos con África y el Medio Oriente, la posición de poner en un segundo plano a los aliados



tradicionales –los Estados Unidos y países europeos– y la preferencia por las potencias medianas y emergentes. En general, dichas críticas introducen una fuerte dosis de intereses políticos, algunos hasta de naturaleza mezquina, relacionados con la ocupación de cuotas de poder dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y otras esferas en Brasilia. Objetivamente, se apartan de la realidad, pues la política exterior del presidente Lula no es «tercermundista», ni «antiamericana». Hay, como trataremos de demostrar, importantes diferencias de forma y de fondo con la política de los Estados Unidos e innumerables contradicciones entre los dos países, pero los intercambios de visitas entre los presidentes Lula y Bush, así como las declaraciones y gestos de ambos ya han demostrado que la opción no es la confrontación en las relaciones entre Brasil y los Estados Unidos.

### Características de la política exterior brasileña

Un análisis objetivo revela que el gobierno de Lula consolidó y profundizó las líneas de una política exterior autónoma, pacifista y democrática, ideológicamente vinculada al desarrollo nacional, a las mejores tradiciones de la diplomacia brasileña, que incorporó hace décadas los principios de la autodeterminación y de la no intervención, principios que están reflejados en el artículo IV de la Constitución de la República, promulgada en 1988. Sobre la base de la percepción del papel de Brasil en el mundo, no como país dependiente y subordinado a los dictámenes de los Estados Unidos, sino como nación soberana, aunque aún vulnerable, con voluntad e intereses propios, en transición hacia el *status* de potencia emergente, el Itamaraty<sup>1</sup> en el gobierno de Lula diseñó y pone en práctica una política exterior «activa y altiva», en la expresión de su conductor, el ministro de Relaciones Exteriores, Celso Amorim. El elemento principal de la política exterior es el proyecto de desarrollo nacional, concebido hoy en el contexto de una política de integración continental y de formación de un bloque alternativo a la hegemonía de la gran potencia. En las condiciones del mundo contemporáneo, Brasil escogió por la opción, simultáneamente ideológica y pragmática, del universalismo y el multilateralismo, y rechazó en la práctica una especie de «destino manifiesto» de país eternamente atado por el panamericanismo, vale decir, que desempeña el papel de socio menor de los Estados Unidos, al cual solo se le ha permitido un tipo de «desarrollismo» asociado, nunca un desarrollo virtuoso, socialmente progresista y políticamente independiente en la perspectiva del socialismo.

En lugar de la pasividad y de la expectativa de las decisiones del centro, el Brasil de Lula se llenó de iniciativas y ha optado por la aseveración, pues comprende

<sup>1</sup> El Palacio de Itamaraty en Río de Janeiro fue la primera sede del gobierno republicano, durante nueve años. Después, por siete décadas, desde 1899 hasta 1970, fue la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. La identificación de los diplomáticos con el palacio hizo que el nombre Itamaraty se convirtiera en sinónimo de la cancillería brasileña.

cómo la acción internacional puede condicionar el éxito de un nuevo proyecto nacional de desarrollo, aún en gestación. El folklore político y el humor nacional son pletóricos en críticas irónicas al activismo internacional de Lula y de su canciller, pero de sana conciencia nadie niega las ventajas que Brasil ha logrado en los cientos de viajes e intervenciones que ambos hicieron en encuentros bilaterales y multilaterales, de las nuevas asociaciones estratégicas y de las importantes responsabilidades que el país va asumiendo internacionalmente. Una política exterior tímida, protocolar, centrada en darle prioridad a las relaciones bilaterales con los Estados Unidos y subordinada a los intereses de esa potencia, pondría en riesgo la propia independencia nacional. Esa percepción llevó a la diplomacia brasileña al universalismo y al multilateralismo que se tradujeron, a nivel de lineamiento institucional, en la lucha por la reforma de las Naciones Unidas, por democratizar y reestructurar sus instancias y por cambiar la composición del Consejo de Seguridad, con el propósito de conquistar ahí su espacio con derecho al veto.

Donde se observó más el universalismo y el multilateralismo del gobierno del presidente Lula fue en la posición política general, referida al discurso y a la agenda adoptada en la elección de nuevas alianzas estratégicas, pues se le da prioridad a la integración continental y a nuevos enfoques para el comercio internacional. En esos puntos se concentra el puñado de contradicciones con la política de los Estados Unidos.

### **En defensa de la paz, contra la guerra imperialista**

Lula asumió el gobierno durante el auge de los preparativos de la «guerra preventiva» de los Estados Unidos contra Irak, después del ultimátum lanzado por George W. Bush a todos los países, los cuales deberían escoger entre «luchar contra el terrorismo», según los criterios estadounidenses, o alinearse en el papel de los adversarios de esta potencia, con el riesgo de ser mancillados como países tolerantes ante el terrorismo internacional. Bush llegó a hacer una llamada telefónica al Palacio del Planalto, solicitando el apoyo de Lula a la acción militar que estaba por emprenderse. El presidente brasileño rechazó la guerra, reafirmó el compromiso de Brasil con la paz mundial, la autodeterminación y la no intervención. En la antevíspera del ataque norteamericano a Irak, Lula hizo una severa crítica al verdugo de los pueblos: «El presidente Bush [...] no respeta a la ONU, no tiene en cuenta al Consejo de Seguridad y lo que piensa el resto del mundo. Creo que eso es grave. Grave para el futuro de la ONU, que es una referencia de comportamiento para las naciones del mundo entero».<sup>2</sup> Días antes, el entonces Secretario de Estado

<sup>2</sup> Citado en Luiz Alberto Moniz Bandeira: *As Relações Perigosas: Brasil-Estados Unidos. (De Collor a Lula, 1990-2004)*, Ed. Civilização Brasileira, 2004, pp. 287-288. Fue publicado en *Folha de São Paulo*, 18 de marzo de 2003.

norteamericano estigmatizó al Consejo de Seguridad de la ONU como «organismo irrelevante», al no autorizar el ataque a la nación árabe. El día que los Estados Unidos atacaron a Irak, Lula hizo un pronunciamiento a la nación donde decía «lamentar el inicio de la acción armada en Irak y en particular el recurso a la fuerza y sin autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas».<sup>3</sup> Concluía su pronunciamiento reafirmando que «el pueblo brasileño desea vivir en un mundo pacífico en el que las normas del Derecho Internacional sean totalmente respetadas».<sup>4</sup> En otros momentos, con su estilo peculiar, Lula ha reafirmado, para subrayar el contraste con el unilateralismo y la opción bélica de los Estados Unidos, que la guerra de Brasil es contra el hambre y las desigualdades sociales: «Precisamos enrolarnos política y materialmente en la única guerra de la cual todos saldremos vencedores: la guerra contra el hambre [...]. Existe hoy una encomiable disposición de adoptar formas más efectivas de combate al terrorismo, a las armas de destrucción masiva, al crimen organizado [...]. El verdadero camino de la paz es el combate sin tregua al hambre y a la miseria, en una formidable campaña de solidaridad capaz de unir al planeta en lugar de aumentar las divisiones y el odio que conflagran a los pueblos y siembran el terror».<sup>5</sup> En reiterados pronunciamientos en las reuniones internacionales, tanto el presidente como su canciller reafirmaron la posición de Brasil a favor de la solución pacífica de las controversias internacionales, basada en el sistema de las Naciones Unidas y en el Derecho Internacional.

### **Nuevas relaciones: potencias emergentes, Medio Oriente y África**

En el marco de la universalización de las relaciones internacionales de Brasil, del ejercicio del multilateralismo y de la toma de posición por la solución pacífica de los conflictos internacionales, en contraste con el belicismo y el unilateralismo de la administración Bush, uno de los hechos más relevantes del primer mandato del presidente Lula fue la realización en Brasilia, en el mes de mayo de 2005, del Encuentro América del Sur - Países Árabes, lo que despertó la oposición de Israel y de los Estados Unidos, además del intento de boicot por parte de este último, después del fracaso de sus gestiones por participar en el Encuentro.

El universalismo y el multilateralismo de la política exterior brasileña adquirieron nuevos bríos con el establecimiento de asociaciones estratégicas con China, Rusia, la India y Sudáfrica. Es fuerte la percepción de que el dominio unipolar de los Estados

<sup>3</sup> Pronunciamiento del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a la nación, el 20 de marzo de 2003, *Política Externa Brasileira*, vol. I, Ed. Ministério das Relações Exteriores, Brasil, Brasília, 2007, p. 33.

<sup>4</sup> Ídem.

<sup>5</sup> Discurso del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la 58va. Asamblea General de las Naciones Unidas, el 23 de septiembre de 2003, *Política Externa Brasileira*, vol. I, ed. cit., pp. 54-60.

Unidos no tiene un largo alcance, que es inexorable la tendencia a la multipolaridad, y que en ese contexto nuevas asociaciones y alianzas resultan indispensables como ámbito de coordinación política. Con ello se abren otras oportunidades para el comercio internacional y para las inversiones, medios para impulsar el desarrollo nacional. África, particularmente los países lusófonos, y no solo ellos, constituye un nuevo foco de la presencia internacional de Brasil. Aquí se entrecruzan importantes aspectos socio-culturales e históricos. Se trata de un contexto para el ejercicio de la solidaridad internacional que no debe ser subestimado, ni tampoco los aspectos estratégicos involucrados en esa relación, teniendo en cuenta que Brasil y todo el occidente africano, extendiéndose hasta el área austral, están bañados por el Océano Atlántico.

### **Prioridad para América Latina**

La opción estratégica más importante y eficaz del gobierno de Lula en política exterior está dirigida hacia América Latina y especialmente hacia el sur del continente. Fueron innumerables las iniciativas de Brasil para fortalecer las relaciones con los países del entorno, así como para llevar adelante y consolidar el proceso de integración en curso, especialmente con el MERCOSUR que es una prioridad de la diplomacia brasileña, por lo menos desde el gobierno del ex presidente José Sarney (1985-1990). Ya en el inicio del primer mandato, Lula incrementó las relaciones bilaterales, visitando o recibiendo a todos los jefes de Estado de la región. El gobierno de Lula consolidó la opinión de que el éxito del proyecto nacional de desarrollo está indisolublemente vinculado a la integración regional. Mediante el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), el Estado brasileño se halla empeñado en el financiamiento de obras de infraestructura en el marco de la integración física continental. Merecen destacarse en ese sentido la participación brasileña en la construcción del metro de Caracas y del puente sobre el río Orinoco, la construcción de la carretera Acre-Pacífico, a través de Perú y de una hidroeléctrica en Ecuador. La cooperación bilateral Brasil-Venezuela, por medio de las dos estatales del petróleo, PETROBRAS y PDVSA, hasta el momento ha dado como resultado el inicio de la construcción de una refinería en el interior de Pernambuco, inversiones para la prospección de petróleo y acuerdos para la construcción del Gasoducto del Sur.

Empeñada en una agenda donde la consigna central es la cooperación, en nombre del fortalecimiento de la integración, la diplomacia brasileña se unió a los esfuerzos de los demás países de la región, principalmente a Venezuela, para la creación de la Unión de las Naciones del Sur (UNASUR), a partir de la Declaración de la Cumbre Presidencial de Cuzco, en diciembre de 2004, que estableció la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN), precursora de la UNASUR. Cooperación, entendimiento político, alianza, coordinación de posiciones e integración, tal



es la esencia de esa iniciativa. En medio de dificultades objetivas y naturales, diferencias de opiniones entre los asociados, la UNASUR tendrá, con el tiempo y la maduración de las condiciones objetivas, sus inevitables corolarios: un banco de fomento, mecanismos de ayuda recíproca, sinergia en el combate a las asimetrías, la creación de instituciones políticas, como un parlamento para todo el continente, etcétera. Todo esto aumentará la capacidad negociadora de los países miembros y robustecerá su fuerza política para los inevitables enfrentamientos contra las políticas intervencionistas y agresivas del imperialismo norteamericano.

Desde el punto de vista brasileño, el núcleo y, por consiguiente, el aspecto más estratégico de la integración latinoamericana, específicamente sudamericana, es el MERCOSUR. Sin perder de vista el universalismo señalado con anterioridad, se puede decir que este concentra lo fundamental de las energías de la diplomacia brasileña. Siendo así, es obvio que ya no se trata de un MERCOSUR restringido a los aspectos comerciales y aduaneros, sino de uno con alcance político, económico y social, una opción verdaderamente estratégica desde el punto de vista geopolítico, no un expediente coyuntural. Aquí se trata de consolidar una unión de países que se asegure de medios de defensa ante el apetito hegemónico y neocolonialista del imperialismo norteamericano, que constituya, desde el punto de vista comercial, una alternativa viable ante proyectos de anexión tales como el ALCA, o los amañados acuerdos bilaterales de «libre comercio» con los Estados Unidos. Enfocando el tema económico, además de los aspectos comerciales, forma parte de la perspectiva «Mercosuriana» la coordinación de políticas macroeconómicas, que tengan en cuenta una futura moneda común y el crecimiento económico de todos sus miembros, mediante un programa de reducción de asimetrías. De la misma forma, la diplomacia brasileña está inmersa en el fortalecimiento de la integración política y social de los países y pueblos miembros.

En ese sentido se debe entender la negociación entre los gobiernos boliviano y brasileño con el propósito de establecer un precio justo para la compra del gas boliviano, así como el respeto a la decisión soberana del gobierno de Morales de nacionalizar los hidrocarburos y asumir el control de las refinerías instaladas en el país andino. El episodio fue ilustrativo, por cuanto la derecha brasileña, tan servil ante los potentados imperialistas, especialmente ante los Estados Unidos, no solo trató de que se aplicara un tratamiento duro al país vecino, sino que llegó a proponer la ruptura de relaciones e incluso la intervención para «hacer valer los intereses brasileños». Los tiempos son otros, tanto en el mundo como en América Latina. Los intereses brasileños determinan que Brasil sea pro activo en la reducción de las asimetrías con los socios sudamericanos, sobre todo con Bolivia, Paraguay y Uruguay, en nombre del verdadero interés nacional que, como ya señalamos, reside en la integración continental. La crisis en el MERCOSUR, la tensión en las relaciones con los países vecinos, el ejercicio del liderazgo por métodos brutales

corresponde a los intereses del imperialismo norteamericano y a los de la gran burguesía entreguista a él asociada, que nutre apetitos expansionistas en relación con el entorno geográfico del país.

La estrategia de fortalecimiento del MERCOSUR, además de una posición negociadora hábil, que fue superando ambigüedades y vacilaciones, como las contenidas en la proposición de «ALCA *light*», y la lucha de los pueblos y de otros países amigos, fueron los factores que condujeron al fracaso del ALCA, una contundente derrota del imperialismo norteamericano, una importante victoria de los pueblos latinoamericanos para la cual la diplomacia brasileña dio su contribución.

### **La lucha contra el proteccionismo en la OMC**

Otro frente de actuación al cual el Itamaraty atribuye una destacada importancia son las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC). En la segunda mitad del primer mandato y en este inicio del segundo mandato, esta asumió aires de cuestión prioritaria, con los sucesivos fracasos de la llamada Ronda de Doha de la OMC. El punto culminante de la acción de la diplomacia brasileña en esas negociaciones comerciales multilaterales fue la reunión ministerial de Cancún, en septiembre de 2003, cuando Brasil protagonizó la creación del Grupo de los 20 (G-20) países que tenían como bandera de lucha el fin de los subsidios internos y de las subvenciones a las exportaciones de productos agrícolas, además de un mayor acceso a los mercados de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Fue tal vez el mayor golpe asestado al proteccionismo de los países ricos desde la creación de la OMC en 1995.

Es justa la lucha contra el proteccionismo en la OMC, pero es preciso no alimentar falsas ilusiones para no caer en trampas. La OMC no fue creada para permitir el acceso de los países en desarrollo a los mercados de los países ricos, sino exactamente para lo contrario. En el comercio internacional, monopolizado por las transnacionales con base en los países imperialistas, funciona la ley de la selva del proteccionismo de los países ricos, de las asimetrías, de la guerra sin cuartel por la conquista de mercados. El apoyo a la cancillería brasileña en las negociaciones de la Ronda de Doha se conjuga con una postura vigilante y crítica para que Brasil no sucumba ante las presiones para hacer concesiones perjudiciales al interés nacional, en nombre del acceso a los mercados de los Estados Unidos y de la Unión Europea. El *lobby* interno de las grandes corporaciones industriales y latifundistas exportadoras es poderoso para lograr que Brasil entre por falsos atajos hacia el incremento de su comercio internacional.

## Breve información histórica

Hasta aquí esas son, en trazos generales, las líneas de actuación más fuertes de la política exterior del gobierno de Lula.

A *grosso modo*, salvando las peculiaridades de tiempo y lugar, la política exterior brasileña contemporánea es tributaria de la Política Exterior Independiente, surgida al comienzo de la década del sesenta. Siendo así, es heredera de sus certezas y ambigüedades. Con las limitaciones de un artículo periodístico y centrado en temas coyunturales, no hay condiciones para realizar un análisis histórico, aunque superficial, de la diplomacia brasileña. Vamos a dar solo unas breves pinceladas.

El marco fundador de la política exterior brasileña del período republicano fue el establecimiento definitivo de los límites territoriales del país, gesta donde la habilidad negociadora del Barón de Rio Branco fue insuperable. El fundador de la diplomacia brasileña hizo valer de manera equilibrada los intereses del país.

Al mismo tiempo, la política exterior, en sus orígenes, recibió el influjo del Corolario Roosevelt. El Corolario Roosevelt fue la aplicación de la Doctrina Monroe, de 1823, por parte del presidente de los Estados Unidos Theodore Roosevelt, a comienzos del siglo XX, cuando ese país emergía en el escenario mundial como potencia imperialista. «La aplicación de los principios formulados por Monroe en 1823, que vedaban el continente a la conquista europea imponía también responsabilidades, según Roosevelt. De esta forma, los Estados Unidos tenían la tarea de velar por el orden y por la paz en la América mediante una acción de policía internacional», afirman Amado Cervo y Bueno.<sup>6</sup> Los autores transcriben el mensaje del 6 de diciembre de 1904 al Congreso, donde «el presidente norteamericano concilió monroísmo con intervencionismo al redefinir la doctrina».<sup>7</sup> Dice: «El descalabro crónico o una impotencia que resulte en un debilitamiento general de los lazos de la sociedad civilizada, puede, en América, como en cualquier otro lugar, exigir el fin de la intervención de alguna nación civilizada y en el hemisferio occidental, la adhesión de los Estados Unidos a la Doctrina Monroe puede forzarlos, aunque obstinadamente, en casos flagrantes de descalabro o impotencia, al ejercicio de un poder internacional».<sup>8</sup>

Cervo y Bueno consideran que «Rio Branco no cuestionó los términos del mensaje de Roosevelt. Reafirmó su visión en relación con el nuevo orden mundial y constató la formación de un nuevo centro de poder».<sup>9</sup> Ellos citan un despacho enviado a Washington firmado por Rio Branco: «Más fundamentos tendrían para

<sup>6</sup> Amado Luiz Cervo y Clodoaldo Bueno: *História da Política Exterior do Brasil*, Ed. Universidade de Brasília e Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, 2002, p. 180.

<sup>7</sup> Ídem.

<sup>8</sup> Ídem.

<sup>9</sup> *Ibíd.*, p. 181.

molestarse con las declaraciones del mensaje a esas grandes potencias europeas por el propósito que el gobierno de los Estados Unidos muestra de intervenir, siempre que sea necesario, en la cuestión del este europeo y en las de Asia, las cuales entendían que les pertenecían exclusivamente. La verdad es que solo existían grandes potencias en Europa y hoy ellas son la primeras en reconocer que en el Nuevo Mundo existe una nación grande y poderosa con la cual deben contar y que necesariamente debe tener su parte de influencia en la política internacional del mundo entero».<sup>10</sup>

Durante toda la «República Vieja» (de la proclamación en 1889 a 1930), la característica de las relaciones entre Brasil y los Estados Unidos era la alianza preferencial, la primera forma del alineamiento automático, hasta que, con la Revolución de 1930, comenzó a tomar cuerpo «una nueva percepción del interés nacional».<sup>11</sup>

Los años treinta, marcados por los preparativos de la guerra, fueron el período de intensa disputa entre los Estados Unidos y Alemania, en torno a qué nación asumiría la principal asociación económica y comercial con Brasil. El país explotó hasta la saciedad esa contradicción, proclamó su neutralidad, se inclinó en un determinado momento hacia la Alemania hitleriana, pero acabó negociando con los Estados Unidos el financiamiento de la construcción de la Compañía Siderúrgica Nacional, marco inicial de la industrialización, el reequipamiento de las Fuerzas Armadas y la renegociación de la deuda externa. Fue entonces que la lucha por el desarrollo nacional apareció como vector principal de la política exterior brasileña. Por esa época era intenso el embate entre nacionalistas y entreguistas. En su obra *Relaciones Internacionales de Brasil. De Vargas a Lula*, Paulo Vizentini anota que los orígenes más remotos del desarrollismo en la política exterior se remontan al período entre 1930 y 1945. Según él, en ese período «Vargas ya había tratado de transformar la política exterior en un instrumento de apoyo al desarrollo económico».<sup>12</sup> Vizentini señala además que el jefe de la Revolución de 1930 «se guió por un intento consciente de sacar provecho de la coyuntura internacional y de la redefinición de la economía brasileña mediante la utilización de la política exterior como un instrumento estratégico para lograr la industrialización del país».<sup>13</sup>

De hecho, fue en el segundo gobierno de Vargas (1951-1954) cuando Brasil demandó la existencia de un banco internacional para fomentar el desarrollo económico de América Latina, a la vez que surgían empresas como PETROBRAS y el BNDE (Banco Nacional de Desarrollo Económico), hoy BNDES, y se planteó la necesidad de limitar la remesa de ganancias hacia el exterior.

---

<sup>10</sup> Ídem.

<sup>11</sup> *Ibíd.*, p. 233.

<sup>12</sup> Paulo Fagundes Vizentini: *Relações Internacionais do Brasil. De Vargas a Lula*, Ed. Fundação Perseu Abramo, 2003, p. 14.

<sup>13</sup> *Ibíd.*, p. 15.

Fue también con la bandera de «vencer el subdesarrollo» que Juscelino Kubitschek (1955-1960) lanzó la Operación Panamericana, cuyo objetivo era la búsqueda de recursos para financiar el desarrollo y la asociación con el capital extranjero, para promover el desarrollo asociado. Era lo que Kubitschek llamaba de «cooperación para el desarrollo», en la cual desempeñaba un papel importante no solo la asociación con el capital extranjero, sino también la alianza con los Estados Unidos. Recurramos una vez más a Vizentini: «La asociación estrecha al capital extranjero y el alineamiento automático con los Estados Unidos hacían, sin embargo, de la industrialización impulsada por Juscelino Kubitschek un *desarrollo asociado* más que un *nacional-desarrollismo*».<sup>14</sup>

Por paradójico que parezca, fue Jânio Quadros, un conservador, quien formuló los principios básicos de la que se llamaría Política Exterior Independiente. En un texto que vio la luz en la *Revista Brasileña de Política Internacional*, de diciembre de 1961, por tanto, después de su renuncia a la Presidencia de Brasil que ocupó durante apenas siete meses, él sistematiza los cinco puntos de la nueva política exterior del país: defensa de la paz, coexistencia pacífica y desarme general y progresivo; no intervención y autodeterminación de los pueblos; descolonización completa; ampliación de los mercados externos brasileños; y formulación autónoma de planes de desarrollo económico dentro del interés nacional. Dígase además que, aunque anticomunista, Jânio asumió una posición en lo fundamental correcta en relación con las amenazas de intervención norteamericanas contra Cuba y condecoró en el Palacio al entonces ministro cubano Ernesto Che Guevara.

La «Política Exterior Independiente» será practicada por João Goulart, el presidente que vino a ser derrocado por el golpe militar de 1964, y en las nuevas condiciones de la época y con el nombre de «pragmatismo responsable», por el general dictador Ernesto Geisel, quien tuvo una relación bastante conflictiva con los Estados Unidos, reconoció de repente la independencia de Angola, firmó un acuerdo nuclear con Alemania y rompió los acuerdos militares con los Estados Unidos, entre otras actitudes autónomas.

Como se observa, salvo en algunos hiatos de intenso entreguismo, como en el gobierno de Dutra (1946-1950), en el período inmediato de posguerra, en el del Café Filho, que ejerció un mandato tapón después del suicidio de Vargas (1954), en el del general Castelo Branco, el primero del ciclo dictatorial (1964-1985) y en los gobiernos neoliberales de Collor de Mello (1990-1992) y de Fernando Henrique Cardoso, (1995-2002), cuando, según Amado Cervo y Clodoaldo Bueno ocurrió una «danza de los paradigmas»<sup>15</sup> en la política exterior de Brasil, el desarrollo nacional constituyó la idea-fuerza de la diplomacia brasileña.

<sup>14</sup> *Ibíd.*, p. 21.

<sup>15</sup> Amado Luiz Cervo y Clodoaldo Bueno: *ob. cit.* (en n. 6), p. 455.

Sin embargo, no siempre eso representó el alejamiento de las posiciones del imperialismo norteamericano. En los períodos de mayor nacionalismo y desarrollismo eran grandes las determinaciones de los intereses norteamericanos en Brasil, el cual, por su parte, tuvo a lo largo de su historia republicana la cooperación con los Estados Unidos como una cláusula casi pétrea de sus relaciones exteriores. Juscelino, que dio un impulso al nacional desarrollismo, pasó a la historia como uno de los presidentes más pro occidentales y pro estadounidenses de Brasil. La famosa carta enviada al presidente Eisenhower de los Estados Unidos en la cual lanza la Operación Panamericana, posterior a un viaje que el entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, hiciera a varios países latinoamericanos y durante el cual fue objeto de violentas protestas populares, era una especie de llamamiento a los Estados Unidos: o se rendía ante la evidencia de que tenía que ayudar al desarrollo de los países del continente o sería blanco de las protestas populares y de la victoria de movimientos revolucionarios. El desarrollo aparecía, así, como antídoto a la revolución y los Estados Unidos eran llamados a dar su contribución para impedir ese desenlace.

Las relaciones bilaterales de Brasil con los Estados Unidos son bastante complejas y merecen un estudio aparte. Incluso ahora, cuando Brasil está gobernado por una coalición de centro-izquierda, conviven elementos de conflicto y colaboración en las relaciones entre ambos países. Moniz Bandeira, uno de los más fecundos historiadores de las relaciones entre Brasil y los Estados Unidos, ofrece en el libro *Las relaciones peligrosas: Brasil-Estados Unidos. (De Collor a Lula, 1990-2004)*, una explicación geopolítica para las relaciones ambiguas entre ambos países:

Como candidato, Lula podía decir, libremente, lo que pensaba. Como jefe del gobierno, tenía que preservar las relaciones de Brasil con los Estados Unidos. De esta forma, más por conveniencia política que propiamente por los intereses comerciales de Brasil, no los separó de las negociaciones del ALCA, al mismo tiempo que mantuvo la política económica y financiera, a fin de evitar la fuga de capitales y el retorno de la inflación. Y al visitar Washington, el 20 de junio de 2003, declaró creer que las relaciones entre Brasil y los Estados Unidos podrían «sorprender al mundo». Sin embargo, de la misma forma que Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso, que buscaron establecer buenas relaciones entre ambos países, Lula da Silva no logró evitar divergencias y fricciones. [...] La contradicción de intereses y de objetivos entre los dos países constituía, ante todo, un dato cartográfico. Eran dos masas enormes de dimensiones territoriales, con grandes contingentes poblacionales, y a pesar de la gran asimetría, las dos mayores potencias económicas. De un lado, los Estados Unidos, la superpotencia, que trataba de preservar a toda costa su predominio en América del Sur, como en el resto del mundo [...]. Del otro lado, Brasil, potencia industrial emergente, en desarrollo, que había reservado totalmente para sí mismo la definición

de sus intereses nacionales y trataba de dilatar su propio espacio económico y político, defender su autonomía, convencido de que la rígida estructura de poder y riqueza en el mundo debía cambiar. Ese mismo dato cartográfico [...] determinaba, sin embargo, la necesidad de cooperación entre ambos países, que necesitaban mantener estrechos lazos. De ahí la ambivalencia que desde el siglo XIX caracterizó sus relaciones.<sup>16</sup>

Ciertamente, pesan también determinaciones de clase, oriundas del carácter de la sociedad brasileña, de capitalismo dependiente, en cuyo vértice se encuentra una clase dominante socialmente excluyente y que asoció su destino, como clase, al capitalismo transnacional. Con un cambio de régimen y en una situación histórica donde se hagan inexorables transformaciones sociales y políticas estructurales, la dialéctica de las relaciones con los Estados Unidos será diferente, a pesar de que también se mantengan las «determinaciones cartográficas».

### **El apoyo a la política exterior, sin falsas expectativas**

El apoyo general a la política exterior de Lula no significa una interpretación ni una valoración unívocas sobre su carácter y su alcance, pues existen opiniones distintas en el contexto de la izquierda cuando se trata de contextualizarla en el proceso más general y de largo plazo de la lucha por la emancipación nacional y social del pueblo brasileño. Una de las opiniones corrientes desvincula metafísicamente el apoyo a la política exterior del gobierno de Lula de la lucha antimperialista mundial. Es un reflejo de la falta de visión estratégica con que los formuladores y portavoces de esa opinión apoyan al gobierno de manera general, del abandono de la perspectiva socialista, que pasa a ser una mera cita histórica o pieza de retórica en el discurso político y no un objetivo programático que se debe alcanzar en determinada etapa de la lucha.

Así, la lucha antimperialista se reduce a un aspecto, sea cual sea la defensa de la soberanía nacional en el nivel aceptado por las élites nacionales. Un contrasentido, pues del mismo modo como el socialismo solo será conquistado si la *cuestión nacional* es bien ecuacionada, esa misma *cuestión nacional* únicamente encontrará solución verdadera en el ámbito de la lucha por el socialismo. Rebajando la estrategia, esos sectores ven la política exterior del gobierno de Lula de manera desproporcionada, como el *non plus ultra* de la lucha nacional contemporánea. No sorprende que esos sectores reaccionen con timidez y «defensismo», algunas veces con una mal disfrazada contrariedad a cualquier manifestación más radical de lucha antimperialista, a la proclamación de los objetivos socialistas, y vean en sus protagonistas más

<sup>16</sup> Luiz Alberto Moniz Bandeira: *As Relações Perigosas: Brasil-Estados Unidos. (De Collor a Lula, 1990-2004)*, ed. cit. (en nota 2), pp. 371 y 372.



avanzados, no liderazgos calificados como partes integrantes del esfuerzo para la construcción y fortalecimiento de una nueva vanguardia que conduzca la lucha por el socialismo, sino como un competidor desestabilizador.

Esa opinión tampoco vislumbra los profundos cambios en curso en el contexto político internacional, la profunda crisis de la hegemonía norteamericana, los *impasses* estructurales de su economía, el desplome de su liderazgo, el surgimiento de otros polos de disputa por la hegemonía mundial, el agravamiento de las contradicciones interimperialistas, las derrotas políticas y el aislamiento del imperialismo estadounidense; su incapacidad para imponer su voluntad, a no ser *manu militari*. Es una opinión que minimiza la emergencia de nuevas fuerzas sociales y políticas en la lucha antimperialista y es, particularmente, reduccionista cuando se trata de aquilatar el significado de los cambios políticos en curso en la región latinoamericana y caribeña. En teoría, se inspiran en la idealización kantiana de la paz eterna y conciben la situación internacional mediante una visión evolucionista, lo que condiciona su estrategia de política internacional a un tipo de multilateralismo y de multipolarismo más próximos a una visión de equilibrio de poder que de ruptura. Esa visión compromete los propios esfuerzos para la defensa de la soberanía nacional y la inserción del país en el mundo, por cuanto se inscribe, según la idealizada visión, en el marco de la interdependencia recíproca y no en el de la lucha antimperialista. Por ello no resulta fuera de lo común el flirteo de tal corriente con el «multilateralismo asertivo» de los demócratas estadounidenses, o con la concepción de integración continental y acción de bloques según las concepciones dominantes en la Unión Europea. En esta visión está subyacente la idea de gobernabilidad internacional equitativa y equilibrada contenida en el programa de la «Tercera Vía».

Otra visión equivocada es la que, basándose en postulados irrealistas, subestima los logros de la política exterior del gobierno de Lula, considerándola como mera expresión de los intereses de las clases dominantes. Es la opinión de las fuerzas que se oponen al gobierno supuestamente por la izquierda. Sus defensores no quieren vislumbrar cuán importante es para la lucha antimperialista en el mundo actual, donde es brutal la ofensiva del imperialismo estadounidense para imponerse como polo único de dominación, por medio de una política agresiva y unilateral, que países con la fuerza y la dimensión de Brasil se presenten en la arena internacional con una política exterior autónoma, aunque no antimperialista, en defensa de la paz, del multilateralismo y del desarrollo, valores que de por sí contrastan con la guerra, el unilateralismo y la expoliación económica.

Se trata de una visión que niega la política concreta, que desiste de los procedimientos tácticos, que no toma en cuenta la correlación de fuerzas, el carácter diferenciado de los actores políticos internacionales y en la práctica rechaza alianzas puntuales con fuerzas intermediarias. En este caso, se minimiza el papel de las organizaciones multilaterales, se niega el valor de los esfuerzos para formar coaliciones y bloques

alternativos a los propuestos por el imperialismo; se eluden los antagonismos existentes entre las potencias económicas y financieras y los países en desarrollo, descalificando las justas reivindicaciones antiproteccionistas de estos últimos, y se ignora la existencia de intensas y profundas contradicciones interimperialistas.

En la práctica, se niega la lucha por las causas nacionales, adoptando como programa máximo luchas «globales» y «desnacionalizadas», desvinculadas de las realidades concretas, lo que las transforma en meras proclamaciones. Es como si fuese posible desarrollar la lucha contra la globalización sin cualquier relación con los embates que se llevan a cabo a nivel de cada país o región, como si fuese posible sustituir a los diferentes sujetos nacionales, que, por supuesto, deben ser también internacionalistas, por un sujeto político global. En el caso brasileño, tal postura también es reflejo de una falsa visión estratégica, en la cual no hay lugar para la lucha democrática, la lucha nacional y la lucha social en todas sus etapas, de las inferiores a las superiores: una estrategia sin táctica, una lucha vaga por el socialismo, en línea recta, sin matices políticos ni etapas intermedias.

Una correcta postura frente a la política exterior del gobierno de Lula debe, por tanto, evitar dos falsas expectativas. No se espere del gobierno de Lula una política revolucionaria ni antimperialista. Una confrontación abierta y directa entre Brasil y los Estados Unidos no se encuentra en el orden del día ni forma parte del horizonte del gobierno de Lula. Pero no se espere tampoco una posición sumisa ante el imperialismo norteamericano, independientemente de quien sea el ocupante de la Casa Blanca. Y no se ignoren lo contencioso en los planos conceptual, político y comercial entre Brasil y la superpotencia del norte.

La política exterior de Lula es un escalón más en el esfuerzo por enfocar la acción internacional del país en la lucha por el desarrollo nacional, en las condiciones actuales de Brasil, de América Latina y del mundo, muy diferentes a la época en que fueron lanzados los pilares de la Política Exterior Independiente. Se trata de una evolución y de una profundización correspondiente a la maduración del Estado nacional brasileño, que consolida la inserción del país en el mundo con profesionalismo, realismo, buena dosis de pragmatismo y autonomía, pero sin confrontación con los centros de poder de la política mundial. No es la política exterior de una revolución antimperialista, pero es eficaz en la salvaguarda de los intereses nacionales y en la defensa de la soberanía del país. Por ello, las fuerzas progresistas y revolucionarias la apoyan, como una de las vertientes de la acumulación de fuerzas en la lucha por la emancipación nacional y social del pueblo brasileño.

*Texto traducido del portugués por Rosa Díaz Chío y Honel Binelfa López.*

JOSÉ REINALDO CARVALHO es periodista, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Brasil y director del Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos y de Lucha por la Paz (CEBRAPAZ).

## El Partido Socialista Unido de Venezuela

AMÍLCAR FIGUEROA

*La política es hoy la única actividad creadora.  
Es la realización de un inmenso ideal humano.  
La política se ennoblece, se dignifica,  
se eleva cuando es revolucionaria.  
Y la verdad de nuestra época es la revolución.*

José Carlos Mariátegui

Doce días después del contundente triunfo electoral del 3 de diciembre de 2006, Hugo Chávez –presidente reelecto–, hace el histórico llamado a la conformación del partido único de los revolucionarios de Venezuela. Se parte de la premisa justa de que al iniciar nuestro proceso una nueva etapa, y arrastrar esa especie de déficit en cuanto a no haber poseído hasta la fecha un verdadero instrumento de dirección que permita el ejercicio de la voluntad colectiva en un mismo sentido, las nuevas circunstancias reclaman su conformación urgente. No obstante ser correcto su postulado inicial, tal planteamiento ha generado el más amplio debate de ideas y posiciones que hasta el presente haya sostenido la Revolución Bolivariana. No podría esperarse otra cosa, pues no se ha abordado previamente la unificación de criterios en torno a temas tan candentes como el modelo de construcción social que se está proponiendo (el llamado socialismo del siglo XXI); la estrategia de conformación de la Patria Grande; o el carácter o naturaleza del partido mismo que debe construirse. Han surgido entonces muchas posiciones aunque la motivación ideológica no ha sido la que priva en la mayoría, pero de cualquier manera, esperemos que ese debate –si se canaliza y procesa de forma adecuada– sirva para enriquecer y fortalecer esta revolución. En ese sentido, procedemos a apuntar algunas consideraciones.

### **Viejas discusiones, nuevos actores**

No pocas cuartillas se han emborronado en la historia del movimiento revolucionario internacional acerca de si el partido que promueve los cambios ha de ser un

partido de masas o de cuadros. Por ese tema se dividieron los revolucionarios rusos en su momento.<sup>1</sup>

De ahí en adelante, en distintas circunstancias, se ha replanteado tal polémica que a la vez ha aparecido vinculada con la concepción que acerca del Estado han profesado quienes terciaron en ella.

Una síntesis del partido como instrumento especializado de dirección nos la ofrece, por ejemplo, Gramsci cuando plantea: «el partido debe continuar siendo el órgano de educación comunista, el hogar de la fe, el depositario de la doctrina, el poder supremo que armoniza y que conduce hacia la meta las fuerzas organizadas y disciplinadas de la clase obrera y del campesinado. Precisamente para desarrollar rígidamente esa su misión el partido no puede abrir de par en par las puertas a la invasión de nuevos adherentes no acostumbrados al ejercicio de la responsabilidad y de la disciplina».<sup>2</sup> Ahora bien, en este pronunciamiento claro de Gramsci a favor del partido «como vanguardia» están definidas dos cuestiones de suma importancia: el carácter comunista de la revolución, y la alianza obrero-campesina como el motor del cambio. Además, habría que tomar en cuenta un tercer problema: las circunstancias históricas en que le tocó actuar al notable teórico italiano. Estos tres aspectos debemos revisarlos en las circunstancias venezolanas.

Se trata hoy de conformar un partido cuyo imaginario en buena medida sigue en construcción. Le corresponde desempeñarse sobre las realidades de los albores del tercer milenio y en un país que no transitó, como hemos señalado en muchas oportunidades, un camino clásico en su desarrollo capitalista, por tanto, su composición social es particular y ello determina características específicas del bloque histórico interesado en el cambio revolucionario, más allá de la clase obrera y del campesinado, pero a la vez, un país cuya contradicción principal a lo largo de más de un siglo ha sido con el imperialismo norteamericano, y como consecuencia existen inmensas tareas nacionales que deben abordarse. Por último –y esto no es menos importante–, se trata de un proceso de cambios que se ha desarrollado, ampliado y recreado en el ámbito de la democracia.

Tal vez esta última circunstancia es la que conduce al profesor Bilbao, en su exposición ante el I Congreso Comunal de Caracas, a pronunciarse en los siguientes términos: «Los partidos de masas en gestación [se refiere a gran parte de los países de América Latina] constituyen el escenario privilegiado en el que se deberá actuar con lucidez y energía».<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Inicialmente fueron Martov y Lenin quienes aportaron elementos en uno u otro sentido.

<sup>2</sup> Antonio Gramsci: *Consejos de fábrica y estado de la clase obrera*, Editorial Roca, Colección R, no. 16, 1973, pp. 21-22.

<sup>3</sup> Luis Bilbao: «Teoría y práctica del Partido Revolucionario», I Congreso Comunal de Caracas, marzo de 2007.

En el teatro Teresa Carreño, al efectuarse la juramentación de los primeros dos mil trescientos noventa propulsores del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el comandante Chávez orienta esta controversia teórico-práctica al definir claramente que la propuesta hoy es un partido de masas que genere los cuadros que el proceso requiere.

Una polémica aún más candente ha girado siempre en torno a si la Revolución la dirige un partido de la «clase obrera», o si más bien se trata de un partido policlasista. En el caso venezolano –ya lo hemos examinado en otros momentos– tanto por la naturaleza de su economía misma, de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción dentro de un proceso histórico en el cual la clase obrera tiene un escaso desarrollo, correspondería examinar el papel que le corresponde desempeñar a cada uno de los factores que componen el «bloque histórico» del cambio,<sup>4</sup> para de esta forma tener claro hacia dónde dirigiremos la hegemonía del proceso.

### **Entramado social, edificación socialista y partido revolucionario**

El comandante Hugo Chávez ha dicho que todo militante del PSUV, incluidos aquellos que ejercieran funciones de dirección, debe hacer vida política en un organismo social. Esta idea es en absoluto justa, ya que la historia ha probado hasta la saciedad que se tiende a producir un cierto divorcio entre organismos sociales, la militancia política y quienes ocupan puestos de jerarquía. Es necesario, entonces,

---

<sup>4</sup> Las dos polémicas citadas, que se manifestaron con vehemencia entre los teóricos internacionales, han tenido varias expresiones en la historia venezolana del siglo XX. Recuérdese que la contradicción entre Rómulo Betancourt y los núcleos marxistas existentes en Venezuela, a finales de los años veinte y durante la década del treinta del siglo pasado, giró exactamente sobre estos problemas. Betancourt sacó ventaja respecto al Partido Comunista de Venezuela (PCV) al asumir un programa concreto de cinco puntos acorde con la realidad nacional de la época, expuesto en el llamado Plan de Barranquilla, y al construir un partido a lo largo y ancho de la geografía nacional que aplicó –sin proclamarlo– muchos de los principios leninistas de organización, pero el carácter policlasista de su organización (y de su pensamiento) lo llevó a comprometerse muy rápidamente con la burguesía proimperialista que gradualmente ocupó el aparato estatal. Esta lección de la historia nos obliga a estar alertas porque, al lado de los grandes esfuerzos que hace el gobierno para impulsar la economía, se ha gestado un embrión de nueva clase económica surgida a la sombra de nuestro proceso actual que, como hemos analizado en otros puntos, ya ha tendido puentes con la vieja oligarquía económica y ocupa un lugar nada desestimable en el desenvolvimiento de la política y del Estado venezolano. Por lo demás, estamos convencidos de que en el caso de Betancourt, privaba en el fondo una visión anticomunista. Otro momento de la vida política nacional cuando estos problemas fueron debatidos, correspondió al tiempo en que nacieron el Movimiento al Socialismo (MAS) y la Causa R. Por su parte, el Partido de la Revolución Venezolana (PRV) se esforzó por construir una organización de cuadros revolucionarios.

que los militantes vivan, se nutran de los problemas de la cotidianidad y en ello contribuye mucho compartir las labores de los organismos que forman la base del entramado social. Mao Tsé-tung abordó en su momento con mucha claridad este tema. En ese sentido, se plantea como tarea de primer orden seguir profundizando en la construcción de la organización social, particularmente en la conformación y fortalecimiento de los Consejos Comunales, organismos en los cuales han de converger todas las instancias de la vida social, y que, en definitiva, vendrían a ser el epicentro del Poder Popular. Ahora bien, la importancia misma del trabajo, de la línea social y de su desarrollo, nos debe llevar a una revisión que nos permita evaluar en qué punto nos encontramos respecto a tales construcciones.

### **Los Consejos Comunales, el Poder Popular y el PSUV**

La Revolución Bolivariana en el poder ha desarrollado una constante búsqueda para construir su entramado social que le permita enraizarse en forma definitiva, en la base de la sociedad. En efecto, Círculos Bolivarianos, Unidades de Batalla Electorales, Consejos Locales de Planificación Pública, etcétera, han sido esfuerzos por dotar de organicidad a ese gran sentimiento revolucionario que abrazó la mayoría de la nación venezolana al influjo del despertar provocado por los sucesivos febreros (27 de febrero de 1989 y 4 de febrero de 1992); a ello habría que añadirles estructuras como los Comités de Tierra Urbana, los Comités de Salud, las Mesas Técnicas de Agua, cuya condición de instrumentos constituidos para respuestas específicas, les han permitido desempeñar una función trascendente en el proceso de organizar y/o movilizar al pueblo tras determinados objetivos. Todas estas experiencias se suman a muchas organizaciones locales de mayor o menor desarrollo que a lo largo de los últimos años, en algunos casos de varios lustros, han nacido por todo el territorio nacional. Pareciera entonces que desde la perspectiva de la organización social, la revolución venezolana tiene resuelto el problema y hasta el presente esta ha sido una de las mayores fortalezas del proceso, pero la experiencia histórica nos enseña varias cosas, a saber:

- Muchas organizaciones sociales o no responden a metas a largo plazo, o en su propia concepción se han impuesto conceptos oportunistas que las transformaron en experiencias cuya fortaleza se vuelve transitoria.
- Las revoluciones en el poder han liquidado su propia construcción social cuando el (los) partido (s) o el Estado ha(n) «secuestrado» las organizaciones sociales. El caso de la Revolución Bolchevique pudiera ser tal vez uno de los más ilustrativos. La fuerza participativa de la consigna TODO EL PODER A LOS SOVIETS se pierde en el tiempo cuando estos dejan de ser organismos que responden a los intereses de soldados, obreros y campesinos, y en alguna medida empieza un proceso de hipoteca de sus intereses de clase a los intereses

del «Partido». Es bueno que profundicemos en este ejemplo, porque a nuestro juicio los soviets, en su etapa de formación, son un antecedente válido de ejercicio de la democracia participativa, de la democracia directa.

Con el lanzamiento de los Consejos Comunales, la Revolución Bolivariana ha tenido su oportunidad histórica de consolidar eso que se ha dado en llamar el PODER POPULAR, pero todo seguirá dependiendo de la orientación que prime en su impulso.

El hecho de haberse promulgado la ley cuando entrábamos en una fase de implementación de la actividad electoral pudo desviar, en alguna medida, el carácter estratégico de esta construcción y desvirtuar el papel implícito en su definición: «Los Consejos Comunales en el marco constitucional de la democracia participativa y protagónica, son instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social».<sup>5</sup>

Podemos afirmar, siendo autocríticos, que se trabajó en muchos casos con una mentalidad electoralista-clientelar y menos con la visión de que estamos ante un instrumento estratégico llamado a ser garante de la profundización y perpetuidad de la Revolución.

Hoy, cuando se ha iniciado el proceso de conformación del PSUV, cuando debemos abocarnos a propulsarlo, hacemos un llamado de atención para que no liquiemos las construcciones que nosotros mismos hemos generado; todo lo contrario, el partido debe nacer en los Consejos Comunales; el proceso de constitución de estos no debe interrumpirse, sino fortalecerse; y debemos estar alertas en cuanto a que la facultad administrativa que el Estado revolucionario les ha dado, no introduzca esa especie de perversión en el sentido de que se creen nuevos Consejos solo con el propósito de manejar los recursos asignados y no para lo que fueron concebidos: una función integral en la gestación de un verdadero Poder Popular. De tal forma, la construcción del entramado social de la revolución, no es cosa distinta ni a la conformación del Partido, ni a la edificación de la sociedad socialista.

### **Partido revolucionario y «saber colectivo»**

Volvemos a Gramsci, a fin de precisar nuestra convicción de que la construcción colectiva de un nuevo «saber» nos conducirá por un camino cierto. De tal forma, la elaboración de la línea política, del proyecto nacional ha de ser tarea de todo el partido: «llegar conjuntamente a la verdad es lo que constituye una acción comunista

<sup>5</sup> Artículo 2 de la Ley de los Consejos Comunales.



y revolucionaria».<sup>6</sup> Lo anterior está íntimamente relacionado con el tipo de militante que queremos, en el cual el conocimiento desempeña un papel de primer orden. Las tareas que tiene la Revolución Bolivariana por delante implican la formación de militantes que no solo apoyen en la mesa electoral o en la demostración de calle, por ejemplo. Se requiere que los militantes y, en general, todo nuestro pueblo posea un manejo profundo de la sociedad en que vivimos, un amplio conocimiento de su historia y del proyecto de cambio que construye y defiende. De esta forma podremos acometer con éxito la enorme tarea cultural que implica la transformación de la conciencia, que demanda una revolución.

En este punto queremos destacar que es fundamental superar esa especie de «desprecio por la teoría» que entre nosotros ha existido, y que viene afectando a la mayoría de nuestras instancias de dirección política. Así, nos ha asombrado siempre, a través de una década ya, la escasa elaboración política del Comité Táctico Nacional (CTN) del Movimiento V República (MVR) y, la poca discusión teórica dentro del propio partido. Por el contrario, la vida política del Movimiento siempre fue excesivamente pragmática. El PSUV debe representar un salto de calidad.

### **El internacionalismo revolucionario**

Pareciera, ahora sí, que están dadas las condiciones para que el sueño del Libertador de constituir una América Latina unida se materialice, pero ello tropezará con no pocos obstáculos y aquí es determinante la acción militante. Tal como grandes contingentes de venezolanos se movilizaron por buena parte del continente durante la guerra nacional de independencia, o como en tiempos más recientes nuestros combatientes internacionalistas –Carlos Aponte, Alí Gómez y tantos otros– lucharon con pundonor en diversas regiones de la Patria Grande, el Partido que se está gestando debe educar a su militancia en las banderas del internacionalismo revolucionario para, de esta forma, prestar una contribución efectiva en las enormes tareas planteadas en Nuestra América. Rescatar el carácter continental de nuestra Revolución debe ser un principio definitorio en la presente etapa.

### **Problemas de la ética revolucionaria**

Hemos venido afirmando que uno de los mayores enemigos de nuestro proceso revolucionario está dentro de él mismo, y tiene que ver con los valores propios de la cultura de la sociedad burguesa, que se reproducen en unos casos y en otros nunca dejaron de existir. El más nocivo de ellos es la corrupción, en la cual aparecen involucrados no pocos funcionarios del Estado y que suele incrementarse en todos los momentos de bonanza petrolera que ha vivido nuestro país. Sostener una postura

<sup>6</sup> Antonio Gramsci: ob. cit. (en nota 2), p. 24.

firme frente a este problema –más allá de las palabras– es la actitud que corresponde al partido revolucionario, pero no es solo ese el problema; una serie de manifestaciones propias de lo que alguna vez se catalogó de «mentalidad petrolera» pululan hoy entre nosotros. De tal manera, el PSUV, si aspira a conformarse en un verdadero partido revolucionario, deberá sostener una lucha constante contra el facilismo, el despilfarro, la indolencia respecto a los bienes públicos, la malversación en cualquiera de sus expresiones, y ejercer una acción no menos intensa contra el oportunismo, el burocratismo, el amiguismo, el nepotismo y, en resumen, contra todas las desviaciones que hemos proclamado combatir. Son cuestiones de la ética y en la política, cuando es revolucionaria, la ética es esencial. El concepto militante de política implica «servir al pueblo» y no lucrar con ese servicio.

Por lo demás, en las condiciones actuales de Nuestra América, donde nuestra revolución vive la permanente agresión del imperialismo, el Partido tiene que ser un destacamento de combate. De tal suerte, debe ser celoso de que a sus instancias de dirección no lleguen individuos que hayan sido vacilantes o hayan incurrido en la traición y/o delación, cuando pasamos por los momentos de confrontación, pues ya demostraron con su conducta que no son auténticamente revolucionarios, y ahora pretenden, en forma oportunista, escalar posiciones.

Hay muchos temas que debemos estudiar, sobre los cuales reflexionar y que, en un momento como este, preocupan a los revolucionarios, tales como:

- la naturaleza y el papel del Estado en la sociedad de hoy;<sup>7</sup>
- los métodos de funcionamiento;
- los métodos de dirección;
- la relación ejército-partido, en un proceso como el venezolano, en el cual la alianza pueblo-ejército ha sido un pilar fundamental.

Conscientes de nuestras propias limitaciones, queremos, no obstante, involucrarnos en la más amplia y participativa discusión, a fin de que la Revolución Bolivariana siga enriqueciendo su ideario y el partido que construyamos salde cuentas con las prácticas incorrectas del pasado. Por lo demás, estamos persuadidos de que construir la unidad del pueblo, construir el Partido Unido, implica trabajar, también, por la unidad ideológica y por la unidad programática.

¡Patria Grande, Revolución Socialista o Muerte!

AMÍLCAR FIGUEROA, historiador y dirigente político, es, en la actualidad, presidente alerno del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) y primer vicepresidente de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de Integración.

<sup>7</sup> Recomendamos releer, por su vigencia, *El Estado y la Revolución*, de Lenin y *Sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo*, de Mao Tsé-tung.

# MEMORIAS SOBRE EL CHE



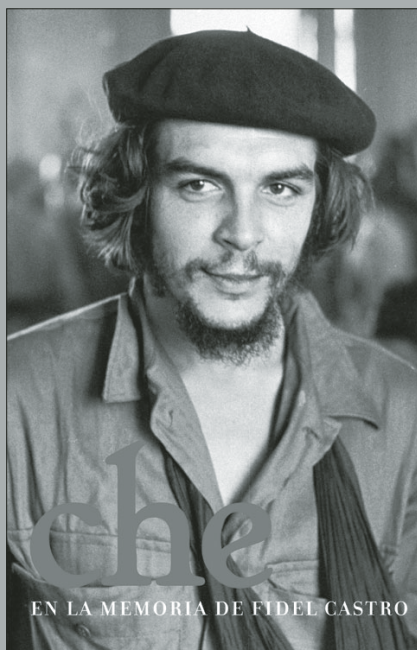
## **CHE GUEVARA Y LA REVOLUCIÓN LATINOAMERICANA**

*Manuel "Barbarroja" Piñeiro*

A partir del triunfo de la Revolución Cubana, el comandante Manuel Piñeiro fue el encargado de ejecutar la política internacionalista de apoyo a los movimientos de liberación en América Latina y África. En esta tarea, colaboró de manera muy cercana con Che Guevara en las misiones del Congo y Bolivia.

Este libro incluye informaciones poco conocidas acerca del papel de Cuba en América Latina, así como sobre la vida y el legado de Che Guevara.

320 páginas, ISBN 978-1-920888-85-5



## **CHE EN LA MEMORIA DE FIDEL CASTRO**

*Fidel Castro*

Una biografía clásica. Fidel Castro escribe, con enorme franqueza y emoción, acerca del histórico compañerismo revolucionario que cambió el rostro de Cuba y América Latina. Fidel crea un vivo retrato de Che Guevara —el hombre, el revolucionario, el intelectual—, revelando diversos aspectos sobre su inimitable determinación y carácter. En la nueva edición de estas memorias políticas se incluye el discurso que dio Fidel al regreso de los restos del Che a Cuba, 30 años después de su asesinato en Bolivia en 1967, y ofrece una franca evaluación de la misión boliviana.

230 páginas, ISBN 978-1-921235-02-3

[www.oceansur.com](http://www.oceansur.com) ■ [info@oceansur.com](mailto:info@oceansur.com)

# REFLEXIONES SOBRE EL CHE



## **EL PENSAMIENTO POLÍTICO DE ERNESTO CHE GUEVARA**

*María del Carmen Ariet García*

Ahondar en el pensamiento y acción de Che, más allá del mito y la descontextualización de su vida, contribuye a resaltar el papel de los valores morales y de la intransigencia revolucionaria en la política, y a no olvidar que el mundo neoconservador y neoliberal de hoy aspira a imponer la plena subordinación de la humanidad a la economía, en un vacío moral y de destrucción global, en contraste con la posibilidad real de construir un proyecto humanista.

215 páginas, ISBN 978-1-921235-56-6

## **CHE SIN ENIGMAS**

### **Mitos, falacias y verdades**

*Germán Sánchez Otero*

Escrito por el comprometido intelectual y actual embajador de Cuba en Venezuela, Germán Sánchez, el presente texto es un aporte a una visión objetiva del Che Guevara. Analiza con franqueza las diversas biografías que sobre el Che se han escrito, la imagen que la prensa ha ofrecido al público, abordando temas que con frecuencia se han tergiversado en los medios y los textos académicos. Sin concesiones ni subterfugios, el autor nos da a conocer importantes propuestas de análisis y evaluaciones sobre la extensa obra y la intensa vida del Che, con el ánimo de mostrarlo en su entrañable transparencia: sin enigmas ni distorsiones.

192 páginas, ISBN 978-1-921235-77-1

## Che, sin enigmas: las biografías

GERMÁN SÁNCHEZ OTERO

El mito del Che provocó la necesidad de conocer cómo y de dónde surgió. Y por ello varios biógrafos comprendieron que tenían un terreno fértil y vasto para hacer circular sus interpretaciones acerca de esa figura que provocaba tanta admiración y curiosidad (quién era y cómo era antes de morir).

La vida y obra del Che Guevara suscitaron en los años inmediatos después de su muerte, un notable número de biografías. Probablemente, ninguna personalidad histórica del siglo XX, luego de perecer, recibió una atención tan extendida, numerosa y variada en biografías publicadas en un breve tiempo.<sup>1</sup>

Sin embargo, la mayoría de esas biografías contribuyeron más a tergiversar que a explicar correctamente la vida del Che. Casi todas escritas en un breve lapso –incluso en cuarenta y cinco días, como fue el caso de *Mi amigo el Che*–, resultaron carentes de seriedad. Sus autores cedieron al afán de lucro y de promoción individual, aprovechándose del interés que despertaba la personalidad multifacética del biografiado. Algunos de ellos trabajaron por encargo de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) y otros hicieron diversas interpretaciones superficiales, capciosas y malintencionadas, movidos por su ideología y valores políticos ajenos o contrarios al pensamiento y la acción del Che.

Paradójicamente, en el campo revolucionario –tanto del mundo capitalista como socialista–, las biografías han sido virtualmente inexistentes, aunque en los últimos años se publicaron algunas importantes.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Hasta 1987 habíamos identificado veintiséis biografías, de las cuales dieciséis fueron publicadas entre 1968 y 1970. Con motivo del trigésimo aniversario de su muerte, aparecieron más de cinco nuevos títulos.

<sup>2</sup> *Ernesto Guevara, también conocido como el Che*, de Paco Ignacio Taibo II (Planeta) y *Mística y Coraje: la vida del Che*, de Jean Cornier, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1992.

Todas las biografías consultadas abordan, en una medida u otra, con enfoques y matices diferenciados que examinaremos después, los siguientes eslabones de la vida del Che: formación de su personalidad (valores, carácter) y de sus ideas políticas; recorridos por América Latina hasta su incorporación al movimiento revolucionario cubano, en México; participación en la lucha revolucionaria en Cuba hasta el triunfo de 1959; su papel y obra como dirigente de la Revolución; relación Che-Fidel y Che-URSS; causas de la salida de Cuba y de su fracaso en Bolivia; impacto de su muerte e influencia mundial de sus ideas y ejemplo.

Las biografías seleccionadas para este trabajo pueden tomarse como una muestra típica de las obras de ese género publicadas hasta hoy. Es útil reseñarlas y comentarlas primero por separado y examinarlas después en conjunto. Así, el análisis individual de un grupo de ellas permitirá al lector hacer sus propias conclusiones y extraer las prevenciones convenientes, al decidir buscar en esas obras una comprensión de la vida del hombre de carne y hueso que fue el Che.

### La más perversa biografía

El más connotado ejemplo perverso es el texto de Daniel James, titulado *Che Guevara, una biografía*.<sup>3</sup> Los nombres de varios capítulos enuncian las intenciones del autor: «Muere un revolucionario, nace un mito», «Cómo se hizo Quijote», «El Quijote sobre el poder», «El rompimiento con Fidel», «Preludios del desastre», «¿Traicionó Fidel al Che?».

Este libro –sin duda la biografía más reaccionaria– fue concebido para influir ante todo en los jóvenes estadounidenses y europeos, que, por aquellos años, encarnaron importantes movimientos de rebeldía y tomaron al Che como uno de sus paradigmas. Sus mordaces valoraciones y propósitos contrarrevolucionarios, unidos a la apología y defensa del imperialismo, anulan toda posibilidad de influencia sustantiva en el lector de orientación progresista; incluso, resulta dudosa su parcial credibilidad para sectores liberales de los Estados Unidos.<sup>4</sup> No obstante, sí funciona para reafirmar la ideología más conservadora de ese país.

Por tener en su base una metodología especializada, vale la pena demostrar analíticamente los componentes e intenciones de esa obra: pretende, como eje central, desmitificar al Che, no para bien, sino con el fin de reconstruir una imagen suya exactamente contraria a sus elevadas virtudes personales. Explica la formación del carácter del Che, atribuyéndole al asma que lo aquejó desde niño la creación

<sup>3</sup> Daniel James: *Che Guevara, una biografía*, Editorial Diana, México, 6ta. impresión, 1979. La primera impresión en español es de mayo de 1971, y la edición original, en inglés, es de 1968 (Stein and Day Publishers).

<sup>4</sup> James es, por ejemplo, el único biógrafo que se atreve a justificar el asesinato de Che y defiende abiertamente la acción de la CIA contra Arbenz en 1954.



de valores tales como el «resentimiento», el «humor amargo» y la «voluntad». Agrega que en las circunstancias históricas en las cuales el infante Ernesto creció, «dominaba el odio y la violencia», por lo tanto fue natural que se le desarrollaran tales valores, «dado su temperamento apasionado».

Según James, el Che se convierte en un aventurero a ultranza, que gusta de la violencia por sí misma; es un Quijote, «absurdo» como este; fue además «cruel», porque a diferencia de aquel actuó en la realidad movido «por una combinación de idealismo y fatalismo»; resultó de su pasado «romántico y pastoral», un hombre pretérito, caballero medieval (el Cid), un *condottiere*. Como guerrillero, en Cuba, no aportó nada, salvo que ejecutó una estrategia diseñada en el siglo XIX; su reputación ha sido exagerada, es un mito, no se puede comparar con Ho Chi Minh, o Mao, o Pancho Villa. Cuando subió al poder fue cruel e insensible; para destruir el ejército asesinó en el paredón a miles de inocentes.

Continúa afirmando James: Guevara fue el principal arquitecto del Estado comunista cubano; Fidel hacía lo que pensaba el Che, pero este terminó vencido por el pragmatismo del líder cubano, que se puso al lado de los comunistas de tendencias soviéticas; su labor al frente de la economía fue un fracaso y al no firmar la Carta de Punta del Este (la Alianza para el Progreso), Cuba fue llevada «al sate-lismo de la URSS».

Por todo ello –sostiene el autor– al Che le fue imposible seguir en Cuba, y rompe con Fidel. Va al Congo y fracasa, como también había fracasado en la Cuba pos-revolucionaria: «un héroe en derrota». Él hubiera querido permanecer en Cuba, pero «fue obligado a largarse». Su guerrilla en Bolivia representa «el fracaso perfecto»; Fidel lo envió allí deliberadamente y él acudió a una muerte esperada, «fatal».

Finalmente, concluye James: «el guevarismo no pasa de ser un abigarrado conjunto de ideas y teorías. No puede ponerse en las mismas categorías de Marx, Lenin o Mao». Quiso ser un Bolívar comunista, «pero llegó a la escena con el atraso de un siglo». «Tiene más en común con Trotsky que con Lenin y más con Mao que con Trotsky». Tiende hacia el utopismo y el nihilismo. En resumen: «el guevarismo y Guevara deben ser considerados como fenómenos de importancia secundaria».

Los mensajes están claros y los objetivos también. No es necesario, por ende, rebatir ni unos ni otros, pues la grandeza del Che no puede ser opacada por esta burda desvirtuación.

Sin embargo, vale la pena conocer esa silueta deformada, pues ella nos muestra la magnitud, por el contrario, de la verdadera y trascendental importancia histórica de la figura del Che. Su integridad, como líder revolucionario de relieve mundial y pensador que hace señalados aportes a la teoría marxista, su valor como paradigma del ser humano nuevo y su ejemplo insuperable de hombre de acción e ideas transformadoras del *statu quo*, es captado por el enemigo.

De ahí el afán –en obras como la de James– de anular esos ingredientes vitales, deformándolos uno a uno hasta derivar una moraleja de índole pragmática: el Che



no es un hombre de este siglo, es anacrónico, no sirve para ahora ni para mañana; es una pieza de museo que como tal debe ser admirada o rechazada.

Esa fue la línea principal de la propaganda contra el Che antes de pasar a la etapa del silenciamiento: tratar de oscurecer su figura, crear duda y confusión, disminuirle su grandeza y neutralizar sus poderosos efectos como idea-ejemplo-fuerza. En tal sentido, la obra de James, aunque grotesca, es el intento pionero más significativo con ese propósito.

### Biografía del aventurero

Del mismo género, aunque con menos detalles e intenciones más reducidas, es la biografía de Horacio Daniel Rodríguez, *Che Guevara: ¿aventura o revolución?*<sup>5</sup>

El hilo conductor de esta obra es mostrar al Che como un aventurero de cualquier época: juega su destino por un rumbo indeterminado y su inseguridad lo lleva a confiar en el azar; en su caso, el aventurero se sirve de la revolución para satisfacer su ansiedad; esta le viene de la dependencia de la madre, provocada a su vez por el asma. Nada explica la motivación del Che para unirse en México a los revolucionarios cubanos y convertirse en uno de los expedicionarios del *Granma*, salvo que ello le permitía continuar la aventura. Con los primeros disparos en la guerrilla, descubre el embrujo por las armas, que se convierte en una obsesión, una pasión devoradora. También asume como un riesgo sus relevantes cargos en la economía; era un neófito en esta materia y por eso fracasa.

Afirma Rodríguez que el Che adopta una postura oportunista ante el poder, al cambiar de ideas con respecto a la Unión Soviética y otros temas, según ello sirviera o no para fortalecer su posición. Lo mismo sucede con la doctrina: se adecua a una u otra, según sirva al poder. No es aceptable la tesis de que el Che tuviera una formación marxista antes de 1959. En teoría, adopta una postura ecléctica, está por encima de Marx; su opúsculo *El socialismo y el hombre en Cuba* es la descripción del ángel, que saldría del pensamiento y viviría en una sociedad de ángeles: una utopía irrealizable.

También este autor, sin pruebas ni argumentos serios, propala la insidia de que el Che se fue de Cuba porque fracasó en una disputa interna y amargado por la dependencia de la revolución a la URSS. Su última aventura –dice– es Bolivia; allí, desde el comienzo parece desanimado, incapaz de conducir la guerrilla: fue al encuentro fatal con su destino, «ayudado» por el poco apoyo que recibe de Cuba. La mitología en torno a Guevara no parece satisfacer otras perspectivas que las del romanticismo de los adolescentes y jóvenes inmaduros.

<sup>5</sup> Horacio Daniel Rodríguez: *Che Guevara: ¿aventura o revolución?*, Plaza y Janés Editores, Barcelona, 1968.

Es curioso que esta biografía de Rodríguez fue apenas divulgada: su primera edición ocurrió en 1968 y la segunda en 1985, ambas en España. El autor concluyó la obra dos meses después de morir el héroe guerrillero; es un texto concebido también con el ánimo de desvirtuar en toda la línea al Che, pero la velocidad de su elaboración determinó un resultado más superficial y simplón que el de James.

Aunque, como se podrá apreciar, varias de las deformaciones son similares y los objetivos idénticos: mellarle el filo cortante a la personalidad revolucionaria universal del Che y escamotearle su papel movilizador, fue un texto de emergencia, que al ser «superado» por el de James dejó de promocionarse.

### Una biografía en cuarenta y cinco días

Otra biografía escrita con mucha prisa, fue la de Ricardo Rojo: *Mi amigo el Che*.<sup>6</sup> Aprovechándose de la circunstancia de haber conocido a Ernesto Guevara en la segunda gira por América Latina y de ciertos contactos personales con este entre 1953 y 1956, y en menor medida después de 1959, Ricardo Rojo, de nacionalidad argentina e ideología inequívocamente burguesa, escribió en tiempo récord este libro: cuarenta y cinco días.

El libro de Rojo fue el más divulgado y conocido, y el más referenciado por otros autores en el mundo occidental, hasta iniciarse la década de los noventa. ¿Valores intrínsecos o promoción comercial –con fines políticos– de la obra? Sin duda, lo segundo.

Presentada por el autor como una suerte de sus memorias sobre el Che, intenta a la vez ofrecer una secuencia biográfica de aquel y, por ende, en las valoraciones que realiza están presentes los criterios ideológicos de Rojo.

En rigor, este libro no tiene valores en sí mismo que le acrediten su repercusión editorial. Las «memorias» de Rojo, para quien haya conocido al Che, no ya directamente, sino en su carácter de figura histórica (acciones y pensamiento), resultan mentirosas y superficiales en una gran parte de sus formulaciones.<sup>7</sup>

Tales «memorias» rebasan el límite del testimonio personal y pretenden convertirse en una interpretación de la conducta del Che en importantes momentos

<sup>6</sup> Ricardo Rojo: *Mi amigo el Che*, Editorial Jorge Álvarez, Buenos Aires, 1968. En Argentina, esta obra desató una fuerte reacción; se destaca el texto publicado por Norberto A. Frontini: *Críticas al libro Mi amigo el Che*, Editorial A.L., diciembre, 1968. Frontini demuestra allí la inexistencia de amistad entre Rojo y Che, y las posiciones ideológicas burguesas y el oportunismo político del improvisado biógrafo.

<sup>7</sup> Sin embargo, el libro de Rojo logró confundir hasta a pensadores de la izquierda. Por ejemplo, en *El Popular* de Montevideo, el 26 de julio de 1968 se publicó una reseña favorable: «el libro vale...0 aunque hay que saber leer». También Carlos María Gutiérrez ofrece un balance positivo sobre el autor y su obra, en *Marcha*, Montevideo, 20 de julio de 1968.

de su vida. Ello es obvio en su versión acerca de los motivos que lo condujeron a la decisión del «proyecto boliviano»: Cuba no podía tener independencia frente a «los rusos», ni económica ni política; necesitaba aliados latinoamericanos y solo era posible obtenerlos por la vía de liberar revolucionariamente esos países.

Sigue el autor argentino: el Che trató infructuosamente de lograr el desarrollo industrial de Cuba y llegó, incluso, a admitir que unas relaciones económicas con los Estados Unidos serían muy buenas para la Isla, todo con el afán de buscar una distancia prudente de la URSS. Al regresar a Cuba en marzo de 1965, se produce la ruptura con Castro, quien ya había decidido no enfrentarse a los rusos, con el interés de que sobreviviera la Revolución Cubana; el Che estuvo entonces a punto de convertirse en un nuevo Trotsky, pero prefirió renunciar antes que devenir antagonista del gobierno socialista. Después de la experiencia «amarga» del Congo –Moscú había pactado con Washington las líneas generales de la política africana–, el Che, de completo acuerdo con Fidel, decide atizar los movimientos de liberación en el continente, que estaban siendo sofocados por la política soviética de apaciguamiento, con lo cual se ponía cada vez más en peligro la independencia política y económica de Cuba.

Puede afirmarse que esta es la tesis central del libro de Rojo, a la que dedica el mayor espacio, argumentación, «pruebas» y «testimonios» personales. Su obra carece de aliento intelectual. La personalidad histórica del Che es mutilada, simplificada a los vaivenes de la «confrontación y arreglos entre las grandes potencias», su pensamiento reducido a algunos dudosos diálogos personales con el autor, en los que exalta aquellos instantes de la vida del Che en que Rojo estuvo junto a él.

Sería difícil probar que esta obra haya sido escrita por encargo de la CIA, acusación esgrimida en los años siguientes a su publicación. El hecho de que el autor comprometiera la primera edición con una editorial estadounidense no es prueba convincente, ni tampoco las deformaciones tendenciosas aludidas, pues en aquella coyuntura la propaganda imperialista surtió efecto entre muchos pensadores y políticos. Aunque Rojo conoció al Che y estuvo en Cuba, se dejó confundir. Instrumento consciente o no de la CIA, lo cierto es que *Mi amigo el Che* está lleno de falsedades y nunca después el autor las rectificó.

Las múltiples ediciones en español, inglés y varios idiomas permiten levantar la sospecha de que esta obra ha sido promocionada como factor de confusión en torno al Che y a Fidel, con el fin de hacer aparecer al primero como víctima de la asfixia de la Revolución por parte de la URSS, y a Fidel como un oportunista. La tesis es obvia: no hay espacio para la independencia real en el continente, el Che fue al cadalso inevitable.

Rojo no critica nunca al Che y muchas veces parece mostrar una gran admiración por este, pero de hecho lo ubica como un simple mortal incapaz de cambiar el rumbo fatal de los acontecimientos, que para Rojo no es la dominación imperialista,

sino el control geopolítico de las zonas de influencias por la URSS y por los Estados Unidos, en aquellos años de guerra fría.

Al escribir su libro, Rojo desconocía que su «amigo el Che» en fecha tan temprana como el 13 de abril de 1956, en carta personal a su madre Celia le decía: «Me alegro que te haya caído bien el gordo Rojo. Yo espero que me siga cayendo bien, pero me temo que no será posible. Por la conversación con él te habrás dado cuenta de que me considera un loco lindo, de esos que sirven para contar anécdotas. No dudo que en la vida diaria lo seré, pero en el análisis político de los problemas le oí decir cada barrabasada que me dejó espantado».<sup>8</sup>

*Yo tengo siete vidas*,<sup>9</sup> del autor alemán Frederich Hetmann, es una biografía de divulgación, concebida para el lector joven de Europa Occidental. Este libro en su primera mitad parece inofensivo, sin mayores pretensiones que divulgar la vida del Che.

Pero la segunda parte muestra su verdadera intención: caricaturiza las ideas del Che sobre el hombre nuevo y la eficiencia económica, calificándolo de utópico; afirma que sus sentimientos de odio reflejan matices patológicos; también eran irreales las ideas del Che sobre las posibilidades de la lucha armada en Suramérica; la guerrilla en Bolivia aparece signada por la tragedia, la desesperación, la angustia, la desmoralización, fue una locura.

También este autor se extiende en especulaciones e insidias para demostrar las divergencias entre el Che y el Partido Socialista Popular, en Cuba, y entre el Che y la URSS; Fidel decide consolidar a Cuba, el Che discrepa: quiere extender la lucha de liberación a América del Sur.

Hetmann se apoya en la versión de Rojo para explicar la salida de Cuba, pero dice que es más verosímil el «Informe R»: el Che, cuando regresó de su última gira en marzo de 1965, fue recluso en una clínica debido a una profunda crisis física y síquica. De ese documento se desprende la explicación «patológica» de la vehemencia explosiva del Che por activar los movimientos de liberación en el Tercer Mundo.

Una vez concluido el libro, Hetmann se hace una autoentrevista, para que no queden dudas de su propósito: «Yo admiro a Guevara porque estuvo dispuesto a dar su vida por la realización de una mayor justicia social y nadie puede hacer más [...] Pero eso no puede significar que yo cierre los ojos ante errores que hoy nos resultan evidentes».

Los comentarios son innecesarios. *Yo tengo siete vidas* contiene los ingredientes típicos de la obra hecha por especialistas de inteligencia con fines disolventes, en este caso dirigida a golpear el prestigio del Che entre los jóvenes europeos, por medio de un autor que supuestamente lo admira.

<sup>8</sup> Citado en William Gálvez: *Viajes y aventuras del joven Ernesto*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2002, p. 391.

<sup>9</sup> Frederich Hetmann: *Yo tengo siete vidas*, Ediciones Lóguez, Salamanca, 1982.

## Che, psicoanalizado

Otra muestra de esa línea tergiversadora extrema es *Radiografía del Che*,<sup>10</sup> escrita por el español Enrique Salgado y publicada en 1970. En este caso, se vende un supuesto «ensayo antropológico» que «trata de acercarse y comprender al hombre, tanto como a su peripecia política».

Esta obra seudocientífica, dice usar el psicoanálisis: «buscador de libertades, incapaz de ligarse totalmente a nadie por considerar inacabada su misión –su ruptura con Fidel Castro así lo demuestra– ofrece curiosos aspectos de depresión y dependencia». Porque «el Che nunca será libre», «ello obedece a su condición de asmático». Su vinculación a América Latina refleja –sublimación de sentimientos mediante– la dependencia extrema a la madre. En las reacciones políticas del Che –tanto en Guatemala, como en Cuba y después–, hay mucho de biológico.

Siguiendo esa pauta psicoanalítica, Salgado intenta explicar la vida de Guevara y, para colmo, se apoya además en las versiones de Ricardo Rojo, Gambini y James. De todo esto sale una versión del Che enfermo, con una personalidad deformada por el asma que lo convirtió en un ser en lucha permanente con su frustración y soledad.

Imbécil o instrumento malévolo –o ambas cosas–, Salgado llevó hasta límites increíbles el factor asma como ingrediente fundamental en la conducta histórica del Che; tal factor, por cierto, aunque con dosis matizadas, aparece subrayado en las obras de James y Rodríguez y en otras interpretaciones biográficas.

## Biografía periodística

Un esfuerzo de más elaboración es el de Hugo Gambini con su *Ernesto Che Guevara*.<sup>11</sup> Publicado también en 1968 en su país, Argentina, el autor de esta obra repite las mismas tesis de Rojo acerca de la salida de Cuba del comandante Guevara.

Sin embargo, este libro refleja con cierta objetividad la evolución de la vida del Che, aunque no es tampoco un texto riguroso; se trata de una reconstrucción periodística, basada en otros autores, testimonios y cartas publicadas. El anticomunismo de Gambini hace que este reproduzca con naturalidad la tesis de Rojo y otros enfoques similares.

Un señuelo que también descalifica la seriedad de esta obra, son los múltiples diálogos que inventó el autor atribuyéndolos al Che con diferentes interlocutores y la inclusión de supuestos pensamientos expresados por el Che en determinadas situaciones. A pesar de estos y otros recursos periodísticos superficiales e irrespetuosos, y las distorsiones aludidas, el resultado no presenta un saldo tan negativo en comparación con los textos comentados hasta aquí.

<sup>10</sup> Enrique Salgado: *Radiografía del Che*, Editorial Dopesa, Barcelona, 1970.

<sup>11</sup> Hugo Gambini: *Ernesto Che Guevara*, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1968.

Con más reiteración y énfasis que Rojo, Gambini coloca al Che como la «conciencia crítica» de Fidel; influye y orienta a este en los difíciles años de la Revolución. Es de cierto modo la tesis conocida del Che como cerebro comunista de la Revolución –sin llegar a la caricatura promovida por la prensa estadounidense– y Fidel, el pragmático, que fue arrastrado por los acontecimientos y ayudado en cada etapa por aquel.

También resulta muy superficial Gambini al analizar las ideas económicas y políticas del Che. Por ejemplo, para el autor los criterios de este sobre la preeminencia de los estímulos morales «no fueron descabellados», porque «la calentura tropical desataba una euforia aprovechable en cada movilización», «Che conocía muy bien a los cubanos y confiaba más en su temperamento que en sus cerebros». Él «pretendía alcanzar un objetivo demasiado ambicioso: modificar las estructuras mentales ya mismo, sin esperar el advenimiento de las nuevas generaciones».

Respecto a los criterios del Che sobre la estrategia de lucha revolucionaria en América Latina, Gambini le atribuye estar «obsesionado por la idea de la revolución permanente (la única receta para evitar los peligros del aburguesamiento, según aprendiera de León Trotsky)». El autor revela así su inconsistencia profesional, al abordar el pensamiento del Che en sus diferentes aristas.

Gambini ha sido, sin embargo, menos divulgado y promocionado. Ello es atribuible a que su obra es más objetiva que otras y a la documentación utilizada por él –hay muchas citas, escritos y cartas de Guevara–, lo que para la propaganda sesgada es contraproducente; más aún en los primeros años de la muerte del Che, en los cuales el impacto mundial de su conducta y de sus ideas crearon una bomba moral y política que se propusieron desactivar con la mayor urgencia. Por otra parte, el libro de Gambini, por sus desvirtuaciones y deficiencias, no podía ser reproducido por editoras serias, de orientación progresista.

## Una biografía sincera

Una obra menos negativa –dentro del campo liberal–, sustentada además en métodos más modernos del género biográfico, es la de Andrew Sinclair titulada *Che Guevara*.<sup>12</sup> Con fines divulgativos, pues no está respaldada por una investigación escrupulosa, el autor evita, sin embargo, el relato pueril y anecdótico, y hace énfasis en algunas actividades y campos de ideas más sobresalientes del biografiado.

Parte de una premisa: la Revolución Cubana contribuyó en gran medida a la formación y afirmación de su pensamiento político. Pero la muy limitada bibliografía a la que tiene acceso y, sobre todo, la estrechez de miras ideológico-políticas del autor, lo llevan a desfigurar y simplificar áreas importantes del pensamiento del Che.

<sup>12</sup> Andrew Sinclair: *Che Guevara*, Editorial Grijalbo, Barcelona, 1973.

Por ejemplo, solo toma en cuenta *La guerra de guerrillas* al examinar las ideas de aquel sobre la revolución social y formula al respecto apreciaciones completamente falsas: Guevara –dice Sinclair– hace una glorificación de la guerrilla y ofrece «una visión celestial de este héroe perfecto [...] es un santo».

Las deformaciones también son visibles en el terreno de las ideas económicas; afirma que el ascetismo personal del Che «le llevaba a una forma primitiva de comunismo, en la que el dinero es un mal inútil. Lo despreciaba, como los monjes de la Edad Media despreciaban la usura». Este reduccionismo individualista le hace concluir: «Las teorías económicas del Che fueron dictadas por sus principios morales» y, en consecuencia, el autor califica sus ideas sobre el papel de la ley del valor en el socialismo como «una teoría utópica». Y remata: «nunca fue pragmático en sus teorías económicas, más bien era fanático».

En ese tono, Sinclair, en varios momentos, transparenta su admiración por el Che y simpatía hacia Cuba: «Aparte de Fidel, ningún otro hombre habría conducido al pueblo cubano al umbral de una sociedad nueva». Sin embargo, al abordar los motivos de Guevara para ir a Bolivia, su explicación es similar a la de Rojo y otros, o sea presiones de la URSS sobre Fidel para cambiar las concepciones económicas, fracaso del Che en este terreno y discrepancias con el líder de la revolución.

La obra de Sinclair tipifica la visión de muchos hombres progresistas, que miran al Che con sus lentes axiológicos liberal-burgueses, y a la vez reflejan su admiración y respeto hacia el singular revolucionario. No es casual, por consiguiente, que ellos evoquen –como hace Sinclair– la ya célebre definición de Jean Paul Sartre: «Che es el hombre más completo de nuestra época», como una premisa de sus valoraciones.

### Biografía desde el «socialismo real»

Detengámonos en la única biografía que, a saber, ha sido escrita por un autor de un país socialista, el libro del soviético Y. Lavretski, *Ernesto Che Guevara*.<sup>13</sup>

Es esta una obra de divulgación hecha con respeto y admiración hacia el Che, Fidel y Cuba. Posee buen respaldo bibliográfico, aunque casi nunca refiere las fuentes. Coloca el énfasis en aspectos de la biografía del Che que podían resultar de más interés e importancia para el entonces lector soviético, sin descontar a los países occidentales, sobre todo de nuestro continente. Es un libro que se esfuerza por desmitificar la figura del Che y por exponer la evolución de su vida en permanente interacción con las circunstancias, y toma en cuenta –para responder correctamente– muchas de las tergiversaciones aludidas.

<sup>13</sup> Y. Lavretski: *Ernesto Che Guevara*, Editorial Progreso, Moscú, 1975.



Pero es nuestro propósito, acorde con el objetivo de este trabajo, abordar los aspectos que consideramos deficientes o incorrectos de los criterios que se formulan (o están ausentes) en la obra de Lavretski.

Existen tres áreas de análisis que no compartimos.

La primera, se relaciona con la discrepancia del autor respecto a los juicios del Che sobre el papel de la lucha revolucionaria armada en la maduración de las condiciones para tomar el poder en Cuba.

Lavretski afirma que esa tesis «suscita dudas» y argumenta: «la prueba de que existe el budín es la posibilidad de comerlo...». «En esta cuestión, la victoria es el criterio que determina la legitimidad de las acciones de las fuerzas revolucionarias».

Estamos en presencia de una discrepancia fundamental con la interpretación del Che sobre el proceso revolucionario cubano, por un lado, y por el otro respecto a sus concepciones sobre el papel del factor subjetivo, de la vanguardia, en el desencadenamiento y aceleración de la «situación revolucionaria», en las condiciones de la mayoría de los países latinoamericanos. Lavretski no lleva su discrepancia a ese plano regional, pero sus argumentos, breves y simples, pueden interpretarse como una respuesta implícita a este enfoque de Guevara.

Al parecer, el autor rehúye el problema y no analiza con la profundidad y extensión debidas las ideas del Che sobre la estrategia y la táctica de la revolución en América Latina. De un modo lateral e insuficiente vuelve al tema cuando examina comparativamente las condiciones de lucha existentes en Cuba al comenzar la guerra en 1956 y las de Bolivia en 1966: «Pero de continuar comparando con los acontecimientos cubanos, la variante boliviana no aparecía tan infalible como podría creerse a primera vista».

El biógrafo soviético establece las diferencias, basándose en un método teleológico: el resultado del hecho histórico (la victoria en un caso, la derrota en otro) es su único e infalible criterio de la verdad. ¿Y qué habría pasado si los expedicionarios del yate *Granma* hubieran sido aniquilados en la primera etapa de la guerrilla, lo cual era históricamente posible? ¿Puede considerarse que el asalto al Cuartel Moncada en 1953 representó una estrategia equivocada, debido a las circunstancias fortuitas que provocaron ese revés?

Lavretski es muy respetuoso con la gesta boliviana y con las ideas del Che sobre la estrategia de lucha, pero tal posición ética no debe conducir a una actitud de afrontar este tema sin la debida profundidad ni con una posición más definida.

El Che —escribe el autor— «estaba más persuadido que nunca de la eficacia del método guerrillero». Y continúa: «Podría discutirse la utilidad y oportunidad de tal tipo de acciones, su forma, la necesidad de un acuerdo y coordinación con los movimientos revolucionarios locales, mas no podía discutirse el derecho a realizarla». Al evadir en su obra el fondo de la discusión y no ofrecer la integridad de las ideas de Guevara al respecto, Lavretski excluye uno de los elementos clave en la trayectoria del Che: su pensamiento acerca de la revolución en el continente.

Este se simplifica o no se considera integralmente, lo que de hecho representa una deformación. Ello es aún menos aceptable, ya que basándose en formulaciones inexactas el autor enfatiza sus propios criterios en contraste con los del Che, que aparecen equívocos. Esa falta de rigor y objetividad debilita, sin duda, el meritorio esfuerzo de Lavretski.

La segunda área del pensamiento de Guevara que apenas aborda se refiere a los aportes que aquel hizo a la economía política del socialismo. Subraya el papel del Che –«el segundo hombre que más incidió en la política económica de la revolución»– en la edificación de las bases económicas del socialismo en Cuba, pero no resulta tampoco exacta la valoración que ofrece de sus ideas económico-políticas. Lavretski pone el énfasis en una cita aislada del biografiado: «el socialismo se construye dando más y mejores productos al pueblo, repartiendo más entre el pueblo».

Esa afirmación, sacada de contexto, no refleja las coherentes reflexiones del Che acerca de cómo crear el socialismo para lograr dar más y mejores productos al pueblo, ciertamente, pero basándose en un conjunto de factores –estímulos morales, papel de la vanguardia, sistema presupuestario de financiamiento y otros– que el autor virtualmente excluye de su análisis.

No menciona los aportes –ni las ideas– del Che a la economía política del socialismo; la muy conocida polémica de 1963 en torno a importantes temas relacionados con esta ciencia social no es considerada, ni tampoco sus opiniones sobre las relaciones económicas internacionales. De tal modo queda fuera de la biografía uno de los eslabones más sobresalientes del pensamiento teórico del Che. ¿Acaso es porque el autor lo desconoce, o se trata de un esfuerzo para evitar discrepancias con el biografiado?

Pareciera más esto último. Lavretski, seguramente por su gran respeto hacia el Che, evita incursionar en áreas polémicas de su pensamiento, y cuando lo hace trata de acercarlo a sus propias opiniones. Ello ocurre, por ejemplo, al considerar el tema de los estímulos morales y materiales: «Digamos en honor del Che, que si bien defendía la supremacía de los estímulos morales frente a los materiales, en un artículo que se publicó en febrero de 1964 reconoció que ese punto de vista “subjetivo” debía aún ser comprobado en la práctica. Y si se demostraba –escribía– que la política de los estímulos morales impedía el desarrollo de las fuerzas productivas, habría que rechazarla de plano y volver a la política de estímulo material».

De tal modo, nuevamente basándose en una cita aislada, se desconoce el conjunto de las ideas sobre el tema y se busca una formulación cuidadosa, para que el lector comprenda la supuesta equivocación del Che. Pero esta vez el autor, en su afán de encontrar las raíces del pensamiento de Guevara, comete un desliz que autoriza a suponer su incomprensión del problema: «Este escritor [José Ingenieros] consideraba que los estímulos morales son la fuerza motriz del progreso social, idea muy afín a los criterios del Che».

Lavretski se equivoca por tres razones: para el Che, los estímulos morales no son la fuerza motriz del progreso social; el Che nunca consideró a Ingenieros –que sepamos– como una de sus fuentes intelectuales básicas; todo el pensamiento del Che –también con respecto al papel de los estímulos en la transición socialista– se fundamenta en una interpretación certera del marxismo.

La insuficiencia global de esa biografía es no considerar al Che como un creador que dejó importantes aportes a la teoría de la revolución y del socialismo. Y, por otra parte, la inconsecuente postura del autor ante el biografiado, con quien tiene evidentes divergencias y en vez de exponerlas, las oculta o minimiza: todo lo contrario a lo que siempre hizo y promovió hacer el Che con los pensadores revolucionarios.

### Biografías recientes: continuidad y aportes

Después de la biografía de Lavretski, a mediados de la década del setenta, no fue publicada en el mundo casi ninguna otra. Repentinamente, la ola de interés en torno al Che, que se suscitó de forma ascendente en los años ochenta y, sobre todo, en la segunda mitad de los noventa, provocó también una nueva marea de biografías, casi todas editadas entre 1995 y 1997. Se destacan entonces *Mística y coraje. La vida del Che*, del periodista francés Jean Cornier; *Che, Ernesto Guevara, una leyenda de nuestro siglo*, del autor francés Pierre Kalfon; *Ernesto Guevara, también conocido como el Che*, del mexicano Paco Ignacio Taibo II; *La vida en rojo*, de otro mexicano, Jorge G. Castañeda; y *Che Guevara: una vida revolucionaria*, del periodista estadounidense Jon Lee Anderson.

La historia se repite. En varias de esas biografías se observa el afán de lucro y el propósito de demeritar y crear en el lector percepciones equívocas, para contrarrestar la peligrosa fuerza transformadora del Che. Ese objetivo es muy visible en la obra de Castañeda.<sup>14</sup>

Con el cinismo que le es inherente, ese autor azteca aborda al Che con intenciones manipuladoras, y con el fin de desprestigiar la Revolución Cubana y contribuir a la desmovilización de la izquierda latinoamericana. ¿Por qué decide escribir una biografía de una figura que es antagónica con su propia vida, y con su ética y filosofía política? ¿Una obra sobre alguien de quien considera que sus ideas ya no tienen vigencia?

La posición de Castañeda es muy paradójica e inconsecuente. Petulante y ególatra, él sabe de la universalidad del Che y quiere utilizarla para su propia promoción publicitaria y política. Y lo hace, por supuesto, con su prisma académico, ofreciendo un balance histórico a tono con sus valores políticos, supuestamente en favor de un capitalismo «social» remozado, dulce e irrealizable en nuestras tierras. En

<sup>14</sup> Jorge G. Castañeda: *La vida en rojo*, Editorial Espasa Calpe, Argentina, 1997.

verdad, Castañeda muestra también en esta obra ser un servil defensor de los intereses estadounidenses en su país y en toda Nuestra América. Esas costuras personales, ideológicas y políticas, sobresalen en su biografía sobre el Che, quien, sin proponérselo, le pasa cuentas al otrora «intelectual de izquierda», pues sus juicios de valor respecto del biografiado reflejan la hechura del autor.

Se trata, sin embargo, de un texto muy elaborado que utiliza una exhaustiva bibliografía y diversas fuentes primarias. Es una obra tendenciosa, suavizada con el terciopelo de una excelente prosa. Con tales atributos, el autor puede confundir a una parte de los lectores, en especial a aquellos que no posean antecedentes veraces sobre la vida y el pensamiento del Che, ni respecto a la biografía intelectual y política de Castañeda. Es un libro que entremezcla episodios y facetas de la vida del biografiado con interpretaciones y un enfoque general sesgados. Ello es más evidente en la segunda parte, después del triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y hasta la muerte del Che en Bolivia.

Castañeda ofrece una amplia información sobre la infancia y juventud del Che y tanto en esa etapa como en el período de su encuentro con Fidel en México y los preparativos del desembarco del *Granma*, es bastante objetivo. No obstante, al igual que otros biógrafos, cae en el subterfugio de explicar la conducta ética y política de Ernesto Guevara desde una perspectiva psicológica; en su caso, Castañeda le adjudica al Che una personalidad neurótica y afirma que esta lo conduce una y otra vez a actuar por medio de «saltos hacia adelante».

Vale reconocer que *La vida en rojo* es un libro prolijo y hasta interesante en la reconstrucción de la trayectoria existencial de Ernesto Guevara hasta su salida en el yate *Granma* hacia Cuba, en noviembre de 1956.

Sin embargo, al abordar el período posterior, el texto deja de tener el talante de una biografía y se convierte sin ambages en una sucesiva cadena de afirmaciones y tesis avaladas, casi siempre, por citas de autores poco creíbles –por ejemplo, ex soviéticos– u opositores absolutos de la Revolución Cubana, entre ellos varios traidores como Carlos Franqui y Dariel Alarcón.

La vida del Che es entonces fragmentada en sus quehaceres revolucionarios y, en rigor, estos no se toman en cuenta por el autor o resultan minimizados. Por ejemplo, sus responsabilidades en el Ejército Rebelde, como presidente del Banco Nacional de Cuba o como Ministro de Industrias; tampoco en su carácter de representante de la Revolución en decenas de misiones internacionales o su relevante participación en la forja de las nuevas ideas sobre el socialismo.

El ex canciller azteca pone el acento en lo que desea demostrar: las tensiones en los nexos entre Cuba y la Unión Soviética, las posiciones de Cuba ante el conflicto chino-soviético, los manejos diplomáticos ocultos de Fidel y Kennedy, la proyección de Cuba hacia los partidos comunistas y los movimientos armados de liberación nacional en América Latina. Todo ello con el propósito de exponer

supuestos desencantos y discrepancias del Che con Fidel y con otros dirigentes revolucionarios, en particular respecto a la política económica a seguir en la Isla y la autonomía o dependencia de Cuba a la URSS. Castañeda no es nada original: repite las mismas tesis infundadas de varios biógrafos y periodistas que levantaron esas calumnias sin pruebas desde la salida del Che de Cuba. A pesar de sus muchas citas y fuentes, el autor no aporta ningún testimonio o documento veraz que demuestre las discrepancias entre el Che y Fidel, las cuales, según Castañeda, dieron lugar al último «salto adelante» del Che: su salida para el Congo y después el proyecto revolucionario en Bolivia.

El escritor y político mexicano se apoya en la frase inventada por uno de los traidores más desvergonzados de la Revolución Cubana, Carlos Franqui, quien dice haberle escuchado al Che decir «con Fidel ni matrimonio, ni divorcio». Así, Castañeda avanza con su ropaje academicista hasta deslizar su verdadera intención: «el Che comienza a entender que está solo; no contra Fidel, pero tampoco con él». Y prosigue: «la situación del Che es insostenible, como lo es el par de consignas que la resumen: con Castro ni matrimonio ni divorcio; ni con Fidel ni en contra de él. Nada tan insoportable para Ernesto Che Guevara como esta madeja de ambivalencias, contradicciones y media luz crepuscular. Es el momento de marcharse».<sup>15</sup>

Más adelante, Castañeda se muestra de cuerpo entero y repite la conocida difamación que la CIA divulgó desde los días siguientes a la muerte del Che: «Fidel Castro no mandó al Che a morir a Bolivia; tampoco lo traicionó ni lo sacrificó: sencillamente permitió que la historia corriera su curso, con plena conciencia del destino al que conducía. No hizo; dejó hacer».<sup>16</sup>

Castañeda, como otros autores, deja de lado al Che pensador y lo muestra ante el lector cual si fuera un hombre de aventuras, que durante su vida en Cuba fue víctima de sucios juegos políticos del poder.

De ese modo queda en evidencia el doble propósito de *La vida en rojo*: desprestigiar a Fidel y a la Revolución Cubana y sostener la tesis de que el Che es un derrotado y fue convertido en un mito crístico, luego de ocurrir ese desenlace fatal. De ahí la mezquina y fútil sentencia final del autor: el Che es «un ícono cultural de nuestro tiempo». O sea, una especie de referente efímero. En realidad no vale la pena rebatir esta idea, pues la trascendencia universal del Che es obvia.

El «mérito» más notorio de *La vida en rojo* es su diseño plagado de sutilezas, para confundir a los lectores que no conocen la vida y el ideario del Che, ni la historia de la Revolución Cubana y los entrañables nexos afectivos, ideológicos y políticos entre Fidel y el revolucionario argentino-cubano.

<sup>15</sup> Jorge G. Castañeda: ob. cit., pp. 335-336.

<sup>16</sup> *Ibíd.*, p. 463.

Otro mexicano, Paco Ignacio Taibo II, escribió y publicó, casi simultáneamente, una extensa y hermosa biografía: *Ernesto Guevara, también conocido como el Che*.<sup>17</sup> La obra está signada por la sinceridad y el apego al biografiado, pero sin apologías ni regodeos. Es, en mi opinión, hasta la fecha de su edición en 1996, la más completa y objetiva que conozco.

Posee una amplia documentación y el estilo es agradable, sencillo y casi siempre objetivo. Su defecto más evidente resulta de las carencias teóricas del autor: el análisis acerca del pensamiento del Che no se corresponde con las complejidades y el rigor de este. Habría que reprocharle también a Paco Ignacio el aceptar que no fue la CIA la principal responsable del asesinato del Che, pues aunque ello no ha sido probado con documentos, existen numerosas evidencias que, unidas al sentido común, al menos suscitan la duda acerca de la responsabilidad de la CIA en la decisión de asesinarlo.

La obra de Paco Taibo II sigue de manera amena el curso cronológico del biografiado, pero le faltan interpretaciones a la altura de la personalidad y la vida multifacética del Che. Tampoco son expuestos los contextos sociohistóricos en los que se desarrolló y esto origina muchas veces la percepción de que la trayectoria del Che es consecuencia exclusiva de su excepcional personalidad.

El autor respeta a su biografiado y hace una correcta valoración de los vínculos del Che con la Revolución Cubana y con Fidel. Sin embargo, no expone el fascinante quehacer de Guevara dentro de la Revolución Cubana entre 1959 y 1964, período en que desarrolló y mostró muchas de sus virtudes como dirigente político, estadista, escritor y original teórico de la revolución y el socialismo.

Otra biografía que es necesario comentar es la de Jon Lee Anderson: *Che Guevara: una vida revolucionaria*.<sup>18</sup> Al igual que otras, esta es innecesariamente extensa: 704 páginas. La obra es descriptiva, sin aliento analítico: la apasionante personalidad del Che y su vida sin tregua apenas se hacen sentir en las páginas del libro y cuesta trabajo avanzar en la lectura. Hay muchas descripciones de hechos y pocos o ningún examen de ellos; es notoria la ausencia de antecedentes y de las circunstancias en que actúa el Che; tampoco se expone su pensamiento teórico. A Anderson lo lastra su formación como periodista especializado en sucesos inmediatos, acorde con el estilo de la prensa estadounidense.

El autor tuvo acceso a fuentes que le suministró la viuda del Che, Aleida March, por ejemplo el diario en la Sierra Maestra y el diccionario filosófico que elaboró en sus años juveniles. Además, posee una amplia bibliografía y accedió a fuentes diversas que pudo entrevistar en Cuba, Argentina y otros lugares. Mas, debido a las deficiencias ya señaladas, el saldo final de la obra me parece mediocre.

<sup>17</sup> Paco Ignacio Taibo II: *Ernesto Guevara, también conocido como el Che*, Editorial Planeta, México, 1996.

<sup>18</sup> Jon Lee Anderson: *Che Guevara: una vida revolucionaria*, Editorial EMECE, Barcelona, 1997.



Anderson adopta una posición ambigua respecto de las calumnias que aluden a las supuestas contradicciones Fidel-Che. Esa posición vacilante en un asunto tan sensible, revela la falta de rigor y valentía del autor para encarar una distorsión que de tanto reiterarse en los libros y en la prensa ha causado confusión en muchas personas.

La última biografía que examinaré es la del autor francés Pierre Kalfon: *Che, Ernesto Guevara, una leyenda de nuestro siglo*.<sup>19</sup> Se trata de otra extensa obra de 676 páginas, pero nada en ella es nuevo, si la comparamos con otras biografías anteriores o coincidentes en tiempo.

Es, sin duda, un texto bien escrito y documentado. Otra vez es necesario identificar el semblante del autor ante los ejes fundamentales de la vida y las definiciones político-ideológicas y teóricas del Che. Pierre Kalfon puede reclamar un buen lugar entre las biografías del Che más sesgadas. Deforma los hechos desde 1959, inventa por doquier discrepancias del Che con Fidel durante el curso de la Revolución y repite la misma infamia conocida, sin pruebas ni argumentos creíbles, de que tales diferencias dieron lugar a la salida del Che de Cuba.

Como otros autores, coloca a Fidel en una posición fría y calculadora. Afirma que si ganaba el Che también sería un triunfo para Fidel y Cuba y, si moría, Fidel no tendría ninguna responsabilidad y el Che se convertiría en un mártir movilizador. En ambos casos, agrega, Fidel se quitaría la sombra de un competidor. La marca en la frente de la posición antiguevarista y contra la Revolución Cubana de Kalfon, es visible en el uso que hace –dándole absoluta credibilidad– de las difamaciones escritas por Carlos Franqui y otras dichas por Dariel Alarcón.

Por su parte, la obra del francés Jean Cornier, sin ser estelar, logra mostrar una visión multifacética del Che y ofrece al lector, con honestidad y pasión la figura del biografiado de manera humana.

Las biografías de Paco Ignacio Taibo II y de Jean Cornier reflejan una contracorriente promisoría a nivel internacional de análisis y reconsideración de la vida y obra del Che, con una perspectiva objetiva y honesta, al servicio de la utopía por la que él entregó su vida.

## Visión de conjunto sobre las biografías

Finalmente, se impone una pregunta antes de emitir algunas reflexiones sobre el conjunto de las biografías aludidas: ¿en qué medida y modo han promovido ellas el conocimiento real de la vida y obra del Che?

Al hacer el análisis comparado de los textos a los que tuvimos acceso, de las veintinueve biografías estudiadas, doce de ellas distorsionan radicalmente al Che,

<sup>19</sup> Pierre Kalfon: *Che, Ernesto Guevara, una leyenda de nuestro siglo*, Plaza y Janés Editores, Barcelona, 1997.



diez tienen un enfoque bastante correcto, aunque tergiversan aspectos de la vida y el pensamiento de Guevara, y siete pueden calificarse de una calidad intermedia, con equívocos y torceduras, pero también con informaciones correctas y afirmaciones positivas.

Debemos considerar, también, la dimensión publicitaria: de todas estas obras, las más promocionadas y editadas han sido la de Ricardo Rojo y, en segundo término, la de James. Desde su publicación en 1997, este lugar lo ocupa una nueva obra antiguevarista: la de Jorge Castañeda y le sigue con una visión más objetiva la de Paco Ignacio Taibo II.

Como se puede apreciar, las biografías negativas muestran una promoción editorial relevante, mientras que casi ninguna de las de índole más equilibrada se reeditó, y la mayoría solo circuló en pocos miles de ejemplares en sus respectivos países. El balance, si nos atenemos a estos datos, es obvio: en el género biográfico han predominado las versiones que deforman la vida y el pensamiento del Che.

La mayoría de las biografías escritas después de 1968 y hasta el año 1996, utilizan como referencias principales los textos de Rojo y de Gambini; tanto estos como una gran parte del resto son frutos de un interés político y comercial, y están escritos con superficialidad circunstancial, sin alcanzar el rigor investigativo que supone el género.

Las biografías más recientes de una u otra orientación y en especial la de Paco Ignacio, Castañeda y Anderson incorporan una más amplia documentación, testimonios y hechos resultantes de contactos directos de los autores con fuentes primarias y de la numerosa bibliografía acumulada en los últimos veinte años.

En Cuba, aunque nadie ha escrito aún una biografía integral, sí es encomiable el esfuerzo realizado por cientos de periodistas, amigos y compañeros del Che y de varios escritores, con el propósito de divulgar facetas y segmentos relevantes de su vida. Sumados todos estos aportes, puede afirmarse que ellos representan la más completa y exacta visión biográfica del comandante Guevara.

Debo decir que, en mi opinión, está por escribirse la obra biográfica a la altura de la personalidad del Che y en respuesta a tantas versiones mendaces de su vida.

**GERMÁN SÁNCHEZ OTERO**, profesor titular de la Universidad de La Habana y conferencista en diversos auditorios de Cuba, América Latina y Europa, fue miembro del jurado de ensayo histórico-social en el Premio Casa de las Américas de 1994. Ha publicado diversos artículos y libros de tema histórico, político, sociológico y económico. Actualmente es Embajador de Cuba en la República Bolivariana de Venezuela.

# Nuevos títulos de Ocean Sur

## EN EL BORDE DE TODO

### El hoy y el mañana de la revolución en Cuba

*Julio César Guanche*

Partiendo del discurso de Fidel Castro en noviembre de 2005, en que alertaba sobre la posible reversibilidad del socialismo en Cuba a manos de "errores propios" de la construcción revolucionaria, surge este abierto debate.

Quienes participan en este libro construyen un diálogo complejo sobre cuestiones propias de las revoluciones en general y en particular de la cubana. Es una afirmación de cómo las soluciones revolucionarias solo pueden encontrarse en la discusión colectiva y la participación ciudadana.

368 páginas, ISBN 978-1-921235-50-4



## CON SANGRE EN LAS VENAS

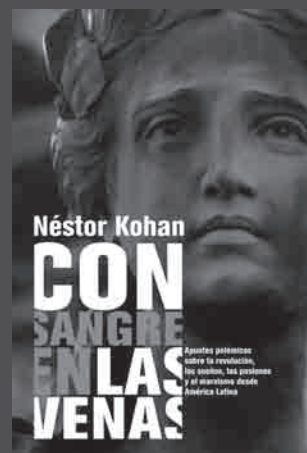
### Apuntes polémicos sobre la revolución, los sueños, las pasiones y el marxismo desde América Latina

*Néstor Kohan*

Reflexiones sobre marxismo y revolución, un aporte al rescate de la memoria histórica de nuestros pueblos. Una selección de ensayos y entrevistas sobre temas económicos, culturales, políticos y sociales que invitan a la reflexión respecto al presente y futuro del pensamiento político en América Latina.

Rescata la tradición y las ideas de grandes revolucionarios latinoamericanos, en un ejercicio de memoria histórica indispensable para enfrentar los retos por venir. Un libro que resulta alentador.

336 páginas, ISBN 978-1-921235-76-4



## LAS GUERRILLAS CONTEMPORÁNEAS EN AMÉRICA LATINA

*Alberto Prieto*

Las guerrillas latinoamericanas son portadoras de una larga tradición. Desde la conquista hasta nuestros días, ha sido una de las formas de lucha más recurrida en el continente americano.

Alberto Prieto nos introduce a los movimientos guerrilleros contemporáneos, desde la epopeya de Sandino hasta la actualidad, profundizando en acontecimientos relevantes y figuras significativas como Fidel Castro y Ernesto Che Guevara.

280 páginas, ISBN 978-1-921235-54-2



b i b l i o t e c a  
**marxista**

Esta colección, más que un repertorio de textos, consiste en una pretensión: la de contribuir a restaurar la diversidad y complejidad propia de la reflexión marxista.

Más que una aspiración, formula una política: la exigencia de realizar tanto la crítica del orden capitalista como la del campo de tensiones existente entre la enunciación del *proyecto revolucionario* y la consecución de cualquier *poder revolucionario*.

En este horizonte, el marxismo es un pensamiento sobre la libertad. Por ello, es una política de la libertad. Sin sectarismos, “contra los dogmas propios y ajenos”, estos libros recorren el camino de la insurrección contra todas las dominaciones. Es una forma de pensar hoy la Revolución. Otra forma de contribuir a hacerla posible.

**Coordinador de la colección: Julio César Guanche**

**Textos clásicos:**

El Manifiesto del Partido Comunista  
*Carlos Marx y Federico Engels*

¿Qué hacer? Problemas candentes  
de nuestro movimiento  
*Vladimir I. Lenin*

Las luchas de clases en Francia  
de 1848 a 1850  
*Carlos Marx*

Manuscritos Económicos y  
Filosóficos de 1844  
*Carlos Marx*

El Estado y la Revolución  
*Vladimir I. Lenin*

El origen de la familia, la propiedad  
privada y el Estado  
*Federico Engels*

**Repertorios de Autor:**

José Carlos Mariátegui

Antonio Gramsci

León Trotsky

Rosa Luxemburgo

Vladimir I. Lenin

Carlos Marx y Federico Engels

**Antologías temáticas:**

El pensamiento socialista en  
América Latina

Marxismo y Anarquismo. Un diálogo  
Socialismo y feminismo

Marxismo, nación y nacionalismo

# Colonialidad tecnológica y desindustrialización en América Latina

GIAN CARLO DELGADO RAMOS

## Preámbulo

La reconstrucción de Japón después de la Segunda Guerra Mundial y su posterior ascenso en términos de la competencia intercapitalista a nivel mundial, ha sido un fenómeno ampliamente discutido de cara a los intentos de industrialización y desarrollo de América Latina y al supuesto *take-off* de países que, como México, se asumen en «vías de desarrollo».<sup>1</sup> La dependiente industrialización de América Latina y los ciclos de *desindustrialización* promovidos a partir del Consenso de Washington y el paquete de políticas neoliberales que desde ahí se formalizaron, son rasgos que contrastan, sobre todo ante procesos relativamente exitosos como el de China y los de las denominadas «economías emergentes» de Asia, por ejemplo, Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán, Singapur.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Véase Fernando Fajnzylber: *La industrialización trunca de América Latina* (Nueva Imagen, México, 1983); los libros de Chalmers Johnson: *MITI and the Japanese Miracle. The Growth of Industrial Policy 1925-1975* (Stanford University Press, Stanford, EUA, 1982) y *Blowback* (Owl Books, Nueva York, EUA, 2001); y también Manuel Cervera: *Globalización japonesa* (Siglo XXI / IIEs, UNAM, México, 1996).

<sup>2</sup> Ajit Singh: «Asian Economic Success and Latin American Failure in the 1980s», *International Review of Applied Economics*, vol. 7, no. 3, octubre de 1993, pp. 267-289; Grahame Thompson (ed.): *Economic Dynamism in the Asia-Pacific*. Routledge, EUA/Canadá, 1998; Chalmers Johnson: *Blowback*, ed. cit. (en nota 1); y Ajit Singh y Sukti Dasgupta: «Manufacturing, Services and Prematures De-Industrialization in Developing Countries», *Working Paper*, no. 327, Centre for Business Research, University of Cambridge, Inglaterra, junio de 2006.

El estímulo y regulación de los múltiples actores que componen el triángulo o «red industrial» de cualquier país industrializado pero también, aunque en distinto grado, de las mencionadas «economías emergentes» (el Estado, el sector empresarial y las unidades productoras de conocimiento), se registra en la historiografía como un factor nodal para la conformación de una base industrial endógena competitiva. Su análisis de cara a la experiencia mexicana, y ciertamente latinoamericana, resulta fundamental para identificar aciertos, errores, similitudes y divergencias, por ejemplo, en términos de política económica, estrategias y experiencias corporativas, definición de agendas en ciencia y tecnología, etcétera; todas de alto valor empírico, analítico e interpretativo para el planteo de alternativas acordes a otras realidades nacionales y/o regionales de diversas características históricas, sociales, culturales, geoeconómicas y geopolíticas.

### La «red industrial»

Tres son los actores centrales para descifrar el desarrollo de ciencia y tecnología y de ahí el industrial de cualquier región o país contemporáneo: el Estado nación, las unidades económicas privadas (por ejemplo, multinacionales) y el sistema científico-tecnológico (universidades y centros de investigación y desarrollo públicos y privados).

En los países metropolitanos esos actores se han caracterizado por tener fuertes conexiones entre sí, es decir, una serie de vínculos, relaciones y sinergias a modo de una vasta y compleja red. En tal sentido, la «red industrial»,<sup>3</sup> es una estructura operativa típica de los países metropolitanos en y desde la cual se establecen y proyectan, en el tiempo y en el espacio, fuertes encadenamientos productivos endógenos, tanto civiles como militares, que resultan, al menos, en una considerable fortaleza dentro del mercado nacional y desde ahí al internacional.

En contra de la filosofía de «libre mercado» que asocia la competitividad con la apertura indiscriminada, la minimización del papel del Estado y consecuentemente con la ausencia de ordenamientos o apuntalamientos estatales de corte económico, fiscal, contable o político, entre otros rubros, una característica central de la operatividad de las redes industriales es que, por el contrario, sus actores constitutivos son regulados, subsidiados, penalizados y hasta protegidos, nacional e internacionalmente, inclusive por medio del aparato de espionaje o la fuerza

<sup>3</sup> Consúltese los textos de Gian Carlo Delgado: *La amenaza biológica: mitos y falsas promesas de la biotecnología*, Plaza y Janés, México, 2002; «La competencia intercapitalista en ciencia y tecnología: quién es quién a principios del siglo XXI», *Nómadas*, Madrid, España, julio-diciembre de 2006; y «Alta tecnología, nanotecnología y espionaje tecnológico en China», *Revista CONfinés de Relaciones Internacionales y Ciencia Política*, ITESM, no. 5, México, abril de 2007.



diplo-militar, «de ser necesario».<sup>4</sup> Tal es el caso de aquellas industrias que se consideran *estratégicas*<sup>5</sup> –usualmente con fuertes encadenamientos productivos–, así como del aparato científico-tecnológico que las «alimenta».

Chalmers Johnson, pionero en materia de «capitalismo asiático», expone tal proceso en los siguientes términos:

dejando de lado a la entonces Unión Soviética, los principales países desarrollados (Reino Unido, EUA, Alemania, Francia, Suecia, Bélgica, Holanda, Japón) y los países del este de Asia (Corea del Sur, Taiwán y Singapur), todos se hicieron ricos más o menos del mismo modo. Independientemente de qué tan justificadas eran sus políticas, en la práctica concreta, protegieron sus mercados domésticos usando altas barreras tarifarias y barreras «no-tarifarias» al comercio. Por ejemplo, Inglaterra no aceptó el libre comercio hasta 1840. Entre 1790 y 1940, EUA tal vez fue el país con la economía más protegida del mundo. En las décadas de 1970 y 1980, el único país en el mundo sin un solo automóvil japonés era Corea del Sur, dado que estaba estimulando su propia industria automotriz. Todos estos países mendigaron,

<sup>4</sup> Es bien conocido el caso del programa Echelon, que significa un escalón en términos militares, pero que desde hace ya varios años se enfoca más en gobiernos, organizaciones y negocios. Se trata de un sistema complejo de «inteligencia artificial» que intercepta señales de satélite, microondas, celulares, cable submarino y fibra óptica, en cualquier parte del mundo, y constituye la más densa red global de espionaje en la historia. Son constantes las acusaciones de la Unión Europea (UE) en contra de los Estados Unidos (EUA) por el uso de información confidencial, por medio de Echelon, para beneficiar a sus multinacionales por la vía del aseguramiento de contratos multimillonarios (por ejemplo en 1990 se usó información para arrebatarle un contrato de construcción de satélites a NEC y transferirlo a AT&T; en 1994 se pasó un contrato para la francesa Thompson a favor de Raytheon de EUA, etcétera). Véase Gian Carlo Delgado: *La amenaza biológica: mitos y falsas promesas de la biotecnología*, ed. cit. (en nota 3), p. 410. Para un estudio detallado de las consecuencias de las operaciones de espionaje y diplo-militares de los Estados Unidos, léase Chalmers Johnson: *Blowback*, ed. cit. (en nota 1).

<sup>5</sup> El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de la Universidad Nacional de la Defensa en Washington, D.C., precisa que la industria estratégica se caracteriza por: «tener un impacto en un gran número de ramas industriales y generalmente tratarse de tecnología de punta. No solo impacta en la productividad, también permite la generación de mejores productos, de servicios públicos y/o incrementa el poder militar [...] Pero, solo es estratégica para tal o cual país cuando se asegura una fuerte posición en su desarrollo a nivel global». Martin C. Libicki: *What Makes Industries Strategic*, The Institute for National Strategic Studies, National Defense University, Washington, D.C., EUA, 1989, p. 2. Para una argumentación crítica de lo *estratégico*, desde la perspectiva de la acumulación de capital y la organización del trabajo, léase Andrés Barreda M. y Ana E. Ceceña: *Producción estratégica y hegemonía mundial*, Siglo XXI, México, 1995; y Ana E. Ceceña (coord.): *La internacionalización del capital y sus fronteras tecnológicas*, Caballito / IIEs, UNAM, México, 1995.

compraron y robaron tecnología de punta avanzada a países innovadores y luego aplicaron ingeniería en reversa y dirigieron sus recursos para mejorarla. Usaron el poder del Estado para apoyar y proteger capitalistas nacionales que tenían el potencial de convertirse en exportadores.<sup>6</sup>

Si bien es cierto que muchas corporaciones despliegan estrategias de mercadeo regional e internacional, es decir que canalizan internacionalmente una importante porción de sus partes componentes o localizan fuera de su madre patria instalaciones productivas y de investigación y desarrollo, entre otras cuestiones, no obstante, estas y su respectiva red industrial nacional, han funcionado y funcionan desde la plataforma de lo nacional/regional para proyectarse en la lucha por la hegemonía económica en tales o cuales nichos.<sup>7</sup> Esto es, en palabras de Hamilton, una estrategia que se define por: «la gravitación central y el liderazgo del sector industrial nacional y su vocación y competencia para definir opciones estratégicas de penetración en los mercados internacionales, creando con el esfuerzo interno, las “ventajas comparativas” del futuro».<sup>8</sup>

La «mano visible» del Estado en el mercado global es ampliamente perceptible. Estadísticas de las Naciones Unidas<sup>9</sup> registraban a principios de la década del noventa la existencia de treinta y siete mil corporaciones que controlaban cerca de ciento setenta mil subsidiarias y filiales. De esas, cerca del 70% era *home based*, es decir, que operaban desde su «madre patria» bajo esquemas de estrecha regulación. La *Office of Technology Assessment* (OTA) para el caso de los Estados Unidos, alude a un contexto en el que «EUA tienen un claro interés en el éxito de las firmas de base nacional, tanto en el mercado interno como en el exterior, en proporción al compromiso que tales firmas hagan para mantener una base nacional tecnológica. En el grado en el que las compañías extranjeras también contribuyan al desarrollo tecnológico, estadounidense, los EUA también tendrían un interés directo en su éxito».<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Chalmers Johnson: *The Sorrows of Empire*, Metropolitan, Nueva York, EUA, 2004, p. 263.

<sup>7</sup> Véase Paul Hirst y Grahame Thompson: *Globalization in Question*, Blackwell, EUA/Reino Unido, 2000. Los autores escriben que: «la orientación nacional (*home-oriented*) de las grandes empresas en todas las dimensiones de sus actividades analizadas parece abrumadora. Consecuentemente, las grandes empresas todavía centran sus actividades económicas en el país sede, a pesar de toda la especulación sobre la globalización [...] Los negocios internacionales todavía en gran medida están confinados a su territorio nacional en términos del total de su actividad; se mantienen fuertemente encajados en su medio nacional y continúan siendo corporaciones (nacionales) en lugar de ser *stateless corporations*. Esto significa que estas compañías no están fuera de la órbita de regulación estatal».

<sup>8</sup> Citado en Fernando Fajnzylber: ob. cit. (en nota 1), p. 133.

<sup>9</sup> ONU: *La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe*, Santiago, Chile, 2006.

<sup>10</sup> Office of Technology Assessment: *Competing Economics: America, Europe and the Pacific Rim*, Government Printing Office, OTA-ITT-498, Washington D.C., EUA, 1991, p. 5.



Los encadenamientos productivos que se generan en y desde las redes industriales metropolitanas, incluyendo, por supuesto, los de investigación y desarrollo, han resultado en una destacable fortaleza en el mercado internacional y en el desarrollo de ciencia y tecnología. Datos de 1999 indican que los Estados Unidos dominaban el registro de patentes en las áreas de electricidad, electrónicos, instrumentos y química; la Unión Europea, en procesos, mecánica y bienes de consumo; y Japón, relativamente en electricidad y electrónicos. Desde el punto de vista de las áreas subtecnológicas, en la década del noventa se registró un número espectacular en patentes de biotecnología y telecomunicaciones, seguida por la farmacéutica y la ingeniería médica y, más recientemente, en nanotecnología y nano-procesos. Es decir, hubo un aumento importante en patentes de alta tecnología que, según los Estados Unidos, está en términos generales bajo su control, pues en 2005 se adjudicaba entre el 32 y 33% de la producción mundial de ciencia y tecnología, mientras que la Unión Europea lo hace con 22,8% y Japón con 12,9%.<sup>11</sup>

### **Industrialización «trunca» de la periferia**

En los casos en los que uno de los polos del «triángulo científico-tecnológico» –que componen la red industrial– es inexistente, débil, o si este es reemplazado parcial o totalmente por actores extranjeros, de lo que se trata en cambio es de un «sistema científico-tecnológico/industrial» de diversa envergadura que, en el mejor de los casos, puede tener una relativa presencia en el mercado mundial en nichos o aplicaciones puntuales.

Aún con tal presencia que se ha abierto paso en momentos de «oportunidad histórica» (por ejemplo, en las guerras mundiales, la guerra fría, etcétera) a partir del establecimiento de estructuras que refractan, modifican y condicionan los «determinantes» externos y permiten incidir sobre ellos, modulándolos en función de sus propios intereses nacionales,<sup>12</sup> se puede decir que, en términos generales, los «sistemas científico-tecnológicos» son típicos de los países periféricos. Como tales, estos son usualmente deleznable en un grado u otro y se caracterizan, en el grueso de los casos, por estar desvinculados de las necesidades endógenas.

Un ejemplo nítido es América Latina, una región en la que la industrialización se remonta a la segunda mitad del siglo XIX en un contexto de inserción de enclaves coloniales y de la «periferia independiente» al proceso de expansión del capitalismo industrial metropolitano. Los avances más importantes estaban vinculados a la expansión e intensificación de los procesos extractivos de recursos naturales

<sup>11</sup> Gian Carlo Delgado: «La competencia intercapitalista en ciencia y tecnología: quién es quién a principios del siglo XXI», ed. cit. (en nota 3).

<sup>12</sup> John Saxe-Fernández: «Ciclos industrializadores y desindustrializadores», *Nueva Sociedad*, no. 158, Caracas, Venezuela, noviembre-diciembre de 1998, pp. 120-138.

estratégicos, por lo cual el ferrocarril y la industria metal-mecánica eran la punta de lanza de dicho proceso. En México el período más activo se identifica en pleno *porfiriato*<sup>13</sup> de 1876 a 1910 cuando, por medio del estímulo de la inversión extranjera directa y la concentración de la propiedad de la tierra, se impulsó con creces la exportación de petróleo, de productos agrícolas y de minerales.<sup>14</sup> Las cifras precisan que el valor de las exportaciones se elevó en un 600% durante ese período de años, mientras que la inversión extranjera directa, el grueso invertida en el sector exportador, alcanzaba para 1911 los 1 700 millones de dólares (a precios corrientes) de los cuales, el 40% provenía de los Estados Unidos.<sup>15</sup>

Para 1910, más de la mitad de la riqueza del país se encontraba en manos de extranjeros que controlaban todos los sectores, excepto el agrícola y el artesanal. El empresariado extranjero era dueño del 76% de las empresas más grandes, 100% del petróleo, 98% de la minería y 89% de la industria.<sup>16</sup>

Condiciones más propicias para una industrialización mayor del país se presentaron, sobre todo, a raíz de dos fenómenos históricos: 1) la Revolución Mexicana que desestructuró las relaciones productivas fundamentadas en el latifundio tradicional y que consecuentemente abrió espacio a los intereses de la actividad industrial; y 2) la Primera Guerra Mundial y la crisis de 1929 que fomentaron un entorno favorable a la industrialización del tipo de «sustitución de importaciones».

Fue, pues, una coyuntura histórica en la que, a decir de Cardoso y Faletto: «la industrialización se concebía como un recurso complementario en un proceso de desarrollo –basado en la exportación de productos primarios– y, además, como una especie de alternativa forzosa para los períodos de contracción del mercado internacional [...] la instalación de “industrias exportadoras” seguiría siendo necesaria para mantener la “capacidad de importar” pero el sentido fundamental del desarrollo no lo daría el mercado externo sino el interno».<sup>17</sup>

La función o posición de los centros metropolitanos y la periferia dentro de la estructura y dinámica de la economía internacional de producción y distribución no fue modificada, sino simplemente ajustada a las condiciones históricas.<sup>18</sup> Los mecanismos de transferencia de excedentes eran reconfigurados mediante una creciente intervención del Estado, que si bien estimuló la industrialización –inclusive

<sup>13</sup> Véase Daniel Cosío Villegas (comp.): *Historia moderna de México, la República restaurada. La vida económica del porfiriato*, vols. I y II, Colegio de México, México, 1965.

<sup>14</sup> Dale Story: *Industria, estado y política en México*, Grijalbo/CONACULTA, México, 1990, p. 41.

<sup>15</sup> *Ibíd.*, pp. 77 y 83.

<sup>16</sup> *Ibíd.*, p. 86.

<sup>17</sup> Fernando Cardoso y Enzo Faletto: *Dependencia y desarrollo en América Latina, Siglo XXI*, México, 1969, p. 4.

<sup>18</sup> *Ibíd.*, p. 23.

hasta principios de la década de 1970–, esa no fue, ni es más que «trunca»,<sup>19</sup> pues se articula bajo esquemas de *dependencia* mayor,<sup>20</sup> de sustancial desarticulación con respecto a la economía nacional y bajo esquemas que mantienen o ahondan la brecha entre la limitada población dentro, y la mayoría al margen, de la modernización industrial. Por ejemplo, en general se identifica para el caso de América Latina: una permanente y abrumadora presencia de la inversión extranjera directa en industrias estratégicas; una dependencia de transferencia tecnológica mayor debida a la débil existencia de cuadros de investigación y desarrollo endógena; una vulnerabilidad integral en torno a la autonomía del manejo del crédito y el depósito; una especificidad en la producción primaria y, en su caso, una productividad de bajo contenido tecnológico; etcétera.

La penetración de la inversión extranjera directa en México es reveladora de dicha dependencia con el exterior, sobre todo con los Estados Unidos que eran dueños de dos terceras partes de esa inversión en 1950 y de más del 80% para 1960. La inversión extranjera directa en la industria se incrementó del 7,1% del total en 1940 a más del 50% en 1960 y hasta el 75% durante 1970;<sup>21</sup> y, si bien ya para 1960-1970 la inversión extranjera directa menguó considerablemente, esta no dejó de estar presente en el país ni de tener un papel fundamental en el control del proceso de industrialización trunca.

Entre 1971 y 1981, las empresas con capital extranjero contribuyeron en 58% a generar tanto el déficit comercial como el de cuenta corriente que alcanzaron niveles récord de once mil millones de dólares para ese último año. Ello deja en claro que, como se verá más adelante, la inversión extranjera directa para fomentar la «industrialización» en el sector exportador es altamente contradictoria para la generación de ciclos industrializadores endógenos, pues su principal función ha sido, en el grueso de los casos, inhibir la innovación endógena, regular la «transferencia» tecnológica y fomentar el consumo interno de los países «anfitriones».

<sup>19</sup> Fernando Fajnzylber: ob. cit. (en nota 1).

<sup>20</sup> Véase Ruy Mauro Marini: *Dialéctica de la dependencia*, Era, México, 1973. Otras referencias obligadas son: Celso Furtado: *Subdesenvolvimento e Estagnação na América Latina*, Ed. Civilização Brasileira, Río de Janeiro, Brasil, 1966; Theotonio Dos Santos: *Imperialismo y dependencia*, Era, México, 1968, o también *La teoría de la dependencia. Balance y perspectivas*, Plaza y Janés, México, 2002; Franz Hinkelammert: *El subdesarrollo latinoamericano*, Paidós, Buenos Aires, Argentina, 1970; Andre G. Frank: *Dependent Accumulation and Underdevelopment*, Monthly Review Press, Nueva York, EUA, 1978; Heinz Dieterich: *Relaciones de producción en América Latina*, Ed. Cultura Popular, México, 1978; José Luis Ceceña C.: *Superexplotación, dependencia y desarrollo*, IIEs, UNAM, México, 1980; Raúl Prebisch: *Capitalismo periférico, crisis y transformación*, FCE, México, 1981; y Fernando Fajnzylber: ob. cit. (en nota 1), entre otros.

<sup>21</sup> Dale Story: ob. cit. (en nota 14), p. 85.

No es casual que para 1970, el empresariado extranjero se adjudicara el 87% del capital invertido en la industria de maquinaria no eléctrica y el 62% del total de ventas; el 82% y el 79% respectivamente en el rubro de maquinaria eléctrica; el 80% y el 85% en la industria de hule; el 70% y el 50% en la de equipo de transporte; y el 57% del capital y el 68% de las ventas en la industria de productos químicos.<sup>22</sup>

Aún más, se estima que en promedio, las empresas extranjeras con inversiones en México eran veintinueve veces más grandes que las nacionales y se encontraban en los rubros más importantes, pues para 1970, según Fajnzylber y Martínez,<sup>23</sup> controlaban el 50% de los activos y el capital de las 300 empresas más importantes.

El proceso de «subdesarrollo industrializado»<sup>24</sup> no solo se refleja en la penetración directa del capital extranjero, como lo demuestra el caso mexicano, sino también en la recurrente tendencia a no estimular la investigación y desarrollo nacional (incluyendo la ingeniería en reversa) a modo de romper con la dependencia tecnológica del raquíto empresariado nacional que había tenido una presencia mayor sobre todo en la época «estabilizadora» de 1960 a 1980. Por ejemplo, en México, la limitada industria pesada nacional de la década de 1980, importaba cerca de la mitad de sus insumos o productos; la de química básica hasta el 62%, la de maquinaria el 59%, la de automóviles el 48% y la de aparatos eléctricos el 47% de esos.<sup>25</sup>

El gasto público, que se reflejó en una relativa ampliación del quehacer del Estado en áreas fundamentales como producción de energía y de alimentos, actividades extractivas (sobre todo de petróleo y otros minerales no energéticos), medios de comunicación (ferrocarriles), entre otras, resultó ser comparativamente de los más pequeños a nivel mundial en tanto porcentaje del producto nacional de mediados de 1970. En México ese fue de 16,7% del producto nacional, mientras que para los ocho países más industrializados era, en promedio, de 29,3% y de 23% para el caso de los dieciséis más industrializados.<sup>26</sup>

El «subdesarrollo industrializado» de América Latina, aun con las fuertes limitantes y dependencias, tuvo, sin embargo, efectos socio-económicos importantes pues sí se estaba estimulando relativamente una economía de mercado con un relevante intervencionismo del Estado como rector y promotor activo, como regulador

<sup>22</sup> *Ibíd.*, p. 96.

<sup>23</sup> Fernando Fajnzylber y Trinidad Martínez T.: *Las empresas transnacionales: expansión a nivel mundial y proyección en la industria mexicana*, Fondo de Cultura Económica, México, 1976, p. 165. Consúltense también Dale Story: *ob. cit.* (en nota 14), p. 96.

<sup>24</sup> Celso Furtado: *ob. cit.* (en nota 20).

<sup>25</sup> Dale Story: *ob. cit.* (en nota 14), pp. 48-49. Para una indagación sobre la formación del empresariado en México, véase Jorge Basave K.: *Un siglo de grupos empresariales en México*, IIEs, UNAM / Miguel Ángel Porrúa, México, 2001.

<sup>26</sup> *Ibíd.*, p. 74.

del comercio exterior y de los mercados internos de bienes y servicios básicos, como inversionista (en el petróleo en su caso), y como promotor de un relativo bienestar social mediante leyes laborales y agrarias e instituciones sociales de educación, salud y servicios básicos.<sup>27</sup>

Tales innegables aunque limitados beneficios sociales sirvieron como argumento para promover extendidamente un desarrollo industrial que mediante la cooperación transitoria con el capital extranjero, supuestamente debía permitir, según precisaba el pensamiento convencional, el *take-off* o el «despegue económico hacia un desarrollo sostenido». No obstante, para entender el por qué ese mito no se concretiza, la clave está, al decir de Dieterich, en «la comprensión del proceso de acumulación –deformado y deficiente por la dependencia– del satélite y de la problemática del Estado dependiente, inseparable de ella [...] El secreto del subdesarrollo y de la dependencia [...] se encuentra en las relaciones de clase y de poder del satélite y la metrópoli».<sup>28</sup>

## El Consenso de Washington y la desindustrialización de América Latina

La crisis deudora de 1982 y su «resolución» presentó la oportunidad para socavar los fundamentos de ese trunco esquema industrializador relativamente «proteccionista», y dio inicio a la etapa neoliberal, es decir, el régimen centrado en el interés de los inversionistas extranjeros y sus socios locales: «el Consenso de Washington».<sup>29</sup>

Fue un medio ambiente en el que América Latina vio severamente limitada su capacidad para incidir en los asuntos monetarios y financieros internacionales pues, al mantener sus reservas en dólares, los Estados Unidos seguían incólumes como centro controlador de la creación de crédito.<sup>30</sup> Al mismo tiempo, las cúpulas político-económicas locales se inclinaban cada vez más por aceptar las condicionantes que se deciden en instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ampliamente dominadas por Washington.<sup>31</sup>

<sup>27</sup> Para una revisión sobre la temática, véase José Luis Calva (coord.): *Política para el desarrollo sostenido*, Casa Juan Pablos / IIEs, UNAM, México, 2002, tomos I y II.

<sup>28</sup> Heinz Dieterich: ob. cit. (en nota 20), pp. 15 y 19.

<sup>29</sup> Véase John Williamson: «What Washington Means by Policy Reform», *Latin American Adjustment: How Much Has Happened?*, Institute for International Economics, Washington, D.C., EUA, 1990.

<sup>30</sup> John Saxe-Fernández: «Ciclos industrializadores y desindustrializadores», ed. cit. (en nota 12).

<sup>31</sup> Véase Gian Carlo Delgado y John Saxe-Fernández: *Imperialismo y Banco Mundial en América Latina*, Centro Juan Marinello, La Habana, 2004. También puede consultarse

En ese contexto, esquemas al estilo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre otros mecanismos como los implementados desde los préstamos del BM-FMI-BID, han venido imponiendo serias restricciones al desarrollo económico-tecnológico endógeno, puesto que su diseño está pensado para mantener, e incluso ahondar, las asimetrías imperantes.

No sorprende entonces que con la firma del TLCAN, la oligarquía nacional o *lumpenburguesía*, como prefiere llamarla A.G. Frank, formalizara una política económica aún más dependiente, de *sub* o *lumpendesarrollo*.<sup>32</sup> Es decir, de mayor (super)-explotación,<sup>33</sup> por ejemplo, por la vía de la inversión extranjera directa masiva; la desnacionalización del grueso de activos nacionales estratégicos; y la transferencia exponencial de excedentes –no solamente del gasto ocioso como los intereses de la deuda.<sup>34</sup>

Dicho de otra forma, lo que se impulsó con las políticas neoliberales y lo que se estipuló con el TLCAN, ha sido precisamente lo que las «economías emergentes» de Asia no han permitido dado que les interesa consolidar y conservar su base industrial nacional (sea bajo la figura de los altamente articulados conglomerados *keiretsu* de Japón o los *chaebol* de Corea del Sur) para luego lanzarse al mercado internacional y eventualmente poder competir en tales o cuales rubros. Así, mientras Japón o Corea del Sur aplicaban, cuando menos desde la década de 1960 y 1970 respectivamente, una política «tecnonacionalista» al proteger y subsidiar su industria y regular la entrada de capital extranjero (incluyendo los préstamos del exterior); en México, por el contrario, el TLCAN, entre otras medidas, establecía en su artículo 1109 la libertad irrestricta de la transferencia de ganancias, dividendos, intereses, etcétera, derivados de la inversión extranjera directa. Y, en el artículo 1106.1 se suprimía todo tipo de condiciones a la inversión.<sup>35</sup>

---

Eric Toussaint: *Banco Mundial: el golpe de Estado permanente*, El Viejo Topo, Barcelona, España, 2006.

<sup>32</sup> Andre G. Frank: *Lumpenburguesía, lumpendesarrollo*, Barcelona, España, 1972.

<sup>33</sup> José Luis Ceceña C.: ob. cit. (en nota 20).

<sup>34</sup> Véase John Saxe-Fernández: *La compra-venta de México*, Plaza y Janés, México, 2002. También consúltese Samuel I. del Villar: *Agravios nacionales en la Hacienda Pública mexicana, 1982-2005*, Océano, México, 2006.

<sup>35</sup> Entre las restricciones que se cancelaron están las que implican: a) alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional; b) comprar, utilizar u otorgar preferencias a bienes producidos en su territorio, o a comprar bienes de productores en su territorio; c) relacionar, en cualquier forma, el volumen o valor de las importaciones con el monto de las entradas de divisas asociadas con dicha inversión; d) restringir las ventas en su territorio de los bienes o servicios que tal inversión produce o presta, relacionando de cualquier manera dichas ventas con el volumen o valor de sus exportaciones o con las ganancias que generen en divisas. Manuel Cervera: ob. cit. (en nota 1), pp. 162-163.



A la par de la eliminación masiva de fracciones arancelarias, la inversión extranjera directa fue elemento puntal para echar en tierra el «trunco» proceso de industrialización del país (y de América Latina), es decir, para poner en marcha un ciclo de severa desindustrialización.

Datos de la ONU indican que la inversión extranjera directa en América Latina pasó de 20 millardos de dólares en el período de 1991 a 1995, a 68 millardos en 2005. Solo México pasó de 6,8 millardos a 17,8 millardos en el mismo período, lo que implica una recepción de inversión extranjera directa en 2005 equivalente al 26% del total para América Latina. De esa, el 58% estaba destinado a la maquila, lo que reflejó un incremento del 11% de esas exportaciones con respecto al año anterior.<sup>36</sup>

La naturaleza de la desnacionalización de una buena parte de la matriz industrial latinoamericana, según la ONU, se caracteriza –a grandes rasgos– por ser a favor de los Estados Unidos para el caso de México y la cuenca del Caribe, mientras que en América del Sur lo es más en beneficio del capital europeo.<sup>37</sup>

Aún así, la penetración estadounidense en términos hemisféricos y hasta 2005 era la mayor con un 40% de la inversión extranjera directa. De las cincuenta corporaciones extranjeras operando en América Latina, los Estados Unidos se adjudicaban veintidós, aunque los europeos, si se consideran en conjunto, totalizaban veinticuatro. Figuraban también tres asiáticas y una australiana.<sup>38</sup> Esas cincuenta corporaciones generaron en ventas en América Latina –sobre todo en México, Brasil y Argentina–, unos 258 mdd tan solo para el año 2004; es decir, poco más de cuatro veces la inversión extranjera directa total de ese año.<sup>39</sup>

A modo de ejemplificar en lo particular, vale señalar que las principales 500 empresas de Argentina estaban constituidas en 1993 por 281 nacionales y 219 extranjeras. De esas, 161 tenían más del 50% de capital extranjero. Para 2002, las cifras se habían más que revertido al contabilizarse 163 nacionales y 337 extranjeras, de las cuales 286 tenían más del 50% de capital extranjero.<sup>40</sup>

Tal tendencia de extranjerización de la matriz productiva argentina, que implica una relativa desnacionalización de sus actividades y ganancias, también es

<sup>36</sup> ONU: ob. cit. (en nota 9), pp. 12 y 28.

<sup>37</sup> Para el caso de México, léase: Jorge Basave K.: «Modalidades de integración internacional y perspectivas de expansión de empresas mexicanas», en Jorge Basave, Alejandro Dabut, Carlos Morena, Miguel Ángel Rivera y Francisco Rodríguez (coords.), *Globalización y alternativas incluyentes para el siglo XXI*, UNAM/UAM/Miguel Ángel Porrúa, México, 2002, pp. 435-460.

<sup>38</sup> Sony y Nissan de Japón y la productora de aluminio BHP Billiton de Corea del Sur.

<sup>39</sup> ONU: ob. cit. (en nota 9), p. 13.

<sup>40</sup> Véase Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República de Argentina (INDEC): «Grandes empresas en la Argentina: cantidad de empresas privatizadas y concesionadas. Años 1993-2002». Encuesta Nacional a Grandes Empresas, Buenos Aires, Argentina, (s. f.).



compartida por México. En 2006, de las 500 empresas mexicanas más «importantes» según *Expansión*,<sup>41</sup> 169 se declaraban totalmente extranjeras, de las cuales el 51% eran de los Estados Unidos. Pero aún más, de esas 500 empresas, 121 correspondían a 27 grupos empresariales, por lo que en realidad se registraban 94 «repeticiones netas». Ajustando los datos, lo que se tiene es aproximadamente el 57% de empresas o grupos empresariales mexicanos y el 43% de extranjeros. Ello no considera que la mencionada lista excluye a 50 empresas bien conocidas de calibre mayor como lo son algunas automotrices o químico-farmacéuticas.<sup>42</sup> De considerarse, los porcentajes conservadoramente cambiarían al 50% para ambas modalidades de origen.

Además, nótese que en tal proceso particular de «internacionalización» de las economías latinoamericanas (y del grueso de las periféricas), mucho del «gran empresariado» doméstico se comporta, con sus empresas, como «filial» de actores extranjeros; sea como comercializadores de proveedores foráneos (principalmente) o como productores de insumos, procesos o refacciones de empresas multinacionales extranjeras. Esas *filiales de facto* son denominadas en el vocabulario del *globalismo pop*,<sup>43</sup> como empresas *traslatinas*.

Tal «filialización», a la par de la especialización en procesos de bajo o nulo *input tecnológico* (industria del vestido, calzado, cuero, alimentos, extractivas o armadoras y ensambladoras), ha resultado en una creciente desindustrialización de los países latinoamericanos en términos cualitativos y, en muchas áreas, en lo cuantitativo pues cientos de micro, pequeñas y medianas empresas han sido condenadas a desaparecer.<sup>44</sup> En lugar de generar ciclos expansivos de industrialización endógena, diversificada, de mayor contenido tecnológico y altamente articulada, se ha estimulado crecientemente un «neoliberalismo manufacturero» cuya plataforma operativa son los encadenamientos productivos exógenos (aunque ciertamente, en ocasiones, algunos débiles, limitados e inestables encadenamientos endógenos). Tal situación coloca al sector industrial de los países de América Latina en un contexto de

<sup>41</sup> Véase «Las empresas más importantes de México», *Expansión*, no. 193, México, 28 de junio-12 de julio de 2006.

<sup>42</sup> Por mencionar algunas: Alcoa (EUA), Procter & Gamble (EUA), Whirlpool (EUA), Avantel (EUA), Monsanto (EUA), Kraft (EUA), Schering Plough (EUA/Alemania), Bosch (Alemania), Ciba (Suiza), Nestle (Suiza), GlaxoSmith Kline (Inglaterra), Honda (Japón), Mitsubishi (Japón), Toyota (Japón), Sanofi-Aventis (Francia), Renault (Francia), Nissan (Japón), LG (Corea), Nokia (Finlandia), etcétera.

<sup>43</sup> John Saxe-Fernández: «Globalización e imperialismo», en John Saxe-Fernández (coord.), *Globalización, crítica a un paradigma*, Plaza y Janés, México, 1999.

<sup>44</sup> Para el caso de México, léase: Isabel Rueda: *Las micro, pequeña y mediana empresas en México en los años noventa*, IIEs, UNAM / Miguel Ángel Porrúa, México, 2001. También puede consultarse Jorge Basave K.: «Modalidades de integración internacional y perspectivas de expansión de empresas mexicanas», ed. cit. (en nota 37).

desarticulación, tanto hacia dentro de la propia planta industrial, como de esta con las necesidades de las economías nacionales. Además, la planeación de políticas industriales de largo plazo –ausente en el grueso de países de América Latina– se torna inútil dado lo arriba indicado y la tendencia de las maquiladoras a trasladarse a sitios donde los costos sean más competitivos. Y si bien las exportaciones se han incrementado debido al avance del neoliberalismo manufacturero en la región (doce veces, para el caso de México), los índices generales de productividad total de los factores –dígase de competitividad– han disminuido a pasos agigantados.<sup>45</sup>

En este panorama, se presume la idea de que América Latina realiza actividades productivas inclusive de «alta tecnología». En tanto tal, la economía deberá eventualmente «despegar» en cuanto se logre exportar más. No obstante, lo que no se detalla es que tales actividades de «alta tecnología» están fundamentalmente centradas en el ensamblaje de productos de multinacionales extranjeras (por ejemplo de componentes electrónicos, o en el caso de actividades de tecnología media, de automóviles). Ello es un aspecto importante para poder dar cuenta de que la «transferencia» o «derrame» tecnológico a favor de filiales, de las «traslatinas» u otras industrias manufactureras, no implica un proceso de *modernización* que llevará eventualmente al «take-off de la economía» dado que es claro que la capacidad de usar y acceder a la tecnología es una cosa, y otra completamente diferente crearla y desarrollarla, y todavía más, hacerlo de modo sostenido en el largo plazo.

Y es que la dependencia tecnológica de América Latina es mayor, dadas las características del endeble sistema científico-tecnológico doméstico, por lo general subordinado a las redes industriales metropolitanas, y avocado a investigaciones de «cola» (aún en tecnologías de vanguardia). Esto es, por ejemplo, a partir de acuerdos de investigación y desarrollo y/o financiamiento en los que al final las patentes (o sus derechos) y el potencial negocio, de generarse, queda consolidado fundamental o exclusivamente a favor del empresariado metropolitano.<sup>46</sup> Desde luego, hay excepciones, como la industria aeroespacial/satelital brasileña o la industria biotecnológica cubana, las cuales si están desarrollando

<sup>45</sup> Véase José Antonio Ocampo: «Latin America's Growth Frustrations: the Macro and Meso-economic Links», *Seminar on Management of Volatility, Financial Liberalization and Growth in Emerging Economies*, Santiago, Chile, 24-25 de abril de 2003.

<sup>46</sup> El caso de la «biomaquila» o venta de muestras genéticas preseleccionadas por instituciones públicas y privadas en distintos países de América Latina es ejemplificador, puesto que lo que se entrega es el recurso tal cual para que el proceso industrial y el negocio se hagan en y desde las metrópolis. Véase de Gian Carlo Delgado: *La amenaza biológica: mitos y falsas promesas de la biotecnología*, ed. cit. (en nota 3); y *Biodiversidad, desarrollo sustentable y militarización*, Plaza y Valdés / Ceich, UNAM, México, 2004.

encadenamientos productivos endógenos y generan cuadros de científicos e ingenieros nacionales.<sup>47</sup>

Un balance de la ONU de 2006 confirma lo anterior: «la generación de tecnología está concentrada en los países desarrollados más avanzados y se genera sobre todo en las empresas transnacionales con sede en esos países, mismas que, en cambio, se colocan como las principales fuentes de tecnología nueva para los países en desarrollo. Sin embargo, mientras la ventaja tecnológica es un poderoso determinante en la salida de la inversión extranjera directa de países desarrollados, esta juega un papel menor en la internacionalización de la producción de los países desarrollados».<sup>48</sup>

Traducción: la dependencia tecnológica no impide que existan ciertos monopolios u oligopolios periféricos (las «traslatinas») que puedan y hagan negocio por la vía de «internacionalizar» la producción de las multinacionales metropolitanas; todo en un contexto de bajos índices de productividad y competitividad en términos de la totalidad de la planta industrial endógena, así como de altas tasas de desempleo y de empleo informal. En palabras de Ocampo, secretario ejecutivo de la Comisión para América Latina y el Caribe de la ONU: «la creencia de que los recursos

<sup>47</sup> De conocimiento público es que, en el caso de la industria satelital, los brasileños, aunque subordinados tecnológicamente, han venido formando cuadros de técnicos para la construcción de esos artefactos a partir de estudiar los adquiridos en el exterior. Junto con China ya han desarrollado y puesto en órbita satélites de resolución media conocidos como CBERS o *China-Brazil-Earth Resources Satellites*. De recordarse también es su importante industria aeroespacial fuertemente golpeada durante la etapa neoliberal y que se desplomara del 15% del mercado mundial en 1980 al 3% en 2001 (Gian Carlo Delgado: «Competencia intercapitalista en tecnología estratégica y su militarización: el caso del sistema Galileo», *Revista de Sociología e Política*, Curitiba, Brasil, verano de 2007). Asimismo, en los últimos años están realizando ciertos avances en la formación de nanotecnólogos (sobre todo desde su sincrotrón en Campinas), aunque sus investigaciones –sobre todo de nuevos materiales– están, la mayoría de las veces, vinculadas a la satisfacción de necesidades de multinacionales extranjeras (Gian Carlo Delgado: *Incertidumbres de la nanotecnología y su manejo social*, tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, España, julio de 2006). En lo que respecta al caso cubano, vale precisar que si bien son altamente competitivos en su especialidad (vacunas y algunos tratamientos puntuales como los de cáncer de pulmón o sida), no obstante están lejos de serlo en el contexto del rubro total de medicina biotecnológica donde la batuta la llevan indiscutiblemente los europeos y los estadounidenses. Nótese que este caso es particularmente divergente al resto de América Latina, dado que el bloqueo económico fungió como fundamento del «tecnonacionalismo» cubano. Al igual que los países asiáticos emergentes, Cuba debió consolidar fuertes mecanismos de organización y planeación en todos los encadenamientos productivos y sus *feed-backs*, desde la investigación hasta la comercialización (véase Juan Triana C., Ricardo Torres P., y Mariana Martín F.: *Cuba: hacia la economía basada en el conocimiento*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, Cuba, 2005).

<sup>48</sup> ONU: ob. cit. (en nota 9), p. 220.

serían completamente utilizados [a partir de programas de privatización y liberalización de las economías de América Latina] no fue confirmada en la práctica y, muchos recursos laborales, empresariales, tecnológicos e institucionales, fueron poco utilizados, se abandonaron o de hecho se destruyeron». <sup>49</sup>

En este punto surge la interrogante de por qué en general la cúpula de poder de América Latina, particularmente la del «gran» empresariado, no ha presionado y tomado medidas para impulsar ciclos industrializadores endógenos (sobre todo de bienes de capital) que posibiliten un negocio independiente y de mayor magnitud, digamos a la usanza de los «países emergentes» de Asia. Entre los elementos explicativos, parecen estar, además de aquellos factores psicológicos que sugieren caracterizar a la oligarquía latinoamericana, el hecho de que un desarrollo endógeno en América Latina los afectaría directamente en dos sentidos:

- a) Por un lado, la industrialización endógena requiere de una política financiera totalmente distinta a la actual, sobre todo en tanto a los tipos de cambios, el control de la inversión extranjera, el control del crédito y el depósito, entre otros. Tales «ajustes» resultarían ser una desventaja mayor para el tipo de enriquecimiento actual de la oligarquía de América Latina que se mantiene, en principio, relativamente asegurado mientras esta funja como copartícipe menor en el proceso de transferencia de excedentes hacia la metrópoli. La restricción de tales flujos de saqueo, en buena medida condicionaría su enriquecimiento al éxito de la industrialización endógena y de la competitividad del empresariado, así como al desarrollo y la paz social de tal o cual país.
- b) Por el otro lado, porque para tal meta industrializadora, el Estado debe reformular su política económica a fondo, incluyendo medidas para desarticular monopolios y oligopolios y para regular y planear todo el aparato productivo nacional a modo de vincularlo a las necesidades nacionales y tornarlo competitivo según los lineamientos establecidos por tal o cual Estado nación. Ello implica, tanto la modificación de la estructura de poder económico nacional para fortalecer la diversificación y la genuina competitividad de la producción industrial endógena de bienes de consumo y de capital, así como la redistribución de la riqueza con la finalidad de promover el consumo interno. Se trata de cambios que dañarían profundamente la estructura actual de poder de la oligarquía nacional que se ha hecho del poder de monopolios y oligopolios industriales de bajo o nulo contenido tecnológico y de escasa intensidad en encadenamientos productivos endógenos. Esto es claro si se revisa la «naturaleza» de los multimillonarios latinoamericanos según *Forbes*. <sup>50</sup>

<sup>49</sup> José Antonio Ocampo: ob. cit. (en nota 45), p. 21.

<sup>50</sup> En México, incluso figuran aquellos que ni siquiera han hecho negocio por medio de la «internacionalización de la producción» metropolitana en el país, sino que

Lo anterior permite comprender a su vez el escaso interés de la élite latinoamericana para estimular el desarrollo de la ciencia y la tecnología domésticas como uno de los principales motores de los ciclos industrializadores endógenos, un aspecto que se ha reflejado en un nivel fútil de gasto público en ese rubro y en una creciente balanza de pagos tecnológica (BPT) negativa (en buena medida debido a la «maquilización» de la planta industrial).

Por ejemplo, México pasó de una balanza de -307 mdd en 1990 al exportar solo 73 mdd en ese rubro o poco menos que la quinta parte de las importaciones (380 mdd), a una balanza en 2004 de -511 mdd y exportaciones de 43 mdd o menos de la décima parte de las importaciones (555 mdd). Esto es: en 15 años la dependencia tecnológica cuando menos se duplicó. La situación es similar en el resto de América Latina, tanto en lo que respecta al gasto público, como a la escasa innovación en ciencia y tecnología. La excepción es Brasil con una balanza de pago tecnológica ligeramente positiva desde 2001 cuando registró 1 704 mdd en importaciones tecnológicas y 1 867 mdd en exportaciones de ese tipo. Aun así, su dependencia sigue siendo considerable, sobre todo en áreas claves de la economía.

Asimismo, una revisión de las cifras de patentes solicitadas y otorgadas permiten en cierto sentido dar cuenta, tanto del grado de robustez de la investigación y desarrollo nacional, como de, por ejemplo, la divergencia entre: 1) la desindustrialización a ultranza y el abandono del sistema científico-tecnológico mexicano que se refleja en una desnacionalización de las patentes otorgadas; 2) el relativo mantenimiento de un muy modesto sistema científico-tecnológico brasileño (a pesar de la desnacionalización *de facto* de ciertos sectores como el petrolero); 3) y el contrastante contenido nacional de las patentes en países como Corea del Sur y China (ver Cuadro no. 1).

Sorprende que de las empresas verdaderamente latinoamericanas, pocas, si no es que ninguna, desarrollen –no maquilen– bienes de consumo de contenido tecnológico medio-alto. Más bien, como filiales *de facto*, los importa y luego comercializa

---

*lumpenmente* se enriquecieron en una sola transacción de privatización, en este caso de la banca. Forbes lista los siguientes mexicanos en 2007: Carlos Slim abogado al monopolio de comunicaciones (aunque también a la construcción, entre otros), en la posición 3; Alberto Bailleres en el oligopolio de minería y reventas, en la posición 158; Salinas Pliego los oligopolios de telecomunicaciones y reventas, en la 172; Jerónimo Arango en el oligopolio de reventas, en la 194; Emilio Azcárraga en el oligopolio de comunicaciones, en la 458; María Asunción Aramburozabala en el monopolio de producción/embotellamiento de cerveza y refrescos, en la 488; Roberto Hernández Ramírez que se adjudicó 2 millardos de dólares por la venta de Banamex a Citigroup, en la posición 488; Isaac Saba Raffoul con el oligopolio de distribución de fármacos y cosméticos, en la posición 557; Lorenzo Zambrano en el monopolio del cemento, en la 583; y Alfredo Harp Helu (sobrino de Slim) se hizo de 1,6 millardos de dólares por la venta de Banamex, colocándose con ello en el puesto 618. Consúltese en Internet ([www.forbes.com](http://www.forbes.com)).

**Cuadro no. 1**  
**Solicitud de patentes otorgadas en la OMPI**  
**(Brasil, China, Corea del Sur y México, 2004)**

	Solicitud Resi- dentes	Solicitud No Resi- dentes	Patentes escritorio de ori- gen*	Solicitud Patentes Interna- cionales	Otorga- das a Residen- tes	Otorga- das a No Residen- tes
Brasil	3 892	2 356	12 444	280	590	—
China	65 786	32 109	32 489	2 501	18 241	31 119
Corea del Sur	105 250	13 428	21 437	4 686	35 284	13 784
México**	565	2 010	10 623	141	162	6 677

\* Aquellas internacionales de «fase nacional».

\*\* Las cifras para México de 2005 son más llamativas al registrar 131 patentes otorgadas a mexicanos de un total de 8 098 solicitadas.

Fuente: OMPI: *WIPO Patent Report. Statisticon World Wide Patent Activities*, Ginebra, Suiza, 2006.

tal y como hace Telmex-América Móvil que se coloca como principal comprador en América Latina de tecnología de la estadounidense Alcatel. Igualmente, es llamativa la ausencia de empresas diseñadoras y productoras de máquinas herramienta, a excepción de unas contadas usualmente asociadas a capital extranjero. Aún más, en el caso de países petroleros como México, Brasil o Venezuela, es de subrayar la ausencia de por lo menos una empresa nacional de diseño y producción de automóviles y por tanto de cuadros de ingenieros especializados en dicha rama prácticamente decimonónica (aunque bien es cierto que antes de la aplicación de las políticas neoliberales, sí había nacientes industrias automotrices que luego fueron totalmente desnacionalizadas como DINA en México o DiTella en Argentina). El escenario probablemente encuentre la excepción con las medidas que el gobierno de Chávez en Venezuela está adoptando y que ha llevado a la fabricación, desde la Empresa Venezolana de Vehículos para la Defensa, de una versión «endógena» del 4x4 *Humve* denominada Tiuna.<sup>51</sup>

<sup>51</sup> La empresa está constituida por la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM) y el Centro Nacional de Repotenciación de Vehículos Pesados (CENARECA) con sede en el Fuerte Tiuna. Vale agregar que también se habla de la recuperación, por parte del Estado, de una planta quebrada para la producción civil de automóviles en alianza (con el 49%) con capital privado extranjero.



Contrasta, sin embargo, que, al igual que a finales del siglo XIX, América Latina sí se destaca, además de en las empresas de comercialización de productos y servicios basados en tecnología extranjera (por ejemplo Telmex), en aquellas orientadas a la extracción de recursos naturales como los minerales energéticos y no energéticos, el cemento y otros materiales y recursos estratégicos como la biodiversidad. En esas áreas, el saqueo y sus costos humanos y ecológicos han sido y siguen siendo brutales al punto que se habla, en contrapartida a la deuda externa, de una *deuda ecológica* que tienen los países metropolitanos con los periféricos.<sup>52</sup> Por ejemplo, PDVSA (Venezuela), PEMEX (México) y PETROBRAS (Brasil) figuran como principales petroleras integradas del mundo al considerarse en el 4to., 9no. y 15to. lugar en tanto a reservas y producción combinadas.<sup>53</sup> México, en una cuando menos mediocre actuación, se conforma con vender el petróleo crudo, dejando de lado el negocio de la refinación que permite generar ingresos de más de 600 dólares por barril con lo cual ocasiona una situación que ya lo obliga a importar gasolina de los Estados Unidos.<sup>54</sup>

De modo similar, México y Brasil se colocan a la vanguardia de la producción de acero a nivel global al adjudicarse la 8va. y 15ta. posición mundial (Brasil es el 4to. exportador del mundo),<sup>55</sup> aunque vale precisar que las empresas están altamente compenetradas por capital extranjero diverso como US Steel, Nippon Steel o Arcelor-Mittal (Luxemburgo). En México la situación es cuando menos vergonzosa y en contra de toda mira a la industrialización del país.<sup>56</sup>

Esquemas similares se registran para el caso del cobre donde destaca la Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) que se posiciona en el 5to. lugar de

<sup>52</sup> Pueden consultarse los libros de Jacobo Schatan: *El saqueo de América Latina* (LOM Editorial, Santiago, Chile, 1998) y *Deuda externa y neoliberalismo: el saqueo de América Latina* (Fundación CENDA, Santiago, Chile, 1999). Véase también Joan Martínez-Alier: *The environmentalism of the poor. A study of ecological conflicts and valuation*, Edward Elgar, Reino Unido/EUA, 2002; y Gian Carlo Delgado: «La cuestión ambiental en América Latina», *Latinoamericana: Enciclopedia Contemporánea de América Latina y el Caribe*, Boitempo, São Paulo, Brasil, 2006, pp. 74-87.

<sup>53</sup> ONU: ob. cit. (en nota 9), p. 96.

<sup>54</sup> Sobre el asunto léase John Saxe-Fernández: *La compra-venta de México*, ed. cit. (en nota 34); y José F. Ocampo T.: *Pemex: mitos, realidades, testimonios y propuestas*, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México, 2006.

<sup>55</sup> ONU: ob. cit. (en nota 9), p. 108.

<sup>56</sup> En 1991, el gobierno de Salinas privatizó la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Las Truchas (Sicartsa) con 50 años de reservas probadas de acero por un monto correspondiente a la 15ta. parte de sus ingresos anuales. Pasado el escándalo, se procedió con su desnacionalización a fines de 2006 al traspasarla a la gigante Arcelor-Mittal. Con ello el país se quedó sin una de las principales industrias y reservas de un recurso estratégico, elemental para, por ejemplo, la producción de máquinas herramientas, sistemas de transporte, etcétera.



producción minera en el mundo o el Grupo México en la 10ma. posición.<sup>57</sup> En el negocio del cemento, CEMEX, la principal cementera de América Latina y la tercera del mundo, incrementó su capacidad de producción entre 1985 y 2005, de diez a casi cien millones de toneladas al año, contexto en el que México es responsable del 50% de las extracciones.<sup>58</sup> En el caso de la celulosa, Brasil y Chile se perfilaban, en 2006, como el 7mo. y 10mo. productores del mundo y el 3ro. y 5to. exportadores.<sup>59</sup>

Por lo antes precisado, se puede afirmar que las políticas neoliberales y los esquemas tipo TLCAN fungen como instrumentos de saqueo y de *guerra de clase* que han beneficiado, primero, a los actores empresariales extranjeros, y, después, a la oligarquía nacional de la región, dado que formalizan en la periferia medidas que en la metrópoli no se aplican por cuestiones de soberanía y seguridad nacional.<sup>60</sup> Ello corrobora que, como bien percibía irónicamente Bismarck, «el librecambio es la doctrina favorita de la potencia dominante, temerosa de que otras sigan su ejemplo».<sup>61</sup>

### **Alternativas hacia ciclos industrializadores endógenos en América Latina: una mirada comparativa con Asia**

El fracaso de la industrialización de América Latina, patente si se hace un balance entre logros y fallas en términos de la dinámica nacional y/o regional de industrialización endógena y desarrollo de la ciencia y la tecnología, obliga el replanteo de alternativas. Se trata de un ejercicio en el que debe tomarse nota de que un eventual éxito, depende de una serie de factores fundamentales como: la regulación de flujos de capital e inversión; un sistema bancario nacional ligado al estímulo de tal industrialización endógena; un integral y amplio sistema educativo formador de futuros científicos e ingenieros en todas las áreas; una política económica reguladora y estimuladora de la micro, pequeña, mediana y gran industria nacional en nichos estratégicos y de mayor efecto multiplicador; así como el establecimiento de sólidos parámetros de propiedad intelectual *ad hoc* a la realidad y las necesidades nacionales/regionales.

<sup>57</sup> ONU: ob. cit. (en nota 9), p. 105.

<sup>58</sup> *Ibíd.*, p. 119.

<sup>59</sup> *Ibíd.*, p. 122.

<sup>60</sup> Véase John Saxe-Fernández: *La compra-venta en México*, ed. cit. (en nota 34); Jeff Faux: *The Global Class War: How America's Bipartisan Elite Lost Our Future*, John Wiley & Sons, New Jersey, EUA/Canadá, 2006; y Alan Larson y David Marchick: *Foreign Investment and Nacional Security*, Council on Foreign Relations, EUA, 18 de julio de 2006.

<sup>61</sup> Citado en John Saxe-Fernández: «Ciclos industrializadores y desindustrializadores», ed. cit. (en nota 12).

En tal aproximación, el ejercicio comparativo resulta útil por lo que el caso de China es significativo, no solo por su actualidad, sino por su peculiaridad. Debe aclararse que aun cuando México es considerado por la «sabiduría convencional» como *país emergente* al igual que China, tal no es el caso, a pesar de que ambos países, en efecto, mantienen fuertes grados de explotación y miseria. Mientras México, como se indagó, está fuertemente endeudado, sometido a flujos mayores de la inversión extranjera directa y a empréstitos, y es dependiente tecnológicamente; China, en cambio, está inmersa en un proceso acelerado de industrialización endógena, de agresivo desarrollo de la ciencia y la tecnología y, además, se coloca como acreedor internacional. De ahí que esté conformando una agencia de inversiones a nivel internacional y presione su ingreso al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como mecanismo para canalizar su inversión hacia América Latina.

A diferencia de Japón y Corea del Sur que pasan de un «tecnonacionalismo» a un «tecnoglobalismo», China, con un espacio geoeconómico incomparable, ha estimulado en los últimos años un proceso inverso como parte de una estrategia encaminada a captar tecnología. La planeación del Estado data desde finales de la década de 1970, cuando se diseñó lo que sería, primero, el Programa de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Claves (1982) y luego, en 1986 el actual Programa 863 que tiene el objetivo específico de «beneficiar el desarrollo chino de alta tecnología en el mediano y largo plazo» en áreas como la biotecnología y las tecnologías aeroespaciales, de información, de láser y de automatización, de energías y materiales avanzados/nanotecnología.

En contraste con lo que ocurre en México y en otros países de América Latina, China ve la necesidad de «imponer controles racionales a los monopolios extranjeros que atentan contra los intereses nacionales en tecnología clave», puesto que, según precisa la *Chinese Academy of Science*, «en la medida de proteger al máximo los beneficios e intereses del país y sus empresas serán necesarios esfuerzos flexibles para aplicar cláusulas de escape en protocolos internacionales como los de la OMC».<sup>62</sup>

Lo anterior es acompañado por un paquete de apoyos y subsidios a empresas nacionales de alta tecnología y un sistema nacional de propiedad intelectual que en lugar de someterse a los lineamientos de homogenización de los principios de propiedad intelectual para que concuerden con los de la US Patent and Trademark Office, la European Patent Office o la Japan Patent Office –lo que facilita la penetración y validez de la propiedad exclusiva de las invenciones o conocimiento desarrollado en esos países en todo el mundo a modo de un «sistema mundial de propiedad intelectual», y que limita al máximo cualquier intento de ingeniería en

<sup>62</sup> Citado en Gian Carlo Delgado: «Alta tecnología, nanotecnología y espionaje tecnológico en China», ed. cit. (en nota 3).

reversa—, más bien negocia de cara a estos y a la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI). Ello permite que, como históricamente lo ha sido, al menos en principio, cada país fije en base a su soberanía nacional, el marco y métodos para reconocer y/o proteger la propiedad intelectual más acorde a su realidad y necesidades.

Por ejemplo, se sabe que China fija una serie de lineamientos en sus acuerdos de recepción de tecnología. Así, en los rubros de la industria satelital o de la nucleoelectricidad, exige que la transferencia tecnológica incluya la formación de cuadros científicos e ingenieros chinos para su posterior desarrollo y mejoramiento. Tal es uno de los principales fundamentos del estímulo de ciclos industrializadores endógenos en esa nación, una medida que debió de aplicar América Latina desde hace mucho y ciertamente más ahora. Sin embargo, como es conocido, se alude a la imposibilidad de desarrollar domésticamente tales o cuales nichos industriales porque se carece del conocimiento y la tecnología apropiados y consecuentemente lo adecuado es que las multinacionales extranjeras cubran esas necesidades sin ningún tipo de cortapisas.

Más aún, las distintas oficinas de propiedad intelectual de América Latina, en lugar de someterse a programas de «modernización» de «trato nacional» promovidos fuertemente desde la década de 1990 por la OMPI, la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre otros actores, y que no son más que el establecimiento formal de su subordinación a los *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), deberían de velar tanto por su soberanía como por su seguridad nacional. Esto es, a partir de rechazar el reconocimiento de patentes relacionadas a las necesidades humanas básicas y mediante la negociación de otras cuando la penetración de tecnología foránea amenace la industria nacional (por ejemplo, aquellas de alta tecnología o vinculadas al desarrollo de bienes de capital estratégicos).

Así, cuando China reconoció la propiedad intelectual de los sistemas *router* de conexión inalámbrica (*wireless*), el empresariado nacional presionó para la implementación de un estándar doméstico denominado WLAN (*Authentication and Privacy Infrastructure*) que, de aprobarse, obligaría su uso exclusivo en el país y forzaría a las empresas extranjeras que deseen operar con sistemas *wireless* a pagar regalías por el uso del estándar doméstico en lugar de que las empresas nacionales tengan que hacerlo para operar en su propio país. Tal *modus operandi* de «trato diferencial» en términos de propiedad intelectual no es inaudito, por el contrario, es típicamente implementado por los países metropolitanos en áreas que califican «sensibles» o de «seguridad nacional».

Si el «gambito» anterior se mira desde una eventual integración regional, dígame la Alternativa Bolivariana para la América (ALBA), es evidente que el rumbo que se debería seguir en materia de propiedad intelectual sería la implementación

de una Oficina Latinoamericana y del Caribe de Patentes (OLCP); en otro contexto ya propuesta por Cuba ante la OMPI.<sup>63</sup> En ella dos principios operativos serían básicos:

- 1) fungir como punto de encuentro de los distintos intereses latinoamericanos a modo de estimular y proteger, tanto la propiedad como el mercado latinoamericano para el impulso de ciclos industrializadores endógenos;
- 2) representar los intereses nacionales y regionales de cara a las oficinas de patentes internacionales, de modo tal que sea la punta de lanza de negociación para la captación de tecnología extranjera, con la finalidad de crear cuadros nacionales de científicos e ingenieros y sus respectivas industrias domésticas.

La OLCP en lugar de someterse a los lineamientos de la OMC o la OMPI, más bien deberá colocarse en la vanguardia de la discusión, al fungir como una *instancia de coalición* para la negociación colectiva con otras oficinas de patentes y los propios organismos «internacionales» en cuestión.

América Latina, como mercado de dimensiones importantes y área rica en recursos naturales, deberá comenzar –a la usanza asiática– un amplio ciclo industrializador basado en rangos de consumo moderados (al menos en un principio);<sup>64</sup> el fomento del mercado interno nacional y regional; y el estímulo permanente de encadenamientos productivos endógenos tanto horizontales como verticales.

El ahorro interno, la conformación de bancos nacionales y de un banco regional de fomento industrial e innovación en ciencia y tecnología, serán factores nodales para lograr una independencia financiera, que usualmente es estrangulada mediante el amplio y bien conocido paquete de préstamos altamente condicionados como los lanzados por la tríada FMI-BM-BID.

La propuesta de la conformación del Banco del Sur u otro similar puede servir como semilla para dichos fines, libres de la condicionalidad metropolitana –si es que ese ente maneja sus reservas en una moneda regional común, sea el denominado «sucre» formulado por Chávez,<sup>65</sup> el «latino» de Castaingts,<sup>66</sup> u otra–. En el

<sup>63</sup> OMPI: «Reforma del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes: Propuestas de Cuba», *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*, PCT/R/1/4, Ginebra, 23 de marzo de 2001.

<sup>64</sup> La experiencia muestra que la presión de un consumo descontrolado puede constituir un límite mayor al desarrollo industrial endógeno y su planeación de largo plazo, puesto que favorece las importaciones de bienes de consumo y, en su caso, de bienes de capital relacionados con la producción de los primeros.

<sup>65</sup> Agencia Bolivariana de Noticias: «Chávez propone moneda latinoamericana para Unión Económica de América», Venezuela, 14 de enero de 2007 ([www.aporrea.org](http://www.aporrea.org)).

<sup>66</sup> Juan Castaingts: «Hacia una nueva moneda latinoamericana: el latino», *Excelsior*, Sección Financiera, México, 23 de mayo de 1998.

interín, cualquier tipo de «asistencia» externa deberá, como en el Japón de la posguerra,<sup>67</sup> ser estrictamente condicionada a su aplicación productiva endógena y de ningún modo como mecanismos de «alivio».

Ahora bien, tal estructura financiera regional, deberá estar vinculada a la conformación de una Fundación Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (FLCT) encargada de coordinar, como en Europa, un «Área Latinoamericana de Infraestructura Científico-Tecnológica» útil a dicho proceso endógeno industrializador.

Esto es, por un lado, la coordinación de inversiones para la construcción binacional o multinacional de centros o institutos latinoamericanos de investigación y desarrollo en tal o cual nicho tecnológico, en los cuales se formarían cuadros endógenos de científicos e ingenieros de toda la región. Y, por el otro lado, la conformación de áreas virtuales de trabajo conformadas por grupos multidisciplinarios de investigación y desarrollo en áreas consideradas estratégicas con miembros, trabajando desde su lugar de origen, de por lo menos tres países latinoamericanos y con derecho a «patente latinoamericana» que permita su implementación y uso de modo privilegiado y extendido en la región y que la comercialice exógenamente con ganancias para los países inventores. Ello, desde luego, obligaría a una revisión acerca de la compatibilidad de los actuales lineamientos nacionales, en materia de propiedad intelectual de cada uno de los países latinoamericanos miembros, por parte de una comisión evaluadora. Además, los mencionados grupos de trabajo deberán incluir grupos permanentes y rotatorios multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios encargados de estimular el debate y el diálogo social –extendido, incluyente, participativo y activo– sobre los distintos aspectos éticos, legales, sociales y ambientales de las investigaciones y potenciales innovaciones en ciencia y tecnología.<sup>68</sup>

Se trata de la construcción institucional de mecanismos aptos, pero necesarios, para la implementación concreta de medidas pro industrializadoras endógenas tanto nacionales como regionales. Y si bien es cierto que tal construcción institucional, en términos regionales, implica el establecimiento de instrumentos burocráticos (que tendrán que mantenerse lo más reducidos posible y con financiamiento totalmente austero y transparente), es de notar que resultan fundamentales de cara a la competencia intercapitalista en ciencia y tecnología, un contexto en el cual difícilmente los países latinoamericanos aislados podrán engancharse y competir como iguales.

<sup>67</sup> Manuel Cervera: ob. cit. (en nota 1), p. 30.

<sup>68</sup> Véase una propuesta puntual en Gian Carlo Delgado: *Incertidumbres de la nanotecnología y su manejo social*, ed. cit. (en nota 47).

Lo anterior exige el desarrollo e implementación de una serie de mecanismos para dar «cuentas claras» a los gobiernos latinoamericanos y sus pueblos; dígase, por ejemplo, mediante la implementación de una oficina de auditoría colectiva.<sup>69</sup>

Si bien el proceso en efecto tomará un cierto tiempo y requerirá amplios esfuerzos de coordinación y decisión, los primeros pasos podrían darse a partir de la conformación de un fondo regional para la investigación y desarrollo en áreas de ciencia y tecnología específicas, dígase, por mencionar una, la medicina; ciertamente una prioridad para la región. Dicho fondo fungiría como el precursor de la FLCT y, consecuentemente, podría comenzar con el establecimiento del (los) primer(os) centro(s) o instituto(s) latinoamericano(s) en medicina –por seguir el ejemplo–. Es un escenario en el que varios factores y ventajas de cada país «socio» deben ser considerados. Por ejemplo, Cuba, aunque con reducidos recursos para la consolidación del «fondo», se coloca, sin embargo, como uno de los actores centrales, en este caso, dada su experimentada masa de científicos ya trabajando e innovando en ese rubro. Desde luego, el fondo deberá operar a la par de una serie de políticas gubernamentales de apoyo, regionales y nacionales como las ya indicadas. Entre las que vale subrayar de nueva cuenta, está la necesidad de abrir espacios en los mercados nacionales a las innovaciones endógenas; por ejemplo, mediante la introducción masiva de tales medicamentos a los sistemas nacionales de salud, con el consecuente desplazamiento de aquellos similares provenientes del extranjero.

### Consideraciones finales

Es de notarse que las propuestas pro ciclos endógenos de industrialización en América Latina no necesariamente figuran como críticas antisistémicas, sin embargo sí son reprobaciones al capitalismo oligárquico-imperial imperante.

Tampoco debe equipararse industrialización con desarrollo, puesto que el primero no conlleva inevitablemente al segundo. Ciclos industrializadores endógenos en América Latina pueden mantener las estructuras de clase actuales y por tanto las divergencias de distribución de la riqueza (aunque, en efecto, en menor medida, pues uno de los requisitos planteados es el estímulo al consumo interno). En este sentido, en el proceso, cada Estado nación y/o región tendrá que desarrollar sus propios mecanismos para asegurarse que tales ciclos industrializadores en efecto se vean reflejados en un desarrollo nacional/regional en todo el sentido de la palabra,

---

<sup>69</sup> Esto presupone una oficina de auditoría colectiva (multinacional de los países latinoamericanos miembros) y la publicación sin restricción alguna de tales evaluaciones en medios electrónicos. Asimismo, implica la instauración de procedimientos legales para la denuncia por parte de cualquier ciudadano latinoamericano de potenciales desfalcos o malos manejos de los fondos.



es decir, en términos económicos, humanos, ambientales y culturales. Se trata, pues, al decir de Sunkel, «de concebir el desarrollo de otra manera. No como aspiración modernizadora estrecha de algunas élites que se apropian del aparato del Estado para imponerle su visión [e intereses] a la sociedad, sino como el producto de un conjunto de demandas de la sociedad misma que se articulan y manifiestan democráticamente en lo que podría constituir un nuevo contrato social».<sup>70</sup>

GIAN CARLO DELGADO RAMOS, doctor en Economía Ecológica egresado de la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en aspectos geoeconómicos, geopolíticos, sociales, éticos y ambientales de la alta tecnología, es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo puede ser consultado en Internet ([www.giandelgado.blogspot.com](http://www.giandelgado.blogspot.com)).

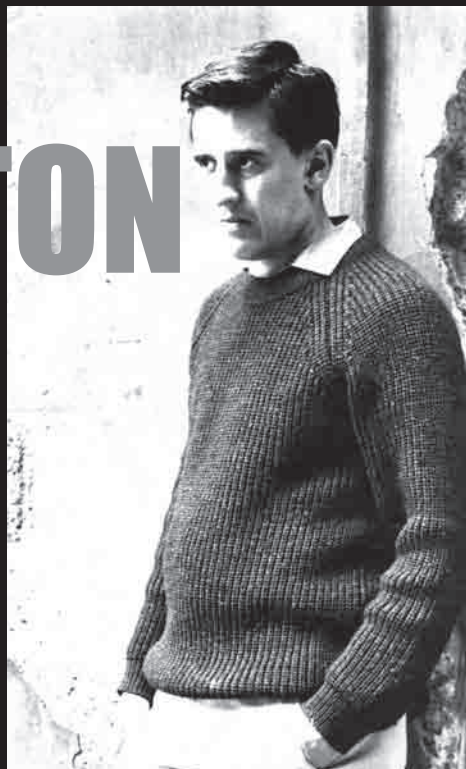
---

<sup>70</sup> Véase Osvaldo Sunkel: «En busca del desarrollo perdido», *Problemas del Desarrollo*, vol. 37, no. 147, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, octubre-diciembre de 2006, p. 40.

# COLECCIÓN ROQUE DALTON

LA POESÍA, LITERATURA Y POLÍTICA DE ROQUE DALTON

Roque Dalton es uno de los artistas y revolucionarios más queridos y reconocidos de América Latina. En esta colección, Ocean Sur ofrece la amplia obra de Roque, incluyendo textos inéditos.



## TABERNA Y OTROS LUGARES

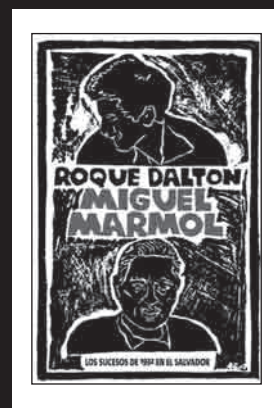
Premio Casa de las Américas en 1969, *Taberna y otros lugares* reúne poesías compiladas en la antigua Checoslovaquia. Nace de las conversaciones que sostuvo con revolucionarios, obreros y gente del pueblo de Europa del Este, a lo largo de muchas noches en una famosa taberna en Praga, convertidas en poemas políticos. Este libro, de gran valor literario, revela la capacidad de observación periodística del autor y sobre todo, su profunda sensibilidad ante la injusticia y la desigualdad.

160 páginas, ISBN 978-1-921235-68-9

## MIGUEL MÁRMOL Los sucesos de 1932 en El Salvador

Texto clásico de la historia contemporánea de El Salvador, *Miguel Mármol* es producto de varias entrevistas orales (realizadas en Praga en 1966). Reconstruye en la voz del militante Miguel Mármol la heroica insurrección dirigida por el Partido Comunista de El Salvador en 1932. Esta obra testimonial, fundamental de la literatura latinoamericana por su valor histórico y literario, nos transmite la experiencia revolucionaria de aquellos años ahogada en la sangre de 30,000 compañeros asesinados por la oligarquía de su país.

430 páginas, ISBN 978-1-921235-57-3



[www.oceansur.com](http://www.oceansur.com) ■ [info@oceansur.com](mailto:info@oceansur.com)

## La injusta distribución del bien simbólico en Brasil

REINALDO MAIA

*Todos los pueblos luchan para tener acceso al patrimonio cultural común de la humanidad, el cual se enriquece constantemente. Resta saber cuáles serán los pueblos que continuarán contribuyendo a ese enriquecimiento y cuáles aquellos que serán relegados al papel pasivo de simples consumidores de bienes culturales adquiridos en los mercados. Tener derecho o no a la creatividad, esa es la cuestión.*

Celso Furtado, «Reflexiones sobre la cultura brasileña»  
*Cultura y desarrollo en época de crisis*

La concentración y la injusta distribución de la renta existentes en América Latina y, en particular, en Brasil, son de conocimiento de todos aquellos que se mantienen mínimamente informados sobre estos países. Existen estudios, datos y publicaciones de amplia circulación en medios académicos y no académicos sobre el tema. Pero, sobre la injusta distribución del «bien simbólico», que origina la exclusión cultural en que vive una gran parte de la población, y sobre sus consecuencias, no hay casi bibliografía. En Brasil, el tema de la creación y la distribución simbólica, es decir, la *cuestión cultural* no es ampliamente discutida, porque no se le reconoce como un asunto de Estado. A pesar de estar consignada en la Constitución Federal de 1988 como un derecho elemental de todo ciudadano, aún no se ha concretado en políticas públicas capaces de garantizar su cumplimiento. Como afirma el profesor Celso Furtado:

En un país como el nuestro, en el que los que detentan el poder parecen obsesionados por la más estrecha lógica economicista dictada por los intereses de grupos privilegiados y empresas transnacionales, hablar de desarrollo

como reencuentro con el genio creativo de nuestra cultura y como realización de las potencialidades humanas puede parecer una simple evasión en la utopía.<sup>1</sup>

En 2007, se cumplen veinticinco años del retorno de Brasil a su proceso democrático. Históricamente hablando, es una experiencia muy reciente, si se tiene en cuenta que el país vivió veinticinco años bajo una dictadura militar que prohibió y persiguió la actividad política y ejerció, con rigor inquisitorial, la censura cultural. Los años de autoritarismo prepararon al país para ser un campo de inversiones grande y seguro del capital internacional. La *cuestión cultural* fue concebida en función de servir a los objetivos y necesidades de la acumulación del capital, es decir, como instrumento dócil y diseminador de los ideales y pensamientos que justificasen que Brasil es el mejor de los mundos posibles. Durante más de dos décadas de autoritarismo, el Ministerio de Hacienda, responsable de la economía nacional, se transformó en el gran orientador de las políticas públicas y culturales. El mayor símbolo de ese período es el actual diputado federal Delfim Neto, quien creó la máxima «hacer que el pastel crezca para después dividirlo». En esta espera del crecimiento del pastel, vale recordar que la cultura fue tratada como un instrumento de transmisión de la ideología autoritaria, que tuvo su expresión en canciones populares, de éxito nacional, como «Yo te amo, mi Brasil» de Dom y Ravel, o se expresó mediante consignas formadoras de opinión, como el *slogan* del gobierno «Brasil: ámelo o déjelo». La mejor expresión de este clima político fueron las palabras pronunciadas por el entonces presidente de la República, general Emílio Garrastazu Médici, en entrevista concedida el 22 de marzo de 1973:

Todas las noches me siento feliz, cuando enciendo la televisión para ver el noticiero. Mientras las noticias dan cuenta de huelgas, disturbios, posiciones tomadas y conflictos en varias partes del mundo, Brasil marcha en paz rumbo al desarrollo. Es como si yo tomase un sedante después de un día de trabajo.

La «paz» tan reverenciada por el general de turno era la paz de un país subyugado por el terror de Estado, donde los «bienes simbólicos», o sea, la *cuestión cultural* era un asunto de la policía. La actividad política estaba dirigida únicamente a crear las condiciones necesarias para el «desarrollo del capital». El hombre brasileño no era el centro de esa «tranquilidad», a no ser cuando era apresado y acusado de subversivo y/o terrorista. Fue en 1968, con el decreto del Acto Institucional número 5 (AI-5), que se agudizó la censura y la persecución a los creadores/hacedores culturales de Brasil. Con el AI-5, se interrumpe todo el proceso de desarrollo cultural alcanzado a partir de la década del cincuenta. El Teatro de Arena de São Paulo, los Centros

<sup>1</sup> Celso Furtado: «Reflexiones sobre la cultura brasileña», *Cultura y desarrollo en época de crisis*, Paz y Tierra, Río de Janeiro, 1984, p. 30.

Populares de Cultura de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) y el movimiento del «cinema novo» son censurados, y sus creadores/hacedores perseguidos, apresados, torturados y, en algunos casos, asesinados. Los incipientes intentos realizados para acercar la  *cuestión cultural*  al ciudadano común con el fin de convertirla en una necesidad y expresión suya, y en un derecho que debía garantizar el Estado, retroceden para dar lugar a una «política pública», que es dirigida y moldeada según los principios de la censura federal.

En un breve período de la historia nacional, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la cultura desempeñó un papel y una función junto a la sociedad brasileña. Sus creadores/hacedores, inmersos en la utopía de transformar a la sociedad brasileña, tornándola justa y socialista, participaron cada día en la vida política y en la vida del ciudadano común. En este breve período de tiempo, aunque sin llegar todavía a las grandes masas, hubo una cierta distribución del bien simbólico a las clases sociales que hasta entonces estaban excluidas de su creación y disfrute. Fue un momento de la historia política del país en el cual la educación y la cultura se unieron con el objetivo de ser un instrumento para promover la transformación de la política y del hombre brasileño. Toda esta acumulación se logró durante el breve período democrático que vivió el país desde la elección de Getúlio Vargas hasta el golpe militar de 1964. No debemos olvidar que la  *cuestión cultural*  en un país que fue esclavista se limita a la clase gobernante. Es hacia ella, cuando existen, que están dirigidos los presupuestos públicos y/o privados. La creación popular, es decir, la de las clases asalariadas es considerada como «baja» cultura y su razón de ser, como máximo, eventuales acciones proselitistas. Solo es posible cambiar esa situación con una intensa lucha en el frente ideológico de la sociedad y del aparato del Estado.

En Brasil, la preocupación del aparato estatal con la  *cuestión cultural*  como objeto de políticas públicas es algo reciente y data, paradójicamente, de los años setenta cuando el país vivía bajo la dictadura militar. En esta década se crean las instituciones públicas federales para administrar, organizar e implementar las acciones gubernamentales dirigidas a las diferentes manifestaciones artísticas y a conservar la memoria nacional. Con anterioridad, la cultura no contaba con un órgano responsabilizado de su ejecución, excepto el Servicio Nacional de Teatro creado durante el gobierno de Getúlio Vargas, que incluso resistió las reformas administrativas realizadas por los gobiernos militares y dio lugar al Instituto Nacional de Artes Escénicas (INACEN). Esas instituciones públicas no tenían autonomía política ni presupuestaria, ya que se subordinaban al Ministerio de Educación. Es de suponer que, por la propia amplitud de las cuestiones educacionales en un país con las dimensiones geográficas de Brasil, la  *cuestión cultural*  no encontraba espacio para convertirse en una prioridad presupuestaria ni política.

Con la redemocratización del país durante el gobierno del presidente José Sarney, el último electo por el colegio electoral del Congreso Nacional, se crea el Ministerio de Cultura. Su creación fue fruto de la reivindicación y de la lucha de los creadores/hacedores de cultura que tuvieron una participación importante en este proceso. La cultura ganó un edificio en la explanada de los Ministerios en Brasilia, con derecho a un asiento en el Consejo de Ministros de la Presidencia de la República, pero no ganó un presupuesto compatible con las necesidades de la sociedad brasileña. El avance político no repercutió, en la práctica, en ninguna mejoría de las condiciones para socializar el «bien simbólico», ya sea respecto a la creación o a su circulación y disfrute por las capas más amplias de la sociedad. Y ello se debió a que, a pesar de que la dictadura había terminado, se mantenía la política economicista, es decir, siguió imperando la ideología de dejar crecer el pastel para luego dividirlo. Esa visión, confiando en el posible «iluminismo» del empresariado nacional y con el afán de suplir la falta de fondos públicos para realizar una acción gubernamental en la esfera cultural, tiene la brillante idea, copiando las experiencias extranjeras, de crear una Ley de Incentivo a la Cultura, o sea, el capital fomentaría la acción cultural beneficiándose de la exención tributaria. El mecenazgo hecho con dinero público, pero dirigido y orientado por los intereses privados.

Con el fin de la dictadura militar, el país, reordenado jurídicamente mediante la aprobación de una nueva Constitución, no logra superar dos pilares que garantizarán el «desarrollo económico» de este período: la injusta distribución de la renta y de los recursos para la creación/disfrute del «bien simbólico», características estas de una sociedad que renunció a la utopía para conformarse con ser un gran emporio avanzado de los intereses de las transnacionales, alegando la necesidad de garantizar la «governabilidad». Vencido el autoritarismo, la política no logra colocar al hombre en el centro de sus acciones y discusiones. La herencia de los años de plomo permanece y continúa bajo los nuevos tiempos de democratización: lo importante es que aumenten los «consumidores» para mantener las condiciones favorables a la expansión del capital y no crear las condiciones para que surja el ciudadano y la ciudadanía; elección que retorna directamente en las políticas y acciones públicas y privadas encaminadas a crear el bien simbólico. La cultura, vista por la dictadura como correa de transmisión de su ideología autoritaria, ahora pasa a ser considerada como mercancía que disputará el mercado del entretenimiento y promoverá, institucionalmente, a sus promotores empresariales mediante los patrocinios permitidos y fomentados por la Ley de Incentivo a la Cultura. Los creadores/hacedores culturales son sustituidos, en la definición de lo que es cultura y de qué hacer, por los captadores de recursos y por los responsables de los departamentos de *marketing* de las grandes empresas nacionales y transnacionales.

La existencia de la Ley también tiene un efecto adicional que es la carencia de presupuestos públicos que sufren los órganos encargados de la esfera cultural –unión, estados y municipios– quienes, alegando falta de recursos, pasan a la iniciativa



privada la «responsabilidad» de las acciones culturales. Lo que está consignado en la Constitución Federal, así como en las leyes orgánicas de los estados y municipios es irrespetado, es decir, cada vez más el aparato estatal renuncia a sus atribuciones constitucionales con respecto al área de la cultura. La existencia o no de una «acción cultural» en el país pasa a ser responsabilidad de los intereses privados, que comienzan a «hacer políticas públicas» y, por una ironía de la historia, con dinero de los impuestos fiscales que dejan de pagar para «incentivar la cultura», o sea, el mecenazgo del patrocinador privado se hace con recursos públicos que el Estado alega no tener. Si antes el bien simbólico se limitaba a las clases sociales con poder, que podían pagar por su diversión y entretenimiento, ahora continúan disfrutando del bien simbólico, solo que sin meter «las manos en su propio bolsillo», pues se aprovechan de los beneficios que les garantiza la Ley de Incentivo a la Cultura.

Antes de la existencia de la Ley de Incentivo, era responsabilidad de los gobernantes el que hubiera o no una política pública para la esfera cultural. Era una decisión política clara y transparente. Permitía disputar esos recursos en el ágora de la sociedad. Incluso en el período más duro de la dictadura militar, los creadores/hacedores de cultura resistieron y lograron, de alguna forma, la solidaridad de la sociedad civil. Con el fin de la censura, se produjo un distanciamiento entre los creadores/hacedores culturales y las fuerzas sociales que hasta entonces actuaban unidas, ya sea por haber recuperado la sociedad la libertad de organización política y, de este modo, no necesitar más del «arte» para promover sus discusiones, o bien por razones económicas que incluyen el «hacer cultural», y los «artistas» se ven obligados a andar por sus propios pies para denunciar y revertir esa nueva forma de injusticia y discriminación. Durante la redemocratización de la sociedad brasileña, la censura política de los tiempos de la dictadura fue sustituida paulatinamente por la censura económica, solo que bajo la apariencia de la vigencia máxima de la libertad de creación y circulación de la creación cultural, ya que para los defensores de la cultura como mercancía, las leyes del mercado están desprovistas de ideología y son los consumidores quienes deciden lo que es cultura o no.

El segundo gran resultado de la aprobación de la Ley de Incentivo a la Cultura, que desde su inicio, de hecho, no incentivó nada, fue el de patrocinar y financiar lo que ya estaba consagrado, pues sus «sellos institucionales» quedarían unidos y expuestos a lo que, a través de la Ley, patrocinarían y/o financiarían, por una cuestión de retorno de *marketing* y de divulgación, dando preferencia a aquellos eventos, artistas y creaciones que ya tienen un «nombre» en el mercado del entretenimiento. Y aquí está la clave de la nueva forma de promover la injusta distribución del bien simbólico: los recursos existentes para la esfera cultural, en cantidades nunca antes vistas en el país, dirigidos a aumentar aún más la concentración del bien simbólico. Los que menos necesitan de «recursos públicos» para promover sus «producciones» son los más beneficiados. Como ejemplo podrían

citarse decenas de eventos que lograron ser patrocinados por grandes empresas y que no necesitarían esos recursos para materializarse.

El tercer gran resultado de la implantación de la Ley fue la falta de presupuestos públicos que sufrían los órganos y/o instituciones encargadas del área cultural. A pesar de que al aparato del Estado le correspondía amparar, fomentar e incentivar la esfera cultural, alegando que posibles «recursos» serían captados en la sociedad civil mediante la nueva ley, los presupuestos, al ser discutidos por los poderes legislativos correspondientes, fueron reducidos, o sea, al mismo tiempo en que el aparato del Estado decía poder renunciar a la recaudación de los impuestos correspondientes, si ellos fuesen utilizados para el patrocinio privado de la cultura, se desacreditaba a sí mismo, renunciando a sus atribuciones constitucionales y recursos presupuestarios. De este modo, los presupuestos públicos acabaron por reducirse apenas a costear la maquinaria burocrática dando lugar a que el ciudadano común, con toda razón, criticase la inutilidad de los órganos e instituciones públicas vinculadas a la esfera cultural. Por otra parte, sin recursos para realizar sus políticas públicas, los órganos e instituciones federales también comienzan a competir por los recursos existentes en el mercado para beneficiarse de los incentivos de la Ley Cultural, o sea, los creadores/hacedores culturales, además de verse sin los recursos públicos para apoyar, financiar o patrocinar sus creaciones, tienen como competidor en la captación de los recursos privados al propio aparato del Estado; y son doblemente cercenados, ya que la competencia se vuelve desleal. ¿Por qué una empresa privada vinculada, por ejemplo, al sector de la construcción civil va a dejar de financiar un proyecto de una institución gubernamental, que además hace las licitaciones de las obras públicas, para financiar a un artista «individual» que aunque le trajese mucho reconocimiento, no será nada con respecto al «posible» agradecimiento que le podrá hacer el «aparato del Estado»? Aunque los captadores del Ejecutivo no tengan ninguna intención de atraer y/o corromper a los «posibles» financistas de la sociedad civil, hay aquí algo corruptor y deformador en las relaciones entre el interés público y el privado.

El cuarto gran resultado de la implantación de la Ley del Incentivo consiste en lo siguiente. En todas las investigaciones sobre los mayores inversionistas y patrocinadores de la cultura aparece el nombre de las grandes empresas estatales, es decir, las empresas públicas y/o de interés público/privado. Es el dinero público utilizado según los criterios particulares de los «poderosos» directores de *marketing*, o sea, analicemos la gran contradicción de un Estado que renuncia a tener una política pública para la esfera de la cultura y para los «bienes simbólicos» de la nación. El ejecutivo, que es elegido para gobernar, renuncia a su responsabilidad pública y entrega a un director de *marketing*, que no fue elegido, la responsabilidad de hacer toda la política cultural que quiera, con recursos públicos que el propio aparato del Estado alega no tener; en el caso de Brasil, el Ministerio de Cultura, que es el encargado de la política pública para la esfera cultural. Esa paradoja llega al colmo de dar

más poder y recursos económicos al director de *marketing* de la PETROBRAS que el que tiene el Ministro de Cultura. De manera que la política cultural que hará el director de *marketing* atenderá los intereses «privados» de la estatal y no los intereses públicos de la sociedad en su conjunto, como sería la responsabilidad del gobierno. Es la forma de «administrar» recursos del sector privado llevada al seno del gobierno, que tiene la responsabilidad de administrar de forma transparente y universal. Es la confusión entre lo público y lo privado, ahora en la esfera de la administración del ámbito cultural. Lo que ya sucedía en otros sectores de la economía, dentro del sistema capitalista, ahora gana el «foro» de la cultura, entendida solo como una mercancía más que disputará el mercado globalizado, es decir, el Estado renuncia al «bien simbólico» como una cuestión política y de Estado.

Dentro de este escenario, en los años noventa surge en São Paulo, un pequeño movimiento, encabezado por creadores/hacedores teatrales denominado Movimiento Arte contra la Barbarie que decide realizar una evaluación sobre el «teatro» que hacían, así como sobre las políticas públicas existentes para fomentarlo, apoyarlo y patrocinarlo. Teniendo como objetivo una reflexión que condujera a comprender el «momento artístico y político» que vivían, sin ninguna otra pretensión, acaban poniendo en jaque a toda la ideología mercantil que, ahora con la democratización del país, venía encargándose de las políticas dirigidas hacia el ámbito cultural y el «bien simbólico». Después de meses reuniéndose periódicamente y presionados por sectores de la sociedad que ven con desconfianza esos encuentros, lanzan un primer manifiesto, que reproduzco a continuación para su mejor comprensión y que es cuestionado, a pesar de su sencillez y limitación política.

#### **Manifiesto Arte contra la Barbarie**

Los grupos teatrales Companhia do Latão, Folias D'Arte, Parlapatões, Pia Fraus, Tapa, União e Olho Vivo, Monte Azul y los artistas Aimar Labaki, Beto Andretta, Carlos Francisco Rodrigues, César Vieira, Eduardo Tolentino, Fernando Peixoto, Gianni Ratto, Hugo Possolo, Marco Antonio Rodrigues, Reinaldo Maia, Sérgio de Carvalho, Tadeu de Sousa y Umberto Magnani, declaran públicamente su posición con respecto a la *cuestión cultural* en Brasil:

El teatro es una forma de arte cuya especificidad es insustituible como registro, difusión y reflexión del imaginario de un pueblo. Su condición actual refleja una situación social y política grave. Resulta inaceptable la mercantilización impuesta a la cultura en el país, en la que predomina una política de eventos. Es esencial que exista un proceso continuado de trabajo y de investigación artística. Nuestro compromiso ético es con la función social del arte.

La producción, circulación y el disfrute de los bienes culturales son derechos constitucionales, que no han sido respetados. Una visión mercadológica transforma la obra de arte en producto «cultural». Y crea una serie de ilusiones que enmascaran la realidad de la producción cultural en el Brasil de hoy.

Las actuales políticas oficiales, que transfieren la responsabilidad de fomentar la producción cultural a la iniciativa privada, encubren la omisión que transforma a los órganos públicos en simples intermediarios de negocios. La aparente cantidad de eventos hace suponer una efervescencia pero, en realidad, oculta la miseria de las inversiones culturales a largo plazo cuyo objetivo es la calidad de la producción artística.

La mayor de las ilusiones es suponer que existe un mercado. En Brasil, no existen mecanismos que regulen la circulación de espectáculos. La producción teatral no es continua y generalmente crea subempleo.

Hoy, la política oficial ha dejado a la cultura limitada al simple comercio del entretenimiento. El teatro no puede ser tratado con una óptica economicista. La cultura es el elemento de unión de un pueblo que puede darle dignidad y el propio sentido de nación. Es tan vital como la salud, el transporte y la educación y, por tanto, una prioridad del Estado.

Se hace imprescindible una política cultural estable para la actividad teatral. Para ello son necesarias, de inmediato, acciones en el sentido de:

- Definir la estructura, el funcionamiento y la distribución de fondos a los órganos públicos vinculados a la cultura.
- Apoyar constantemente el mantenimiento de los diversos grupos teatrales del país.
- Establecer una política regional de promoción de la asistencia del público a los espectáculos.
- Incentivar la formulación de una dramaturgia nacional.
- Crear mecanismos estables y permanentes para el desarrollo de la investigación y la experimentación teatral.
- Contar con recursos y políticas permanentes para la construcción, el mantenimiento y la ocupación de los teatros públicos.
- Crear programas planificados para la circulación de espectáculos por el país.

Este texto es expresión del compromiso y de la responsabilidad histórica de sus signatarios con la idea de una práctica artística y política que se oponga a las diversas formas de barbarie –oficial y no oficial–, que forjaron y forjan un país que no se corresponde con los ideales y el potencial del pueblo brasileño.

El primer Manifiesto del Movimiento Arte contra la Barbarie fue lanzado en 1999, al inicio del segundo mandato del presidente Fernando Henrique Cardoso, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB). La sociedad brasileña ya había elegido, por voto directo, al presidente Fernando Collor de Mello, que fue sacado de la presidencia por un proceso de *impeachment* que movilizó a toda la sociedad civil y quien fue sucedido por Itamar Franco. Cuando Fernando Henrique Cardoso resultó electo, llevó con él a Brasilia la esperanza de una parte considerable de la

sociedad brasileña y, por lo menos, de su intelectualidad, de que haría un gobierno progresista y dirigido hacia las políticas estructurales que modificasen el escenario del país. Sin embargo, ya en posesión de su primer mandato y una vez que fue reelecto para permanecer en la presidencia hasta el 1ro. de enero de 2003, prometió superar la era del presidente y figura destacada del populismo nacional Getúlio Vargas. Pocos entendieron que en este discurso estaba la clave de la modernización pretendida por Cardoso: la reducción del Estado a sus funciones vitales que regulasen y normalizasen el mercado y un abandono de las políticas sociales y de seguridad, inauguradas durante el gobierno de Vargas, y tan necesarias en un país con una injusta distribución de la renta como el caso brasileño.

Cardoso designó como Ministro de Cultura un compañero de su época universitaria, Francisco Weffort, ex ideólogo y fundador del Partido de los Trabajadores (PT) quien, durante la contienda electoral, fue uno de los coordinadores de la campaña de Luiz Inácio Lula da Silva y que, cuando este último perdió la elección frente a Fernando Henrique, fue invitado y aceptó el cargo. A Francisco Weffort le correspondió la tarea de «modernizar» las relaciones del aparato del Estado con los creadores/hacedores de cultura, es decir, como ministro, el ex ideólogo del PT, avanzó en el proceso de mercantilización de la cultura, con la justificación de que el mercado era el mejor «juez» para saber lo que debía ser financiado o no. Esa privatización del bien simbólico constituye un medio de evitar que el Estado intervenga en la creación cultural. No quería repetir los errores del «socialismo de Estado» que generó el «realismo socialista» en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sea, el ministro Francisco Weffort pensó que no había nada mejor contra el «realismo socialista» que el «realismo capitalista» financiado por la Ley de Incentivo a la Cultura.

Pues bien, el Manifiesto surge en oposición a ese pensamiento único sobre la *cuestión cultural* que nadie se proponía discutir. Estar en desacuerdo con las leyes del mercado en el ámbito cultural, como decía el argot del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, era ser un nostálgico del «stalinismo», un dinosaurio de la política cultural «bolchevique» del realismo socialista, o sea, la apertura económica hacia el mundo propiciada por Fernando Collor cuando era presidente del país, ahora tenía continuidad con la «apertura y la privatización» de la esfera cultural. El aparato del Estado se colocaba en el papel de simple intermediario, al que solo le correspondía conceder las autorizaciones a los proyectos «culturales» para que captasen recursos en aras de su materialización. Sin lugar a dudas, es el período de la historia reciente del país en que más dinero circuló por la esfera cultural mercantil. El Manifiesto denuncia esa situación que, en opinión de sus signatarios, contribuía decisivamente a instalar la barbarie.

A pesar de que el Manifiesto se limitaba a hablar sobre los problemas vividos por la creación teatral, puede tenerse una visión de lo que ocurría en las diferentes

manifestaciones artísticas en aquel momento de la historia del país. Tanto es así, que su lectura pública, realizada en el teatro de la Alianza Francesa de la capital paulista el 10 de mayo de 1999, contó con la adhesión de creadores/hacedores de otras manifestaciones artísticas tales como cineastas, artistas plásticos, músicos, bailarines y otros. Y esa adhesión fue posible, porque el documento explicita su visión crítica de la política pública cultural implementada por el Ministerio de Cultura, que era transferir la responsabilidad de fomentar este sector a la iniciativa privada, transferencia que tenía como una de sus consecuencias que decayera la calidad artística de aquello que se fomentaba, en beneficio de la cantidad y de lo eventual. Por otra parte, esa política de mercantilización del arte se daba bajo la ilusión de la «existencia de un mercado», cuando todos sabían que las clases sociales beneficiadas con esa política eran las que tenían poder de compra en el país y que son minoría. Es la política del aparato del Estado atendiendo al consumidor en detrimento de los derechos elementales del ciudadano.

El Movimiento Arte contra la Barbarie estaba integrado por creadores/hacedores teatrales de distintas tendencias políticas, o sea, el sentimiento expresado en el Manifiesto era el de descontento que, de alguna manera, alcanzaba a todos los creadores, independientemente de su filiación partidista. Era una reacción a la política liberal que tiene, en la *cuestión cultural*, un obstáculo a sus pretensiones globalizadoras, ya que tener una «identidad nacional», en un proceso de apertura del mercado mundial, puede ser un impedimento para la acumulación y la ganancia del capital. Ese análisis se comprueba cuando vemos el cuidado que tiene el Departamento de Estado de los Estados Unidos, de eliminar en los tratados internacionales las posibles barreras existentes contra la circulación de «bienes simbólicos», consciente de su monopolio internacional del entretenimiento y de la importancia de ese monopolio para sus pretensiones de hegemonía política y económica, y para su industria cultural, por lo que no puede admitir restricciones a la circulación de su cultura mercantilizada. En contraposición a la historia, el Movimiento reivindica la «protección» del aparato del Estado brasileño contra esa política nefasta a los intereses y «sueños» nacionales.

Como señala el profesor Celso Furtado:

¿Cómo preservar el genio inventivo de nuestra cultura ante la necesidad de asimilar técnicas que, si aumentan nuestra capacidad de acción, nuestra eficiencia, también son vectores de valores que con frecuencia mutilan nuestra identidad? [...] Hoy ese problema se plantea un poco por todas partes, en la medida en que la producción de bienes culturales se transformó en un ciclópico negocio y una de las leyes que rigen ese negocio es la uniformidad de los modelos de comportamiento, base de la creación de grandes mercados.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Celso Furtado: ob. cit., p. 31.



La reivindicación iba más lejos y, de alguna manera, pretendía constituir una bandera de lucha para las próximas disputas electorales. No por casualidad, el Movimiento programa como una de sus acciones prioritarias, que debe ser realizada después de la divulgación del Manifiesto, un seminario para discutir las relaciones entre arte, ética y política cultural; es decir, el Manifiesto y el Movimiento no pretendieron ser una representación corporativa, que sustituyese a las entidades de clase de los artistas, pero sí oponerse como una alternativa real al pensamiento único alimentado por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, que redujo la *cuestión cultural* a un negocio sujeto a las leyes del mercado. En aquel momento histórico, la palabra de orden del Movimiento fue asumida por las fuerzas políticas opositoras al gobierno, entre ellas, por el Partido de los Trabajadores del entonces derrotado Luiz Inácio Lula da Silva. Para el Partido de los Trabajadores, la *cuestión cultural* siempre fue un asunto importante que incluso repercutió en la participación activa de intelectuales y artistas entre sus afiliados. Entre sus fundadores se encuentran destacadas figuras del campo cultural: actores, actrices, escritores, cineastas, artistas plásticos, fotógrafos, filósofos, sociólogos e historiadores, o sea, toda la intelectualidad que luchó por el fin de la dictadura. Es una tradición de la política brasileña reciente, que la intelectualidad se encuentre en el campo opositor. Antes de la legalización del PT, el Partido Comunista Brasileño ejerció una gran influencia en la creación cultural. Influencia esta que en los años ochenta pasó al partido que nació en el medio obrero de las industrias metalúrgicas modernas del cinturón industrial de la ciudad de São Paulo, el Partido de los Trabajadores.<sup>3</sup>

Corría el año 1998 y el candidato eterno del PT, Luiz Inácio Lula da Silva, había perdido por tercera ocasión las elecciones para la Presidencia de la República, pero las fuerzas «progresistas» de la sociedad civil, entre ellas las de los creadores/hacedores de cultura, creían que aún podrían elegir un representante legítimo de los trabajadores y que esa realidad nefasta e injusta de la distribución del bien simbólico podría corregirse. Un primer ensayo de esa esperanza se dio con la elección de Marta Suplicy como alcaldesa de la ciudad de São Paulo. Durante su gestión al frente de la alcaldía de São Paulo, el Movimiento Arte contra la Barbarie, que aquí se emplea como ejemplo de enfrentamiento a las políticas públicas nefastas de mala distribución del bien simbólico, logró que se aprobara, por unanimidad, en el legislativo municipal, la Ley de Fomento al Teatro de la ciudad de São Paulo. Esta Ley modifica lo que hasta entonces era considerado como política pública. En ella todo se da de acuerdo con la transparencia que exige el proceso democrático y a favor de las necesidades de los creadores/hacedores de teatro y de la distribución del bien

<sup>3</sup> Esa adhesión de la intelectualidad al Partido de los Trabajadores provocó, durante la elección de Fernando Collor donde resultó derrotado Luiz Inácio Lula da Silva, el odio a las instituciones culturales por parte del gobierno federal, e incluso algunas de ellas cerraron y sus funcionarios fueron despedidos y perseguidos.



simbólico teatral a las capas más amplias de la población. Por primera vez en la historia brasileña, el teatro es considerado como un asunto de Estado y ve garantizado en la ley ese reconocimiento que prevé la aplicación anual de recursos presupuestarios preestablecidos, lo cual posibilita que los creadores/hacedores salgan del casuismo y del humor de los ejecutivos de guardia para que puedan planificar mejor sus actividades artísticas. En el municipio de São Paulo anualmente son financiados treinta grupos teatrales con amplia programación de actividades en su trabajo. Los proyectos ya no se limitan a realizar solo el montaje de eventuales piezas, sino que promueven mantener espacios escénicos, publicaciones, cursos, talleres, intercambios, y transforman así la actividad teatral de la ciudad. Militantes y simpatizantes del PT consideraban que en caso de que Lula fuera electo, este ensayo a escala municipal sería llevado a toda la federación, con las correspondientes adaptaciones, teniendo en cuenta la realidad del país.

En octubre de 2002, Luiz Inácio Lula da Silva, un ex metalúrgico, con un nivel de escolaridad de segundo grado, líder sindical formado en las luchas salariales del parque industrial más avanzado del país, el ABC paulista,<sup>4</sup> resulta electo Presidente de la República. El 1ero. de enero de 2003 recibe la banda presidencial de su antecesor, Fernando Henrique Cardoso, un socialdemócrata, intelectual, doctor honoris causa de varias universidades en todo el mundo. Lula, como es conocido por la población trabajadora, es elegido dentro de una alianza política concertada con la derecha. Y, quizás, haya logrado la victoria en estas elecciones, porque aseguró a las fuerzas políticas internacionales que, en lo que se refiere a la economía, no pondría en riesgo ninguno de sus intereses.<sup>5</sup>

Para los creadores/hacedores de cultura, la elección de Lula era la posibilidad de materializar un sueño para transformar las relaciones entre el aparato del Estado y la sociedad civil. Era la esperanza de sacar la *cuestión cultural* de la visión puramente economicista y convertirla en una prioridad de Estado, incluso aumentando el presupuesto del Ministerio de Cultura, como una señal de su importancia en el concepto político del nuevo gobierno que se instalaba. Se creyó que el discurso del Partido de los Trabajadores, esgrimido en toda su vida de opositor contra las injusticias sociales de la nación y, en especial, contra la injusta distribución del bien simbólico, ahora sería llevado a la práctica al conquistar el poder. Puesto que en su programa partidista, la educación figuraba al lado de la cultura como instrumento esencial para la transformación de la realidad y la construcción de la ciudadanía, se esperaba que la cuestión del bien simbólico sería considerada

---

<sup>4</sup> Se conoce como ABC a varias pequeñas ciudades del cordón industrial de São Paulo, entre ellas São Bernardo do Campo, donde Lula comenzó su actividad como dirigente sindical. (*N. del E.*)

<sup>5</sup> Ver el documento de campaña titulado Carta a los Brasileños que aseguraba que mantendría las reglas del juego económico del anterior gobierno.

fundamental para la definición de una nueva cultura política y la identidad nacional. En experiencias gubernamentales del partido, en la gestión de las alcaldías municipales, el ensayo se había realizado con gran éxito: creación de comisiones municipales de cultura, presupuestos que reconocían la importancia del sector cultural, corrección de la injusta distribución del bien simbólico y mejoría de las condiciones de acceso de todo ciudadano al derecho elemental a la cultura. Solo quedaba una duda para todos aquellos que votaron por Lula: una vez en el poder, ¿hacia qué lado de la alianza electoral que lo eligió se inclinaría la «balanza» de las realizaciones y acciones del gobierno?, ¿hacia la derecha o hacia la izquierda?

Una vez concluido su primer mandato, vemos que lo que era una esperanza no se concretó, y la cultura y el bien simbólico todavía no han adquirido el *status* de asunto de Estado en el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De igual forma que en la esfera económica continúa prevaleciendo la visión economicista, heredada del régimen militar y de los gobiernos electos que le antecedieron, la esfera cultural se mantiene bajo la visión de que la cultura está relacionada con el negocio y las leyes del mercado, y que es suficiente para promoverla, apoyarla y patrocinarla la célebre Ley de Incentivo a la Cultura. La gran tónica del presupuesto público de la esfera cultural son los recursos previstos para ser captados mediante la Ley y aplicados para realizar los «eventos» culturales. Los presupuestos públicos continúan siendo rehenes de los programas económicos encaminados a garantizar al capital transnacional su seguridad y rentabilidad, como por ejemplo, el pago de la deuda externa e interna. Como afirma Eli Diniz en un artículo publicado en *São Paulo en Perspectiva*, número 4, de octubre/diciembre de 2001, sobre el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, pero que vale para comprender la opción del gobierno de Lula en su primer mandato:

La hegemonía del pensamiento neoliberal reforzó la primacía del paradigma tecnocrático, según el cual, independientemente del régimen político vigente, eficiencia gubernamental sería la resultante de un proceso de concentración, centralización y cierre del proceso de decisión, en el cual la eficiencia de la gestión es reducida a la noción de aislamiento burocrático. De esta forma, preservar la racionalidad burocrática implicaría la meta de neutralizar la política y reforzar la autonomía de decisión de las élites encerradas en la cúpula burocrática. Por tanto, lo que se observó no fue exactamente el debilitamiento del Estado, expresión, además, muy poco esclarecedora, y sí el fortalecimiento desproporcionado del Ejecutivo, por la concentración de poder de decisión en esta instancia, controlada cada vez más por la alta burocracia, lo cual debilitó los fundamentos institucionales de la democracia.

Con el mantenimiento de un gobierno centralizador donde predomina el pensamiento tecnocrático en contraposición con el pensamiento político que considerase

lo que significó, político/simbólicamente, la elección de un candidato con el perfil y el origen social de Lula, se olvidó la «política» en nombre de la gobernabilidad, como instrumento y espacio en las discusiones de los problemas reales de la sociedad; o sea, dentro de ese espectro, la *cuestión cultural* se convierte en algo menos importante o adquiere cierta importancia, justamente, debido a que pasa a ejercer la crítica, y a desagradar, por tanto, a los funcionarios que ocupan cargos públicos. Por ser la realidad el objeto de su «oficio», los intelectuales y creadores/hacedores culturales fueron los primeros que se dieron cuenta de las limitaciones del gobierno recién electo y de su movimiento pendular hacia la «derecha», es decir, comprendieron rápidamente que la herencia dejada por el gobierno que lo antecedió se modificaría poco. Por este motivo la prensa plana y electrónica del país no escatimó elogios para la «transición civilizada» realizada entre el gobierno saliente y el que entraba, como ejemplo del perfeccionamiento político brasileño, pero, lo que en realidad sucedió fue un «compromiso» que asumieron ambas partes de no abordar cuestiones que pudieran convertirse en un «avispero» y crear una inquietud desfavorable para el país y para el gobierno electo, siempre en nombre de la «gobernabilidad», palabra mágica en países con tradiciones golpistas y dictatoriales.

Nada de nuevo en el cuartel de Abrantes. La política implementada por el Ministerio de Cultura no fue fiel en nada a los diferentes documentos programáticos producidos durante años por el conjunto de la militancia del Partido. El uso de los recursos logrados mediante la Ley de Incentivo Cultural continuó siendo la «fuente» para financiar los proyectos del gobierno. El dinero utilizado, a pesar de provenir de impuestos no pagados por las empresas privadas, continuó favoreciendo la concentración del bien simbólico en las clases sociales que menos lo necesitan para viabilizar su entretenimiento y/o diversión. Como contrapartida a esa política desastrosa que pone a la cultura del país bajo las órdenes de una sola clase, es decir, de aquellos que detentan el capital, el Ministerio de Cultura crea un programa de atención a las «clases populares», a semejanza de la falsa política de distribución de la renta –la Bolsa de Familia–: los Puntos de Cultura, que, además de no reconocer una especificidad y función social para el bien simbólico, para el fenómeno estético, contribuyó aún más a crear la ilusión de que en una economía globalizada, donde el desempleo es una regla para la ganancia, es posible que la cultura realice la inclusión social de los atendidos. En el mismo período aumentó el monto autorizado para ser captado mediante la Ley de Incentivo; esto significa que el país no tiene problemas de recursos para aplicar en la esfera cultural; tiene sí problema de decisión política para revertir una «política» que, en los últimos años, concentró cada vez más los recursos en una parte minoritaria de la sociedad.

La reacción de los creadores/hacedores de cultura fue muy complaciente en el primer mandato, pues creían que todo era algo temporal y que, en cualquier momento la situación se revertiría y el gobierno se encaminaría a poner en práctica

sus propuestas programáticas sobre la *cuestión cultural*. Una de las primeras reacciones, nuevamente en la esfera teatral, ya que son esos creadores/hacedores culturales los más activos y actuantes en los últimos años, ocurre en la ciudad de Belo Horizonte en un encuentro que reúne a grupos de todo el país. El hecho es que al reunirlos, todos tienen una sede y desarrollan actividades continuamente, realizan investigaciones y mantienen un repertorio. Ante la ausencia del poder público para atender sus necesidades y demandas, deciden fundar una «red de grupos» capaz de discutir y exigir reivindicaciones con el objetivo de crear las condiciones para el mejor desarrollo de sus programas. Así se expresan en el primer Manifiesto de la Redemoinho hecho público:

Creemos que la cultura es una construcción colectiva que se proyecta en la historia, ansiamos entender el arte y, en particular, el teatro como un bien simbólico localizado en tiempo y espacio. Entendemos nuestras creaciones como un pensamiento en construcción cuyo objetivo es la creación de una sociedad humanista.

La cultura vacía de pensamiento, estructurada por la visión política que se fundamenta en el *marketing* es lo que alimenta en la sociedad la competencia, la concentración de la renta, el preconcepción, la privación de los derechos elementales del ciudadano y el mantenimiento del *statu quo*.

Al arte no le corresponde dar el pan, ni forjar seudo inclusiones sociales mediante políticas públicas que creen propiciar la inclusión y detener la insatisfacción social. Al arte le corresponde indicar más allá de los límites impuestos por la dura realidad en un intento por buscar nuevas vías para la política y para el hombre.

Bajo esa perspectiva, la cultura es una cuestión prioritaria del Estado por fundamentar el ejercicio crítico de la ciudadanía para construir una sociedad democrática. Hace años, diversos grupos y compañías de teatro vienen desarrollando trabajos con el objetivo de tejer nuevas relaciones sociales y humanas entre el arte y la sociedad.

Al dotar a nuestra práctica artística de una función social, no reivindicamos privilegios o prebendas. Reafirmamos la necesidad de crear condiciones sociales, políticas y económicas para construir un país que alimente la utopía de una sociedad en la que el arte y la cultura sean comprendidos como reafirmación de la vida.

Más que un análisis teórico, el citado documento deja en claro la visión crítica de una acción política que, incluso siendo el gobierno de un partido comprometido con la clase excluida de los beneficios del desarrollo capitalista, elimina de sus políticas en la esfera cultural acciones estructurales que acaben con la injusta distribución del bien simbólico. Consciente o inconsciente, su débil actuación en lo que respecta a enfrentar el problema de la distribución de la renta y del bien simbólico, contribuye a mantener las injusticias sociales que hacen que Brasil tenga uno

de los peores índices de desarrollo humano en el concierto de las naciones emergentes y de América Latina. Si la cultura no es asumida como una prioridad del Estado y si no forma parte de la agenda política del ejecutivo, que se mantiene apegado a la visión economicista de la realidad y subestima la política como instrumento para encontrar soluciones a los problemas seculares del país, difícilmente se hallarán soluciones que satisfagan las necesidades y ansias de su población o, como afirma el profesor Celso Furtado:

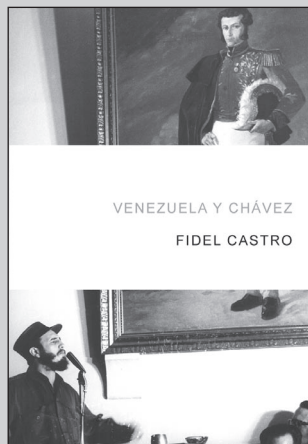
Solo la creatividad política estimulada por la voluntad colectiva podrá lograr que se supere ese impás. Pero, esa voluntad colectiva solo podrá surgir si se produce un reencuentro de los líderes políticos con los valores permanentes de nuestra cultura, cuyas raíces están en nuestra población.

Se trata del reencuentro con los líderes políticos, tanto los que actúan en los organismos públicos como aquellos que actúan en los diferentes movimientos políticos de la sociedad, en la búsqueda de políticas públicas que, teniendo al hombre en el centro de sus preocupaciones, promuevan la distribución justa de la riqueza material y del bien simbólico.

*Texto traducido del portugués por Caridad García.*

REINALDO MAIA, graduado en Filosofía por la Universidad de São Paulo, es director, dramaturgo, fundador del Grupo Folias d'Arte/SP, editor responsable del *Caderno do Folias*, y fundador del diario de teatro *O Sarrafo*. Fue jurado del Premio Casa de las Américas de 2005.

# COLECCIÓN FIDEL CASTRO



## VENEZUELA Y CHÁVEZ

Este libro compila, en un solo volumen, las palabras pronunciadas por Fidel en diversas ocasiones, en discursos, cartas y actos públicos, entre 1959 y 2006, dedicados al pueblo venezolano, en los cuales resaltan los lazos históricos y de solidaridad que existen entre ambas naciones desde su misma formación. Es precisamente a la unidad, soñada por Bolívar y Martí, a la cual se refiere este libro, en las reflexiones, advertencias y premoniciones de Fidel.

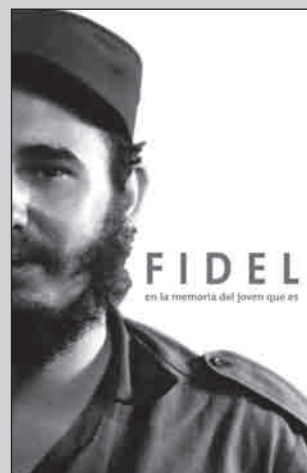
336 páginas, ISBN 978-1-921235-04-7

## FIDEL EN LA MEMORIA DEL JOVEN QUE ES

“Dicen que con los años los hombres se vuelven más conservadores, y es en parte cierto. Como la regla, el joven es desinteresado, altruista, arrojado; pero todo depende de las ideas. Nosotros hemos tenido el vigor de las ideas que hemos defendido...”—Fidel Castro

Este libro recoge, por primera vez en un solo volumen, los excepcionales testimonios que en contadas ocasiones el propio Fidel ha dado sobre su niñez y juventud. Incluye entrevistas sobre momentos claves de su infancia, su vida universitaria y sus primeros contactos con la realidad latinoamericana, así como fotografías poco conocidas.

183 páginas, ISBN 978-1-920888-19-0



## FIDEL Y LA RELIGIÓN

### Conversaciones con Frei Betto sobre el marxismo y la teología de la liberación

En un íntimo diálogo de 23 horas con el teólogo de la liberación brasileño Frei Betto, Fidel Castro ofrece revelaciones sobre su formación personal y discute con sinceridad su visión sobre la religión.

“Hay 10,000 veces más coincidencias entre el cristianismo y el comunismo que entre el cristianismo y el capitalismo”.

—Fidel Castro.

330 páginas, ISBN 978-1-920888-77-0





# vidas rebeldes

**vidas rebeldes**, una nueva serie de libros accesibles y provocativos que redescubren historias sobre la rebeldía de algunas figuras familiares y dan a conocer a algunos rebeldes menos conocidos.

**vidas rebeldes**, selecciones de ensayos escritos por y sobre mujeres y hombres cuyo radicalismo había estado oculto u olvidado. Serie editada y presentada por activistas e investigadores de todo el mundo.

**vidas rebeldes** no pretende canonizar a sus protagonistas como modelos políticos perfectos, visionarios o mártires, sino darlos a conocer en sus diversas aristas a las nuevas generaciones.

## rosa luxemburgo

La obra de Rosa, su pensamiento marxista, su ética revolucionaria y ejemplo de vida, continúan vigentes.

132 páginas, ISBN 978-1-920888-60-2



## antonio gramsci

Revolucionario italiano. Sus aportes al pensamiento marxista adquieren renovada vigencia en la lucha contemporánea contra la dominación neoliberal.

132 páginas, ISBN 978-1-920888-59-6

## louise michel

Feminista, anarquista y revolucionaria encarcelada y exiliada por dirigir el levantamiento popular de 1871 en París.

144 páginas, ISBN 978-1-921235-03-0



## sacco y vanzetti

Immigrantes italianos anarquistas, acusados injustamente de un asesinato durante el "Pánico Rojo". Fueron ejecutados en Massachussets, Estados Unidos, en 1927.

144 páginas, ISBN 978-1-921235-06-1

# enlaces

## VI Encuentro Hemisférico en La Habana. Retos y debates en la nueva etapa del movimiento social continental

HÉCTOR DE LA CUEVA

Del 3 al 5 de mayo tuvo lugar el VI Encuentro Hemisférico de movimientos sociales del continente que todos los años se vienen reuniendo en La Habana desde 2002, para concertar la lucha contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). El lema del VI Encuentro fue el de «Lucha contra los TLC y por la Integración de los Pueblos», lo que ya de por sí daba cuenta de los cambios operados en la región y, en consecuencia, en los ejes de acción del movimiento social.

En efecto, del primer Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA a la fecha se han producido modificaciones sustanciales en los escenarios regionales, y la agenda de los movimientos ha evolucionado y hoy encara nuevos retos y debates. Contribuir a su análisis desde una perspectiva de izquierda es, entonces, la intención de este artículo, antes que dar cuenta de los detalles del encuentro mismo.

### **El contexto hemisférico: un continente polarizado**

De acuerdo con la estrategia norteamericana, el primero de enero de 2005 el continente debió haber amanecido atado al Área de Libre Comercio de las Américas. Esa era la fecha fatal para que entrara en vigor una nueva era de subordinación colonial de los países latinoamericanos y del Caribe, bajo las divisas del «libre comercio» y la globalización neoliberal. Era, además, un plan muy ambicioso e ideal, pues simplificaba las cosas para el imperio: le ahorraba la diversificación de formas y vías de reafirmación de su hegemonía; y le daba un solo marco hemisférico, visible y con nombre. ¿Qué más se podía pedir? Pero eso no sucedió, entre otros

factores, porque un amplio movimiento a escala continental –que va más allá de las tradicionales fuerzas antimperialistas– le cerró el paso y lo derrotó, en una estrategia construida, precisamente, en encuentros como los de La Habana.

El fracaso del ALCA –reiterado en Mar del Plata, donde se le quiso inútilmente revivir– llevó a los Estados Unidos a adoptar la estrategia de promover los Tratados de Libre Comercio (TLC) bilaterales o regionales, particularmente en Centroamérica y la región andina, y planes y macroproyectos como el de Puebla-Panamá, para avanzar, en la práctica, en el armado del rompecabezas de su hegemonía. Más aún, los Estados Unidos están lanzando una nueva «generación» de acuerdos que incluyen ya la dimensión de la «seguridad compartida», es decir, la integración subordinada también a las políticas de seguridad de Washington bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo. Así como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue el primer paso de la estrategia hemisférica norteamericana de «libre comercio», ahora la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) no solo pretende terminar de integrar México a los Estados Unidos –con el consiguiente ahorro de los problemas que implicaría una anexión formal–, incluyendo la subordinación en materia de seguridad, sino, además, servir de modelo y de base para sus planes continentales.

Para todo ello, el imperio cuenta con la complicidad –interesada, convencida o simplemente servil– de los gobiernos de la derecha neoliberal que aún permanecen en el poder desde Perú y Colombia, en Sudamérica, hasta Canadá y México –que «se quedó en la raya»–, pasando por Centroamérica, con la excepción reciente de Nicaragua.

Esta estrategia perversa desarrollada por los Estados Unidos llamó especialmente la atención del comandante Fidel Castro, a quien no le fue posible estar presente esta vez en el encuentro, dado que aún está en recuperación, pero que, evidentemente, siguió sus trabajos, puesto que unos días después dedicó uno de sus populares artículos, con los que continúa participando en la batalla de ideas en el mundo, a los temas abordados en las mesas del encuentro de La Habana.

Pero así como existen estos escenarios preocupantes destacados por el Comandante, desde el Sur vienen abriéndose paso otros que están cambiando la faz del continente. En efecto, además de la derrota del ALCA, en los últimos años y sobre la ola de los movimientos sociales en resistencia al neoliberalismo, por la vía de fuerzas políticas que los reflejaban en mayor o menor medida, más fiel o distorsionadamente, han ido arribando gobiernos «alejados de la hegemonía norteamericana» –como los definía en una fórmula un tanto vaga pero de consenso la Alianza Social Continental– o claramente enfrentados a aquella. Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, Ecuador y Nicaragua –Chile es un caso aparte– son los países en los que la derecha tradicional aliada a los Estados Unidos ha sido derrotada. Con enormes diferencias o matices entre ellos en su grado de consecuencia en la reversión

de la oscura noche del neoliberalismo, en la recuperación de la soberanía y los recursos nacionales, en la construcción de la participación democrática de sus pueblos, en la edificación de nuevos paradigmas, en el distanciamiento de la dominación de las grandes potencias y del capital, representan hoy la barrera contra la cual se ha topado la estrategia del imperio, la otra cara de la moneda en el continente.

Más aún, estos países han ido construyendo una visión de integración opuesta a la del ALCA y los TLC propugnada por los Estados Unidos, e impulsando la construcción de bloques de países del Sur en desarrollo o consolidando los que ya existían desde la etapa anterior, como el MERCOSUR. Pero, sobre todo, algunos de ellos han ido más lejos y han lanzado iniciativas como la de la Alternativa Bolivariana para la América (ALBA) disparada desde Venezuela o los Tratados de Comercio de los Pueblos (TCP) propuestos por Bolivia. El ALBA se ha ido convirtiendo ya en una realidad e involucra la dimensión de la integración y cooperación en energía, comunicaciones, infraestructura, servicios financieros, salud y educación. Además, esta integración alternativa ha incorporado un elemento determinante: la participación de Cuba, que le da un sentido y una orientación definidos, una clara perspectiva hacia la izquierda y hacia la transformación social, una mayor solidez en su visión ant imperialista.

Tenemos así un continente polarizado entre el bloque de países con gobiernos abiertamente neoliberales alineados con los Estados Unidos y otro bloque de países con gobiernos que en una medida u otra se alejan de su control y representan un reto a su hegemonía. Se trata de dos realidades no solo presentes en el continente, sino en abierta confrontación. Los Estados Unidos están desarrollando claramente la estrategia de utilizar a sus gobiernos aliados para promover la integración subordinada que haga contrapeso a los procesos alternativos del Sur –como sucede con México y Centroamérica–, y a las fuerzas políticas de derecha que los sustentan para desatar una campaña militante contra ellos, principalmente contra Venezuela y Bolivia, y desde luego contra Cuba. El gobierno de Bush, sin embargo, se encuentra débil internamente, con un Congreso que no le ha aprobado el *fast track*, con problemas en Costa Rica para la ratificación del TLC y con la frustración de sus planes originales en la región andina por la oposición de Bolivia y Ecuador. Los países del ALBA, en cambio, irradian su influencia con iniciativas concretas en diversos ámbitos y van ganando terreno. Nicaragua representa el último avance: su gobierno, surgido de una parte de las fuerzas del antiguo sandinismo, posiblemente no se explicaría ni tendría el discurso ant imperialista que está mostrando si no existiese la dinámica hacia la izquierda en el Sur y, en específico, el eje del ALBA.

## La agenda de los actores sociales: entre la resistencia y las alternativas

Este es, a grandes rasgos y parcialmente si se quiere, el contexto polarizado dentro del cual se desarrolló el encuentro de La Habana y en el que actúan desde hace unos años los movimientos sociales y desarrollan sus estrategias y debates; relativamente nuevo, al menos en comparación con el escenario casi uniforme determinado por el neoliberalismo y los intereses norteamericanos que existía cuando se inició la lucha contra el ALCA.

Hay dos realidades que no se pueden ignorar a la hora de hacer una estrategia continental. No valorar suficientemente los avances alcanzados en el Sur, no actuar con decisión sobre ellos, sería un grave error e iría en detrimento de la lucha de resistencia en el Norte; actuar solo en función de lo nuevo, de la incidencia en los escenarios favorables, socavaría la indispensable batalla que aún debe librarse en los países todavía sometidos y, a la larga, iría en contra de la expansión y el fortalecimiento de los procesos avanzados de ruptura.

El movimiento encara, entonces, la necesidad de una estrategia dual; una dirigida hacia un escenario marcado fundamentalmente por la resistencia, y otra, hacia un escenario que exige la participación en la construcción de alternativas cada vez más concretas de desarrollo e integración. De ahí que el VI Encuentro Hemisférico, además del lema con el que fue convocado, dedicara sus diversos paneles y mesas a analizar y visibilizar ambas dimensiones, lo cual se refleja en su Declaración Final.

En el escenario de resistencia destaca la lucha contra el ASPAN, la lucha protagonizada por los movimientos sociales y el pueblo de Costa Rica en contra de la aprobación del TLC, y en general la resistencia en toda Mesoamérica a las vías de integración subordinada, instrumentalizadas además para atacar los procesos alternativos del Sur, que significan el Plan Puebla-Panamá y el CAFTA (más recientemente ha salido a la luz, en la cumbre de Belice, la iniciativa de crear un solo TLC que incluya a México y Centroamérica). Además, viene adquiriendo relevancia en el continente también la resistencia a los acuerdos de libre comercio propuestos por la Unión Europea a América Latina y el Caribe –se habla incluso de un posible «ALCA europeo»–, por medio de las negociaciones excluyentes, secretas e ilegítimas que mantiene con la región Andina, el MERCOSUR y América Central. A despecho de las expectativas iniciales que pudieran haber existido, los acuerdos que promueve la Unión Europea no son diferentes a los TLC firmados con los Estados Unidos, y sus transnacionales hace rato que participan de la rapiña; América Latina es, también, una arena de disputa de las grandes potencias.

No obstante, lo que tiene más ocupadas en sus discusiones a las redes sociales hemisféricas es el asunto de la construcción de modelos alternativos de desarrollo, de intercambio entre las naciones y de integración. La necesidad no solo de resistir

al ALCA y el «libre comercio», sino de proponer alternativas concretas al mismo, estuvo presente desde el inicio de la lucha. La Alianza Social Continental (ASC) –principal convergencia de movimientos en la lucha contra el ALCA, de la que hablaremos después– tuvo desde el principio como una de sus prioridades la elaboración social y colectiva de lo que se conoció como Alternativa para la América, pues se comprendía que mostrar la posibilidad de un camino distinto y viable al ALCA, y la capacidad del movimiento social para hacerlo, era clave para ganar. De hecho, es sabido y reconocido que el origen del ALBA se encuentra precisamente ahí.

Los avances y transformaciones políticos alcanzados principalmente en América del Sur han colocado esta discusión sobre alternativas en otra dimensión. Aunque todavía en muchos países se trata de un horizonte y está de alguna manera circunscrita a la propaganda, en muchos otros y de manera creciente, en particular en los países miembros del ALBA, ya no se trata de buenas propuestas para un futuro indeterminado, sino de incidir con proposiciones concretas para ser encaminadas hoy bajo la oportunidad abierta por la existencia de gobiernos más o menos susceptibles de asumirlas. Incluso, en el marco del ALBA avanza ya una iniciativa de los gobiernos miembros de crear un Consejo de Movimientos Sociales que acompañe y aporte al proceso.

Los temas implicados en este proceso son demasiados y complejos para pretender abordarlos en este artículo. En materia de energía –donde además está colocado ahora el debate sobre el uso de agrocombustibles–, deuda e instituciones financieras, infraestructura, comunicaciones, servicios públicos, agricultura y reforma agraria, recursos naturales, desarrollo industrial, modelos de integración, participación social, etcétera, existen afinidades con iniciativas gubernamentales, que son abiertamente apoyadas, pero también críticas y propuestas distintas o que van más allá, desde la óptica de los derechos laborales, de género, ambientales o sociales en general, e incluso desde el debate del modelo económico mismo de desarrollo e integración. La lectura de la Declaración Final del Encuentro puede ilustrar la aproximación de los movimientos sociales a algunos de estos temas.

Igualmente, entrar a la reflexión sobre el alcance o limitaciones de las alternativas que están surgiendo tanto de los gobiernos del ALBA como de los movimientos sociales, excede las posibilidades de este artículo. Desde un inicio, estaba claro que las alternativas surgidas desde las fuerzas que luchaban contra el ALCA se ubicaban, hasta cierto punto, dentro de lo «posible» en el mundo de hoy, es decir, estaban destinadas a enfrentar el neoliberalismo y el «libre comercio» y proponer un modelo alternativo, pero sin pretender ir a fondo en el planteamiento de una sociedad radicalmente distinta, o tener una perspectiva socialista o anticapitalista. Desde este enfoque, y aun cuando sobre diversos aspectos desde los movimientos sociales se pretenda ir más lejos o más rápido, las alternativas no difieren cualitativamente en su alcance de las iniciativas que desde los gobiernos progresistas o de izquierda se están tomando, en los casos avanzados, bajo el marco



todavía del rescate de la soberanía, de la reapropiación de los bienes nacionales y de la contestación al neoliberalismo, aun cuando en Venezuela el presidente Chávez hable ya de la construcción del «socialismo del siglo XXI».

Quienes quieren ver en esto una coincidencia o una presencia determinante del programa socialdemócrata, o simplemente el renacimiento del nacionalismo o el tercermundismo en América Latina, hacen una interpretación equivocada o superficial; no distinguen entre los planteamientos tácticos y las plataformas reivindicativas inmediatas de los movimientos, así como los límites de los que deben partir los gobiernos que pretenden romper con la dominación imperialista, y las estrategias y los programas de largo plazo de las fuerzas que actúan más determinantemente en ellos. Aunque, sin duda, el pensamiento socialdemócrata o el nacionalismo pueden estar presentes en algunos actores relevantes, tanto el origen ideológico y la composición política, como la dinámica y la lógica con las que vienen actuando los principales movimientos sociales del continente y, al menos, los gobiernos de Bolivia y Venezuela, además de la sobredeterminante presencia de Cuba en este proceso, apuntan en otro sentido. No debemos olvidar tampoco que el punto del cual se parte en este período –después del enorme retroceso histórico, ideológico y social que ha significado el neoliberalismo y la nueva forma de dominación imperial llamada globalización– estaba muy atrás, en un nivel en el que hasta las reivindicaciones humanas más elementales pueden considerarse subversivas, y las reivindicaciones nacionales ser inaceptables para el imperio y hasta provocar su intervención violenta –superado el «síndrome de Vietnam» después del 11 de septiembre–; no es lo mismo, sin subestimar las hazañas nacionalistas de ese tiempo, expropiar o nacionalizar en los años treinta, cuando la lógica del capitalismo permitía y hasta necesitaba la construcción del «estado benefactor», a hacerlo ahora, en plena época de la globalización neoliberal. Pero todo eso sería materia de otro espacio de análisis, como ya dijimos.

### Otros retos y debates de la nueva etapa

Previamente y en el desarrollo del encuentro se realizaron reuniones del Consejo Hemisférico de la Alianza Social Continental en las que participaron también otras organizaciones impulsoras de la Campaña Continental contra el ALCA. Antes de entrar en sus discusiones y resoluciones, debemos decir que se trata del mayor esfuerzo de convergencia social que se haya dado en el continente –presente en la mayoría de los países, con una enorme diversidad de orígenes sociales, culturales y políticos– y que aún no tiene parangón en otros. Para ilustrar el tipo de actores sociales y redes continentales involucrados en este esfuerzo, y por tanto en el encuentro, podemos mencionar algunos de sus principales componentes: la Organización Regional Interamericana del Trabajo (ORIT) y varias otras centrales sindicales no afiliadas a aquella, algunas de ellas integrantes de la Federación Sindical Mundial;

Vía Campesina y Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), destacadamente el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST); Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) y otros movimientos indígenas; Red de Mujeres Transformando la Economía y Red de Género y Comercio; Organización Latinoamericana de Estudiantes (OCLAE); Jubileo Sur; Grito de los Excluidos; Plataforma Interamericana de Organismos de Derechos Humanos; Campaña por la Desmilitarización; además de redes multisectoriales en la mayoría de los países del continente, desde Canadá hasta Argentina. Analizar más en detalle a los actores sociales y las redes y procesos de organización que se han venido dando, más aún a la luz de las reflexiones que hacíamos anteriormente, sería también motivo de otro espacio.

Por ahora podemos decir que, además de lo reflejado en las mesas del encuentro, en esas reuniones de la ASC se vienen dando desde hace algún tiempo otras discusiones estratégicas relevantes para el futuro del movimiento. Entre ellas, vinculado a la discusión sobre las alternativas, se ha debatido la relación entre los movimientos sociales y los nuevos gobiernos «amigos», «progresistas», «de izquierda», «antimperialistas», según como cada quien los quiere calificar.

Pareciera un asunto sencillo, pero no lo es en la práctica. La historia reciente de esta relación está llena de intercambios positivos, pero también de incidentes espinosos. Desde los gobiernos se quisiera movimientos de apoyo más decididos, más oportunos, más efectivos; desde los movimientos se reacciona contra intentos de subordinación, de instrumentalización o de tentaciones corporativas. Dejando de lado los problemas naturales que se presentan en particular a nivel nacional –porque una cosa es tener una visión geopolítica y otra encarar los procesos en cada país– y la heterogeneidad del movimiento continental, de manera general el movimiento se esfuerza por encontrar el equilibrio entre la necesidad de involucrarse y ser parte activa de los procesos de cambio impulsados desde algunos gobiernos y la necesidad de mantener su autonomía y su libertad de crítica y acción, porque, desde luego, ni los gobiernos pueden actuar con la lógica de los movimientos sociales, a la velocidad y a la manera en que éstos quisieran, por más que se identifiquen con ellos, ni los movimientos pueden subordinarse a las limitaciones, muchas veces comprensibles por lo demás, económicas, políticas, diplomáticas, etcétera, de los estados, a riesgo de paralizarse o extinguirse, y los procesos de transformación, si son reales y a fondo, requieren de movimientos vivos.

En conclusión, los movimientos continentales han tomado un curso de involucramiento activo y de apoyo a iniciativas afines como la del ALBA, sin dejar de mantener su autonomía en la organización, las propuestas y la acción. La Declaración Final de La Habana da cuenta claramente de ello cuando saluda la decisión de conformar el Consejo de Movimientos Sociales del ALBA, al mismo tiempo que mantiene el marco de la Alianza Social Continental y la generación de alternativas desde los movimientos a escala continental.

Por otra parte, el triunfo alcanzado contra el ALCA vigorizó al movimiento, pero también lo despojó, irónicamente, de un eje claro de acción común, le diversificó los frentes, además del cúmulo interminable de calamidades producidas por el neoliberalismo que hay que combatir.

Una discusión aún en curso es la de buscar un eje aglutinador que pueda traducirse en una nueva campaña de acción continental, porque tampoco se trata de inventarla. Mientras tanto, en los hechos, se ha ido ampliando y enriqueciendo la agenda y los ejes de acción de la convergencia social continental. Primero se extendió a los distintos escenarios del «libre comercio», es decir, además del ALCA, la lucha contra los TLC, incluyendo aquellos con la Unión Europea, y la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero también ha incorporado la lucha contra la militarización y la criminalización del movimiento social, la campaña contra la deuda y más recientemente temas fundamentales como el de la migración y la actuación de las transnacionales.

En función de todo esto, una conclusión importante a la que se arribó en La Habana es la de asumir el carácter permanente de la Alianza Social Continental con una agenda tan amplia como sea posible consensuar entre los movimientos sociales, es decir, ya no solo en torno a un eje específico como fue la lucha contra el ALCA en su origen. Ello significa también abrir todo un período de «reapertura» e inclusión a la ASC, y de reorganización tanto de la ASC como de sus capítulos nacionales, comenzando por aquellas organizaciones que participaron en la campaña contra el ALCA.

Igualmente, en tanto actor continental definido, un acuerdo importante es participar, en forma activa, en la Jornada Global que, convocada por el Foro Social Mundial, se desarrollará en enero de 2008, ligado a un complejo y saturado plan de acción que se estará llevando a cabo en las distintas regiones del continente de acuerdo con la agenda de los movimientos sociales.

De esta manera, colmado de ideas, iniciativas, acciones, retos y debates, el movimiento social continental ha dejado atrás definiciones pendientes y ha entrado de lleno en una nueva etapa después de su encuentro en La Habana.

**HÉCTOR DE LA CUEVA** es coordinador general del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical en México, integrante del Consejo Educativo de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio y miembro del Grupo Coordinador Continental, en representación de las redes de América del Norte, de la Alianza Social Continental, de la que fue su primer Secretario Ejecutivo.

## Las voces de los inmigrantes deben ser escuchadas

DAVID BACON

El 1ro. de mayo, más de un millón de personas llenó las calles de Los Ángeles y cientos de miles más las de Chicago, Nueva York y ciudades y pueblos de los Estados Unidos. Los inmigrantes se sienten con la espalda contra la pared y salieron de sus casas y lugares de trabajo para demostrarlo.

En parte sus protestas respondieron a la Resolución 4437 de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos (HR 4437) –el proyecto de ley Sensenbrenner– que propone eliminar todo espacio social que permita a los inmigrantes indocumentados trabajar, sobrevivir y mantener a su familia.

Sin embargo, las protestas no solo constituyeron una reacción ante una agenda congresional en particular, sino también una respuesta acumulativa a años de ataques y denigración de los inmigrantes en general y de los mexicanos y latinoamericanos en particular. Las protestas parecen espontáneas, pero se producen como resultado de años de organización, educación y campaña, actividades que han dado a los inmigrantes confianza y al menos a algunas organizaciones la credibilidad necesaria para movilizar la acción directa de masas.

Este movimiento es el legado de Bert Corona, pionero de los derechos de los inmigrantes y fundador de muchas organizaciones nacionales latinas. Corona formó a miles de activistas inmigrantes, enseñó el valor de la independencia política y creyó que los propios inmigrantes debían conducir la lucha por sus derechos. La mayoría de los actuales dirigentes de nuestro movimiento fueron aprendices o discípulos de él.

Estos factores aunados han dado origen a una enorme respuesta popular, una lucha de resistencia como nunca antes habíamos visto.

Es de lamentar, sin embargo, que estas protestas hayan sido utilizadas en Washington D.C. para justificar componendas que traicionan los intereses de los inmigrantes y del pueblo trabajador en general. Algunos de los legisladores más liberales de Washington, y el círculo de cabilderos que los rodean, incluso se acreditan las marchas, o al menos las utilizan para justificar los acuerdos que proponen,

pero la gente ha salido a las calles no en apoyo de estas propuestas, sino movida por el temor al daño que ellas harán.

Todas las diversas componendas que se ofrecen en el Senado contienen medidas represivas del tipo Sensenbrenner. Algunas darían origen a un sistema codificado de castas, una suerte de apartheid bantú que es antiamericano y dividiría a nuestras familias. La respuesta del Partido Demócrata al proyecto de ley Sensenbrenner fue la propuesta de inmigración McCain-Kennedy, que contiene enormes programas de trabajadores inmigrantes temporales y un aumento de las re-dadas en los centros de trabajo para castigar a los indocumentados por el delito de trabajar.

El enorme número de inmigrantes, y aquellos que los apoyan en las calles, consideran por completo inaceptables estos arreglos. Solo obtendremos aquello por lo que estamos dispuestos a luchar, pero estamos dispuestos a luchar por la enchilada completa. No es lo máximo que podemos obtener y no tenemos nada que perder.

Nuestro mayor problema es que el Partido Demócrata, en su premura por llegar a un acuerdo, no está dispuesto a luchar y a adoptar una postura en contra de la repugnante idea del surgimiento de una categoría de personas de segunda clase. Las organizaciones nacionales de apoyo que dicen representar a los inmigrantes muestran indicios de que aceptarán también estos acuerdos. Al propio tiempo, los legisladores y cabilderos de Washington temen la ampliación de un nuevo movimiento en pro de los derechos civiles en las calles, porque este rechaza sus componendas y hace exigencias que van más allá de lo que ellos han definido como «políticamente posible».

La gente está dispuesta a luchar por más y hace demandas de largo alcance. El debate de la inmigración debe ser resuelto por los propios inmigrantes y su voz debe ser la primordial... y no aquella de quienes tienen buenas conexiones políticas.

Gran parte de la dirección de la jerarquía liberal de Washington ha aceptado ya las deficientes componendas del Senado, sin verdadera consulta con los trabajadores inmigrantes. Los comprometen sus vínculos con los partidos políticos y las grandes corporaciones, que poseen voces más poderosas que los inmigrantes. En las marchas y manifestaciones, millones de personas, que desean voz en las decisiones que afectarán sus vidas, han rechazado este enfoque elitista.

Esos vínculos nunca se han debatido honradamente con las comunidades inmigrantes. Antes de las últimas marchas, fueron estos vínculos los que llevaron a las organizaciones a decirnos que no dejáramos el trabajo, no abandonáramos la escuela o no compráramos nada durante un solo día. Pero es evidente que el debate nacional ha cambiado solo por nuestra disposición de hacer precisamente cosas así.

Las acciones del 1ro. de mayo pusieron de relieve la enorme importancia económica de la fuerza de trabajo inmigrante. Los trabajadores indocumentados merecen

alcanzar condición jurídica a causa de ese trabajo, de su contribución inherente a la sociedad. El valor que crean nunca se considera ilegal y a nadie se le ocurre quitárselo a los empleadores que obtienen ganancias de él, pero las personas que producen este valor sí reciben este nombre: ilegales. Todos los trabajadores crean valor con su trabajo, pero los inmigrantes son especialmente rentables porque con mayor frecuencia se les niega muchas de las prestaciones que los sindicatos han ganado para los nacidos en el país.

El trabajador indocumentado promedio ha estado cinco años en los Estados Unidos. En ese tiempo, ha pagado un precio elevado por carecer de condición jurídica, lo que le hace percibir ingresos bajos y perder las prestaciones. Las componendas que pretende el Senado le harían pagar incluso más: multas por legalización, como si fuera un delincuente. Estos acuerdos luego harían que esperara más de una década para obtener condición jurídica real, sin tomar en cuenta siquiera a los millones que no cumplirían los requisitos y por ende serían deportados.

Los trabajadores indocumentados merecen que se les reconozca de inmediato su condición jurídica y ya han pagado por ello. El 1ro. de mayo, demostraron su poder en el debate nacional de inmigración. Su ausencia de los centros de trabajo, escuelas y comercios envió un mensaje poderoso que hizo saber que no se les eliminará de este debate y que las organizaciones nacionales financiadas por las corporaciones no hablan en su nombre. Son ellos quienes están rescatando del anonimato la lucha por la jornada de ocho horas que los inmigrantes de antaño iniciaron en Chicago hace más de un siglo. Con ello, recuperan las tradiciones de todo el pueblo trabajador.

*Texto traducido del inglés por María Teresa Ortega.*

DAVID BACON es escritor y fotógrafo, con experiencia como organizador de trabajadores inmigrantes; en la actualidad se dedica a documentar las cambiantes condiciones en la fuerza de trabajo, el impacto de la economía global, la guerra, la migración y la lucha por los derechos humanos. Pertenece a The Newspaper Guild/CWA y presidió la Junta de Directores de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes del Norte de California. Sus libros incluyen *The Children of NAFTA* (University of California Press, 2004) y *Communities Without Borders* (Cornell University Press, 2006).

## Reunión del Consejo Internacional del Foro Social Mundial

RODRIGO NOBILE

### Comentarios generales

La reunión del Consejo Internacional (CI) del Foro Social Mundial (FSM) realizada en Berlín el 30 y 31 de mayo de 2007, contó con la participación de las entidades habituales y de otras africanas y asiáticas. Como es costumbre, la participación de latinoamericanos y europeos fue relevante.

De modo general, se hace cada vez más evidente que el FSM está en un período de redefinición de rumbos. Se fortalecen las posiciones críticas dentro del CI y la Asamblea de los Movimientos Sociales (AMS), lo cual modifica la correlación de fuerzas a favor de los sectores de izquierda, principalmente de los movimientos.

La principal prueba de ello es la inclusión en la agenda del CI de la demanda de los movimientos de debatir el futuro estratégico del FSM. Otra modificación sustantiva fue la confirmación del «Día de Movilización y Acción Mundial», que se realizará el 26 de enero de 2008. Como se sabe, algunas entidades con gran influencia en el CI, siempre estuvieron en contra de este tipo de discusiones y movilizaciones, que pondrían en riesgo el mantenimiento de su control, pero cedieron con el objetivo de responder a las crecientes críticas de inmovilismo y a la falta de agenda política del FSM. Esto podría propiciar una nueva dinámica más favorable en los sectores de izquierda dentro del Foro, en la que el énfasis en la movilización, articulación y coordinación de las luchas sea mayor, además de plantear la discusión político-estratégica.

### El encuentro de Nairobi y el FSM

La reunión se inició con un breve informe del VII FSM en Nairobi, en el cual se presentaron algunos desafíos enfrentados por la organización, que se describen a continuación:



- *Mobilización y participación:* en respuesta a las críticas de poca movilización y participación de entidades africanas, se afirmó que hay muchos países de África que están pasando por coyunturas políticas diferentes. La línea política de los movimientos es muy variada; algunos países viven casos extremos de guerra, escasos recursos, etcétera.
- *Identificación de los actores:* directamente relacionado con la movilización. La crisis de la deuda, el neocolonialismo y el neoliberalismo fragmentaron a los movimientos con lo cual dificultaron la identificación de la línea política y, consecuentemente, el acercamiento.
- *Estrecha conexión de los movimientos con organizaciones de Europa, principalmente:* factor que imposibilita la autonomía de los movimientos africanos, y crea la relación de dependencia de los recursos y contrapartidas.
- Otras críticas relacionadas con el *financiamiento* fueron la morosidad en la liberación de los recursos, que según los organizadores ocurrió solo en la víspera, y una mayor participación de las empresas transnacionales.
- *Logística:* las dificultades en la prestación de servicios y los pocos locales apropiados para recibir la gran cantidad de participantes del FSM, provocaron problemas operacionales y de logística.

Como resultados positivos del FSM para las luchas africanas, un representante del Comité Organizador Africano afirmó que este y los Foros Sociales Africanos de Malí, Bamako y otros colocaron a África en la agenda mundial, además de permitir el intercambio de organizaciones de este continente con las de otros.

También se presentó una valoración alternativa que, sin minimizar las críticas, plantea la hipótesis de que estos problemas políticos-organizativos vividos en el FSM en Nairobi –mercantilización, militarización, falta de eficiencia organizativa, poca inclusión, penetración de sectores reaccionarios, ausencia de línea política, etcétera–, realmente pudieran ser planteados en todos los foros. Esta sería la más adecuada, pues así los problemas enfrentados por la organización del evento no se considerarían ocasionales, y serían tratados como una agudización de los dilemas y contradicciones inherentes al proceso.

En lo relativo a las valoraciones político-estratégicas del Foro por parte de los movimientos sociales, existe la percepción de que el FSM cumplió un papel didáctico-pedagógico en un inicio, posibilitó articulaciones y dio visibilidad a las acciones, pero paulatinamente se fue distanciando de las luchas sociales, en la medida en que crecen el tiempo y la energía gastados en la organización de los eventos, en detrimento de los esfuerzos realizados en la construcción del propio proceso. Esta dinámica es negativa, ya que pierde importancia el debate estratégico, perjudica la acumulación de fuerzas y desgasta a los movimientos que tienen una intensa agenda de luchas cotidianas, que va mucho más allá de los eventos de los Foros.

Otra cuestión planteada sería que, si para algunas regiones donde no está enraizado el Foro podría tener su carácter didáctico-pedagógico y articulador, para varias, principalmente para América Latina que experimenta la fase más radical y avanzada en la lucha contra el neoliberalismo, la metodología es insuficiente y exigiría un FSM diferente. Esto se justifica ya que el proceso FSM, formado por sus diversos foros locales, regionales y temáticos, no es homogéneo, pues presenta especificidades que varían de acuerdo con el contexto socio-político en el caso de los regionales y locales, o con las peculiaridades y dinámicas de los sectores y actores involucrados en el caso de los temáticos, por ejemplo.

Con el objetivo de que las realidades sean más cercanas y de estar a la altura de los desafíos concretos de las luchas populares, los representantes de movimientos propusieron darle mayor énfasis a los foros locales, regionales y temáticos, aumentar el período entre los centralizados, y expandir el FSM a regiones sobre las que tenga poca o ninguna incidencia, como África, Asia, los Estados Unidos, Europa del Este y Medio Oriente. En lo que se refiere específicamente a la expansión, este esfuerzo se debería seguir con atención, ya que una expansión sin línea política definida, podría tener altos costos políticos, como la incorporación de sectores reaccionarios, con lo cual se aumentaría aún más las contradicciones dentro del FSM. Para evitar esto, se necesita una mayor coordinación y un mayor liderazgo de los movimientos, en el proceso de identificación y movilización de los actores para la expansión.

De manera general, la percepción que tienen los movimientos es que algunas entidades con influencia en el CI no se dieron cuenta de las innovaciones políticas y de la radicalización de las luchas producidas dentro del proceso por el propio FSM, las cuales demandarían un nuevo modo de funcionar, que contemple toda la diversidad de foros e iniciativas, el desarrollo y maduración de las redes y alianzas que no existían en el primer Foro realizado en 2001, y sincronice el FSM con la época de las luchas mundiales. El Foro debería superar la fase de resistencia al neoliberalismo e imperialismo, para pasar a otra más determinante. En este sentido, algunos representantes de movimientos hicieron un llamado a las entidades del CI, que tendrían responsabilidades que honrar ante la evolución de las luchas mundiales.

A pesar de estas críticas, existe el consenso de que el FSM debería permanecer como espacio de diálogo y articulación de luchas y que debería fortalecerse, pues tiene un gran potencial pedagógico-didáctico, principalmente para la militancia de base y para otras regiones sobre las cuales incide poco.

### **FSM 2008: «Día de Movilización y Acción Mundial»**

En líneas generales, el formato del FSM para 2008 consiste en una semana de actividades que culminará con el «Día de Movilización y Acción Mundial», el 26 de enero, cuando se realizarán las manifestaciones en las calles. Respetándose la carta

de principios, la participación es abierta: la podrán organizar aquellos que estén dispuestos a realizar las actividades y movilizaciones en los lugares con los formatos más diversos. De esta manera, se pretende que la participación sea amplia, sin depender de los largos y costosos desplazamientos de los eventos centralizados, que muchas veces impiden la participación de la militancia de base.

Este debate se caracterizó por los retos impuestos, por lo inédito del formato del evento dentro del CI y por el protagonismo de los movimientos sociales y campañas, diseñadores de la propuesta, que desarrollan estas acciones frecuentemente y presentan gran densidad social y poder movilizador. En resumen, los retos planteados fueron los siguientes:

- *Corto plazo para la movilización*, ya que se pretende transmitir la convergencia de las luchas para combatir el neoliberalismo, al igual que el sentimiento de pertenecer a un movimiento mundial, a los grupos que realizan las actividades, potencialización/visibilidad y articulación de iniciativas, además de llegar a sectores y regiones sobre las que el FSM tiene poca o ninguna incidencia.
- *No movilizar solo a través de Internet*, ya que esta herramienta tiene muchas limitaciones y no llega a la militancia de base.
- *Crear la agenda de los eventos y movilizaciones de 2007* para utilizarla como base con el objetivo de movilizar y divulgar. También tratar de vincular las actividades como proceso de construcción de 2008.
- *Enfatizar la movilización en los procesos nacionales*. Aunque muchas redes y campañas internacionales tengan cuño temático, se definió que la forma de movilización más eficiente sería la nacional, por el arraigo de los actores.
- *La cuestión de las fuentes de financiamiento*. La preocupación en este sentido fue expuesta ya que no estarán coordinando directamente el evento las personas y entidades que comparten la misma percepción del proceso, en lo que se refiere al financiamiento –no mercantilización, no utilización de fuentes ilícitas, etcétera– y además será en un formato diferente.
- *Atención especial a la proyección hacia el Oriente*: mundo árabe, Asia, Europa del Este y otras áreas de proyección que deberán definirse.

Teniendo en cuenta estos desafíos, el Grupo de Trabajo (GT) de movilización se encargará de coordinar la labor, con el apoyo del GT de comunicación, por lo que la primera acción fue lanzar la siguiente «Convocatoria para el Día de Movilización y Acción Mundial»:

**Llamamiento a un Día de Movilización y Acción Mundial - 26 de enero 2008**

Somos millones de mujeres y hombres, organizaciones, redes, movimientos y sindicatos de cada rincón del planeta, aldeas y regiones, zonas rurales y

centros urbanos, de todas las edades, pueblos, culturas y creencias, unidos y unidas por la firme convicción de que OTRO MUNDO ES POSIBLE.

Con toda nuestra pluralidad, diversidad y riqueza de alternativas y propuestas luchamos contra el neoliberalismo, la guerra, el colonialismo, el racismo y el patriarcado que generan violencia, explotación, exclusión, pobreza, hambre, desastre ambiental y negación de los derechos humanos.

Llevamos muchos años de resistencia y de construcción de procesos innovadores, de nuevas culturas de organización y acción, de lo local a lo mundial; en particular, desde el proceso y la Carta de Principios del Foro Social Mundial del cual emerge este llamamiento.

Conscientes de la necesidad de construir nuestra agenda propia y de aumentar el impacto de estas miles de expresiones y manifestaciones, nos comprometemos a reforzar la solidaridad y las convergencias entre nuestras luchas, campañas, construcciones de alternativas y alianzas.

Nos comprometemos a una Semana de Acción que culminará en un Día de Movilización y Acción Mundial el día 26 de enero del 2008.

Invitamos a que todas y todos, dentro de la diversidad que es nuestra fuerza, realicen creativamente en esta fecha acciones, actividades, eventos y convergencias sobre los temas y en las formas que les sean propios.

¡ACTUEMOS JUNTAS Y JUNTOS POR OTRO MUNDO!

## FSM 2009 y próximos Foros

En cuanto al FSM de 2009, los movimientos solicitaron que antes de las discusiones sobre el país anfitrión del próximo evento, se realizase el debate estratégico sobre el proceso, en el que serían discutidas, entre otras, cuestiones como: la definición de una agenda política más clara y cercana a las realidades de los movimientos; la periodicidad de realización más adecuada a las luchas; la democratización de la comunicación dentro del CI y con otras organizaciones no pertenecientes a él; la valoración de la actual metodología; el proceso de expansión continua del FSM, tanto geográficamente, como la atracción de redes que trabajen con temáticas ausentes. La Vía Campesina propuso que el evento descentralizado y el proceso de expansión del FSM continuasen en 2009 y se realizase otro FSM centralizado en 2010.

De esta forma, la decisión de la selección de la próxima sede estaría subordinada a una estrategia política, que se desarrollaría teniendo en cuenta las especificidades de los procesos regionales y la acumulación de fuerzas a nivel mundial. En este sentido, la perspectiva le da énfasis al proceso y no a los eventos; si no está asegurada, por lo menos se debatiría.

Otro aspecto planteado por los movimientos, fundamentalmente en lo referido a América Latina, es que la agenda de movilizaciones será muy intensa hasta 2009: además de prácticamente un encuentro continental cada dos meses y el «Día

de Movilización y Acción Mundial» en enero de 2008, se realizará el Foro Social Américas, para inicios de octubre de 2008, en Guatemala. Otras organizaciones que no tienen vínculos estrechos con movimientos, afirmaron que en dependencia de la originalidad del formato del FSM en 2008, que plantearía una serie de riesgos y retos, sería necesaria una nueva edición en el formato centralizado en 2009 para valorar y garantizar el encuentro.

A pesar de la demanda de los movimientos, se definió que en 2009 se realizará un nuevo FSM centralizado en Belém do Pará (Brasil), que abarcará los nueve países de la región amazónica. Como desafíos se planteó: garantizar que todo el Amazonas participe efectivamente y no solo una ciudad o país; que la temática no se restrinja a la cuestión ambiental, en la forma planteada por los grandes medios, sino que incluya toda la problemática involucrada como es la militarización, neocolonialismo, imperialismo, apropiación de recursos naturales/biopiratería, y que abarque problemáticas de otras regiones; crear la infraestructura adecuada y evitar grandes perjuicios ambientales. Como puntos favorables para la realización, la región presenta un tejido social desarrollado como el Grupo de Trabajo Amazónico (GTA); experiencia para organizar eventos (ya realizaron cuatro Foros Sociales Amazónicos); gobiernos favorables y temática candente.

La definición de que el FSM realmente tendrá lugar en 2009 y en América Latina, plantea algunos retos para los movimientos en la región. Además del desafío organizativo de prepararse para un gran gasto de energía y recursos, como consecuencia de la pesada agenda de 2008, está el reto político de concatenar los eventos de tal manera que propicien la acumulación de fuerzas, capaz de superar la mera sucesión de eventos.

La discusión más candente se produjo en torno a la sede post-FSM 2009. Se presentaron dos candidaturas. Las entidades africanas propusieron su retorno al continente, alegando que esto pudiera ayudar a consolidar el proceso del FSM y las articulaciones a nivel regional. Una entidad paquistaní afirmó que este debería volver a Asia para continuar el proceso de expansión. Por su parte, la posición de los movimientos fue la de reiterar que antes de discutir la sede, se debería realizar el debate político-estratégico acerca del futuro del FSM.

Las decisiones sobre la sede, formato y periodicidad, se dejaron para la reunión del CI que se realizará después del «Día de Movilización y Acción Mundial» que tendrá lugar en alguna ciudad no definida de África –decisión que tiene por objetivo fortalecer los movimientos africanos–, para la cual está programada la discusión estratégica. Resumiendo, pudiéramos señalar la victoria de los movimientos, pues lograron vincular la decisión de la sede post-2009 al debate político-estratégico del FSM.

## Grupo de Facilitación

Este es un tema que ha venido ganando importancia en las reuniones. Al reconocer la dificultad organizativa de un CI con más de cien integrantes, que seguramente se ampliará con la incorporación de representantes de otros continentes, decurrente del proceso de expansión, se propone crear un Grupo de Facilitación que desarrollaría las tareas de secretariado del FSM, compuesto por cerca de siete entidades que representarían diferentes sectores sociales y regiones. Con este objetivo se creó un grupo para elaborar un documento base de actuación, y con posterioridad, se propondrán los candidatos a esos puestos.

La cuestión estratégica de fondo es que ciertamente este grupo, en apariencia «neutro» y «operativo», acumulará poder político y pudiera utilizarlo de acuerdo con sus intereses. Algunas críticas, por parte de los movimientos, plantearon la hipótesis de que este Grupo de Facilitación en realidad sería una reedición del antiguo «secretariado», formado en su mayoría por entidades que no pertenecen a los movimientos sociales y que trabajaría en el sentido de conservar la dinámica como se encuentra actualmente, alejada de las demandas de los sectores más a la izquierda. Además, trataron de plantear algunas condicionantes importantes, como por ejemplo:

- no debería estar formado por agencias de cooperación internacional o por agencias que tengan un vínculo estrecho con las mismas, pues existiría el riesgo de injerencia;
- no debería estar formado por entidades que viven principalmente gracias al FSM, sino por entidades que trabajan fuertemente fuera de este contexto.

Las demandas de los movimientos, en este punto específico, son fundamentales para garantizar un foro más a la izquierda y libre de la injerencia de sectores no vinculados directamente con las luchas populares. La definición sobre el Grupo de Facilitación y sus funciones quedaron para la reunión del CI que se realizará en Belém do Pará, en octubre de 2007.

## Reunión de la Asamblea de los Movimientos Sociales

La reunión anterior se efectuó en Bruselas y, según el informe, tuvo el mérito de poder plantearles a los integrantes de la AMS una visión común de los problemas y la posibilidad de avanzar en el proceso de convergencia y articulación de las luchas. La última reunión, que se celebró en Rostock el día 1ro. de junio, tuvo como objetivo principal discutir una metodología de actuación que propicie el cúmulo de fuerzas y la elaboración de estrategias de luchas conjuntas, para así superar la

dinámica en la cual el proceso FSM se encerró. En ese sentido, surgieron algunas propuestas concretas de funcionamiento y estructura organizativa:

- *Reafirmación y profundización de la AMS.* Potenciar lo que ya existe y las campañas hasta 2008 (Foro Social de los Estados Unidos, Foro Social Africano, luchas contra los *Economic Partnership Agreements* (EPAS), Mundo Árabe, Europa), con el objetivo de consolidarse como espacio de intercambio; posibilitar que se compartan y profundicen los análisis; romper el aislamiento de las luchas al adoptar temas comunes; y lanzar campañas.
- *Formar una secretaría,* que haga un seguimiento del estado de las redes y de las movilizaciones, efectúe evaluaciones, sistematice los análisis y debates, y formalice la coordinación. Su primera tarea será coordinar las movilizaciones del 26 de enero de 2008.
- *Crear un sitio web con análisis,* ya que las listas electrónicas de discusión son poco funcionales.
- *Promoción de campañas,* que organizarían el trabajo y, principalmente, la movilización de los movimientos para el «Día de Movilización y Acción Mundial» de 2008. Esta sería una buena oportunidad para fortalecer la AMS, así como expandirla hacia otras regiones y actores.
- *Necesidad de definir tareas y objetivos claros* antes de crear el aparato burocrático.

En cuanto al balance de la reunión del CI, los movimientos reiteraron las críticas hechas a este y al FSM como: la necesidad de trascender la mera sucesión de eventos, para propiciar el cúmulo de fuerzas y la adopción de ciertas estrategias y banderas comunes; la expansión y diversificación en más foros locales, regionales y temáticos; el aumento del intervalo entre la realización de los eventos centralizados; la necesidad de adoptar ciertas banderas comunes; la expansión hacia otras áreas donde la incidencia del FSM sea pequeña o nula; la identificación y aproximación a los actores importantes que no están participando activamente en el FSM, tales como movimientos sociales en los Estados Unidos, agrupaciones en Palestina, entre otros. Además, la convergencia y fortalecimiento de la AMS, se tornó evidente.

En lo relativo a la participación de la AMS en el día de movilizaciones, se planteó la necesidad de mostrar unidad y poder de movilización; de darle visibilidad a las estrategias; hacer un intenso esfuerzo para lograr la participación de otras organizaciones y de comunicar las acciones para que individuos y grupos las conozcan con anterioridad y amplíen la movilización. Para ello, el trabajo de movilización fue dividido en campañas y por regiones.

También se plantearon problemas con respecto a la movilización en otros continentes. Fue identificada la dificultad para crear una coordinación asiática, ya que



los contextos nacionales y movimientos de la región son muy diferentes. En cuanto a África, la expectativa es que, a pesar del amplio llamamiento para la movilización, la participación será relativamente baja y la coordinación será problemática, pues algunos movimientos no se sienten vinculados al proceso FSM.

*Texto traducido del portugués por Rosa Díaz Chío y Honel Binelfa López.*

RODRIGO NOBILE, investigador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (LPP-UERJ), fue representante del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en la reunión del Consejo Internacional del Foro Social Mundial realizada en Berlín.

## Otros Estados Unidos son necesarios: ya vienen en marcha

MICHAEL LEÓN GUERRERO

Ni el calor intenso pudo desanimar a las diez mil personas que marcharon en Atlanta, Georgia, el 27 de junio. Los marchantes se percataron que estaban haciendo historia. Dijo Jerome Scott, de la organización Project South de Atlanta: «Esta es la marcha más internacional que hemos visto en esta ciudad». Encabezada por telas que declaraban «Otro mundo es posible, otros Estados Unidos son necesarios», la marcha empezó en el Capitolio Estatal, serpenteó, deliberadamente, por el centro de Atlanta, y pasó por sitios de luchas locales como el Hospital Grady, donde la Asociación de Empleados Federales, Estatales, del Condado y Municipales están luchando por prevenir la privatización de los servicios. Así empezó el Foro Social de los Estados Unidos (FSEU). Vinieron campesinos de Florida, gente sin techo de Georgia, trabajadoras domésticas de Nueva York, trabajadores de las escuelas de Texas. La tribu Muskogee, desplazada de su tierra natal del área de Atlanta, regresó a iniciar la ceremonia de apertura del foro.

En el FSEU participaron más de doce mil personas en representación de alrededor de mil organizaciones y colectivos. Según Tammy Bang Luu del Centro de Estrategias Laborales/Comunitarias en Los Ángeles, «Un principio fundamental para nosotros era asegurar la participación de las comunidades más marginadas del país. Esto significaba una inversión masiva de tiempo, paciencia y recursos en el proceso de reclutamiento». El FSEU tuvo una gran diversidad geográfica, racial, de edad, de género y de orientación sexual. Además de todos los estados de la unión y de varias naciones indígenas, hubo delegados de sesenta y ocho países.

Los jóvenes fueron integrados en las actividades del foro. Mónica Córdova del Proyecto Organizador del Suroeste (SWOP) en Albuquerque, Nuevo México, fue Coordinadora del Grupo de Trabajo de los Jóvenes en el FSEU: «No tuvimos un campamento distinto o separado del Foro. Tuvimos una carpa en un área central con una representación de jóvenes menores de 24 años en todas las plenarios y actividades organizadas por el Comité Planificador Nacional (CPN). No logramos esto en todos los casos, pero la representación de jóvenes en el CPN fue muy importante

para asegurar la integración de la voz y presencia de la juventud. Logramos y sobrepasamos nuestra meta de que el 20% de los participantes fueran jóvenes, y para la mayoría, esta fue su primera experiencia de asistir a un Foro».

Uno de los momentos más especiales fue la llegada de la Caravana por la Libertad del Pueblo. Organizada por grupos del suroeste y sureste de los Estados Unidos como la Unión de Trabajadores del Suroeste, Eco Sureño de Mississippi, y SWOP, la caravana pasó por siete ciudades y fue un símbolo de unidad de los pueblos.

«Esto será un encuentro diferente que se enfrentará a la división democrática que existe entre raza, clase, cultura y regiones», dijo Genaro López-Rendón, de la Unión de Trabajadores del Suroeste (SWU), «Queremos hacer un puente entre las luchas y la historia de los pueblos afro-americanos, los pueblos latinos, y los pueblos indígenas del sur de los EE.UU. La Caravana por la Libertad del Pueblo es un movimiento social sobre ruedas, que nos da la oportunidad de dibujar la estrategia con el fin de lograr “otros” EE.UU.».

La caravana empezó en Albuquerque, Nuevo México, y paró en ciudades que representan luchas históricas como San Antonio y Houston, Texas; Jackson, Mississippi; Selma, Alabama; y Nueva Orleans, Louisiana. En cada ciudad, se organizó una protesta. En Houston fue contra la gran cadena de tiendas Wal-Mart. En San Antonio fue el Álamo. En cada parada camiones se unían a la caravana. Más de ochocientas personas representando setenta organizaciones llegaron a Atlanta en el momento en que empezaba la marcha inicial del Foro.

La representación de gente de la costa del Golfo de México también fue clave. La participación de esta región destruida por el huracán Katrina, las inundaciones y la ineptitud del gobierno estatal y del federal, fue punto de referencia para los movimientos representados en el Foro. Como dijo Jerome Scott, «No respondimos bien como movimiento a este desastre. Nos reveló algo de la situación debilitada de los movimientos populares». Entonces fue apropiado que la lucha de los desplazados se erigiera en un tema central del Foro. Cientos de delegados vinieron de Louisiana, Alabama y Mississippi, también muchos que se han recolocado en Atlanta.

## Áreas de lucha

La costa del Golfo fue una de las áreas de lucha puestas en relieve en el FSEU. El CPN identificó seis áreas y organizó plenarias en cada una: 1. La reconstrucción de la costa del Golfo después de Katrina: retos, visiones y estrategias; 2. Imperialismo, guerra, militarismo y prisiones: hacia unos EE.UU. basados en la paz, justicia económica y ambiental; 3. Voces de pueblos indígenas: desde el corazón de la madre Tierra; 4. Derechos de inmigrantes; 5. Liberación de género y sexualidad: integrando el género y sexualidad a través de los movimientos; 6. Derechos laborales de Trabajador@s en la Economía Globalizada.

Cindy Wiesner, del Centro de Trabajadores de Miami explicó la importancia de estas plenarios:

Durante los últimos dos años ocurrió un momento clave en cada una de estas áreas que representaba una oportunidad o un desafío para catalizar el movimiento nacional. Explorar estos temas nos aporta lecciones importantes.

En el caso del Golfo, no articulamos una respuesta política ni material organizada a nivel nacional. Las comunidades inmigrantes movilizaron millones a las calles, pero no había infraestructura para implementar un proceso de organización. Además, nos falta una visión colectiva de la política de inmigración justa. Por esto seguimos respondiendo a iniciativas reaccionarias en el Congreso. También hay millones de movilizados en contra de la ocupación de Irak, pero no tenemos consensos en el plan de retirada, ni en la definición de la relación del pueblo estadounidense con los pueblos de la región del Medio Oriente. La derecha en los EE.UU. está usando la cuestión del matrimonio de los homosexuales para dividir comunidades y consolidar su base política. Tenemos que luchar contra la criminalización de gente por su orientación sexual y fortalecer la solidaridad del movimiento con las comunidades lesbianas, gays, queers, transgéneras y dos espíritus.

En el área de derechos laborales, hay nuevas formas para organizar a los trabajadores. La Federación Americana del Trabajo (AFL) se dividió el año pasado. En la plenario se representó el AFL-CIO y la nueva federación Cambio para Ganar. Además, hubo representantes de centros obreros, incluso la Coalición de Trabajadores Immokalee, organización de campesinos migrantes quienes acaban de ganar impresionantes victorias contra dos de las más grandes multinacionales: Taco Bell y McDonald's.

Stewart Acuff, director de la organización nacional de la central obrera AFL-CIO expresó la urgencia de la cuestión laboral: «Estamos divididos por el racismo, el sexismo y los nacionalismos. La hora ha llegado para dismantelar todas las barreras entre trabajadores, esa es la responsabilidad de nuestros tiempos... Hay tanto más que nos une que lo que nos divide, tenemos que avanzar hacia un movimiento, una lucha, un pueblo». Acuff habló de la necesidad de luchar en varios frentes, con nuevas formaciones y alianzas.

Una de estas nuevas formaciones se fundó en el mismo foro. Varias organizaciones de Nueva York, California y Virginia anunciaron la creación de una red nacional de trabajadoras domésticas, incluyendo Domestic Workers United, Damayan Migrant Workers Association, CAAAV: Women Workers Project, Andolan Organizing, South Asian Workers, Haitian Women for Haitian Refugees, Unity Housecleaners Cooperative, Las Señoras de Santa María, Mujeres Unidas y Activas, People Organized to Win Employment Rights, San Francisco Day Labor Program, Women's Collective of Raza Centro Legal, Coalition for Humane Immigrant Rights Los Angeles, Philipino Workers' Center of Southern California, CASA: Comité de Mujeres Buscando Justicia.

«Aquí en Atlanta, hace muchos años, trabajadoras domésticas, llamadas “lavanderas” se declararon en huelga para protestar por las condiciones abusivas y los bajísimos sueldos. Parece apropiado que la voz nacional renazca aquí», dijo Carolyn de León, organizadora de la reunión en el Foro.

«Cada una de nuestras organizaciones han utilizado diferentes tácticas para enfrentar el abuso y maltrato a las trabajadoras», añadió Allison Jullien de Trabajadoras Domésticas Unidas, «tenemos tanto que aprender de cada una de nosotras y hay muchísimo que podemos hacer para responder a siglos de injusticias».

Las luchas de los pueblos indígenas también fueron subrayadas. Siguen resistiendo los asaltos del gobierno estadounidense y de las corporaciones multinacionales a los recursos energéticos en las tierras nativas. Twa le Abrahamson de Alaska, describió los mecanismos legales impuestos por el gobierno federal para facilitar la explotación del petróleo en la región. Según Abrahamson, los pueblos indígenas de Alaska experimentan los impactos del cambio climático por dos lados: «la destrucción de nuestras tierras por la explotación de recursos energéticos, y la destrucción de los ecosistemas, por el cambio climático, de los cuales dependemos. Hay osos polares ahogándose por nadar en el mar sin hielo donde pararse».

También las tierras como Hawai son ocupadas por las Fuerzas Armadas de los EE.UU.: «el 25% de las islas de Hawai están bajo del control de las Fuerzas Armadas, dijo Ikaika Hussey, de la organización Zona Desmilitarizada Hawai, «se ha vuelto como parte de la cultura de la isla». Hussey realizó una comparación de Hawai con la trayectoria histórica de Cuba: al haber sido ambos centros de producción de azúcar, de bases militares y patios de recreo para los ricos, pero «en 1959, Cuba realizó su independencia, mientras que Hawai fue anexado a los Estados Unidos... Ojalá Hawai pudiera reconectar su historia con la de Cuba».

## Actividades autogestionadas

Desde luego, el proceso del Foro se caracteriza por las actividades autogestionadas. Es su espacio abierto lo que hace del Foro un proceso único. Más de mil actividades fueron registradas; un poco menos se realizaron. Como en cada Foro Social, hubo actividades con un tema semejante o de la misma red, coalición u organización programadas a la misma hora, pero el espíritu de cooperación y colectivismo fue alto, y muchos se unieron y ajustaron.

Cientos de temas se abordaron en la multitud de talleres, teatros, películas y acciones. Uno de los más sobresalientes fue el desplazamiento de gente pobre de sus hogares en los centros de las ciudades. Durante las últimas dos décadas surgió una tendencia de la «latino-americanización» de los centros urbanos. Desde los años cincuenta, la población de clase media se movió hacia áreas suburbanas en los márgenes de las ciudades, y dejó los centros. Los recursos públicos seguían a estas comunidades por el beneficio de su desarrollo, mientras que los centros se quedaron en

estado de deterioro. Ahí es donde las comunidades más pobres y de raza negra se concentraban.

Pero en años recientes la mentalidad de planificación urbana ha cambiado, y se ha puesto más énfasis en el concepto de «ciudades habitables», donde la clase media puede caminar a su oficina y tener acceso a la cultura y a la vida de la ciudad. Ahora el rostro de las ciudades cambia por la plétora de condominios y centros comerciales caros que empieza a dominar el paisaje urbano, mientras los pobres se desplazan hacia las afueras, muchas veces sin una infraestructura de transporte público, y con pocos recursos para sobrevivir.

Por esto, una de las delegaciones más significativas en el FSEU fue la Red Derecho a la Ciudad: cientos de personas desde Boston, Miami, Nueva Orleans, Nueva York, Los Ángeles, Providence y otras ciudades luchando por sus derechos a quedarse en su comunidad. La red representa treinta organizaciones de ocho ciudades. El concepto está basado en las ideas del teórico social Henri Lefebvre y en los principios articulados en el Foro Mundial Urbano de 2004 en Barcelona, España. «Quisimos utilizar el espacio del Foro para continuar la construcción de la unidad organizativa», dijo Jon Liss de Inquilinos y Trabajadores Unidos en Alexandria, Virginia, «e iniciar campañas a nivel regional y nacional».

Otro tema clave fue el del comercio, en particular con relación a la cuestión de la migración. Más de cien talleres fueron registrados bajo estos temas. La Red Nacional por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (NNIRR) y la Alianza Popular para la Justicia Global (GGJ) organizaron una serie de talleres. «Intentamos reformular el debate de la inmigración en los Estados Unidos», dijo Colin Rajah de NNIRR, «la migración mundial es un resultado concreto de las políticas neoliberales que están desplazando comunidades enteras por todo el mundo. Las políticas de migración y del comercio neoliberal están unidas, como parte de una política exterior más comprensiva de los Estados Unidos. Estamos aquí para forjar estrategias amplias para combatir las propuestas más recientes de acuerdos bilaterales entre los Estados Unidos y otros países, en particular los de Corea del Sur, Colombia y Perú».

Uno de los talleres de NNIRR y GGJ incluyó representantes de movimientos agrícolas de Corea, Colombia y los EE.UU. La organización Coreano-Americanos en Contra de la Guerra y el Militarismo (KAWAN) organizó una ceremonia de «contra-firma» del Tratado de Libre Comercio Corea del Sur-Estados Unidos. Según Hyun Lee de KAWAN: «El tratado representa una sentencia de muerte para los millones de granjeros y trabajadores de Corea».

## Celebraciones

Otro aspecto importante del Foro fue la oportunidad de celebrar y reconectar con familiares y colegas. Uno de los momentos más emotivos fue la reunión de familias de prisioneros, organizado por la Sociedad de Gente Ordinaria de Alabama. «Por

medio del poder de la acción colectiva», dijo el Rev. Kenneth Glasgow, «la Reunión Popular de Familias será una chispa de un movimiento para acabar con las injusticias que enfrentamos en nuestras comunidades por parte de la policía, y los sistemas de las prisiones y cortes».

También hubo un torneo de fútbol organizado por Unidos por el Centro Latinoamericano y Caribeño, Women Watch Afrika, Proyecto Sur, y la Red Estadounidense por los Derechos Humanos, con el propósito de celebrar la vida y cultura de los inmigrantes.

Una ceremonia de «Agua es Vida» fue organizada por las naciones indígenas y dirigida por Josephine Mandamin de la nación Anishinabe, con apoyo del Círculo de Mujeres. Todos los participantes en el Foro fueron invitados a llevar agua de su tierra para ser bendecida en esta ceremonia y aumentar la conciencia de proteger este recurso vital.

Casi cuatrocientos delegados representaron la red nacional Trabajos con Justicia, la cual celebró sus veinte años de existencia. «Trabajos con Justicia se formó con la intención de crear alianzas de temas, sectores y fronteras», dijo Sarita Gupta, Directora Ejecutiva, «el Foro Social de los Estados Unidos es el evento perfecto para celebrar nuestros veinte años».

## Conexiones internacionales

Otra meta del Foro fue poner las luchas domésticas de los EE.UU. en el contexto internacional. El proceso del Foro es internacionalista; por esta razón la visibilidad y participación de los delegados extranjeros fue clave. En la plaza del Centro Cívico de Atlanta se construyeron carpas para los pueblos palestinos, de África y de las Américas. Las actividades de la carpa de las Américas fueron organizadas por miembros del Consejo Hemisférico del Foro Social Américas, Alternativas de Canadá, la Red de Mujeres Transformando la Economía de Ecuador, la Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas y miembros del Comité Organizador del Foro Social de Puerto Rico.

Además los delegados internacionales participaron en varios talleres y paneles, incluso en uno sobre el proceso del Foro Social, co-organizado por el Foro Social de Toronto, el Consejo Hemisférico y la Alianza Popular por la Justicia Global. Aquí hablaron organizadores de varios Foros como Njoki Njehu del FSM 2007 en Nairobi, Kenya; Gustavo Cudas y Magdalena León, del Foro Social Américas; Lilliana Cotto de Puerto Rico; Janet Conway de Toronto; y Rubén Solís del Foro Social Fronterizo y el FSEU, quienes analizaron el proceso desde el nivel regional hasta el internacional, sus desafíos y logros.



## Asamblea de Movimientos Populares

«Quizá sea la primera vez que se hace un encuentro de movimientos populares; es algo completamente nuevo aquí», comentó Rubén Solís del Comité Nacional Planificador y presidente de la Unión de Trabajadores del Suroeste: «Fue un intento por superar las luchas que tienen un tema particular y construir una unidad». Solís fue coordinador principal de la Asamblea de Movimientos Populares, una innovación del Foro Social de los Estados Unidos. Hasta ahora, las Asambleas de Movimientos Sociales han funcionado dentro del espacio del Foro, pero en una manera distinta y desconectada. La Asamblea de los Movimientos Populares es una respuesta al concepto del Foro como espacio que no hace declaraciones ni resoluciones. Las asambleas proveen el espacio para esta coordinación de movimientos, pero este no es reconocido como un aspecto institucional del Foro. El FSEU integró el concepto de la asamblea directamente en el programa del Foro, urgiendo a que los participantes organicen sus resoluciones, declaraciones, campañas y acciones. Algunos se presentaron en la Asamblea de Movimientos Populares el último día del Foro. Más de cincuenta declaraciones fueron leídas, dirigidas a temas de cambio climático, reconstrucción de Nueva Orleans, y libre comercio, entre otros. El proceso de enviar el texto por Internet cierra el 1ro. de septiembre. Todo se va a recopilar en un documento con un calendario de acción de los movimientos.

## Impacto local

El impacto total del Foro en relación con las luchas locales no lo sabremos inmediatamente. El esfuerzo de las organizaciones fue impresionante; muchas donaron sus oficinas y copiadoras; algunas familias sus sofás y pisos; se formaron coaliciones para planear su participación; hasta varias iglesias cancelaron misas para que la gente pudiera participar en las actividades.

Hubo muchas organizaciones locales que abrieron sus puertas al Foro, como ADAPT-Georgia, AIDS Survival Project, Alternate ROOTS, American Friends Service Committee, Amnesty International, Atlanta Jobs with Justice, Atlanta Labor Council, Atlanta Transit Riders Union, Bill of Rights Defense Committee, Center for Democratic Renewal, Communications Workers of America, Communities United for Power, Action & Justice, DisAbility Link, ECO-Action Georgia Stand Up, Fairness for Prisoners Families, Georgia Black United Fund, Local Federation Healthcare Now, Georgia Citizens' Coalition on Hunger, GA Employee Federation, Georgians for Common Sense Health, Governor's Council on Developmental Disabilities, International Action Center, Latin American Caribbean Center, Men Stopping Violence, Sisterlove, Inc., Sister Song, Southeast Community Research Center Taskforce for the Homeless, Southern Partners Fund, Positive Impact, Project South, Queer Progressive Agenda, Raksha, SPEAK-GSU student organization,

Southern Center for Human Rights/Fairness, Task Force for the Homeless, UNITE-HERE, US Human Rights Network, WRFG Community Radio, Women Watch Afrika, WAND, Youth Pride.

La tradición de los Foros Sociales es buscar una sede donde el gobierno y el ambiente político sean amistosos. No era así en Atlanta. Aunque contamos con el apoyo del alcalde de la ciudad, el gobierno del estado de Georgia es uno de los más reaccionarios del país, pero se escogió como sede del primer Foro Social de los Estados Unidos por la historia de lucha de Atlanta y de la región del sureste de esta nación, y del movimiento de los derechos civiles. Así es que al principio del Foro, una delegación del Comité Planificador Nacional llevó una corona de flores a las tumbas del Dr. Martin Luther King Jr. y de Coretta Scott King, honrándolos en la ciudad de su nacimiento. Ojalá que el Foro sea un marco histórico donde empecemos a realizar los sueños del Dr. King.

### Próximos pasos

En 2010 se realizará un segundo Foro Social en los Estados Unidos. La sede se determinará en el curso de los próximos meses. Durante los dos años que siguen el CPN estará urgiendo a las organizaciones que reintegren el proceso, organizando foros locales, regionales, sectoriales y temáticos. Además, buscamos la integración con el proceso internacional, al preparar las movilizaciones globales del 26 de enero de 2008, el Foro Social de las Américas en Guatemala en octubre de 2008, y el próximo Foro Social Mundial en Belém do Pará, Brasil en 2009.

Hasta entonces, parece que el Foro Social en Atlanta tiene el potencial de abrir un espacio importante, pues nos demostró las posibilidades de redefinir las relaciones entre las organizaciones y los movimientos para luchar por un cambio fundamental en los EE.UU. No logramos la meta de integrar todos los sectores críticos; faltó la participación de algunas regiones geográficas y sectores como el movimiento medio-ambientalista tradicional, pero los que vinieron son parte fundamental de los movimientos populares que ofrecen una esperanza al país. El espíritu fue muy fuerte, y los participantes tomaron conciencia de que las relaciones y la energía desplegadas en Atlanta tienen la posibilidad de cambiar la dirección política de los Estados Unidos. Uno de los mensajes más fuertes del CPN es cómo vamos a continuar el trabajo organizativo, integrado y con visión en nuestros barrios, en nuestras organizaciones, redes y regiones. La izquierda dio un paso muy importante y veremos su repercusión en nuestra lucha contra el imperio estadounidense.

**MICHAEL LEÓN GUERRERO** es coordinador de la Alianza Popular para la Justicia Global que integra sesenta organizaciones de base en los Estados Unidos, y miembro del Comité Nacional Planificador del Foro Social de los Estados Unidos y del Comité Internacional del Foro Social Mundial.

# DIARIOS CLÁSICOS

publicados en conjunto con el Centro de Estudios Che Guevara

## NOTAS DE VIAJE Diario en motocicleta

*Prólogo por Aleida Guevara*

El libro de la película *Diarios de Motocicleta*. Un muy joven Ernesto Guevara viaja por América Latina junto a su amigo Alberto Granado, enfrentándose a aventuras y realidades que los transformarán para siempre. Esta nueva edición incluye fotografías inéditas tomadas por el propio Ernesto, y está presentada por un prólogo de Aleida Guevara, quien nos acerca a la perspectiva humana y juvenil de su padre, icono de millones de personas en todo el mundo

168 páginas, ISBN 978-1-920888-12-1



## OTRA VEZ Diario del segundo viaje por América Latina

*Prólogo por Alberto Granado*

Graduado ya de Medicina, el 7 de julio de 1953 emprende un nuevo acercamiento a esas tierras que como un hechizo, lo cautivaron y estremecieron para siempre. Su lectura nos hace cómplices del compromiso que Che adquiere con Nuestra América.

**NUEVO DE OCEAN SUR**

186 páginas, ISBN 978-1-920888-78-7

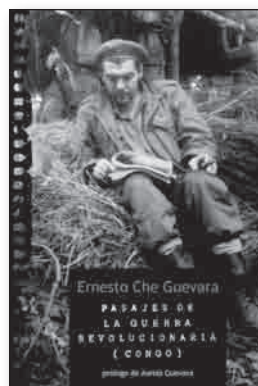
## PASAJES DE LA GUERRA REVOLUCIONARIA: CONGO

*Prólogo por Aleida Guevara*

La participación del Che en la guerrilla congoleña en 1965, resulta expresión de una práctica internacionalista consecuente con sus tesis libertadoras tercermundistas. En este escrito de madurez, entrelaza la descripción de esta experiencia local, con el análisis de perspectiva mundial.

**NUEVO DE OCEAN SUR**

304pp, 42pp fotografías, ISBN 978-1-921235-01-6



[www.oceansur.com](http://www.oceansur.com) ■ [info@oceansur.com](mailto:info@oceansur.com)

# ocean sur

una editorial latinoamericana

## oficinas de ocean sur

- México:** Juan de la Barrera N. 9, Colonia Condesa,  
Delegación Cuauhtémoc, CP. 06140, México DF  
Tel. (52) 5553 5512 ■ E-mail: [mexico@oceansur.com](mailto:mexico@oceansur.com)
- Cuba:** Tel: (53-7) 204 1324 ■ E-mail: [lahabana@oceansur.com](mailto:lahabana@oceansur.com)
- El Salvador:** Tel: (503) 2223 0104 ■ E-mail: [elsalvador@oceansur.com](mailto:elsalvador@oceansur.com)
- Venezuela:** Tel: (58) 412 295 5835 ■ E-mail: [venezuela@oceansur.com](mailto:venezuela@oceansur.com)
- EE.UU.:** Tel/Fax: (1-212) 260 3690 ■ E-mail: [info@oceansur.com](mailto:info@oceansur.com)

## distribuidores de ocean sur y contexto LATINOAMERICANO

- ARGENTINA:** Cartago Ediciones S.A.  
E-mail: [ventas@e-cartago.com.ar](mailto:ventas@e-cartago.com.ar)
- CHILE:** Editorial "La Vida es Hoy"  
Tel: 222 1612  
E-mail: [lavidaeshoy.chile@gmail.com](mailto:lavidaeshoy.chile@gmail.com)
- COLOMBIA:** Ediciones Izquierda Viva  
Tel/Fax: 2855586  
E-mail: [ediciones@izquierdaviva.com](mailto:ediciones@izquierdaviva.com)
- CUBA:** Ocean Sur  
E-mail: [lahabana@oceansur.com](mailto:lahabana@oceansur.com)
- ECUADOR:**  
Ediciones La Tierra (Contexto Latinoamericano)  
Tel: (2) 256 6036  
E-mail: [ediciones\\_latierra@yahoo.com](mailto:ediciones_latierra@yahoo.com)
- Libri Mundi S.A. (Ocean Sur)  
Tel: (2) 224 2696  
E-mail: [ext\\_comercio@librimundi.com.ec](mailto:ext_comercio@librimundi.com.ec)
- EL SALVADOR Y CENTROAMÉRICA:**  
Editorial Morazán  
E-mail: [editorialmorazan@hotmail.com](mailto:editorialmorazan@hotmail.com)
- MÉXICO:** Ocean Sur  
Tel/Fax: 5553 5512  
E-mail: [mexico@oceansur.com](mailto:mexico@oceansur.com)
- PERÚ:** Ocean Sur-Distribuidor  
Tel: 3307 122  
E-mail: [oceansurperu@gmail.com](mailto:oceansurperu@gmail.com)
- VENEZUELA:** Ocean Sur  
E-mail: [venezuela@oceansur.com](mailto:venezuela@oceansur.com)
- AUSTRALIA:**  
Ocean Press  
Tel: (033) 9326 4280  
E-mail: [info@oceanbooks.com.au](mailto:info@oceanbooks.com.au)
- EE.UU., CANADÁ Y PUERTO RICO:**  
CBSD [www.cbsd.com](http://www.cbsd.com)  
Tel: 1-800-283-3572
- GRAN BRETAÑA Y EUROPA:**  
Turnaround Publisher Services  
E-mail: [orders@turnaround-uk.com](mailto:orders@turnaround-uk.com)



*Contexto Latinoamericano* propicia el debate sobre objetivos, programas, estrategias y tácticas de la izquierda; reivindica la necesidad de edificar sociedades sustentables, libres de dominación y subordinación nacional y de clase, basadas en la igualdad de género, etnia, cultura, religión, franja de edad y orientación sexual; denuncia la injerencia e intervención imperialista en el Sur, en particular, en América Latina; promueve la solidaridad con la Revolución Cubana y la Revolución Bolivariana; respalda el rescate de la soberanía y el patrimonio nacional, y la adopción de políticas de beneficio popular por parte de las fuerzas de izquierda y progresistas que acceden al gobierno en América Latina; apoya al movimiento por la independencia de Puerto Rico y los demás territorios coloniales del continente; e incentiva la interrelación entre las luchas de los excluidos del Norte y del Sur, con especial atención a las diásporas latinoamericanas y caribeñas.

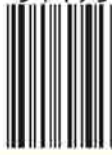
US\$14.95

ISBN 978-1-921235-46-7



9 781921 235467

5 1495



[www.oceansur.com](http://www.oceansur.com)  
[www.oceanbooks.com.au](http://www.oceanbooks.com.au)